

Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

# JOSÉ DE CARVAJAL Y HUÉ LA MANO NEGRA

*Con un estudio introductorio de  
José Miguel Serrano Ruiz-Calderón:*

*José de Carvajal y Hué: Un decano ante el Supremo y la pena de muerte*

*Con la colaboración de  
Miguel Serrano Gálvez*



ILUSTRE  
COLEGIO DE ABOGADOS  
DE MADRID



tirant  
humanidades



**JOSÉ DE CARVAJAL Y HUÉ**  
**La Mano Negra**

*Con un estudio introductorio de*  
*José Miguel Serrano Ruiz-Calderón:*

*José de Carvajal y Hué: Un decano ante el Supremo y la pena de muerte*

Con la colaboración de Miguel Serrano Gálvez





# JOSÉ DE CARVAJAL Y HUÉ

## La Mano Negra

*Con un estudio introductorio de  
José Miguel Serrano Ruiz-Calderón:*

*José de Carvajal y Hué: Un decano ante  
el Supremo y la pena de muerte*

Con la colaboración de Miguel Serrano Gálvez



Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

**tirant humanidades**

Valencia, 2017

Copyright \* 2017

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web [www.tirant.com](http://www.tirant.com).

© ICAM

© TIRANT HUMANIDADES  
EDITA: TIRANT HUMANIDADES  
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia  
TELF.: 96/361 00 48 - 50  
FAX: 96/369 41 51  
Email: [tlb@tirant.com](mailto:tlb@tirant.com)  
[www.tirant.com](http://www.tirant.com)  
Librería virtual: [www.tirant.es](http://www.tirant.es)  
DEPÓSITO LEGAL: V-2951-2017  
ISBN: 978-84-17069-99-5  
IMPRIME: GZ Printek, S.A.L.  
MAQUETA: Tink Factoría de Color

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: [atencioncliente@tirant.com](mailto:atencioncliente@tirant.com). En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en [www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa](http://www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa) nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: <http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf>

# ÍNDICE

PRÓLOGO .....	9
<i>Sonia Gumpert Melgosa</i>	
ESTUDIO INTRODUCTORIO: JOSÉ DE CARVAJAL Y HUÉ. UN DECANO ANTE EL SUPREMO Y LA PENA DE MUERTE .....	15
<i>Con la colaboración de Miguel Serrano Gálvez</i>	
Introducción.....	17
Datos Biográficos.....	23
Actividad Política.....	37
La posición respecto al anarquismo .....	49
La pena de muerte y el indulto. A caballo entre el derecho y la política.....	61
El Decano Carvajal.....	77
LA MANO NEGRA .....	99



# PRÓLOGO

Cinco años de mandato es lo que establecen nuestros Estatutos y aunque parece que fuese ayer mismo cuando la Junta de gobierno inició esta andadura, el plazo está ya próximo a cumplirse.

Con la inestimable colaboración de Tirant lo Blanch hemos ofrecido todos estos años, lo que vine en llamar simbólicamente un “dulce navideño” consistente en la recuperación de algún texto antiguo de nuestra espléndida Biblioteca, que se editaría en forma de libro electrónico a disposición de todos los colegiados y también una pequeña tirada en papel con finalidades protocolarias.

Correspondía por tanto llegar a las Navidades con la quinta entrega de esta serie —que sin duda debería tener continuidad y no dejará de serlo, desde luego, por falta de material— pero la proximidad de las elecciones nos ha llevado a tomar la decisión de adelantar su publicación, precisamente para evitar cualquier tipo de suspicacia, que ya adelante estaría, en todo caso, injustificada.

De cualquier manera ya lo tengo dicho en más de una ocasión, los compromisos que asumo —y conmigo la Junta de Gobierno— se constituyen para mí en casi un imperativo categórico que, salvo imponderables, procuro cumplir a rajatabla. Aquí está por tanto el “dulce navideño” de 2017 que nos ha venido un poco adelantado.

Comenzamos la serie en el invierno de 2013 —y una vez más voy a enumerarlos— con Joaquín María López y sus *“Lecciones de oratoria forense”*. En 2014 pudimos recuperar la figura del Decano Cortina, a quien llamé nuestro rey Carlos III particular y que desde el Colegio de Abogados de Madrid puso a la abogacía madrileña y a la española en el altísimo pedestal en que debe estar. Para el año 2015 recuperamos a otro ilustre jurista, hoy recordado por pocos como tantos y tantos, Don Vicente de la Fuente; incorporando al Colegio a las celebraciones con motivo del Centenario de Santa Teresa de Jesús. Finalmente, el pasado año y coincidiendo con el Centenario de Shakespeare, rescatamos a otro ilustre jurista y Decano de nuestra institución, Don Luis Díaz Cobeña, que tradujo al español “Romeo y Julieta” para su representación teatral.

Todos estos libros, no es ocioso recordarlo, pueden descargarse a través de nuestra Biblioteca electrónica, y están a disposición de todos los colegiados.

Y ahora, como digo, cerramos la serie con otro de nuestros Decanos, Don José de Carvajal y Hué.

El siglo XIX quizá constituya hoy día el más apasionante de la historia de España, donde podemos encontrar todo lo bueno que nuestro país es capaz de dar y, desgraciadamente, buenas porciones también de lo malo. Un periodo al que machaconamente, ahora que vivimos en el mayor periodo de paz y prosperidad de nuestra historia, cuando formamos parte del mundo desarrollado y vivimos en plena democracia, algunos nos quieren retrotraer con proyectos extremos y de disgregación.

No sé bien qué pensaría hoy Don José de Carvajal de cuanto sucede hoy día. Un hombre de cultura enciclopédica, adelantado a su tiempo, firme defensor de sus ideales, entre los que destacaban su republicanismo y sobre todo su firme oposición a la pena de muerte. Entregado a causas difíciles, con la opinión pública y publicada en contra. Modelo de oratoria forense y parlamentaria, ambas hoy día en grave riesgo de extinción. Y también accidentalmente poeta, como el bello soneto que dedica a su hijo y que reproducimos manuscrito.

Alguno habrá que diga, ante esta tesitura, que más le valdría volverse a la tumba. Yo más bien pienso que con su patriotismo y claridad de mente, lucharía para revertir la situación y llevar a su querida España a las más altas cotas de prosperidad y justicia.

A esta conclusión me lleva la lectura del estudio introductorio que sobre la figura de Carvajal y Hué precede al discurso del mismo. Es más que procedente por tanto, dedicar unas líneas de agradecimiento al espléndido trabajo del profesor Serrano Ruiz-Calderón, descendiente directo del Decano Carvajal y que ha hecho una magnífica tarea de investigación, incluso desentrañando algunos errores en que biógrafos anteriores habían incurrido y dándonos una imagen completa de lo que en aquellos tiempos se denominaba —palabra hoy casi en desuso— todo un prócer de la patria.

También al personal de nuestra Biblioteca y Archivo Histórico que, como siempre en estos años, han dado la talla y han colaborado activamente en que la obra pueda ver la luz, seleccionando la obra a editar y rebuscando entre nuestros anaqueles y en las interioridades del archivo para encontrar una parte del material gráfico.

Igual que en ocasiones los almendros florecen con cierta antelación, ahora en pleno veranillo de San Miguel, me anticipo a las Navidades y os presento “La mano negra” un impresionante alegato contra la pena de muerte y que estoy segura os ha de gustar y en algunos momentos emocionar. Permítaseme la licencia para acabar, citar unos versos a la manera de epílogo, del propio Carvajal:

“vuelve a ver su memoria lo pasado  
con la meditación ve lo existente,  
con el presentimiento lo futuro,  
y todo ante su vista reproduce;  
ese obtendrá en hoguera deleitosa  
con la lumbre calor, luz con la llama  
y arrojará para nutrir el fuego  
la leña verde de su propia vida,  
sarmientos de los focos otoñales,  
hálito, sangre, corazón, ideas”.

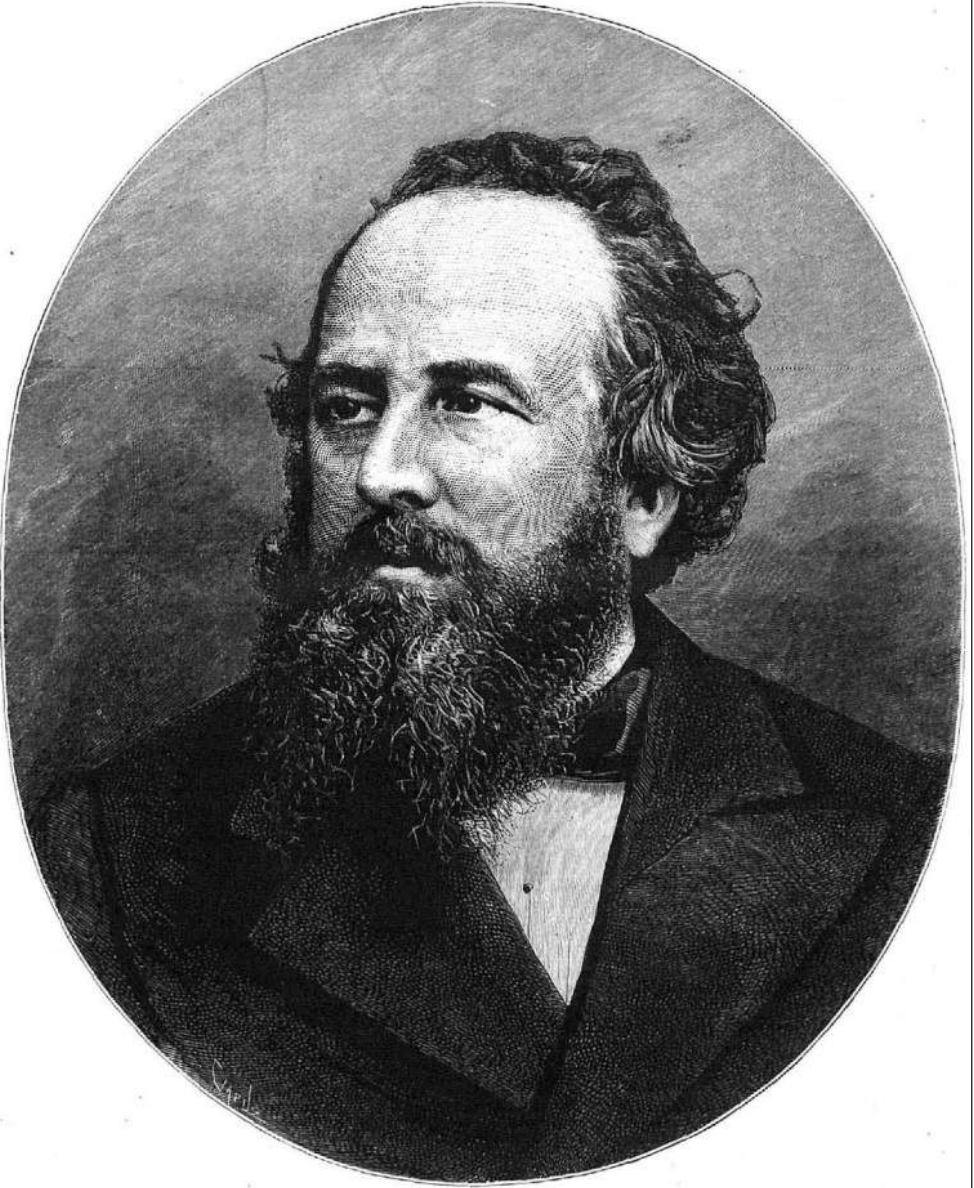
(Fragmento de *El enamorado y la luna*. Publicado en La Gran Vía revista semanal ilustrada, núm. 77, 1894)

Madrid 29 de septiembre de 2017

SONIA GUMPERT MELGOSA  
*Decana*

Ilustración de la cubierta: Retrato de don José Carvajal y Hué (fragmento). del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. (Finales S. XIX)





D. José de Carvajal y Hué, último ministro de Estado,

Fuente: La Ilustración Europea y Americana, 1874



# JOSÉ DE CARVAJAL Y HUÉ: Un Decano ante el Supremo y la pena de muerte

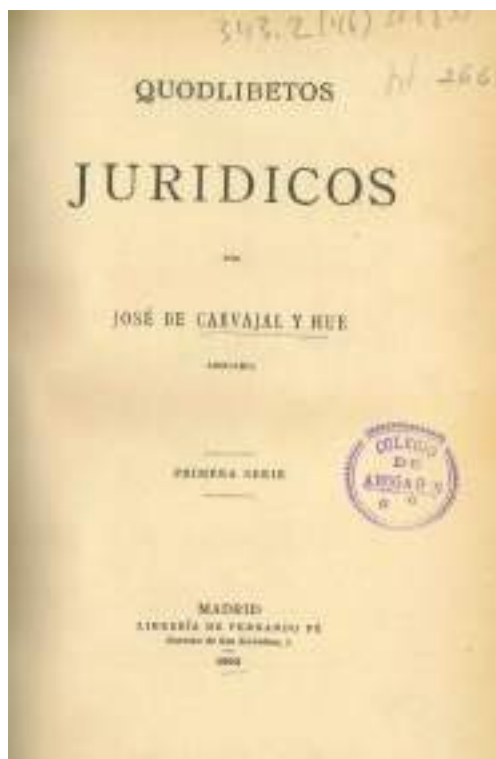
Estudio Introductorio de  
JOSÉ MIGUEL SERRANO RUIZ-CALDERÓN

Con la colaboración de  
MIGUEL SERRANO GÁLVEZ



# INTRODUCCIÓN

Cuando el jurista malagueño José de Carvajal y Hué intervino ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para defender a tres de los acusados de los denominados crímenes de la Mano Negra, o más exactamente del crimen de *la parrilla* o asesinato del *Blanco de Benaocaz*, no era aún Decano del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, pero no es aventurado deducir que su infructuosa intervención —el caso se saldó con quince penas de muerte, de las que se ejecutaron siete simultáneamente en Jerez, entre ellos el maestro Juan Ruiz, considerado el cabecilla y defendido por Carvajal— tuvo mucho que ver con su posterior elección como Decano del Colegio y también como Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.



Biblioteca del ICAM. Fondo Antiguo

El interés del caso que aquí reproducimos, en el escrito que nueve años después publicó Carvajal en su *Quodlibetos jurídicos*, corresponde al ejemplo del abogado que *pro bono* defiende a unos acusados en circunstancias muy adversas, con la opinión publicada exigiendo un castigo ejemplar y con el Tribunal Supremo dispuesto a cumplir esa misión puramente represora tan alejada, no sólo de la actitud de Carvajal ante la Justicia, sino de cualquier visión de esta que la sitúe un poco más allá de “la falsa prudencia del sabio o del abuso del poderoso”<sup>1</sup>.

Como veremos Carvajal no tenía en sus posiciones políticas, vinculadas al republicanismo de Castelar, puntos de contacto con las actitudes de la Federación Regional Española de la Internacional a la que pertenecían los acusados, ni

<sup>1</sup> Carvajal y Hué, José, “La mano negra”, *Quodlibetos jurídicos*, Primera Serie, Librería de Fernando Fé, Madrid, 1892, pp. 149-292.

desde luego justificaba la acción terrorista de la Mano Negra. Y ello sin entrar en la vinculación de los acusados a la misteriosa organización. No puede olvidarse que la represión del internacionalismo, acusado de asociarse al movimiento cantonalista, había comenzado bajo la Presidencia de Castelar, de quien Carvajal fue ministro de Estado, aunque la ilegalización, que dio paso a un número indeterminado de organizaciones clandestinas, fuese decretada por Pavía, que de paso se había cargado el Congreso del que Carvajal era diputado y a la postre el régimen del que Carvajal fue subsecretario y dos veces ministro, primero de Hacienda y luego de Estado.

Ello, no obstante, no supone ignorar que el republicanismo mantuvo una actitud ambigua hacia los miembros de la primera internacional en un principio y a los anarquistas después.

Por un lado, fue constante su llamada al sufragio de estos sectores, que se hizo más acuciante una vez implantado el sufragio universal. Así Carvajal, por ejemplo, culminó su carrera parlamentaria como diputado en el distrito urbano de Málaga. Por otra parte, ni los internacionalistas, con fuerte presencia del abstencionismo, ni los republicanos, en su mayoría firmes defensores del Estado, de la moral burguesa y de la propiedad privada, se hacían ilusiones unos respecto a los otros, ni confundían sus objetivos.

Aún así, Carvajal, propietario agrícola, empresario ferroviario y fundador de entidades financieras; es decir, el colmo de los defectos para un buen internacionalista, dedicó una parte de su actividad como abogado a defender a acusados de atentados, algunas veces dirigidos contra el Rey o su familia o hacia el mismo Congreso. El hecho de que en esas causas se pidiese la pena de muerte, y no pocas veces se ejecutase, explicará uno de los motivos fundamentales de esa defensa jurídica.

Carvajal realizó un completo análisis del anarquismo en su defensa del anarquista francés Juan María Debats un decenio después del juicio de la Mano Negra que contemplamos en esta publicación. Este análisis debe tomarse por supuesto como lo que es, una descripción de la doctrina a fin de justificar la posición de su defendido, caracterizado como anarquista teórico. Pero en esta defensa, que fue considerada ejemplar, pues se ha reproducido numerosas veces como modelo que deben seguir los abogados, Carvajal nos dice mucho sobre sus propias posiciones políticas ya entonces de republicano conservador.

Uno de estos rasgos que le definen como conservador es la importancia que atribuye a las pasiones humanas como causante de los errores personales y sociales. Así en este discurso manifiesta una firme opinión conservadora:

“Son las pasiones humanas el embarazo del anarquismo y la réplica que la vida propone contra el ideal. El anarquismo, ofuscado en la contemplación del bien inaccesible, corta por lo sano y declara que en el orden social no son las pasiones la

causa eficiente de que los hombres se extravíen y que, acumulándose de continuo mayores desequilibrios y trastornos, se alejen cada día más y más de la armonía apetecida del individuo con la sociedad. Las pasiones humanas, no sólo no pueden producir perturbaciones, sino que son el agente necesario de manifestación para el individuo y la colectividad; dejad libres de obrar a los hombres y no los alteraran las pasiones, porque la ley positiva es la que origina la perturbación”<sup>2</sup>.

Y sigue describiendo el inevitable choque con la realidad: “Por este punto es por donde ya la doctrina comienza a tocarse con las miserias de la vida y por donde vuelve la anarquía a aquel estado de incertidumbre y recelo, que la dio desde otro aspecto el concepto restringido pero universal de las gentes”.

En la defensa que aquí introducimos del caso de la Mano Negra —Carvajal había buscado una vía menos descriptiva del anarquismo, sin oponer el teórico al práctico— intentó principalmente fijar la participación real de sus defendidos en el crimen que se les atribuía, para mostrar la desmesura de la sentencia de la Audiencia y de las peticiones del Fiscal, que fueron finalmente aceptadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En estas páginas no puede esperarse una reflexión como la que podemos encontrar en el gran Dostoievski, que ante un crimen de motivo similar, el intento de abandono de un anarquista del grupo al que estaba ligado por el conjunto de juramentos secretos que en aquella época tanto gustaban a este tipo de organizaciones, escribió la más brillante reflexión sobre el nihilismo en su novela *Los Endemoniados*. El grueso de los miembros del grupo de la Academia de Agricultura de Petrovsky que refleja Dostoievski eran estudiantes y se prestaban a las complejas reflexiones y diálogos que esgrime nuestro autor y que deja caracterizada la manipulación absoluta y el sinsentido del intento de liberarse a través de la muerte de Dios y significativamente del suicidio. Por el contrario, en la lectura de los autos de la Mano Negra no aparece un personaje como Nechaev, y no ya el Nechaev que aparece como Peter Verjovensky en la novela de Dostoievski sino como el que el propio Bakunin define en una carta en julio de 1870:

“Muy perturbado por la catástrofe que ha destruido a su organización secreta en Rusia, ha logrado convencerse paulatinamente a sí mismo de que, para fundar una organización seria e indestructible, hay que tomar como base las tácticas de Maquiavelo y adoptar, íntegro, el sistema de los jesuitas: la violencia como cuerpo, la falsedad como alma.

La verdad, la confianza mutua, la solidaridad seria y estricta sólo existe entre una docena de personas que forman el *sanctus sanctorum* de la Sociedad. Todos los

---

<sup>2</sup> Carvajal y Hué, José, “Los anarquistas en Madrid. Informe Oral en las sesiones del jurado de 30 de diciembre de 1893 y 2 de enero de 1894”, Imprenta de Aleu y compañía, 1894, pp. 127-128.

demás deberán servir como instrumentos ciegos, como material explotable en manos de la docena que está realmente unida”<sup>3</sup>.

El alegato de Carvajal, por el contrario, no reflexiona sobre el nihilismo o el anarquismo, ni sobre los riesgos que previsiblemente traerá el colectivismo, peligros de los que estaba completamente convencido, sino sobre el papel del Tribunal y la Justicia, sobre el derecho de defensa, sobre la responsabilidad individual y la necesidad de que el derecho penal individualice los actos y las penas, sobre el derecho a juicio justo.

Frente al abuso que se produjo, Carvajal dará una lección completa y válida para la abogacía de cualquier época. Mostrará igualmente como la función del abogado, a la que llegó tardíamente, no se limita a la búsqueda de una forma de ganarse la vida decentemente, con más o menos pericia, sino que implica una alta responsabilidad ética. Así como sin libertad de expresión no hay orden civil decente, sin abogados dispuestos a cumplir su parte en el juicio contradictorio, aunque pudiera perjudicarle en el resto de sus actividades, no hay posibilidad de Justicia.

Lo diría un decenio después al inicio de la defensa del anarquista francés Debats que hemos citado:

“Yo vengo aquí a defender a este pobre extranjero, condenado por la opinión ciega y perturbada, que no atiende en estos momentos sino al prestigio tenebroso de su nombre, bajo cuya invocación se han cometido y se están cometiendo delitos que con razón la alarman. Yo vengo aquí a luchar contra el encono que produce la visión de ese fantasma. Yo vengo aquí a distinguir entre lo lícito y lo ilícito, lo legal y lo ilegal, lo inofensivo y lo delincuente, por desventura confundidos con los signos del atropello y la cobardía, característicos del terror, en las manifestaciones de una indignación legítima”<sup>4</sup>.

La función del abogado que actúa *pro bono*, de pobres dirá él, como parte esencial de la labor de un jurista que no se dedicaba fundamentalmente al derecho penal, está también expresada, con la retórica de la época, en la misma defensa de Debats:

“Este parecido en un accidente de la conducta que toma por rumbos tan opuestos, tachara de quijotesca la mía, si no tuviera motivo sustancial para acudir voluntariamente a la acometida de la dificultad en que antes hablaba. A raíz del suceso, entre cómico y lastimoso, del 4 de abril, Debats quiso hablarme y me habló; me entere del

---

<sup>3</sup> Citado Frank. Joseph “Dostoievski. Los años milagrosos. 1865-1871”. Fondo de Cultura Económica. México, 1997 pp. 491-492.

<sup>4</sup> Carvajal y Hué, José, “Los anarquistas en Madrid. Informe Oral en las sesiones del jurado de 30 de diciembre de 1893 y 2 de enero de 1894”, Imprenta de Aleu y compañía, 1894, p. 6.



caso, escuché en la reja de la cárcel su íntima confesión y adquirí el convencimiento de que es inocente del delito que se le achaca; me dijo con los labios balbucientes de temor y con la mirada ansiosa de la esperanza, que en mí tenía puesta toda su fé; me pidió la limosna de mi tiempo, de mi trabajo y de mi palabra; yo aislé de toda su vida que ignoro, el hecho de su acusación y, cierto de que era un extravío de sus perseguidores, le tendí la mano y me puse de su lado, para ampararle con ésta toga, nunca más ennoblecida y capaz de envanecer a quien la lleva, que cuando las funciones a que da derecho, se ejercen con desinterés en beneficio del inocente y del pobre. Y no hice más de lo que cualquiera de mis compañeros habría hecho en mi lugar. Por esto estoy aquí y allá voy, allá voy al encuentro de la dificultad”<sup>5</sup>.

En este sentido, no es ocioso recordar que los crímenes de la Mano Negra extendieron el pánico entre los propietarios agrarios andaluces y que Carvajal era un propietario agrario andaluz.

Por todo ello se puede entender que la actividad penalista de Carvajal estuviese ligada fundamentalmente a la defensa de acusados de la pena capital, principalmente anarquistas. Aquí combinó su acción política, con varias intervenciones en el Congreso solicitando la Gracia de indulto, que entendía justificable fundamentalmente sólo en estos casos, con la defensa ante los tribunales de los acusados.

---

<sup>5</sup> Carvajal y Hué, José, “Los anarquistas en Madrid. Informe Oral en las sesiones del jurado de 30 de diciembre de 1893 y 2 de enero de 1894”, Imprenta de Aleu y compañía, 1894, p. 8.



# DATOS BIOGRÁFICOS

El mejor retrato literario de José de Carvajal y Hué se lo debemos al novelista Benito Pérez Galdós. Es la referencia más importante sobre nuestro personaje. La pone don Benito en boca de Proteo Liviano en el Episodio *La Primera República*.

“Destináronme a la secretaría particular del subsecretario, don José de Carvajal, a quien muchos de los que me leen habrán seguramente conocido: hombre de gallarda y noble presencia, hermosa cabeza, perfil semítico, luenga barba espesa, ademanes señoriles y trato muy afable. Si en la tribuna lucía como brillante orador, en la conversación privada cautivaba por su amenidad, dicción correcta y un ceceo blando y meloso. A todos los que allí le servíamos nos trataba con miramientos, y a mí me distinguía particularmente, atribuyéndome cualidades que no tengo, y colmándome de elogios cuando interpretaba a su gusto los trabajos epistolares de mi incumbencia.

Aunque muy a gusto con jefe tan simpático, aspiraba yo a prestar mis humildes servicios lo más cerca posible de Pi y Margall, por quien sentía veneración fanática. El mismo Carvajal me deparó lo que yo deseaba, enviándome al despacho del ministro para redactar urgente correspondencia”<sup>6</sup>.

Por su parte el Conde de Romanones lo describe así:

“Se presentó ante las Cortes el 7 de septiembre a la cabeza de un Gobierno, no compuesto ciertamente de hombres notables pero sí de absoluta lealtad para su jefe. Ocupó la cartera de Estado don José Carvajal, el de las profusas barbas y rizada melena, excelente orador y de gran competencia;”<sup>7</sup>.

Y en la “*Colección de trabajos forenses y noticias biográficas de los más notables abogados de España publicados por la Revista de los Tribunales*” se hace esta semblanza de José de Carvajal y Hué:

“Es una de las más salientes figuras de la sociedad contemporánea. Sus aptitudes casi universales, su amor al estudio y su laboriosidad infatigable, han hecho del Sr. Carvajal una verdadera eminencia. Consumado filólogo y orientalista, insigne jurisconsulto, publicista, orador y político notabilísimo, habríase colocado, sin duda, a la cabeza de los estadistas de nuestro tiempo en un pueblo cuyas masas fueran más reflexivas y cultas que son las que de ordinario se agitan en la nación española. Justo es decir, sin embargo, que el Sr Carvajal ha encontrado en la mayoría de sus compatriotas el apoyo, la consideración y el respeto debido al verdadero mérito, y ha hecho, hace y hará uno de los primeros papeles entre nuestros políticos, nuestros jurisconsultos y nuestro sabios; y que, si no se le hace plena y cumplida justicia,

---

<sup>6</sup> Pérez Galdós, Benito, “La Primera República”. Biblioteca Pérez Galdós, Alianza Editorial, 1ª ed., 2ª reimp, Madrid, 2010, p. 29.

<sup>7</sup> Conde de Romanones, “Los cuatro presidentes de la Primera República Española, Espasa Calpe, Santander, 1939. p. 126.

cúlpese en parte al escaso acierto con que eligió el campo de operaciones en las agitados luchas de las modernas sociedades. Sus tendencias francamente conservadoras y de orden, se avienen mal con las rudas campañas que en estas épocas de transición de los pueblos han menester sostener las turbulentas democracias en cuyos partidos milita nuestro biografiado”<sup>8</sup>.

José de Carvajal Y Hué según la partida emitida por el archivo histórico diocesano de Málaga el doce de enero de mil novecientos ochenta y ocho había nacido el siete de octubre de 1834. Aquí lo reproducimos pues importantes publicaciones sitúan el nacimiento prácticamente un año después, el 8 de octubre de 1835, así por ejemplo el diccionario biográfico español<sup>9</sup> y el propio Congreso de los Diputados, lo que nos hace pensar que era una fecha que pudo dar el mismo<sup>10</sup>.

De esta forma la fecha de nacimiento sería el 7 de octubre de 1834, no hay dudas sobre la legitimidad, y se ve que sí se mantenía cierta indefinición sobre la grafía del apellido paterno b en este caso.

Esta primera duda sobre la primera infancia y juventud de Carvajal está presente en todos sus biógrafos y como hemos dicho parece extendida por él mismo. No podemos especular sobre las razones pero también es cierto que no tenemos noticia de la fecha exacta del matrimonio de sus padres.

En cuanto a la familia de la madre es de Bayona y no de Burdeos, como se ha manejado en muchos casos. Esto, como veremos, crea dudas sobre donde fue en su etapa francesa y especialmente sobre donde estudió la enseñanza reglada. Sí hay certeza sobre su fallecimiento, el 4 de junio de 1899.

Por línea materna descendía de unos comerciantes de origen francés, procedentes de Bayona cuya actividad se centraba en el mundo del vino, tradicional exportación malagueña. Alguna fuente cita que habían llegado a Málaga huyendo de la Revolución pero no sabemos con qué fundamento. De la familia paterna poco sabemos. El apellido Carbajal o Carvajal era común en Málaga y no se sabe del oficio del padre, aunque alguno lo sitúa como notario. Puede ser una confusión con el hijo de nuestro autor que sí lo fue tras pasar por el

---

<sup>8</sup> “Colección de trabajos forenses y noticias biográficas de los más notables abogados de España publicados por la Revista de los Tribunales”. Centro Editorial de Góngora. Calle San Bernardo, 43, Madrid, 1903, pp. 28 y 29.

<sup>9</sup> Quiles Faz, Amparo, “Carvajal y Hué, José. Málaga, 8.X.1835 - Madrid, 4 VII 1899 Político, abogado y escritor.” *Diccionario Biográfico Español*, Tomo XII, Real Academia de la Historia 2009-2012, p. 20.

<sup>10</sup> Sin embargo Mariano Sánchez de Palacios da la fecha del 8 de octubre de 1834 en “José Carvajal y Hué”, *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, Año 1972, n 2, p. 235.

cuerpo diplomático. El matrimonio de Francisco y Magdalena tuvo otra hija, Natalia, que casaría con Pedro del Oso.



Un hecho que marcará claramente la vida de Carvajal y que tampoco está claro en los detalles es que el padre o bien muere según unas fuentes siendo Carvajal muy niño o bien huye al extranjero, América probablemente. La existencia de un poema de Carvajal donde recuerda la despedida en la playa de una mujer y dos niños al padre, hace verosímil la posibilidad del exilio:

“una nave que parte, mientras que en la orilla quedan: una mujer, dos niños y una playa... Que en lo secreto del sepulcro frío / con mi piadosa madre de la mano / saldrás a recibirme, padre mío”<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Serrano Carvajal, José, “José de Carvajal: Académico, político y literato”, *Anales de la Real Academia de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, N 30, Madrid, 2000, 417.

Recordemos que desde 1835, con la revolución hasta 1844, cuando Carvajal tenía diez años y fue enviado a Francia, se producen suficientes acontecimientos en Málaga como para justificar un exilio de un sujeto probablemente radical o progresista.

Si el exilio, como dicen fuentes no del todo fiables, se produjo cuando el niño tenía cuatro años, hubo un intento revolucionario en 1838 sofocado por el Capitán General Juan Paralea. Además está el intento revolucionario de noviembre del mismo año. Todo lo cual establece la verosimilitud del exilio político del padre y la vinculación al partido progresista o aún radical. Pero poniendo como fecha final posible la marcha de Carvajal a Francia en 1844, y suponiendo que su madre lo puso a buen recaudo ante la persecución a la familia o las dificultades económicas, tenemos más hipótesis.

Así, si Francisco Carvajal fuese esparterista la revolución empezada en Málaga en mayo del 43 justificaría su huida. Si fuese radical antiesparterista la aparente victoria de la Milicia Nacional malagueña se tornará derrota en 1844, con el inicio del poder moderado y la disolución de la Milicia.

En la *Introducción a la edición de los Discursos Parlamentarios*, dedicada como los *Quodlibetos Jurídicos* a su hijo José, Carvajal describe la función paterna con fuerte tonos y se explaya sobre la misma, toda vez que se vio privado de la figura de su padre, aunque no hace ninguna alusión a ello en la introducción.

“Si el hijo no tuviese todo lo del padre y en general no enriqueciese su acervo, fuera falsa la ley de la perfección y del progreso intelectual y moral, y en vez de irse acercando cada día más la humanidad a su fin, permanecería estanca o volvería a sus orígenes. Yo tendría en la tierra como un anuncio de las celestes satisfacciones, si de la misma manera que hoy se confunden nuestras personas cuando dicen las gentes: “Este es el hijo de Carvajal” oyera yo decir de mí en adelante: “Ese es el padre de Carvajal”. ¡Dichosos aquellos que oyen voces tales y tienen la certidumbre que había contribuido a la variación de términos! Esta es mi manera de entender la paternidad: lo que yo he aprendido, lo he aprendido para ti, para que tu y yo y los que vengan detrás, trabajemos en taller misterioso y callado, con trabajo perseverante, que algún día pueda producir espléndida flor y sabroso fruto”<sup>12</sup>.

Perdido el padre, la figura capital en la vida de Carvajal es la materna. Fue pues educado por su madre, que buscando probablemente apoyo familiar lo envía a Francia, donde perfeccionó el francés y adquirió nociones de comercio.

<sup>12</sup> Carvajal y Hué, José, “Discursos Parlamentarios. Tomo I, Congreso de 1872 a 1873. Cortes Constituyentes de 1873”, Establecimiento de Ricardo Fé, Madrid, 1895, p. XII.

Javier Gómez de la Serna resume este periodo de la siguiente forma, combinando la educación materna, la marcha a Francia y el desarrollo de la actividad comercial desde los 15 años:

“Tenía cuatro años, hemos dicho, cuando perdió al autor de sus días, que había emigrado a los Estados Unidos por causas políticas, muriendo allí ciego y paralítico y dejando en la indigencia a la familia. La alentada viuda hizo frente a todo, utilizando su gran cultura abrió un Colegio de niñas en Málaga, que acreditó en seguida, para mejor atender a la instrucción y porvenir de su hijo le envió a Burdeos a los diez años. Carvajal se perfeccionó en el francés y adquirió con los conocimientos de cultura general los mercantiles, con los cuales volvió a Málaga a los quince años; y tan alentado como su madre, creyéndose ya hombre, y creyéndoselo con razón como veremos, aquel niño rogó y obtuvo del cariño maternal que cerrara el Colegio, porque allí estaba él ¡con quince años! para levantar las cargas de la familia. Y lo intentó y lo logró: trabajó en el comercio, hizo por su cuenta negocios de exportación, estuvo empleado en varios escritorios, hasta que, emprendiendo con Loring el establecimiento de los ferrocarriles andaluces, fijó definitivamente su desahogada posición ocupando un elevado puesto en la Compañía”<sup>13</sup>.

En consecuencia, los estudios reglados de Carvajal serían probablemente los de comercio, que le sirvieron para iniciar su actividad como tenedor de libros a partir de su vuelta a Málaga en 1851.

Numerosas fuentes atribuyen a Carvajal unos estudios en Burdeos, mercantiles y/o de bachillerato en un Liceo Luis el Grande<sup>14</sup>. El dato presenta algún problema. No tenemos constancia de la existencia de un Liceo o College Royal en Burdeos con ese nombre, siendo el conocido el de París, sucesor del colegio de los jesuitas y del Colegio imperial. El similar en Burdeos, es decir heredero del Colegio de los Jesuitas y luego del Colegio Imperial napoleónico se acabó llamando Michell de Montaigne lo que bien situaría a Carvajal en la capital francesa o bien nos llevaría a la inexactitud del dato. Una hipótesis es que Carvajal fue a Francia debido a la mala situación de su familia en Málaga y allí realizó estudios que le habilitaban fundamentalmente como tenedor de libros o contable, sin que quepa descartar que a la vez que trabajaba pudo, examinarse por libre en el Louis le Grand parisino, pero es improbable.

El diccionario biográfico entiende que en los estudios de Burdeos, donde fuesen, aprendió varios idiomas como francés, inglés, alemán, italiano, por-

---

<sup>13</sup> “José de Carvajal”, *Jurisconsultos españoles. Biografías de los expresidentes de la Academia y de los jurisconsultos anteriores al siglo XX inscritos en sus lápidas, La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación al Instituto de Derecho internacional* Madrid, Tomo II, Imprenta de hijos de M. G. Hernandez 1911, p. 230.

<sup>14</sup> El controvertido dato de los estudios en el Louis le Grand y la posible entrada en la *École Normale* aparece en Sánchez de Palacio, Mariano, “José Carvajal y Hué”, *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, Año 1972, n. 2, p. 235.

tugués, griego, latín y sanscrito<sup>15</sup>. Gómez de la Serna le atribuye estos conocimientos pero respecto al ruso aclara que lo aprendió pasados los cuarenta años y cuenta una anécdota:

“Refiérese que siendo Ministro de Estado presentose con un intérprete ruso, pues creía que un Ministro republicano y español hablaría sólo el idioma nativo, y por medio del intérprete le preguntó si podrían entenderse directamente en francés: Carvajal le contestó en ruso que podía hablar en el idioma de su país, si no prefería cualquiera de los usuales en Europa, añadiendo con cierto gracejo que también podría entenderse en sánscrito o árabe, si el Embajador los había estudiado”<sup>16</sup>.

Parece claro que Carvajal fue un magnífico poliglota, pero su bagaje de idiomas no lo adquirió en Francia. Si sería cierto en lo que se refiere al francés y si estuvo en el Liceo el griego y latín, quizás alguno de los modernos también, pero en idiomas, como en tantas cosas, fue autodidacta. Que aprendiese sanscrito con 14 años en el Liceo es inverosímil<sup>17</sup>.

Parte de los errores pueden provenir que Carvajal, no completó estudios reglados por las necesidades de su familia en Málaga. Mucho más tarde, cuando la legislación lo permitió tras la Revolución del 68, completaría los estudios en España, por libre y de forma fulgurante, en la Universidad de Salamanca.

La hipótesis favorable a que culminó sus estudios se observa en otro dato que se maneja no sabemos con qué base. Se dice que la familia quería que continuase estudios en la École Normale de París, que por entonces hacia el 1850 ya había tomado el nombre de École Normale Supérieure para diferenciarse de las instituciones de enseñanza básica. De nuevo la fuente del diccionario biográfico trae un dato confuso pues no parece que con su edad y probables estudios pudiese aspirar como dice a un trabajo en la École Normale de París, aunque sí a proseguir estudios como apuntan otros<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Quiles Faz, Amparo, “Carvajal y Hué, José. Málaga, 8.X.1835 - Madrid, 4 VII 1899 Político, abogado y escritor.” *Diccionario Biográfico Español*, Tomo XII, Real Academia de la Historia 2009-2012, p. 20.

<sup>16</sup> “José de Carvajal”, *Jurisconsultos españoles. Biografías de los expresidentes de la Academia y de los jurisconsultos anteriores al siglo XX inscritos en sus lápidas*, La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación al Instituto de Derecho internacional Madrid, Tomo II, Imprenta de hijos de M. G. Hernandez 1911, p. 231.

<sup>17</sup> Quiles Faz, Amparo, “Carvajal y Hué, José. Málaga, 8.X.1835 - Madrid, 4 VII 1899 Político, abogado y escritor.” *Diccionario Biográfico Español*, Tomo XII, Real Academia de la Historia 2009-2012, p. 20.

<sup>18</sup> Gonzalo Díaz Díaz da bien el año de nacimiento, insiste en los estudios de Bachillerato en Burdeos, sin citar Liceo y en la renuncia a seguir estudios en París. Díaz Díaz, Gonzalo, “José Carvajal y Hué”, *Hombres y documentos de la filosofía española*, CSIC, Madrid, 1983, p. 187.



Guillermo Benito Rolland en una fecha tan avanzada como 1890 atribuye la poderosa cultura de Carvajal al esfuerzo personal y al autodidactismo. Así:

“Hijo de sus propias obras, formado por sí mismo en el palenque del trabajo y de la ciencia, Carvajal no pertenece al número de los privilegiados por el nacimiento o la riqueza, sino al de aquellos otros que más en el campo propio de sus aptitudes tienen que aceptar la batalla de la vida en el de ocupaciones extrañas, como el de la profesión mercantil en este caso, hasta que el natural impulso de su entendimiento, contrariado o contenido, llega a abrirse camino en la esfera propia de su vocación, de sus peculiares aspiraciones”<sup>19</sup>.

E insiste en la posterior evolución de Carvajal desde sus inicios modestos como tenedor de libros:

“La Vanidad del triunfo suele apagar en muchos la memoria de tan honrosos combates; de ningún modo en mi apadrinado, quien, lejos de ello, recuerda y recordará siempre los suyos con satisfacción legítima, con tanta más razón cuanto que a su primitiva profesión mercantil debe en gran parte la pericia especial que todos le reconocen en esta importantísimo rama del Derecho, reuniendo como pocos la teoría y la práctica, el manejo de los negocios comerciales y las doctrinas jurídicas mercantiles”<sup>20</sup>.

Es seguro que al regresar a Málaga trabaja para diversos empleadores como tenedor de libros, especialmente para Loring. También inicia negocios de exportación, enlazando con la tradición exportadora vinatera de la familia Hué. Jorge Loring Oyarzábal, posterior Marqués de Casa Loring había recibido en 1859 la concesión para crear una compañía que construyese y explotase el ferrocarril Málaga-Córdoba, que se completó en 1865 y que luego amplió a la línea Bobadilla-Granada. Tras diversas vicisitudes en 1877 se integraría con otras compañías para formar la exitosa Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. En toda esta actividad estuvo implicado Carvajal, probablemente al principio de una forma más modesta, pero alcanzando luego la posición de jefe de contabilidad y director de tráfico.

Por cierto Gómez de la Serna atribuye, con gran delicadeza eso sí, a la influencia materna cierto amaneramiento o dulzura de trato: “Si fuera dado que una paloma educara a un león, éste sin dejar de ser león, se vería milagro-

---

<sup>19</sup> Rolland, Guillermo, “Discurso leído en la sesión pública del 28 de abril de 1890 de la Real Academia de Jurisprudencia y legislación con motivo de apadrinar en la investidura de Académico de Mérito al Excmo Señor D. José de Carvajal y Hue”, Tipografía de Manuel G. Hernández, Madrid, 1890, p. 8.

<sup>20</sup> Rolland, Guillermo, op. cit., pp. 8-9.

samente dulcificado en su rudeza. Tal fue siempre la influencia de las almas maternas, cuando imperaron sin compartir su cetro”<sup>21</sup>.

Pío Baroja en sus memorias, con su maledicencia habitual, se muestra menos comprensivo<sup>22</sup>.

No significa esta “dulzura de trato” que Carvajal no fuese un hombre de su época, dispuesto al duelo si era necesario. Así lo atestiguan las comunicaciones entre sus padrinos y los de Fernando Primo de Rivera y el acuerdo de no ir al duelo, presentadas excusas por el segundo, el once de diciembre de 1889<sup>23</sup>.

El 28 de enero de 1866 se casa con M<sup>a</sup> de la Concepción de Viana-Cárdenas y Milla, nacida en 1847. Tenía entonces por tanto Carvajal 31 años y su mujer 18. La tradición familiar y diversas fuentes sostienen que hubo una firme oposición al matrimonio por parte de la familia Viana-Cárdenas. Algunos lo atribuyen a la ideología progresista de Carvajal, más exactamente a su firme republicanismo, que nunca abandonaría y a su vinculación a la masonería, que sí dejaría en circunstancias que luego explicaremos. Por el contrario los Viana-Cárdenas era conservadores, de ascendencia aristocrática y católicos. De hecho uno de los hermanos de Concepción Viana-Cárdenas fue ayudante de Su Majestad. No cabe duda que esta puede ser una causa. También lo pudo ser en el siglo XIX el inferior origen social de Carvajal, es decir, quizás no hubiesen visto tan mal a un progresista de origen menos humilde. De los medios de fortuna poco habría que decir pues como hemos visto Carvajal se había enriquecido joven<sup>24</sup>.

No puede olvidarse que en la Plaza de Uncibay estaba presente la casa que fue de los Milla y Mendoza, que emparentaron con los Viana-Cárdenas y donde a la postre residirían los Carvajal Viana-Cárdenas durante el periodo que estuvieron en Málaga y donde volverían su mujer y sus hijas solteras tras la muerte de Carvajal en 1899<sup>25</sup>.

Sus hijos fueron Carmen Carvajal y Viana-Cárdenas, casada con el abogado Juan María López y Díez, Concepción, casada con un oficial de ingenieros Juan

---

<sup>21</sup> “José de Carvajal”, *Jurisconsultos españoles. Biografías de los expresidentes de la Academia y de los jurisconsultos anteriores al siglo XX inscritos en sus lápidas*, La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación al Instituto de Derecho internacional Madrid, Tomo II, Imprenta de hijos de M. G. Hernández 1911, p. 230.

<sup>22</sup> Baroja Pío, “Desde la última vuelta del camino I”, Tusquets, Barcelona, 2006, p. 525.

<sup>23</sup> Documento consultado en el archivo personal de Francisco Oyonarte Molina.

<sup>24</sup> Sobre la relación con los Viana-Cárdenas véase Bravo. Fernando, “La malagueña familia de Viana-Cárdenas”, *Isla de Arriarán*, XXXVII, 235-272.

<sup>25</sup> Serrano Carvajal, José, “José de Carvajal: Académico, político y literato”, *Anales de la Real Academia de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, N 30, Madrid, 2000, pp. 421 y 422.

Mauri, madre de José Mauri Carvajal, superviviente de la acción del Cuartel de la Montaña, Magdalena y Milagros que permanecieron solteras y José que casó primero con Julia y a su muerte con la hermana de ésta Luisa Mendicuti, hijas de un general del arma de ingenieros Federico Mendicuti y Surga. Carvajal dedicará a su único hijo varón prácticamente toda su obra. José siguió el camino de su padre, se doctoró en Derecho en Gotinga, fue vicecónsul de España en Lisboa cargo del que se dice fue expulsado por algún gesto radicalmente republicano, tras lo cual se hizo notario.

Siempre según Gómez de la Serna José de Carvajal había fundado muy joven la *Academia de la Juventud*<sup>26</sup>, que más tarde daría lugar al *Círculo democrático*, también fue uno de los organizadores del *Liceo de Málaga*. Esta entidad, sin tintes políticos a decir de Serrano Carvajal, fue fundada a imagen del Ateneo de Madrid y Carvajal se inspiró en los estatutos de esta última entidad para redactar los de la malagueña<sup>27</sup>. En el Liceo sería bibliotecario y formaría parte de los jurados de los distintos certámenes, en el año 1861 fue presidente de la Academia de Ciencias y Literatura del Liceo, manteniendo la vinculación incluso una vez que hubo trasladado su domicilio a Madrid. Bravo lo sitúa ya el 19 de diciembre de 1857 como socio n.º 44, de mérito y número de la Sociedad Económica Amigos del País de Málaga<sup>28</sup>. En ese mismo año según Amparo Quiles presidió una tertulia literaria en la Academia de Bellas Artes de efímera vida<sup>29</sup>. También fue secretario de la Junta de la Sociedad ese año como refleja el Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País en su página 184. Entre los años 1861 y 1864 publicó numerosos trabajos en el boletín.

En 1863 tenemos un ejemplo de su dedicación a la actividad cultural, en este caso a su pasión para el teatro. Publicó un homenaje colectivo a la actriz Adelaida Ristori, a la que había visto actuar ya en París y Madrid, y que representó en Málaga la obra *Giuditta* (Judith) de Giacometti. En la introducción en prosa muestra Carvajal su pasión por el teatro, sus conocimientos clásicos y bíblicos, y su admiración por la aristocrática actriz. El volumen contiene un conjunto de poemas alguno de los cuales, bajo pseudónimo, es muy posible que sea de nuestro autor<sup>30</sup>.

<sup>26</sup> Gómez de la Serna, Javier, op cit, p. 231.

<sup>27</sup> Serrano Carvajal, José, “José de Carvajal: Académico, político y literato”, *Anales de la Real Academia de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, N 30, Madrid, 2000, p. 420.

<sup>28</sup> Bravo. Fernando, “La malagueña familia de Viana-Cárdenas”, *Isla de Arriarán*, XXXVII, especialmente 256-258.

<sup>29</sup> Quiles Faz, Amparo, “Carvajal y Hué, José. Málaga, 8.X.1835 - Madrid, 4 VII 1899 Político, abogado y escritor.” *Diccionario Biográfico Español*, Tomo XII, Real Academia de la Historia 2009-2012.

<sup>30</sup> Carvaja y Hué, José, *Recuerdos*, Imprenta del correo de Andalucía, Málaga, 1863.

Hay que recordar que esta Sociedad de Amigos del País, está en la base de la creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Málaga en 1863, entidad que perduraría hasta 1898 y en la que también intervino Carvajal. En el Ateneo de Madrid según informe de esta Institución ingresó en el año 1874, una vez derrotada su opción política, como socio de número 3336. Fue elegido Presidente de la Sección de Ciencias Morales y Políticas el 30 de junio de 1879, ejerciendo este cargo hasta 1880.

En 1865 había formado parte de la Sociedad Lope de Vega, centrada en la actividad literaria y donde participaban escritores como Antonio Luis Carrión, Emilio de la Cerda y Eduardo del Palacio.

En 1869 aparece como uno de los socios benefactores de la *Asociación Libre para la Enseñanza Popular* dedicada a la formación de obreros adultos. Fue igualmente vocal de la primera Junta y el 17 de octubre de 1870 interviene en la apertura de la escuela de adultos para hablar de la importancia de la instrucción<sup>31</sup>.

Por otra parte Antonio Jiménez Landi en su obra *la Institución Libre de Enseñanza y su ambiente* lo cita como uno de los accionistas primeros de la Institución y lo caracteriza con la siguiente frase: “Carvajal era hombre agudo, tenía gran afición a estudiar idiomas, ya fuesen inglés o sánscrito”<sup>32</sup>.

En el curso 1880-81 Carvajal figura como presidente de la Comisión de Propaganda de la Institución Libre de Enseñanza<sup>33</sup> y está incluido en el listado de personas que han dado conferencias o participado en conciertos, recitales y lecturas sin ser profesor titular de la Institución.

Como relata José Luis González Hidalgo<sup>34</sup> perteneció a la Real Sociedad Geográfica de Madrid, fundada en marzo de 1876, también a la Asociación Española para la Exploración de África, fundada en 1876 y filial de la Sociedad para la exploración de África de Bruselas. En 1883 Joaquín Costa fundó la sociedad de Africanistas y Colonialistas Españoles. Esta sociedad organizó en el teatro Alhambra de Madrid un mitin bajo el lema “Los intereses de España y de Marruecos son armónicos.” En este mitin intervino Carvajal, como se ve activísimo poco después con la Defensa de la Mano Negra, pronto con

---

<sup>31</sup> Morales Muñoz, Manuel, “Enseñanza Popular y clase obrera en Málaga, 1868-1874” en Aymes, Jean-René, Fell, Eve-Marie, Guereña, Jean Luis, *L'enseignement Primaire en Espagne et en Amériquelatine du XVIIIe siècle a nos jours*, Presses Universitaires François-Rabelais. 1986, pp. 133, 144.

<sup>32</sup> Jimenez Landi, Antonio, “La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, Tomo I, Los orígenes de la Institución”, Editorial Complutense, Madrid, 1996. p. 160.

<sup>33</sup> Op. cit., p. 677.

<sup>34</sup> González Hidalgo, José Luis, “José Carvajal Hué y el mitín de la Alhambra de Madrid”, *Isla de Arriaran* X, 1997, p. 200.

el Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y posteriormente la presidencia de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

En esta intervención Carvajal defenderá la españolidad de Ceuta: “Ceuta es cristiana, y con eso se dice todo lo que nos va a nosotros los europeos en este punto” y añade “Portugal la trajo a la unidad y la dejo en nuestras manos al separarse de nosotros”<sup>35</sup>.

De sus estudios españoles tenemos confirmación precisamente a través del expediente del Colegio de Abogados de Madrid. Al pedir su incorporación en 1874 se solicita como era preceptivo confirmación del título a su Universidad de origen que era la de Salamanca. Ésta confirma que el Doctor José Carvajal y Hué tenía el título de abogado expedido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca el 23 de Junio de 1870 cuando contaba 35 años de edad. Gómez de la Serna sostiene que sacó los tres títulos, bachiller, abogado y doctor en quince días. Otras referencias, en la Revista de los Tribunales de forma más realista nos dicen que se tituló entre los años 1869 y 1870. La Revolución había instaurado la libertad de cátedra y Carvajal, de quien sospechamos que salvo la formación en comercio francesa no había recibido otra enseñanza reglada, pudo acceder a titulaciones oficiales. De aquí podemos deducir que Carvajal nació efectivamente en 1834 y la errata sobre su fecha de nacimiento es posterior a 1870, que se dedicó tardíamente al Derecho, con 35 años, casi simultáneamente con su incorporación a la política y que su ingreso en el Colegio de Abogados de Madrid se realizó también tardíamente cuando contaba 39 años de edad. Antes había pertenecido al Colegio de Abogados de Málaga.

Según documento que obra en poder de ese Colegio de Abogados Carvajal se incorporó al mismo el 14 de julio de 1870 y aporta un título de licenciado, no de doctor, expedido por la Universidad de Salamanca el 23 de junio de 1870. El documento recoge también que fue ministro de la República, Decano del colegio de Madrid y Presidente de la Academia de Jurisprudencia. Fija el fallecimiento el 4 de junio de 1899.

Del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid fue decano Carvajal en 1885 en el interregno de su presencia en el Congreso. El año 1886 sería Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En ella había presentado solicitud de entrada el 22 de mayo de 1882, siendo admitido el 26 de mayo del mismo año<sup>36</sup>.

Es notoria para sus contemporáneos la cultura de Carvajal. Nosotros sostenemos que Carvajal era casi totalmente autodidacta, combinando la intensa

---

<sup>35</sup> Carvajal et al *Intereses de España en Marruecos*, Madrid, 1884, p. 90. Cito por González Hidalgo.

<sup>36</sup> RAJL. Archivo. Caja 161, exp. 513, 746.

lectura, con una notable facilidad para los idiomas y la actividad en los centros culturales de la época, situados en España al margen de la Universidad. En esto se parece a otro financiero, aunque no hecho a sí mismo, el escritor colombiano Nicolás Gómez Dávila.

Fue conocedor de Horacio, que recomendaba a su hijo, publicó sobre Shakespeare y sobre todo tenía una amplísima cultura jurídica que mostró sobradamente a lo largo de su carrera.

Siempre Gómez de la Serna extiende la leyenda de sabiduría hasta situarle en la Presidencia de las oposiciones a la cátedra de Sanscrito de la Universidad Central. No sabemos si pudo ser en la controvertida decisión del Ministerio de Fomento que otorgo la cátedra al hijo del político progresista y amigo de Carvajal, Nicolás María Rivero y no a Francisco García Ayuso que era quien venía enseñando de manera informal sanscrito a todos, o perteneció a algún tribunal posterior, sin ser catedrático, como el de la oposición de 1883 que ganó Juan Gilabert Guardiola.

A su don de lenguas se refiere Guillermo Benito Rolland que atribuye el conocimiento humanista al esfuerzo de toda una vida:

“Poséelas también, y en altísimo grado y medida, el laureado Académico. Versadísimo en lenguas vivas, poseyendo como la propia castellana la italiana y la inglesa, la francesa, la alemana y la rusa, atesora al par especiales conocimientos en los idiomas clásicos, como el sánscrito, el griego y el latín. Sus estudios en estas materias, raros en nuestros días aún en personas ajenas a las ciencias jurídicas, no son en modo alguno los de un mero aficionado, sino los de un verdadero humanista, a la manera de los jurisconsultos españoles del Renacimiento o los juristas alemanes de nuestro siglo”<sup>37</sup>.

De sus escritos en todo caso se deduce una profunda formación clásica, así, por ejemplo, en el prólogo de los discursos parlamentarios tiene una extensa referencia a los mitos griegos relacionados con la paternidad que pone en contraste con una amplia reflexión trinitaria, ciertamente inhabitual y bastante heterodoxa.

En Málaga se había incorporado a la masonería, no sabemos con qué fecha, aunque no sólo su actividad política, sino como hemos visto sus negocios, le acercan a miembros de la sociedad secreta. Francisco López Casimiro lo sitúa como Venerable de logia Bética de Málaga, en 1872, con el nombre simbólico de Tiberio Graco. Como es sabido Tiberio Sempronio Graco, general romano y tribuno de la plebe, intentó la reforma agraria y fue asesinado a golpes por una facción senatorial. Había sido también artífice de una paz pactada con los

---

<sup>37</sup> Guillermo Rolland, op. cit., p. 12.

numantinos rechazada por el Senado. Todo ello dice mucho de las aficiones populares de Carvajal. En la masonería alcanzó el Grado 33, máximo de la institución y luego fue expulsado, veremos en qué circunstancias<sup>38</sup>.

Antes de iniciar su actividad política propiamente dicha, Carvajal había accedido a la condición de terrateniente, lo que tiene su importancia en la cuestión que nos ocupa, esto es en la represión de la actividad internacionalista en el campo andaluz. Según Bravo el 31 de enero de 1867 había comprado al comerciante malagueño, Manuel Gabriel del Valle, la Hacienda de Motage, situada en la dehesa baja, y comprendida entre la sierra de los Pedregales y el río Guadalhorce<sup>39</sup>. En efecto, según que fuentes se consulten, la agudización de los enfrentamientos en el campo andaluz se había producido con el progresivo cambio en las formas de explotación agrícola y la entrada de nuevos propietarios tras la desamortización que preferían la gestión y explotación directa a los arrendamientos, aparcerías y colonatos que había usado la vieja aristocracia. La creciente violencia de resistencia estaría relacionada con la aparición de unos braceros itinerantes sometidos a grave explotación. Sin embargo, como veremos, los causados de la Mano Negra no pertenecerían a estos grupos más proletarios.

Carvajal obtendría sus primeras actas de diputado por el distrito de Gaucín, cercano a las zonas más conflictivas andaluzas poco después de implantarse el sufragio universal masculino a los mayores de 25 años con “la Gloriosa”, luego en la Restauración obtendría su acta republicana por el distrito urbano de Málaga, donde tendría fuertes apoyos populares. Es de destacar que obtuvo ese escaño una vez reinstaurado el sufragio universal masculino en 1890.

Fue también escritor de obra amplia, donde predominan los textos políticos y jurídicos, pero hay incursiones literarias e incluso teológicas. Entre sus obras destacan: *Recuerdos*, Málaga Imprenta del Correo de Andalucía, 1863; *Estudios críticos sobre el teatro de Shakespeare*, 1873; *Discurso sobre el posibilismo*, Madrid, 1879; *Elogio fúnebre de Gambetta*, Madrid, Fernando Fe, 1883; *España y Marruecos*, Madrid, Manuel Ginés Fernández 1884; *Discurso pronunciado en la sesión celebrada en 1885 en honor de D. Benito Gutiérrez y Fernández*. Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1886; *Del azar y su influencia en las relaciones del derecho: discurso en la solemne apertura del curso académico de Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 1886 a 1887*, Madrid Manuel G. Hernández; 1886; *Discurso leído en la sesión*

---

<sup>38</sup> López Casimiro, Francisco “Aproximación a un catálogo de diputados masones durante La Restauración (1876-1901)” Trabajo presentado al XIII Symposium Internacional de Historia de la masonería española, celebrado en Gibraltar los días 11-13 de octubre de 2012 y se publican también las actas correspondientes, pp. 591-593.

<sup>39</sup> Bravo. Fernando, “La malagueña familia de Viana-Cárdenas”, *Isla de Arriarán*, XXXVII.

*pública del 28 de abril de 1890 en el acto de recibir la investidura de Académico de Mérito de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, Manuel G. Hernández, 1890; *Quodlibetos jurídicos*, Madrid, Fernando Fe, 1892; *Condiciones de origen, de etimología y de uso que han de concurrir en una voz para que sea admitida en el diccionario vulgar*, Madrid, 1892; *Los anarquistas en Madrid, informe oral de las sesiones del Jurado de 30 de diciembre de 1893 y 2 de enero de 1894 en defensa de Juan Maria Debats*, Madrid, Aley y comp., 1894; *Reformas en Cuba*, 1894; *Discursos parlamentarios*, Madrid, Ricardo Fé, 1895.

Publicó también en Prensa como corresponde a un político de la época. Primero en la Prensa malagueña, luego en Madrid. Así colaboró en los medios malagueños ‘La Razón’, 1856, donde publicó algunos versos; ‘La Caridad’, 1861; ‘Lope de Vega’, 1865; ‘El Avisador Malagueño’ y ‘El Juicio Oral’, 1883; Y de Madrid ‘La Ilustración Española y Americana’, 1883. Finalmente fundó “La República Nacional” en 1894 de escasa vida. Poemas y otros escritos los publicaría con el seudónimo de Lucas de Hajera y Jove<sup>40</sup>, anagrama de su nombre.

---

<sup>40</sup> Gómez de la Serna, Javier, op. cit., p. 231.



## ACTIVIDAD POLÍTICA

En Carvajal la actividad comercial precedió a las titulaciones propiamente académicas y la política precedió a la actividad jurídica.

De esta forma su incorporación a la política no se debió al deseo de medrar o de lograr una posición que como hemos visto había construido con su propio esfuerzo. Nunca fue uno de esos aspirantes que se agolpaban a la puerta de los despachos ministeriales y que con tanto acierto reflejan los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós.

Armando Palacio Valdés en su obra *Los oradores del Ateneo* le describe como un político tardío que no buscó medrar y que se encontraba en el apogeo de sus cualidades intelectuales.

Así dice:

“El Sr. Carvajal no apareció en la vida pública sino en el apogeo de sus facultades intelectuales y al colmo de su experiencia. Desdeñó lo que aquí ha dado en llamarse con no poco cinismo la carrera política, y dedicó su claro talento a la dirección de empresas industriales o financieras. La carrera política en España tiene todo el aspecto de una correría, de una algarada a través de los fértiles campos del presupuesto... Bajo este sentido, la figura del Sr. Carvajal no puede menos de aparecer simpática. Es un político de ayer, y acaso por esto le desdeñaran los que desde sus juveniles años han seguido la carrera de ministro, empezando por concejales. Los señores del escalafón deben sufrir con paciencia, no obstante, que el Sr Carvajal haya comenzado por el fin, porque si no ha intervenido de un modo tangible en la administración del Erario municipal antes de intervenir en el nacional, no ha dejado por eso de preocuparse con ella y estudiarla. Ha sido siempre un concejal platónico”<sup>41</sup>.

Desde 1854 Carvajal se había incorporado al Partido Demócrata estando vinculado por tanto a Nicolás María Rivero, fundador del partido, primer alcalde demócrata de Madrid y Presidente de las Cortes en el reinado de Amadeo de Saboya, y a Emilio Castelar. Por tanto, si sus cargos políticos debieron esperar a la Revolución del 68, ya desde 14 años antes mantenía una militancia que nunca abandonaría, republicana y demócrata, aunque al final de su carrera se definiera como republicano y conservador.

Su presencia en la política, sobre todo en el Parlamento fue muy larga y se extendió en la Restauración. Su acción propiamente ejecutiva, con cargos de responsabilidad, se ve enmarcada por el periodo que va desde la Revolución de

---

<sup>41</sup> Palacio Valdés, Armando, “Los oradores del Ateneo. Semblanzas y Perfiles críticos”, Madrid, Casa Editorial de Medina, pp. 50-51.

1868 hasta el golpe de Pavía de 1874. Igualmente en ese periodo se produce su mayor presencia dentro de la masonería.

Se incorporó a la Diputación Provincial de Málaga tras la Revolución en 1869 y fue Vicepresidente de la misma. Su labor principal en el breve periodo que ejerció el cargo fue equilibrar el presupuesto, actividad en la que siempre destacó y que le conduciría posteriormente a la cartera de Hacienda de la República. También parece que se le ofreció la Intendencia de Hacienda de la Isla de Cuba y en 1872 obtiene su primera acta de diputado por Gaucín, partido malagueño en el que arrebató el escaño a Antonio Ríos Rosas. Hubo de defender esa acta y en su discurso de 25 de octubre de 1872 explica la conjunción con los candidatos radicales monárquicos. Conjunción oportunista que saltaría con la caída de Amadeo de Saboya más adelante y que explicaría el enfrentamiento dentro de la masonería de Carvajal y Ruiz Zorrilla. En su primera legislatura fue diputado del 22 de octubre de 1872 al 22 de marzo de 1873. En las elecciones de mayo de 1873 salió también por Gaucín y estuvo del 5 de junio de 1873 al 8 de enero de 1874 (golpe de Pavía). En el 1879 en las elecciones del 20 de abril de nuevo obtuvo el escaño por Gaucín, permaneciendo hasta el 25 de junio de 1881. En las elecciones de agosto de ese mismo año repite por su distrito en una legislatura que duró hasta el 31 de marzo de 1884. En las elecciones de febrero del 92 cambió al distrito de Málaga permaneciendo hasta enero del 93, en las elecciones de 5 de marzo de ese mismo año repite escaño por Málaga siendo diputado hasta el 1 de julio de 1895. Con dos interregnos entre el 74 y el 79, tras la caída de la Primera República, y entre 1884 y 1892, tras su vinculación a la defensa de la Mano Negra y durante el decanato en el Colegio de Abogados de Madrid y luego la Presidencia de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, fue diputado desde 1872 hasta 1895 cuatro años antes de morir, desde los 38 hasta los 61 años, y salvo un año, donde se concentra su actividad en el poder ejecutivo, siempre estuvo en una exigua minoría republicana<sup>42</sup>.

Tras la Restauración estuvo cerca del republicanismo unitario de Castelar y fundó La Unión Constitucional Republicana.

Su actividad ministerial se reduce en consecuencia al breve periodo de la Primera República, periodo convulso con numerosos cambios de Gobierno donde se sucedían en diversos puestos los mismos nombres. Fue así primero Subsecretario de Gobernación en el Gobierno de Figueras, cargo del que dimitiría tras los sucesos del 31 de marzo de 1873 y negarse a abrir fuego contra la

---

<sup>42</sup> Disponible en: [http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip?\\_piref73\\_1340033\\_73\\_1340032\\_1340032.next\\_page=/](http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip?_piref73_1340033_73_1340032_1340032.next_page=/) consultado 30/08/2017.

milicia nacional amotinada en la Plaza de Toros. La tradición radical malagueña de Carvajal le impedía probablemente realizar una acción de ese tipo, sin meternos en psicologías respecto a la figura paterna y su posible vinculación a la Milicia. Fue posteriormente Ministro de Hacienda del 28 de junio de 1873 al 18 de julio de 1873; Ocupa de nuevo el Ministerio del 19 de julio de 1873 al 4 de septiembre de 1873, y luego Ministro de Estado con Castelar del 8 de septiembre de 1873 al 3 de marzo de 1874, también ocupó la cartera del Gobierno interinamente durante la ausencia del titular entre el 25 de septiembre de 1873 al 30 del mismo mes y año.

Por aquellos mismos años se produce su fugaz paso por la cúspide de un sector de la masonería española. Perteneció en efecto al Gran Oriente de España formado probablemente en 1868, tras “la Gloriosa”, por un grupo de disidentes del Gran Oriente Nacional de España. Este, plenamente vigente antes de la Revolución, intentó mantener una posición más “neutral” en los asuntos políticos, lo que en ese periodo quiere decir claramente más conservadora o isabelina, mientras que otras obediencias como el GODE buscaban una base más democrática. Carvajal muy probablemente quiso llevar el asunto más lejos y vincular la obediencia a la causa republicana. En efecto, aprovechando la salida de Ruiz Zorrilla de Madrid por su oposición al proyecto republicano tras la abdicación del rey Amadeo de Saboya, también masón, Carvajal, sucesivamente desde los ministerios de Hacienda y Estado intenta hacerse con el control masónico, indudablemente para dar apoyo al republicanismo. Cuando la República sea liquidada Carvajal pagará su osadía con la expulsión de él y sus compañeros. Así lo describe Pedro Álvarez Lázaro:

“La salida de Ruiz Zorrilla de Madrid, debida a los derroteros que tomó la 1ª República, estimuló las ansias de poder de la camarilla que rodeaba a Carvajal. En el mes de octubre se hizo circular por las logias una circular, en la que se comunicaba que Ruiz Zorrilla había dimitido de sus cargos el 7 de octubre de 1873 y había sido sustituido por Carvajal. El propio Carvajal firmaba ya dicho impreso, en funciones de Soberano Gran Comendador. Sin embargo Llano y Persi, haciendo de intermediario de Ruiz Zorrilla, envió las auténticas cartas de dimisión de su jefe a los cargos de Gran Maestro y de Soberano Gran Comendador, fechadas en enero de 1874. Inmediatamente se procedió a iniciar un proceso judicial masónico contra los autores de la circular de octubre, y fueron expulsados de la orden José Carvajal, Mariano Foncillas, Francisco Panzano, Anastasio Menéndez y Leandro Tomás Pastor. Inmediatamente fue elegido Juan de la Somera para sustituir a Ruiz Zorrilla. El 26 de marzo de 1874 quedó investido como Gran Maestro y poco después como Soberano Gran Comendador.” (los cargos se refieren al GODE)<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Álvarez Lázaro, Pedro, “La masonería, Escuela de Formación del ciudadano”, UPCO, Madrid, 1996, p. 131.

No hay que insistir en que la respuesta se produce una vez caída la República y con Carvajal sin poder, preparando evidentemente la acción durante lo que luego sería la Restauración.

Podría deducirse que más que influir la obediencia masónica en la política, como a veces se ha entendido, son las controversias políticas las que influyen en la masonería, marcando no sólo cargos y ascensos sino divisiones y expulsiones. De nuevo seguimos a Pedro Álvarez Lázaro que desde nuestro punto de vista lo explica muy bien:

“Dentro del complejo arco masónico del siglo XIX llama la atención a primera vista la destacada personalidad política de los principales dignatarios de las distintas obediencias: Díaz Quintero, Ruiz Zorrilla, Carvajal y Hué, Llano y Persi, Sagasta, Romero Ortiz, Becerra... Sus elecciones para ocupar las más altas esferas masónicas obedecieron, en gran medida, al indudable prestigio profano que le proporcionaban sus ocupaciones políticas. El atractivo que ejercían estos líderes logró que se incrementase el número de iniciaciones y de efectivos masónicos en nuestro país. Para ser elegidos primó, sin duda, el interés político sobre el interés masónico, como queda especialmente puesto de manifiesto en casos como el de Ruiz Zorrilla, quien, como ya hemos visto, en el breve espacio de tres días, de 18 al 20 de julio de 1870, fue iniciado, ascendido a grado 33 y nombrado Gran Maestro y Soberano Gran Comendador”<sup>44</sup>.

Durante su actividad ejecutiva no fue extraño que Carvajal se acercase a la figura del don Emilio Castelar e hiciese frente al cantonalismo. Su patriotismo es innegable y su dedicación a la cuestión pública le pareció siempre una obligación cívica. En su escrito más personal a este respecto la “Introducción a los discursos parlamentarios” dedicada como hemos dicho a su hijo, escrito que puede tomarse como un testamento ideológico y político, describe ya sin ilusión los males de España, en este caso los de la Restauración, con una posición pesimista pero comprometida, que recuerda claramente al regeneracionismo:

“Aquí entra, respecto a la política española, un gran desencanto; si fijas la vista en nuestro pueblo y lo comparas con los demás pueblos de Europa, comprenderás cuan desgraciada es nuestra Patria y como se necesita amarla mucho para influir en su política, haciendo el sacrificio que ella merece, precisamente porque es menos afortunada. La distancia entre España y los demás pueblos de Europa se va cada día aumentando porque aunque absolutamente progresamos, no es así relativamente, y nuestro andar es mas acompasado del de las naciones que nos han tomado la delantera. La vida se hace cada vez más universal y nosotros tenemos una historia tan gloriosa, que no podemos avenirnos con este decaimiento relativo; aun cuando al empuje del siglo nos vayamos moviendo, no podemos alternar ni en riqueza, ni en fuerza, ni en ciencia con los demás pueblos de Europa; no tenemos más que un refugio en lo cual vamos parejos, que es el arte, y de este mismo sospecho que

---

<sup>44</sup> Op cit 140-141.

cuando con relación a las demás actividades humanas toma cuerpo, es un signo por todo extremo grave.

Quizás ningún otro pueblo que tenga como el nuestro noción tan clara de la política pero no hay seguramente ningún otro que ofrezca peores elementos para su progreso. El desarrollo de nuestra población es mínimo, señal indefectible de que no tenemos los recursos de vida necesarios para una gran propagación; el trabajo escasea y está mal remunerado; capital no hay, y el que tiene la tierra por manifestación, se halla gravado por una deuda hipotecaria que transforma al prestamista en señor del dominio. La falta de trabajo agrícola, industrial y científico, aglomera en la puerta de los Ministerios la muchedumbre de los pretendientes, y el presupuesto se hace socialista en el sentido en que es socialista el oficio y el hospital.

De las clasificaciones sociales, no hay ninguna que infunda esperanzas; la aristocracia es engreída, holgazana, pobre, la clase media egoísta, como temerosa de que se le escape y desaparezca su bienestar; el pueblo todavía ignorante y ya entregado a los errores socialistas y a los delirios anarquistas. Si de estas grandes divisiones sociales pasamos a aquellas que se fundan en funciones de la vida, el ejército es peligroso; el clero desempeña sus funciones que le apartan o deberían apartarle de los problemas que estudiamos; aun así para el ejercicio de su mismo ministerio, deficiente; la administración, inmoral; la enseñanza, errónea; no hay religión, pero no hay filosofía; la política, explotada por los vividores; el egoísmo de la senectud, invadiendo a la gente moza; la masa total se mueve y vive, pero con los aleteos de la enfermedad que pueden ser anuncios de muerte. En estas condiciones, precisa realizar el deber de influir en la vida pública, y yo no sé si llegaremos a plantear los organismos que apetecemos, pero se todavía con menor certidumbre, si no serán tardíos o ineficaces.

Ya ves si es preciso luchar y si es peligroso luchar con pureza de conciencia al lado de los que se aprovechan de la minería pública para estrujar, en beneficio personal y propio, sus últimos zumos, y luchar por la Patria como el médico que se empeña a la cabecera del moribundo en seguir recetando ¡quien sabe si es tarde!<sup>45</sup>.

Ciertamente el tono del escrito está impregnado del pesimismo que marcaba la España de finales de siglo, que sorprendentemente mientras encontraba cierta estabilidad política y empezaba una recuperación económica, se preparaba para perder los restos del Imperio y no podía sino contrastar su pasado glorioso con un presente en el que ocupaba una posición subalterna. La diferencia entre los finales del XIX y la actual situación española es que entonces ese juicio era común a progresistas, conservadores y reaccionarios.

El patriotismo de estos republicanos está claramente expuesto por el mismo Castelar en referencia que tomo del Conde de Romanones:

“Y yo quiero ser español y sólo español; yo quiero hablar el idioma de Cervantes; quiero recitar los versos de Calderón; quiero teñir mi fantasía en los matices que llevan disueltos en sus paletas Murillo y Velázquez; quiero considerar como mis pergaminos de nobleza nacional la historia de Viriato y del Cid; quiero llevar en el escudo de mi Patria las naves de los catalanes que conquistaron a Oriente y las naves de los andaluces que descubrieron el Occidente; quiero ser de toda esta tierra, que aún me

---

<sup>45</sup> Carvajal y Hué, José, “Discursos Parlamentarios”, Madrid, Ricardo Fé, 1895, pp. LIII-LV.

parece estrecha, sí, de toda esta tierra tendida entre los riscos de los montes Pirineos y las olas del gaditano mar: de toda esta tierra ungida, santificada por las lágrimas que le costara a mi madre mi existencia; de toda esta tierra redimida, rescatada del extranjero y de sus codicias por el heroísmo y el martirio de nuestros inmortales abuelos. Y tenedlo entendido de ahora para siempre... antes que a la libertad, antes que a la República, antes que a la federación, antes que a la democracia, pertenezco a mi idolatrada España.

Y me opondré siempre con todas mis fuerzas a la más pequeña, a la más mínima desmembración de este suelo que íntegro recibimos de las generaciones pasadas, que íntegro debemos legar a las generaciones venideras, y que íntegro debemos organizar dentro de una verdadera federación<sup>46</sup>.

También Carvajal refleja en su escrito el pesimismo de una carrera política fracasada, en la que las circunstancias, y el demencial comportamiento de un amplio sector del republicanismo durante el 73, le habían impedido llevar adelante sus propósitos. Si desde el punto de vista personal, el final de su vida puede considerarse de cumplimiento y culminación, sus pretensiones políticas habían terminado en un amargo fracaso y la situación de España, como pensarían con mayor fuerza los autores de las generaciones siguientes, era terminal; como dice el texto que hemos citado, la de un moribundo.

Aun así Carvajal no incurre en ningún esnobismo cosmopolita y proclama su amor a la Patria y lo transmite a su hijo.

El duro juicio que compara a España con un moribundo y que con autocrítica no salva a ningún grupo social del desastre se combina con una enorme lucidez respecto a los riesgos de la política, el más noble arte, pero también la más expuesta a la prevalencia de los intereses de grupo, siempre amenazadores, pero corrompida por los intereses personales que son con mucho los más peligrosos. De nuevo en la Introducción realiza una larga disertación:

“Hablo de la política como de cosa práctica y abiertamente puedo decir mi opinión, de que así como lo abnegado señala las esferas de lo espiritual y de lo especulativo, por el contrario ocurre en cuanto se trata de la vida real donde, no digo por desventura en razón de que siendo de naturaleza nada hay que objetar, nada que lamentar y todo se impone; pero en realidad el individuo toma predominio sobre el grupo y la necesidad sobre la idea; ocurre, pues, que la política se adopta por oficio y por ventaja y que el bien social en vez de ser lo principal que traiga la derivación del bien particular, se sujeta a los logros de éste, humillándose hasta ser accesorio, por donde se embrolla la política y se complica con multitud de pasiones, entre las cuales sobresale la codicia y la ambición de figurar.

De todos los matices de color que origina esta situación lamentable, mas que es necesario tener en cuenta como vicio difícilísimo de corregir, uno de los más atractivos, pero de donde salen emanaciones deletéreas y sin embargo es simpático,

---

<sup>46</sup> Conde de Romanones, “Los cuatro presidentes de la Primera República Española, Espasa Calpe, Santander, 1939, pp. 98-99.

parece ser el de las colectividades parciales que semejan a los individuos en su acción; fuerza que frecuentemente arrasa la misma fuerza total de la sociedad por descuido suyo; la Iglesia invocando la mejora de las costumbres y la santidad del dogma; el ejército, amparándose de la integridad del territorio y del honor nacional y poniendo parapetos para aquel riesgo y enalteciendo el respeto de este sentimiento; la magistratura con los nombres casi sacrosantos de justicia y de derecho; la agricultura, llamándose fuente de toda la riqueza y temerosa siempre de que se agosten sus aguas; la industria, solícita eterna de la protección, el comercio pregonando siempre, y en ocasiones con motivo sobrado, su decadencia; las clases entre si guerreando bajo esta o aquella bandera; todos los que pudiéramos llamar egoísmos colectivos hacen de la política el escudo de sus conveniencias, y yo no digo que no sea de sus necesidades. Aún así tampoco es este el lugar donde se concentra y condensa el más grave de los prejuicios que por el dominio de los intereses aislados y egoístas sobre el interés social, se produce en la vida pública; hay que verle en los individuos, que multiplicados por su muchedumbre y dirigidos instintivamente y sin previo concierto en la misma ruta, hacen de la política un bátrito de tinieblas morales a la luz del sol, por entre los que pasan milagrosamente sin mancharse algunas conciencias puras; menos siquiera cuando solamente da vida al egoísmo la ambición de figurar un día sin eco en la historia; pero no es eso: el Concejal, el Gobernador, el Diputado, el Ministro aspiran a estas posiciones, siquiera sea para ayudarse en su profesión de abogado, de ingeniero o de médico y no hay quien salga de la Universidad y no aspire a que sea la política el medio de abrirse carrera y de hacer fortuna"<sup>47</sup>.

Frente al primer juicio que hemos recogido este segundo no parece dirigido exclusivamente a la política española sino que es una reflexión sobre la naturaleza humana y los riesgos de la política, tan necesaria para el bien privado y común, como expuesta a manipulaciones.

Especialmente valioso es su juicio sobre la manipulación del bien común que se difumina ante la presencia de innumerables bienes particulares. Es un tópico del momento la disgregación del bien común por la acción de los distintos grupos y desde luego está plenamente aceptada en la época, vistos Marx o Nietzsche, que este bien moral no pocas veces es la máscara de un bien particular.

Pero con acierto el Carvajal más pesimista, aunque parece que nunca estuvo curado de su progresismo, observa que el riesgo mayor no viene del grupo, de la estructura, de la prevalencia de esta u otra organización, sino del egoísmo de cada hombre, de la naturaleza caída, de la aspiración de cada concejal y de cada ministro. En el momento de su muerte marcaría la política mediocre de un Régimen que, sin embargo sobrevivió al desastre militar de Cuba y Filipinas, lo que vistos los acontecimientos del siglo XX parece un milagro.

---

<sup>47</sup> Carvajal y Hué, José, "Discursos Parlamentarios, Tomo I", Madrid, Ricardo Fé, 1895, pp. XLIX-L.



Si en Carvajal primaría a la postre la tendencia jurídica, sus primeros éxitos públicos se deberán a su vocación y habilidad hacendística. En su “Discurso sobre el estado de la Hacienda” del 3 de julio de 1873 dirigido a tranquilizar a los tenedores de la deuda expresaría:

“La Hacienda española, señores Diputados, se encuentra en circunstancias difíciles, pero de ninguna manera se encuentra perdida, de ninguna manera se encuentra desesperada; la Hacienda española tiene medios de cumplir caballerosa, digna y honradamente con los compromisos que ha contraído y yo aseguro a los señores diputados que si el orden público se restablece, condición especial para la vida de la Hacienda, si la Cámara no deja de prestar el gran concurso que viene prestando a las disposiciones del Gobierno, si por todas partes, como yo espero, llega el día en que renazca la confianza, vendrá otro después en que la Nación española demostrará que es capaz de cumplir con todos, absolutamente con todos los compromisos contraídos dentro de la esfera de sus facultades, y dentro de la capacidad tributaria de esta Nación, que es grande, muy grande y desconocida por muchos”<sup>48</sup>.

Contrasta quizás su entusiasmo público en los discursos con los que leímos en la Introducción pero el motivo es que en aquellos meses sufridos del Gobierno Republicano aún reinaba el entusiasmo.

Por otro lado entendía que existía un prestigio nacional superior al de un Gobierno determinado o al de un régimen. Y así expresa en el mismo discurso:

“Consideramos que los compromisos contraídos a nombre de la nación deben ser respetados por la grandeza de la Nación misma, no por la importancia que pueda tener el Gobierno, porque los Gobiernos todos son pequeños y mezquinos ante la grandeza de esta Nación, que hasta en sus épocas de decadencia está llamada a dar prueba de su lealtad y honradez”<sup>49</sup>.

Gómez de la Serna le caracteriza como una persona especialmente ecuaníme en las labores ministeriales y refiere como a quienes le solicitaban que sólo emplease republicanos respondió:

“Respecto a si estoy dispuesto a no emplear en el Ministerio a mi cargo más que republicanos, debo decir, llana, paladinamente, que yo en primer lugar estoy dispuesto a premiar la inteligencia y la laboriosidad, y así habré cumplido en mi conciencia como Ministro de Hacienda; y luego, si logro, como es seguro que lograré, tener la satisfacción de colocar a empleados pertenecientes a mi partido, habré cumplido en mi conciencia como republicano”<sup>50</sup>.

<sup>48</sup> Carvajal y Hué, José, “Discursos Parlamentarios Tomo I”, Madrid, Ricardo Fé, 1895, p. 190.

<sup>49</sup> Carvajal, op. cit., p. 191.

<sup>50</sup> “José de Carvajal”, *Jurisconsultos españoles. Biografías de los expresidentes de la Academia y de los jurisconsultos anteriores al siglo XX inscritos en sus lápidas*, La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación al Instituto de Derecho internacional Madrid, Tomo II, Imprenta de hijos de M. G. Hernández 1911, p. 234.



Como Ministro de Estado se han destacado su labor en la normalización de las relaciones con la Santa Sede y las gestiones que realizó con el incidente del *Virginius*, barco filibustero de bandera norteamericana que fue apresado y su tripulación ejecutada. Estados Unidos buscó entonces lo que hallaría unos años después con el *Maine*. Carvajal encontró un arreglo que mantenía el honor nacional sin indemnizar pero pagando auxilio a las familias de los filibusteros.

En el *Discurso de la sesión pública del 28 de abril de 1890 con motivo de apadrinar la investidura del título de Académico de número al Excmo. Sr. José de Carvajal y Hué*, Rolland describe así su intervención como Ministro de Estado: “

“No puedo menos, sin embargo, de recordar especialmente en esta ocasión, desde el punto de vista del patriotismo y del derecho, al Ministro de Estado activo y prudente, que, en días azarosos, en unión de sus dignos compañeros en el Gabinete de reorganización nacional, presidido por uno de nuestros más célebres oradores y estadistas, contribuyó poderosamente al deseado y feliz restablecimiento de relaciones de España con la Santa Sede, infructuosamente intentado por los Gobiernos monárquicos anteriores, y a la resolución de uno de los más graves conflictos internacionales que hemos conocido, el que surgió entonces con los Estados Unidos por el apresamiento del *Virginius*. En ambas empresas, Carvajal reveló bien claramente no sólo que sobre el interés de partido deben estar siempre los intereses supremos de la patria, sino también que la defensa y el triunfo de tan sagrados derechos sólo puede lograrse con eficacia cuando, como en este caso sucedía, las dotes de político van acompañadas y robustecidas por las de jurisconsulto esclarecido, del mismo modo que unas y otras requieren a su vez imprescindiblemente, en el jurisconsulto como el estadista, el valioso auxilio de la facultades literarias”<sup>51</sup>.

Carvajal fue un patriota dentro de su republicanismo. De hecho en una de sus intervenciones más aplaudidas, durante las constituyentes de 1873, que no desmerece las de Emilio Castelar, definió la Patria desde su punto de vista republicano:

“¿Qué sabéis lo que es Patria? ¿Qué sabéis lo que significa ese sentimiento, esa voz imperativa que, como la de la conciencia, se impone al hombre cuando se pronuncia el sagrado nombre de la Patria? ¡Patria! se pide hoy desde las cumbres del Pirineo hasta la cima Nevada del Mulhacen. ¡Patria, Patria! Nos piden con labio trémulo nuestros padres inertes delante del hogar, recordando las glorias de España en aquellos días grandes, aciagos y sublimes, en que ellos pelearon por su independencia. ¡Patria, Patria! Nos piden con voz balbuciente nuestros hijos, porque quieren que seamos viriles y enérgicos para asegurarles el porvenir; porque la Patria no es so-

---

<sup>51</sup> Rolland, Guillermo, “Discurso leído en la sesión pública del 28 de abril de 1890 de la Real Academia de Jurisprudencia y legislación con motivo de apadrinar en la investidura de Académico de Mérito al Excmo. Señor D. José de Carvajal y Hué”, Tipografía de Manuel G. Hernández, Madrid, 1890, p. 12.

lamente el suelo que pisamos, y que tal vez ese Rey extranjero, dominado por ideas extranjeras y con el propósito resuelto de avasallar la libertad de España, dejaría que siguiéramos pisando con planta de esclavo: esa no es la Patria; la Patria es el conjunto de vida material y moral, de las aspiraciones, de las tendencias, de las costumbres; de las ideas, de los sentimientos cuyo conjunto ha creado la genialidad del pueblo español, que se ha transformado casi durante un siglo de luchas heroicas contra esos secuaces del absolutismo que quieren hoy arrebatarlos la libertad. Esa es la Patria: pues por esa Patria estoy yo dispuesto a todo linaje de sacrificios personales, estoy dispuesto a todo linaje de humillaciones personales; a esa Patria se le debe todo, absolutamente todo, vida y principios”<sup>52</sup>.

Como su patriotismo estaba unido a su republicanismo Carvajal rechazó la oferta que el General Serrano le hizo de incorporarse a su gabinete tras el derribo de la República. Tampoco participó en los gobiernos de la Restauración, aunque como hemos visto fue criticado por participar, fundamentalmente con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en algunos actos que pudieran considerarse colaboracionistas.

En su republicanismo buscó una vía integradora entre los federalistas y los unitaristas, de la que se mantiene eclécticamente distante y propone una vía que él llama “constitucional”.

En un escrito publicado en *El liberal* el día 14 de junio de 1886 expone algunos puntos de este programa que es más bien una vía de integración práctica de todos los republicanos:

Primero expone su juicio sobre el régimen vigente, recuérdese cuando no hacía un año de la muerte de Alfonso XII y se estaba en la peligrosa minoría de edad:

“Desacreditado el régimen constitucional; la minoridad cercada de ambiciones; al acecho el carlismo, para valerse de las desventuras de la patria: descreída o pervertida la clase media; malograda y estéril directora de la vida pública o pervertido su sentido político; en poder de los menos y de los peores la provincia y el Municipio, sin más elementos de regeneración nacional que el pueblo este apasionado o adormido; sin más esperanza para lo porvenir que la República y está consagrada al azar y al peligro, por sus partidarios más fervientes y sinceros.”

Había que aprender del pasado, de los azarosos días del 73 y del 74 para consolidar una república que la *Unión republicana* debía fraguar desde el constitucionalismo:

“La experiencia nos lo ha enseñado: la unión, siquiera fuese mal fraguada, nos llevó al poder en los días azarosos de 1873; la desunión nos derrocó en 1874. Lo que se había fundado en la vaguedad, cayó en el desorden y murió a manos de la re-

<sup>52</sup> Carvajal y Hué, José, “Discursos Parlamentarios”, Madrid, Ricardo Fé, 1895, p. 460.

acción. Hoy, esa unión que engendra la fuerza debe venir acompañada de la unidad constitucional, sin cortejo de ambigüedades e indefiniciones. El país, para tener confianza en la República, necesita saber lo que es y lo que va a ser; para tener confianza en los republicanos, necesita verlos capaces de fundarla y afianzarla.”

Surge entonces la *Unión Republicana* con una idea fundamental: la transacción:

“Lo hemos dicho muchas veces en frente de la tesis contraria, o sea que la unión es la sumisión. No; *la unión es la transacción*. Por tanto, no puede alcanzarse por la imposición de un dogma cerrado o de un programa estrecho, sino mediante la conjunción patriótica de todos los elementos a beneficio de aquellas bases de derecho constituyente que nos son comunes.”

En esa difusa posición republicana Carvajal buscaba un modelo propio, español, que se distinguiese de la república jacobina o de la directa imitación de la suiza o norteamericana:

“Que la descentralización puede revestir caracteres políticos dentro de una organización hispanamente republicana, sin mengua ni detrimento de los poderes centrales, indicado queda al recordar que nuestros liberales veinteañistas no la repugnaban en sus leyes orgánicas; como sirve aún de más sólida comprobación el ejemplo, hasta no ha mucho interrumpido, de la organización vascongada”.



# LA POSICIÓN RESPECTO AL ANARQUISMO

Debido a su insistencia en defender tanto en la tribuna parlamentaria como en los tribunales a anarquistas acusados de delitos relacionados con la violencia política es razonable preguntarse si se trataba de una opción táctica de político republicano, una simpatía por la acción anarquista o una intervención en nombre de la justicia ante la acción muchas veces sesgada de los tribunales y de los medios conservadores.



Biblioteca ICAM. Fondo Antiguo

En su defensa de la Mano Negra Carvajal, como puede verse, no hace excesivo hincapié en la ideología. Ese otro camino lo seguirá más bien en su defensa del anarquista Debats, acusado de participar en un oscuro intento de atentado donde estaba presente un provocador policial.

Esta defensa de Debats, que los amigos de Carvajal publicaron para él en la obra *Los anarquistas en Madrid*, aparece reiteradamente reproducida como ejemplo de oratoria forense. En el libro *Colección de Trabajos Forenses y Noticias Biográficas de los más notables Abogados de España publicados por la Revista de los Tribunales*, Madrid, Centro Editorial Góngora, 1903, en la página 30-31 Carvajal da razón de su intervención en la Defensa. Primero dice lo que no comparte con su defendido:

“Yo no vengo aquí por afinidades de doctrina ni por analogía de ideas sociales y políticas. El procesado como su compañero Ferreira, profesa principios contrarios de los que yo profeso y

no cabe en el orden del día un antagonismo más resuelto; yo soy republicano y ellos abominan por parejo de todas las formas de gobierno; yo soy demócrata, que quiere decir que pongo el derecho social como base de la política, y ellos condenan y no proclaman más leyes que la ley natural: yo sostengo que la sociedad tiene la facultad de dictar las reglas de su régimen, y ellos quieren fiarla en la naturaleza; yo soy conservador y la anarquía niega la propiedad y se estrella en la abolición de la familia,

que son las dos columnas eternas de la sociedad, a cuyo alrededor nos agrupamos los conservadores de todos los matices”<sup>53</sup>.

No puede ser más claro en este momento tardío de su vida sobre su ideología: era demócrata republicano y conservador.

Pero a continuación en un texto que no recoge este resumen pero si aparece en el original “Los anarquistas en Madrid” dice lo que le une a la posición de los anarquistas:

“Su conciencia refringe el bien de distinta manera que le refringe la mía; pero esta refracción produce el único lazo que hay entre ellos y yo: la misma intransigencia. Yo no transijo, ni como republicano, ni como demócrata, ni como conservador. Ellos no transigen como anarquistas. Somos adversarios irreconciliables, pero lo decimos, y la entereza del convencimiento y la integridad de la expresión ponen en contacto nuestros espíritus antes de la pelea y en la pelea.”

Por ello considera ociosa la labor del fiscal de leer las revistas y debates en los que ha intervenido Debats como anarquista. Pues hay que distinguir el anarquismo ideológico del práctico.

Sobre estas ideas volverá repetidas veces. Así al inicio del informe dirá:

“Lo habéis oído: un anarquista es un ideólogo, un soñador que aspira al gobierno de la humanidad sin Gobiernos, y que niega el progreso y anula el tiempo en la ambición de realizar un ideal que es la finalidad inaccesible del progreso mismo, y cuyas evoluciones la acción del tiempo y una serie a nuestra vista interminable de series. La distinción entre los anarquistas y los políticos es simplemente esta: que los anarquistas, tirando de la idea de lo futuro hacia la realidad de lo presente, niegan el Gobierno, mientras que los políticos monárquicos, y republicanos de los diferentes colores, todos vamos empeñados en la tarea de disminuir el Gobierno, progresivamente, quitándole atribuciones, bajo cuyo aspecto todos tenemos un toque de anarquismo en el procedimiento, si bien los anarquistas legítimos y sinceros, dentro de los cuales hay fatalmente una secta fanática, han de permanecer eternamente en un estado de platonismo o mejor dicho de éxtasis, porque no han de convencer a la sociedad actual de su propia imperfección ni obligarla por la persuasiva a volver atrás hacia la ley natural, que está en el origen y está en el fin de la vida humana”<sup>54</sup>.

No es el párrafo de Carvajal muy acertado respecto a la sucesiva evolución del poder del Estado en el siglo siguiente, que ha crecido incluso en las épocas

---

<sup>53</sup> Carvajal y Hué, José, “Los anarquistas en Madrid, informe oral de las sesiones del Jurado de 30 de diciembre de 1893 y 2 de enero de 1894 en defensa de Juan Maria Debats”, Madrid, Aley y comp, 1894, p. 5.

<sup>54</sup> “Los anarquistas en Madrid, informe oral de las sesiones del Jurado de 30 de diciembre de 1893 y 2 de enero de 1894 en defensa de Juan Maria Debats”, Madrid, Aley y comp, 1894, p. 9.

del denominado neoliberalismo, pero sí lo es respecto a la observación de una tendencia teórica democrática a la supresión del Estado, en cuanto no contempla en mal concreto del sujeto individual, que requiere el poder y la ley como sujeción.

Pero antes caracteriza el anarquismo al que pertenece Debats como “anarquismo bueno”:

“Debats es anarquista; pero como todas las manifestaciones de la ciencia y las artes sociales, contiene la anarquía en su seno dos corrientes, una colectiva que es la de la doctrina, y una individual que es la de los actos, y precisamente por aquello de que la anarquía no reconoce Gobierno, la doctrina colectiva no es responsable de los actos individuales, y si estos caen bajo la acción de la justicia, aquella persiste incólume en la región serena e inofensiva de las ideas. Debats pertenece a la primera de estas clasificaciones, y el conocimiento que yo he adquirido del fanatismo que domina en la segunda, me fuerza a declarar que si fuera de ella, haría ostentoso alarde de serlo y no hubiera asegurado al unisono de sus compañeros de comisión, testigos en el proceso, que rechaza los medios destructores y que funda la eficacia del procedimiento para realizar sus ideales en la predicación y en el ejemplo”<sup>55</sup>.

O dicho de otra forma, Carvajal ha logrado que su defendido rechace la denominada propaganda por la acción, base del terrorismo anarquista, y lo sitúa en el bando utópico y pacífico al que en cierta manera todos estamos vinculados. Además, niega la existencia de una jerarquía anarquista que estableciese fines de organización terrorista. Es más, finalmente acude a su conocimiento de verdaderos terroristas anarquistas para decir que Debats no es uno de ellos.

Dirigiéndose al jurado, y consciente de la alarma existente en España y toda Europa ante la sucesión de atentados individuales de ese decenio, Carvajal recuerda la misión de juzgar con justicia, no dejándose llevar por el temor a la ideología anarquista aplicando un sistema de defensa extrajurídico, lo que en cierta forma entra en contradicción con el viejo juego de la defensa social que tanto ilustrados como revolucionarios, habían esgrimido como justificación de medidas extraordinarias. De nuevo la exposición es brillante:

“Señores del Jurado; no he sido yo, han sido la verdad y el derecho, quienes con brazo poderoso han cerrado todas las puertas para el castigo. Vosotros no podéis condenar a Debats, porque Debats ha probado que no es delincuente, y no habéis de perder la serenidad ante el temor de la anarquía, porque no vinisteis aquí sino por la ley y para contribuir a los fines de la ley. Representais a la soberanía nacional; pero hay algo que está por cima de ella y es el derecho. Si la soberanía nacional no estuviese en los Tribunales de hecho subordinada a un concepto supremo, si no fuere secundaria del derecho, si obrase arbitraria y voluntariamente por virtud del instinto de la conservación social, valiera más que el Jurado, la ley

---

<sup>55</sup> Op. cit., p. 10.

de Lynch; por que con sus ímpetus violentos excluye la hipocresía; y un Tribunal, producto de la ley escrita que no se sujetara a esta, y sin embargo, la invocase, fuera una semblanza odiosa que diera la razón al anarquismo. A la fuerza abierta no se contesta con la fuerza disfrazada. La guerra consiente el ardid; más vosotros no podeis aplicar el derecho de la guerra, porque sería tanto como dar carácter de beligerantes a los anarquistas”<sup>56</sup>.

Observaremos que la contradicción entre declarar al Jurado soberano, forma de participación de la Soberanía nacional en la Justicia, y la sujeción a la ley consiste sorprendentemente en colocar el Derecho por encima de la Soberanía, anticipándose de esta manera a la posterior evolución del Derecho respecto a un puro subjetivismo o al difuso iusnaturalismo krausista.

Fundamental en estos tiempos en que se habla constantemente de “guerras” contra el terrorismo es la advertencia de Carvajal de que no se puede dar estatuto beligerante al terrorista. Claro está que podría tratársele como al filibustero o pirata, y a Carvajal, siendo ministro de Estado, no le tembló la mano en Filipinas respecto a esa práctica.

Más que entretenernos en la descripción que en la defensa de Debats hace Carvajal de la evolución del anarquismo, aunque por contraste aparece en ella la propia ideología de Carvajal, creo que es conveniente su juicio sobre el anarquismo violento, en que había seguido la vía de la propaganda por la acción.

El razonamiento surge de un individualismo atroz y la trivialización de las leyes. Una consecuencia que no se deriva, necesariamente del utopismo, “La razón individual extraviada especula de esta manera: mi bien es el bien y mis medios son los medios de realizarlo. No hay más bien que mi bien; el bien fuera de mí, es un embuste de la sociedad, para ponerme el collar de esclavo”<sup>57</sup>.

Esta elección lleva a la guerra a la sociedad y al delito, pues este ha sido establecido para sujetarme: “Porque el delito no existe, sino en virtud de la ley positiva; no es el mal, siendo el medio de realizar el bien; la necesidad justifica mi acción ante la naturaleza; yo tengo necesidad, luego tengo derecho; yo tengo fuerza, luego tengo el procedimiento; las ciencias naturales me auxilian; el ideal me llama y la justicia me inspira, en razón de que mi bien es el bien de todos.”

De esta perfecta descripción del nihilismo se pasa a la acción que para Carvajal representa un doble crimen, por un lado está el crimen común que no queda justificado por la reivindicación, por otro el crimen mancha el ideal.

---

<sup>56</sup> Op. cit., p. 121.

<sup>57</sup> Op. cit., pp. 129-130.



“No hay que jugar ni del vocablo ni del concepto: el robo será siempre el robo; el homicidio, el homicidio; el incendio, el incendio; el desorden, el desorden... serán siempre delitos cuya trascendencia no puede ir al bien, sino al mal; por donde la ley no entiende de estos acomodados interiores de la conciencia del individuo, confundirá siempre en un mismo anatema a los anarquistas criminales y a los criminales vulgares.

Este será el correctivo de tu demencia y el castigo de tu extravío. Anarquistas de Chicago, anarquistas de Jerez, Pallás, Codina, Salvador y Vaillant, la justicia humana os ha castigado o se apresta a castigaros; pero habéis cometido un delito mayor, que se sale fuera de su jurisdicción; mayor que el estallido de sangre inocente; habéis manchado la virginidad del ideal, y habéis profanado lo eterno en el concubinato de la realidad”<sup>58</sup>.

La bella composición de Carvajal, apoyada en aquellos años con razonamientos expresados en un sector de la prensa internacionalista, que se desvinculó en su momento incluso de la acción de la Mano Negra, choca con un concepto que se había extendido y justificaría la violencia anarquista, que no es evidentemente un mito sino una práctica que la sociedad sufría con fuerza en aquellas décadas.

El concepto es el de la “propaganda por el hecho”, que es, en definitiva, una fundamentación del terrorismo:

Ciertamente cuando aparece con ese nombre en agosto de 1877 en el *Boletín de los trabajadores del Jura de la Asociación Internacional de Trabajadores*, la propaganda por el hecho se refiere no a la violencia individual y terrorista sino a la insurrección, y en este caso a manifestaciones ilegales<sup>59</sup>.

Bakunin sin utilizar el término se había referido a él cuando dijo en 1870 “debemos propagar nuestros principios ya no mediante las palabras sino mediante los hechos, porque ésta es la forma de propaganda más popular, más poderosa, más irresistible”<sup>60</sup>.

En Suiza precisamente se da la conjunción entre anarquistas suizos, italianos y rusos que creará los atentados de 1878, en los que se pasa del enfrentamiento insurreccional a la acción contra los cargos públicos. Avilés sólo en el 78 cita los siguientes atentados de inspiración anarquista. El de febrero de Vera Zasulich contra el general Trepov en San Petersburgo, los dos contra Guiller-

---

<sup>58</sup> Op. cit., pp. 129-130.

<sup>59</sup> Cito por Avilés, Juan “El terrorismo anarquista como propaganda por el hecho: de la formulación teórica a los atentados de París, 1877-1894” *Historia y política*, n 21, Madrid, enero-junio, 2009, p. 172.

<sup>60</sup> Op. cit., p. 173.

mo I en Prusia, en agosto el que provocó la muerte del general Mezentsov, en octubre contra Alfonso XII y en noviembre contra Humberto I<sup>61</sup>.

Los medios anarquistas suelen separarse de los atentados pero, con ocasión del atentado de Oliva contra Alfonso XII, la nota de los correligionarios españoles que publica *L' Avant Garde* incluye, junto a la toma de distancias, esta frase “Pero, tras las grandes desgracias y los inmensos sacrificios que esta generosa táctica nos ha costado y nos sigue costando cada día, sería por nuestra parte una ingenuidad no reconocer que hay hombres que son un verdadero obstáculo para la transformación de las instituciones, y que éstas no podrán ser cambiadas prontamente sin hacer desapareces tales obstáculos”<sup>62</sup>.

En el Congreso internacional anarquista de julio de 1881 en Londres, se recogerá un párrafo que explicaría parte del nerviosismo ante las acciones anarquistas, no tan aisladas, y que serviría de contexto a la represión lanzada hacia núcleos internacionalistas que se suponía que habían dado paso a la propaganda por la acción. Reproducimos el texto citado por Avilés:

“Al quedar todavía la gran masa de los trabajadores del campo al margen del movimiento socialista revolucionario, resulta absolutamente necesario dirigir nuestros esfuerzos en esa dirección, recordando que el más simple hecho dirigido contra las instituciones actuales habla mejor a las masas que millares de impresos y oleadas de palabras, y que la propaganda por el hecho en los campos tiene todavía más importancia que en las ciudades.

Puesto que las ciencias técnicas y químicas han rendido ya servicios a la causa revolucionaria y están llamadas a rendir todavía más en el futuro, el Congreso recomienda a las organizaciones e individuos que forman parte de la Asociación Internacional de trabajadores a que den una gran importancia al estudio y la aplicación de estas ciencias como medios de defensa y de ataque”<sup>63</sup>.

Inmediatamente después de estas declaraciones se producirían los hechos que constituyen la base del juicio que reproducimos. Los sucesos vinculados a la “Mano Negra”. Hay que ser conscientes que la división sobre si se trató de una burda manipulación o no, o probablemente como pensamos fue una ocasión que se aprovechó, han dividido a los tratadistas. Siendo la opinión mayoritaria que fue un puro montaje, aunque eso, claro está, dejaría sin explicar los hechos concretos

A lo largo de la historia el nombre de la “Mano Negra” ha hecho referencia a un gran número de sociedades secretas. En España, el nombre de la Mano Negra ha ido siempre ligado a la historia del anarquismo español, y concretamente a la del anarquismo agrario andaluz del siglo XIX.

---

<sup>61</sup> Op. cit., p. 174.

<sup>62</sup> Op. cit., p. 176.

<sup>63</sup> Op. cit., p. 177.

En el último cuarto del siglo XIX, la situación del campo andaluz se convirtió en un excelente caldo de cultivo para el anarquismo agrario. Especialmente la baja Andalucía contaba con un buen número de trabajadores bajo la influencia del internacionalismo a través de la afiliación a la Federación Regional Española de la Internacional Socialista. La organización legal fue prohibida en 1874 tras el golpe del general Pavía hasta 1881, año en el que tras la caída del Gobierno conservador de Cánovas se crea la Federación de Trabajadores de la Región Española que vuelve a legalizar de nuevo el anarquismo andaluz. Sin embargo, la legalización trae casi inmediatamente un aumento de la represión que dio lugar al juicio que en parte reproducimos<sup>64</sup>.

En esos años tienen lugar los sucesos que sacarán a la palestra a “La Mano Negra”. Entre los más famosos se encuentran los asesinatos de Bartolomé Gago Campos, “El Blanco de Benaocaz”, y los Venteros de Núñez. Dichos casos tuvieron lugar entre 1882 y 1883 y para resolverlos se culpó de los crímenes a una sociedad secreta denominada “La Mano Negra” que agrupaba a un buen número de jornaleros andaluces y supuestamente estaba íntimamente relacionada con la F.T.R.E.

Las crónicas que hacen referencia a “La Mano Negra”, pueden dividirse entre los que afirman su existencia, y los que sostienen que fue un montaje para proceder a la detención masiva de personas, la condena ejemplarizante de un determinado número de sus miembros y finalmente relacionar de forma directa a la F.T.R.E. y conseguir así su disolución.

En este punto nos parece que la tesis de Clara E. Lida, la existencia de la organización coincide con la de Carvajal, lo que niega este son las desmesuradas respuestas jurídicas que se aplicaron. En contra se sitúa Jacques Maurice que por cierto cita a Carvajal como autor de un proyecto de fraccionamiento de tierras<sup>65</sup>.

El Gobierno, utilizó como prueba principal para sostener la existencia de la temida sociedad secreta un reglamento y unos estatutos “puestos en circulación” en 1883, y que supuestamente fueron descubiertos diez años antes por la Guardia Civil, debajo de una piedra. Dichos documentos llevaban por título *La Mano Negra. Reglamento de la Sociedad de Pobres, contra sus ladrones y verdugos, Andalucía*. A todas luces parece clara la conveniencia de la aparición de esa documentación en un momento como ese, es más se diría que fue demasiado providencial, sobre todo por lo que rodeaba su descubrimiento y el

---

<sup>64</sup> Lida, Clara E. “La mano negra”, ed. Zero, Madrid, 1972.

<sup>65</sup> Maurice Jacques, “El anarquismo español”, Crítica, Barcelona, 1970 p. 110 y p. 116b y siguientes.

hecho de que hasta 1882 no se emitiera un informe por parte de un coronel de la Guardia Civil cuando su hallazgo se había producido diez años antes.

Ese documento sirvió para justificar la movilización de miembros de la Guardia Civil al campo andaluz, y la detención masiva de hombres. Sirvan para ilustrarnos las cifras que maneja Clara E. Lida, en menos de un mes se pasó de trescientos detenidos en Jerez y Cádiz (27 de febrero de 1883) a más de dos mil en Cádiz (14 de marzo) y más de tres mil en Jerez (3 de marzo). Así la autenticidad de los mismos daba al Gobierno un arma de doble filo con la que podía poner a raya al internacionalismo en España y al mismo tiempo atemorizar a la población con la posibilidad de que existiera una sociedad secreta capaz de cometer crímenes tan atroces como los anteriormente citados y otros muchos con los que empezaron a relacionar de forma inmediata a la temible Mano Negra<sup>66</sup>.

Los que por otro lado sostienen la validez del Reglamento y los Estatutos de La Mano Negra, se basan en el hecho de que la forma y redacción de los mismos tiene credibilidad. Ya que es muy similar al lenguaje utilizado por varios periódicos y circulares anarquistas y socialistas (véanse las publicaciones citadas por Clara E. Lida, *A los trabajadores*, de Max Nettlau, o la *Circular a los trabajadores del campo* emitida por la Federación Española en 1879). No sería poco creíble que los miembros de las Federaciones, pasaran a organizarse clandestinamente y procedieran a la comisión de sabotajes y crímenes varios para poner fin a la explotación que estaban sufriendo. Eran varios los medios y las federaciones que llamaban a la revolución, y esa revolución era necesaria para poder implantar definitivamente el anarquismo. El propio reglamento dice:

*Declaramos a los ricos fuera del derecho de gentes y declaramos que para combatirlos como se merecen y es necesario, aceptamos todos los medios que mejor conduzcan al fin, incluso el hierro, el fuego y aun la calumnia.* (Reglamento de la Mano Negra).

En los estatutos su artículo 2º dice:

*Castigaré los crímenes de los burgueses y sus dependientes por todos los medios que sean posibles, bien sea por el fuego, el hierro, el veneno o de otro modo.* (Estatutos de la Mano Negra).

El Reglamento de la Mano Negra deja muy claro que la existencia de la sociedad debe mantenerse en secreto. Es tal el celo que la organización mantiene con este asunto, que fija castigos para los miembros que revelen cualquier dato

---

<sup>66</sup> Lida, Clara E.: op. cit. vid 23 y siguientes. La hipótesis contraria de nuevo en Maurice Jacques, "El anarquismo español", Crítica, Barcelona, 1970, p. 116.

sobre la existencia de la organización. Esos castigos iban desde la suspensión temporal, hasta la muerte del sujeto.

En el Reglamento se fija la forma de admisión de los miembros a la Mano Negra. En primer lugar la organización realiza un encargo al interesado en ingresar. Si dicha tarea es ejecutada con éxito, entonces se procede a presentarles a los miembros encargados de su admisión. En un primer acto, se le hacía una entrevista al sujeto donde el exponía la forma en la que llevó a cabo su misión, así como cualquier apunte que considerase importante. Cualquiera de los miembros podía dirigirle las preguntas que considerase oportunas para que aclarase los puntos dudosos. Posteriormente se retiraban y deliberaban sobre su admisión. Hay que destacar que era necesario el voto favorable de todos los miembros, si uno votaba en contra, el candidato no podía ser admitido hasta que cambiara de opinión. Observamos que la forma de reclutamiento tiene muchas similitudes con la de la mafia.

En lo que a la organización se refiere, la misma se describe en los Estatutos de la Mano Negra. Se establece que se divide en núcleos, formados por al menos diez miembros de la proscrita A.I.T., con la finalidad de castigar a los burgueses y sus colaboradores por sus crímenes. Los núcleos debían reunirse de forma ordinaria el primero de cada mes y de forma extraordinaria siempre que se considerara necesario, mediante el correspondiente quórum y se establecía que en las sesiones extraordinarias únicamente se hablaría de las represalias que fuera necesario tomar.

Se fijaba una cuota de cinco céntimos semanales para correspondencia, destinándose el sobrante a lo que se considere necesario. Cada núcleo contaba con un presidente y un secretario al que se daba un nombre supuesto que sólo era sabido por los Secretarios de los otros núcleos.

A nadie se le podía pedir más de lo que hubiese aceptado. Así, en el momento de realizar los encargos, si una persona no lo aceptaba no era de recibo obligarle. Pero una vez había mostrado su consentimiento debía llevarlo a cabo, pudiendo ser considerado como un traidor si se negaba a realizarlo.

Cuando se procedía a aceptar a los miembros, se les leía el reglamento entre tres y cuatro veces y después se le concedían tres días para aceptar o rechazar.

A los miembros que habían sido apartados de la organización, se los sometía a una estrecha vigilancia para asegurarse que no revelaban ningún dato que pudiera poner en compromiso la seguridad y anonimato de la Mano Negra, en este caso cuando el castigo que se contemplaba era la pena capital, se dejaba muy claro que daba igual los lazos que tuviera el traidor con los miembros de la organización pues la seguridad de muchos estaba por encima de la de uno sólo. Para evitar fallos en dicho encargo, el mismo, se podía realizar a un núcleo de otra localidad.





Una de las características más llamativas es que se fijaba el período de vida de los núcleos. Éstos, no podían deshacerse hasta que tuviera lugar la revolución social. Lo que sumado a la obligación final de los miembros de educar a sus hijos en el odio a las clases burguesas, aseguraba que los integrantes de la Mano Negra lucharían hasta su último aliento.

Como hemos relatado antes, son muchas las voces que opinan que la Mano Negra nunca existió. Y que fue la excusa perfecta de la que se sirvió el Gobierno para aplicar un castigo ejemplarizante para el movimiento obrero de la época. Es cierto que las circunstancias que rodean el descubrimiento de los documentos que se usaron para demostrar su existencia son muy extrañas y se puede vislumbrar una farsa, en algunos puntos chapucera.

Pero, lo que está claro, es que independientemente de que se tratara de una farsa, la mítica sociedad secreta tuvo muchísima influencia en la historia del anarquismo andaluz. No es descabellada la idea de la existencia de un grupo así, en Cádiz por esa época actuaba un grupo denominado “Los Desheredados”, de un corte similar al descrito en el Reglamento y los Estatuto de la Mano Negra. Y aún así, tuvo más eco la primera. La serie de acontecimientos que se desarrollaron los meses siguientes a su descubrimiento, quedaron marcados en la historia de España.

Es cierto que su persecución por parte de las autoridades marcó el principio del fin de la primera etapa del anarquismo andaluz, pues como dice Clara E. Lida unos años después, en 1885 se cerraba la Revista Social que gozaba de mucha fuerza y tirada en la época y al poco, en 1888, la Federación se disolvió definitivamente<sup>67</sup>.

Pero el misticismo que ha rodeado siempre la existencia de la Mano Negra, su resistencia en la sombra, y el hecho de que aunque fuera una mentira, habilitara al Gobierno a movilizar tal cantidad de recursos y causara ese temor en la población. Sirvieron los años posteriores para reavivar el movimiento anarquista en Andalucía y a que los historiadores deban preguntarse si lo que hizo realmente fuerte a la Mano Negra fue el mito y no la realidad.

Diez años después, como hemos visto, Carvajal se vio de nuevo envuelto en la defensa de crímenes atribuidos a los anarquistas.

Para comprender el estado de ánimo de la opinión cuando Carvajal interviene en defensa de Debats habría que recordar que la intervención de Carvajal ante el jurado se produce en diciembre del 93 y enero del 94 y que en noviembre del 93 se había producido el atentado del Liceo de Barcelona.

---

<sup>67</sup> Lida, Clara E., op. cit., p. 70.

El 7 de noviembre de 1893 el ex tabernero y anarquista Santiago Salvador Franch había asesinado durante la representación de la ópera *Guillermo Tell* a veinte personas mediante el lanzamiento de dos bombas sobre el patio de butacas. El autor del atentado sería juzgado y finalmente ejecutado el 21 de noviembre de 1894.

Es evidente, por tanto, la dificultad del defensor de Debats, sorprendido con una bomba, de separar el anarquismo teórico de la práctica terrorista vigente en aquellos momentos.

Para juzgar los textos de Carvajal en los casos de la Mano Negra y de Debats, es indispensable considerarlos como piezas de oratoria forense. No son análisis políticos o históricos, tienen un sentido, convencer al Tribunal o al Jurado. Por ello reúnen las condiciones que la oratoria forense debe reunir a su juicio, tal como expresa en la digresión sobre la oratoria presente en la Introducción a los Discursos Parlamentarios:

“La elocuencia forense es menos pulcra y entonada, porque no reclama la belleza más que como simple ayuda para obtener el convencimiento. Siempre éste es un fin exclusivo al cual todos los demás se subordinan en la elocuencia; pero ningún género exige tanto como el del foro un exquisito cuidado en que nada le estorbe para su determinación y aplicación por la trascendencia y por la responsabilidad que no acaba en uno mismo, sino que pasa a los derechos o a los intereses ajenos y algunas veces a la vida; sin embargo, son tan múltiples y diversas las ocasiones ofrecidas por la elocuencia al ejercicio del derecho, que el orador forense, principalmente en derecho penal, bueno es que se halle pertrechado con las notas del sentimiento y de la indignación, apropiadas a las formas libres de la belleza más que a las austeridades y enjutos trazos preferidos por los fines del convencimiento”<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> Carvajal y Hué, J. de: “Discursos Parlamentarios. T. I, pp. LXXXI- LXXXII.



# LA PENA DE MUERTE Y EL INDULTO. A CABALLO ENTRE EL DERECHO Y LA POLÍTICA

Desde el Congreso en diversas ocasiones y también desde el Foro, Carvajal tuvo ocasión de mostrarse abolicionista respecto a la pena de muerte y apelar al derecho de gracia como forma imperfecta de hacer frente a esta lacra. Tam-

bién habría de responder al hecho de que formó parte de gobiernos que aplicaron esta pena en las guerras civiles simultáneas que tuvieron lugar durante la Primera República.

En la Sesión del Congreso de 19 de junio de 1880 Carvajal comenzaría una intervención que no pudo completar “Sobre el ejercicio de la gracia de indulto”. Esta interpelación sería publicada acompañada de abundantísimas notas en *Discursos parlamentarios. T III, Madrid, establecimiento Tipográfico de Ricardo Fé, 1895*. La interpelación sigue en el tiempo a una pregunta sobre la aplicación de la pena de muerte pronunciada por el diputado Carvajal y Hué al Ministro de Gracia y Justicia, Saturnino Álvarez Bugallal el día 13 de abril de 1880. Realmente la intervención de Carvajal perseguía el indulto de la aplicación de la pena de muerte que se había impuesto a Francisco Otero

González, un joven pastelero que había disparado sobre los reyes Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo-Lorena el día 30 de diciembre 1879 sin alcanzarlos. Con probables vinculaciones anarquistas fue ejecutado el 14 de abril de 1880, después de que el Gobierno conservador de Cánovas rechazase la petición de indulto formulada entre otros por los propios reyes. De hecho Carvajal intentó hablar en la sesión del 13 de abril, víspera de la ejecución afirmando: “Es un deber de humanidad el que me mueve a hablar”. Inmediatamente le fue retirada la palabra por la Presidencia, lo que dio lugar el 14 de abril a una



Biblioteca del ICAM. Fondo Antiguo

proposición de censura que firmaron junto a Carvajal, Eduardo de León y Llerena, Segismundo Moret, Adolfo Merelles, Manuel Becerra, Antonio Dabán y Antonio de Vivar. A iniciar su discurso en esta última sesión afirmaba: “Acostumbrado a vuestra benevolencia desde que tuve la honra de sentarme entre vosotros, el recuerdo de vuestra conducta conmigo en el día de ayer pesa en mi espíritu al tener que usar la palabra nuevamente. No deja de sobrecogerme también la memoria de la conducta que el Presidente observó conmigo, cuando con esta memoria luchan y chocan los recuerdos de sus pasadas bondades”<sup>69</sup>.

Y añade sobre su verdadero propósito:

“El estado de mi espíritu, señores, cuando me dirigía ayer al salón de sesiones, era el de una honda perturbación. Sabía que había 23 condenados a muerte en el territorio español; acababa de saber que aquel mismo día se había levantado el cadalso en Sueca, en una de las más pintorescas regiones de la fértil Valencia; sabía también que estaba ya construyéndose el tablado para otra ejecución hoy en Madrid; que mañana, la villa de Alagón, en la provincia de Zaragoza, ha de presenciar otro hecho tan horrible como estos, y que en Cataluña quizá pasado mañana serán puestos dos reos en capilla y ejecutadas otras sentencias de muerte. ¿Qué es esto, señores Diputados? ¿Se va a convertir España en un matadero de reses humanas?”<sup>70</sup>.

Y ante las protestas desde los bancos de la mayoría conservadora añade:

“No os asombréis; ¡ah! Desde la comodidad de vuestros sitios miráis frente al patíbulo, pero valiera más que tuvierais horror hacia lo que el patíbulo significa para vosotros y vuestro partido. Yo pregunto qué ganáis con esas interrupciones, qué ganáis con esos rumores ¿Creéis que me he de callar? ¿Y no comprendéis que esas interrupciones han de ser malamente traducidas fuera de aquí? Veintitrés sentencias a muerte! ¿Cinco reos en capilla! España convertida en un matadero!”<sup>71</sup>.

Y termina la intervención concretando lo que imputa al Gobierno:

“Señores Diputados, aunque he hablado poco, no puedo ya más y me siento sin fuerzas para extenderme en estas cuestiones reglamentarias y personales, porque a pesar de la relación que tienen con las graves materias que han de ser objeto del futuro debate, yo hallo y reconozco que todo resulta pequeño en el día de hoy enfrente de las cuestiones políticas, jurídicas, legales y sociales que suscitan los cadalsos que diariamente está alzando en territorio español el abandono que el Gobierno hace de su responsabilidad ministerial, y dentro de la esfera de esa responsabilidad, de la Regia prerrogativa de indulto; enfrente de ese patíbulo que se ha levantado esta mañana en el Campo de Guardias... enfrente de ese patíbulo, cuyo dedo rígido se levanta hacia el cielo diciendo a los condenados a muerte que ya no hay para ellos

<sup>69</sup> Carvajal y Hué, J. de: “Discursos parlamentarios”. T III, Madrid, establecimiento Tipográfico de Ricardo Fé, Madrid, 1895.

<sup>70</sup> Op. cit., p. 21.

<sup>71</sup> Op. cit., pp. 34-35.

esperanza de la misericordia humana y que sólo deben abrirla en la bondad divina, allá en los senos de la eternidad."

NÚMERO 141.

2855

# DIARIO

## DE LAS

# SESIONES DE CORTES.

### CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

### PRESIDENCIA DEL EXCELENTISIMO SEÑOR CONDE DE TORENO.

#### SESION DEL MARTES 13 DE ABRIL DE 1880.

**SUMARIO.** Abrese á la una.—Se lee y aprueba el Acta de la anterior.—El Sr. Cabezas (D. Miguel) pregunta al Sr. Ministro de Fomento si está dispuesto á destinar las cantidades necesarias para terminar la carretera de Balaguer á la frontera francesa.—Contestacion del Sr. Ministro de Fomento.—Rectifica el Sr. Cabezas y pide un estado de la aplicacion de las cantidades acordadas en los últimos presupuestos con destino á carreteras.—El Sr. Ministro de Fomento ofrece su remision.—El Sr. Daban presenta una exposicion del comercio de Madrid solicitando la supresion del impuesto de guerra que percibe la villa de Irún, y pregunta al Sr. Ministro de Hacienda si está dispuesto á anular este impuesto.—La exposicion pasa á la Comision correspondiente, y se acuerda comunicar la pregunta al Sr. Ministro de Hacienda.—A la Comision respectiva pasa una exposicion de la Junta de agricultura, industria y comercio de Valencia sobre colonias agrícolas.—El Sr. Moreu, ocupándose de las detenciones cometidas contra el Estado por el alcalde de Motril, pregunta al Sr. Ministro de Hacienda si es llegado el momento de llevar este asunto á los tribunales de justicia, suspendiendo entretanto en sus funciones al referido alcalde.—Contestacion del Sr. Ministro de Hacienda.—Rectifica el Sr. Moreu.—El Sr. Salamanca y Negrete reclama un estado del crédito del fondo de higiene de los Gobiernos civiles desde 1876 hasta la fecha; una relacion de las gratificaciones que se hayan satisfecho al ejército del Norte y otros puntos del capítulo correspondiente á gastos diversos, y otra relacion de los edificios del ramo de Guerra cuya venta está mandada para la construccion de otros nuevos edificios de Guerra.—Se acuerda comunicar estos ruegos á los Sres. Ministros de la Gobernacion y de la Guerra.—El Sr. Carvajal pregunta al Gobierno si cree que el uso del derecho de indulto se encuentra dentro del círculo de la responsabilidad ministerial.—Contestacion del Sr. Ministro de Hacienda.—El Sr. Carvajal anuncia una interpelacion sobre este asunto.—El Sr. Ministro de Hacienda dice que el Gobierno se reserva señalar día.—Pasa á la Comision correspondiente una exposicion de la Sociedad de Fomento de la produccion nacional de Zaragoza sobre reforma de las tarifas de correos.—El Sr. Vivar encarece la necesidad de que se active la resolucion en el asunto de que se ha ocupado el Sr. Moreu.—Contestacion del Sr. Ministro de Hacienda.—Continúa la discusion pendiente sobre la interpelacion del Sr. Candau.—Discurso del Sr. Ministro de Hacienda.—De réplica del Sr. Candau.—Se suspende la discusion y el discurso.—**ORDEN DEL DIA:** El Sr. Carvajal pide la palabra, y no le es concedida por estar anunciada la orden del día.—Incidente con este motivo.—Queda terminado.—Dictámen de la Comision de Actas acerca de la eleccion del distrito de Villafranca del Panadés y admision del Sr. Planas y Casals.—Se lee, y aprueba sin debate, quedando admitido el Sr. Planas.—A peticion del Sr. García San Miguel se lee el art. 140 del Reglamento.—El Sr. García San Miguel pide la palabra para reclamar

748

La pregunta derivó en un enfrentamiento sobre la aplicación de la pena de muerte durante la Primera República, por lo que el Ministro de la Gober-

nación Francisco Romero Robledo solicitó que se añadiesen los datos de las condenas ejecutadas por la jurisdicción militar durante esa fase. Estos datos parecían indicar una contradicción entre el abolicionismo de Carvajal y los republicanos y la restauración de la Ordenanza militar en todo su rigor. Se trataba de dejar sin efecto en este ámbito el proyecto que, propuesto el 21 de julio de 1873 por el ministro de Justicia Pedro José Moreno Rodríguez y aprobado el 9 de agosto de 1873, había suprimido *de facto* la aplicación de la pena de muerte. Frente a ello se alzaba la exigencia de los generales rescatados de la reserva por el propio Salmerón, de implantar la ordenanza militar en todo su vigor y fusilar por determinados delitos, entre los que destaca el de desertión al enemigo. El no querer firmar las penas de muerte de ocho militares de los que acabarían fusilados dos, provocó la dimisión de Salmerón. Castelar comprometido a restablecer la disciplina las aplicó. De hecho, la política de Castelar había sido diseñada por Salmerón y dio sus frutos a través de los generales Pavía y Martínez Campos.

Ante la petición de Romero Robledo, Carvajal contesta: “Yo me había acercado al banco ministerial pidiendo unos datos, como el comprador que pide una mercancía, y el Sr Ministro de la Gobernación me ofrece otra mercancía, porque quiere vender todas las que tiene en el almacén. Pues esa mercancía no la necesito, porque la tengo comprada ya ¿Ha comprendido SS por qué no acepto esa dadivosa oferta que me hace de adicionar estos datos, pero conste que yo no los pido, y esto se lo digo a SS sin propósito de hostilidad y sin hablar de esos datos, que ya traerá su señoría a debate. Y yo no tengo más que decir”<sup>72</sup>.

No debe despreciarse el hecho de que la dimisión de Salmerón pudiese responder a las presiones de Pavía para terminar con el cantón de Málaga sobre el que había al parecer un pacto de no beligerancia del Gobierno.

La dimisión de Salmerón ha sido criticada, pues aunque en materia de principios se ha planteado como un caso extremo de respeto al absoluto moral, sus efectos políticos fueron nefastos. Y lo fueron en cuanto Salmerón quedó en la Presidencia del Congreso y su comportamiento con Castelar fue extremadamente ruin, provocando a la postre la caída de la República. Si el orgullo de Pi y Margall, Salmerón y Castelar tumbaron a Figueras, Salmerón contribuyó a la caída de Castelar y al final de la República.

El suceso esta relatado por el Conde de Romanones que reproduce el comunicado de Salmerón que creo que es clarificador de lo que acontecía:

---

<sup>72</sup> Op. cit., p. 45 (Sesión 13 de abril).

“En cumplimiento de los que dispone el artículo 2 de la ley de 9 de agosto próximo pasado relativa a la abolición de la gracia de indulto, adjunto tengo la honra de pasar a manos de V. E. para los efectos prevenidos en el referido artículo, la sumaria instruida en Barcelona (aquí ocho nombres) soldados del primer Regimiento de Artillería Montada, sentenciados a ser pasados por las armas por los delitos de sedición y desobediencia”<sup>73</sup>.

A continuación el propio Salmerón dimite en estos términos “No creyéndome en las graves circunstancias presentes con la representación adecuada a las imperiosas exigencias de la opinión pública para salvar la situación que el país atraviesa, cumplo el deber de resignar ante las Cortes Constituyentes el cargo de Presidente del Poder Ejecutivo que se dignaron conferirme el 18 de julio último.

Lo que pongo en conocimiento de V. E. para que se sirva dar cuenta a la Cámara de que se digne admitir la dimisión que respetuosamente presento”.

Respecto a esto dice Carvajal:

“y subió al sitial de la Presidencia el hombre por tantos títulos ilustre que presidía aquel Gobierno y subió declarando que consideraba necesaria la aplicación de la ordenanza, pero que no se lo permitían sus convicciones ni su personal integridad hacer la aplicación de esas leyes. Este noble y grande sacrificio de abandonar el poder en aras de sus principios le premió aquella Cámara, que comprendía, sin embargo, como él, la necesidad de aplicar la ordenanza, y estaba dispuesta a aplicarla, elevándole al sitial de la Presidencia por los votos de la mayoría”<sup>74</sup>.

Es decir Salmerón apoyó la elección de Castelar y su política, que era la que él había iniciado pero luego pasó desde la Presidencia de la Cámara a hostigar a su sucesor. En efecto a Castelar le había dicho en la Sesión de 6 de septiembre: “Este es el último día de mi vida política, no me reconozco con condiciones para ella. Me retiraré a mi casa, a mi cátedra, a mis libros, sobre todo a la filosofía”. A lo que añade Romanones: “Gran acierto el suyo; de haber ajustado su conducta a sus palabras, y se hubiera evitado el de ser depuesto del alto sitial de la Presidencia de la Cámara por la bota calzada de espuela del General Pavía”<sup>75</sup>.

Hay que decir que en su actitud Salmerón se separaba de la línea fundamental del pensamiento progresista que rechazaba la pena de muerte desde el punto de vista de la sanción penal pero ha venido recurriendo a la misma, en todos los periodos revolucionarios, como medio de defensa social frente al enemigo. Es decir, como defensa del régimen que se establece con la Revolución.

---

<sup>73</sup> Conde de Romanones, op cit., p. 108.

<sup>74</sup> Carvajal y Hué, J. de: “op. cit., pp. 81-82.

<sup>75</sup> Conde de Romanones, op. cit., p. 110.

Estos dos aspectos se encuentran en la Ilustración. Así María Rosa di Simone dice:

“Los Ilustrados, partiendo de supuestos utilitaristas y humanitarios, elaborando una concepción nueva de la pena que, rechazando la crueldad de los sistemas vigentes, apostaba por la certeza y proporción justa como los medios disuasorios más idóneos para apartar del delito y atribuía a la sanción, la función de enmendar al culpable, además de hacerle expiar su error. De ese modo adquirió un gran relieve el debate sobre la abolición de algunas penas como las infamantes y la capital, que parecían a muchos contraproducentes en relación con una racional de la utilidad general”<sup>76</sup>.

La base fundamental del abolicionismo ilustrado se encuentra en Cesar Beccaria que sienta las bases del derecho penal contemporáneo: “No es, pues la pena de muerte derecho, cuando tengo demostrado que no puede serlo, es sólo una guerra de la nación contra un ciudadano, porque juzga útil o necesaria la destrucción de su ser. Pero si demostrase que la pena de muerte no es útil ni es necesaria, habré vencido la causa a favor de la humanidad”<sup>77</sup>.

La cuestión fundamental es pues la necesidad de la pena cuando se trata de defender el orden social, que en el caso que contemplamos puede confundirse con el orden político republicano. Aquí parece evidente que el Gobierno Castelar no quiso utilizar el argumento para extender esa defensa a todo posible amenazador externo a ese orden, como hicieron los jacobinos, o los bolcheviques, sino que mantiene la respuesta en la estricta jurisdicción militar.

Así se expresa Carvajal en su justificación ante los dardos de los conservadores:

“Existía la ordenanza, cuya rigurosa aplicación no se había modificado ni se había moderado, de la misma manera que existía el Código Penal en su integridad respecto a los delitos comunes; y si la delincuencia hubiera sido tal que hubiéramos presenciado en el orden civil un cataclismo tan grave como le teníamos en el orden militar y en el orden político, yo no sé que hubiéramos resuelto, puestos en pugna entre nuestro deber como patriotas y nuestra conciencia como hombres que tienen fe en las ideas que han profesado toda su vida, yo no sé que hubiéramos resuelto; pero circunscrita aquella cuestión de vida o muerte para la sociedad política al elemento militar, cuando nos encontrábamos frente a frente del enemigo que acababa con la República, que acababa con la libertad y que podía acabar con la Patria, entonces resolvimos todos la aplicación de la ordenanza. Y se aplicó; y lo digo recordándolo sin remordimiento, pero con gran dolor y pena, porque fue uno de los días más amargos de mi triste y amarga vida durante el año 1873”<sup>78</sup>.

---

<sup>76</sup> Ferrone, Vincenzo y Roche Daniel: “Diccionario Histórico de la Ilustración”, Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 128.

<sup>77</sup> Beccaria, Cesare: “De los delitos y las penas. Con el comentario de Voltaire”, Alianza Editorial, 7 reimp, Madrid, 2011, p. 82.

<sup>78</sup> Carvajal y Hué, J. de: “Discursos parlamentarios, op. cit., p. 78.



Confesión pues de Carvajal de que su etapa de Gobierno fue muy amarga y reconocimiento de que aún con enorme repugnancia, nunca fue nuestro autor un fanático dispuesto a reformar a base de penas de muerte, esta pena podía aplicarse en algunas excepciones que se remontan al propio Beccaria.

En todo el pensamiento progresista o revolucionario del XIX y XX la contradicción intenta superarse por el hecho de que la pena de muerte, rechazada en principio por los abolicionistas, se justifica, a juicio de los revolucionarios, desde la perspectiva de la defensa de la sociedad como un todo frente a los adversarios de la revolución. Este hecho común a los jacobinos de la Revolución Francesa y a los bolcheviques rusos explica que los adversarios formales de la pena de muerte la acabasen aplicando con profusión cuando, a su juicio, las circunstancias lo exigieron.

En definitiva la abolición fue un fracaso, aunque los revolucionarios aplicaron la tendencia ilustrada a reconducir la ejecución a la mera aplicación de la pena de muerte, disminuyendo las crueldades que por motivos simbólicos solían acompañarla anteriormente. Voltaire en su comentario a la obra de Beccaria había abominado de las peculiaridades de la pena de muerte:

“Esta desgracia y esta ley tan cruel, que ha conmovido mi sensibilidad, me han hecho echar la vista sobre el código criminal de las naciones.

Los suplicios refinados que el entendimiento humano ha inventado para hacer la muerte horrible parecen haber sido inventados más bien por la tiranía que por la justicia.

El suplicio de la rueda fue introducido en Alemania en los tiempos de la anarquía, en los que los que se apoderaban de los derechos de regalía querían asustar, con la apariencia de un tormento horrible, cualquiera que quisiese atentar contra ellos. En Inglaterra se abría el vientre del que era acusado de traición de lesa majestad, se le arrancaba el corazón, se le azotaban los carrillos con él y después se le echaba al fuego”<sup>79</sup>.

Por eso la innovación legal revolucionaria, que no la práctica, pues basta recordar los excesos en Lyon o en la Vendée, consistió en reducir la pena de muerte a la mera muerte.

“En punto de la pena capital, la nuevas ideas no tuvieron otra influencia sino la de evitar el sufrimiento de los condenados, rindiendo en este accidente pleitesía a los sentimientos humanitarios. El artículo 2 del Código Penal de 25 de septiembre de 1791 ordenó que la pena de muerte consistiera en la simple privación de la vida”<sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> Voltaire, “Comentario sobre el libro “de los delitos y las penas” por un abogado de provincia” (1766) en Beccaria, Cesare, “De los delitos y las penas. Con el comentario de Voltaire”, Alianza Editorial, 7 reimp., Madrid, 2011, p. 129.

<sup>80</sup> Carvajal y Hué, J. de: op. cit., p. 142.

No obstante la teoría de la defensa política impediría no sólo la abolición efectiva de la pena de muerte sino incluso su reducción a la mera ejecución.

Carvajal era muy consciente del problema y sigue diciendo:

“Cierto es que al examinar con atención esta visible anomalía se halla su razón de ser, o mejor dicho su motivo de ser, en una interpretación errónea y de toda suerte cruelísima del derecho de defensa y en una extensión excesiva del mismo. El principio que nos ha servido, profundamente arraigado en nuestra conciencia, de que fueron legítimas las ejecuciones de los militares que con su conducta pusieron en peligro la Patria ante el enemigo en 1873, ese principio, hay que confesarlo, es el que justificaba la pena capital durante la Revolución Francesa a los ojos de sus legisladores y de sus Tribunales”<sup>81</sup>.

Si se trata de una cuestión de grado, como parece, nos podemos preguntar si Carvajal era consciente de que el atentado contra el rey, ciertamente fallido, tenía un efecto en el gobierno monárquico constitucional, similar a los más graves ataques que estamos considerando. Esta posible respuesta conservadora abre el mismo peligro que la revolucionaria, como esperamos argumentar en el caso de la Mano Negra, pues la Opinión y el Gobierno pueden extremar la percepción del riesgo y exigir castigos ejemplarizantes como único medio de defensa ante un supuesto ataque destructivo de todo el orden social. Sobre ese exceso, por cierto, se centrará el argumento de Carvajal unos años después, ya en el Foro y no en Congreso.

La raíz de lo que podemos llamar la justificación de pena capital sólo como último medio de defensa social hunde sus raíces en Beccaria, al vincularla a circunstancias excepcionales en las que no rigen con plenitud la ley y el Derecho, o el propio gobernante supone un riesgo para la seguridad pública:

“Por sólo dos motivos puede creerse necesaria la muerte de un ciudadano. El primero cuando, aun privado de libertad, tenga tales relaciones y tal poder que interese a la seguridad de la nación; cuando su existencia pueda producir una revolución peligrosa en la forma de gobierno establecida. Entonces será su muerte necesaria, cuando la nación recupera o pierde la libertad o, en el tiempo de la anarquía, cuando los mismos desórdenes tienen lugar de leyes; pero durante el gobierno tranquilo de éstas, en una forma de gobierno por la cual los votos de la nación estén reunidos, bien provista dentro y fuera con la fuerza y con la opinión (acaso más eficaz que la misma fuerza), donde el mando reside sólo en el verdadero soberano, donde las riquezas compren placeres y no autoridad, no veo yo necesidad alguna de destruir a un ciudadano, a menos que su muerte fuese el verdadero y único freno que contuviera a otros, y los separase de cometer delitos, segundo motivo por que se puede creer justa la muerte de un ciudadano”<sup>82</sup>.

---

<sup>81</sup> Carvajal y Hué, J. de: op. cit., p. 144.

<sup>82</sup> Beccaria, Cesare: op. cit., pp. 83-84.



Pero sabemos que Beccaria no cree que la muerte del ciudadano constituya la única forma de apartar a determinados sujetos del delito. En buena medida, esta convicción está en la base de lo que podríamos denominar sistema ordinario de penas o sistema propiamente jurídico. Y así nos dice:

“La pena de muerte hace una impresión que con su fuerza no supe el olvido pronto, natural en el hombre, aun cuando las cosas más esenciales, y acelerado con la fuerza de las pasiones. Regla general: las pasiones violentas sorprenden los ánimos, pero no por largo tiempo, y por esto son a propósito para causar aquellas revoluciones, que de hombres comunes hacen persas o lacedemonios; pero en un gobierno tranquilo las impresiones deben ser más frecuentes que fuertes.”

Beccaria tendría el mérito de excluir la pena de muerte de un sistema civil de penas, del sistema ordenado en un gobierno estable. Por supuesto veremos posiciones que niegan la excluyen absolutamente incluso en los casos más extremos, y esta parece ser la posición de Salmerón más filósofo que político. Esta posición radical, en el sentido de referirse a la raíz, aparece en la brillante argumentación de Dostoievski que ataca la pena estatal considerándola peor que el crimen. Como dice su personaje el Príncipe Liov Nicolayevich Mishkin, alegoría de Cristo, “Cuando se mata a un hombre legalmente, se comete un crimen mucho mayor que el que cometió el mismo reo ...Quizá pueda existir un hombre al que después de haberlo condenado a muerte le hayan otorgado el perdón. Sólo ese hombre podría contarnos su agonía”<sup>83</sup>.

No así Carvajal que afirma, siempre en la excepcionalidad del último recurso de defensa:

“Los motivos de disidencia entre la escasa mayoría y la robusta minoría de la Asamblea no era de orden jurídico, sino sentimental, porque la doctrina de la abolición de la pena de muerte está condicionada por leyes generales, y solamente por un sentido individual y contrario a la ciencia y a la observación puede sostenerse que es materia de consecuencia en el orden racional. El derecho de defensa es primario, y todos los seres, ya sean individuales, ya colectivos le tienen por naturaleza, fundándose en una necesidad suprema que es la conservación. El medio de defensa ha de ser, ni tan flaco que no alcance su objeto, ni tan enérgico que le rebase; punto éste de materia penal que por sí sólo exigiría una extensa disertación. Los abolicionistas de la pena capital no desconocemos las consecuencias propias del derecho de defensa, su dilatación y sus límites; antes por el contrario, le anteponeamos en el orden de sus propias exigencias al de la abolición y la compadecemos con él y los hacemos vivir juntos. El individuo se defiende lícitamente hiriendo y matando a su contrario, si es racional y proporcionado el acto de herir o matar para salvarse. A ningún abolicionista se le ha ocurrido la peregrina idea de que el hecho singular y por sí de causar una muerte constituye delito ni siquiera transgresión de la ley moral, como se halle justificado por el derecho de defensa, según la ley natural le comprende. La sociedad, que es también un ser, está en el mismo caso, y lo que en definitiva nosotros predicamos

---

<sup>83</sup> Dostoievski, Fiodor: “El idiota”, Barcelona, Juventud, 4 ed, 1995, p. 32.

consiste en que para defenderse de los delitos comunes, casi siempre individuales, no exige el derecho de defensa para la conservación de la colectividad la aplicación de la pena de muerte ni la existencia de ella en el Código Criminal”<sup>84</sup>.

Por supuesto, como hemos visto, hay un riesgo en esta teoría defensiva, que en épocas turbulentas puede llevar a matanzas no antes vistas. Por fijarnos en las raíces del republicanismo no es ocioso mencionar al líder jacobino Robespierre que si, por un lado, había votado la abolición de la pena de muerte, no dudó en negar el elemental derecho de defensa al rey Luis XVI, ya inermes en sus manos, solicitando prácticamente la ejecución si juicio. No le siguió la mayoría en esta propuesta y se celebró el juicio que tuvo tan desgraciado desenlace. El razonamiento de defensa republicana de Robespierre queda como una justificación de abusos posteriores, de ellos fue consciente Carvajal que los rechazaba.

Es pues notorio que su justificación de la imposición de la disciplina militar no implicaba adhesión a los excesos del terror.

No es imaginable en su boca el argumento de Robespierre:

“Luis fue Rey, y la República está instaurada; la cuestión famosa que os ocupa está decidida por esas solas palabras. Luis ha sido destronado por sus crímenes; Luis denunció al pueblo francés como rebelde; ha llamado para aplastarlo a las armas a los tiranos, sus hermanos; la victoria y el pueblo han decidido que sólo él se había rebelado; Luis no puede entonces ser juzgado; el ya está juzgado. El está condenado... Proponer que se haga el proceso de Luis XVI de cualquier forma que se pudiera efectuar es retroceder hacia el despotismo real y constitucional”<sup>85</sup>.

No es una posición esta de Robespierre coyuntural y ha venido constituyéndose en una de las características de los gobiernos revolucionarios. Estos pueden actuar en defensa de la Revolución negando algunas de las garantías esenciales por las que se definía esta.

Así insiste el propio Robespierre en su discurso sobre los principios del gobierno revolucionario pronunciado en nombre del Comité de Salud Pública el 25 de diciembre de 1793:

“El gobierno constitucional se ocupa principalmente de la libertad civil y el gobierno revolucionario de la libertad pública. Bajo el régimen constitucional basta proteger a los individuos contra los abusos del poder público; bajo el régimen revolucionario, el poder público mismo está obligado a defenderse a sí mismo contra todas las facciones que lo atacan. El Gobierno revolucionario debe a todos los buenos

---

<sup>84</sup> Carvajal y Hué, J. de: op. cit., pp. 92-93.

<sup>85</sup> Robespierre, “Sur le jugement de Louis XVI”, *Discours et rapports a la Convention*, París, Union General de Etidions, 1965, pp. 66-67.

ciudadanos toda la protección nacional; no debe a los enemigos del pueblo más que la muerte”<sup>86</sup>.

Junto a un abolicionismo que cede ante la circunstancia extraordinaria de la defensa social, el movimiento revolucionario se mostró firme partidario de la abolición del indulto, desde la perspectiva que constituía una arbitrariedad. Quizás olvidaban en este punto la reflexión sobre la clemencia que inauguraba los Ensayos de Montaigne y se mostraban más cercanos al estoicismo, que había puesto bajo sospecha esta virtud.

Carvajal entendía que la abolición de la gracia de indulto se debía producir una vez cumplidas dos condiciones, una es la abolición de la pena de muerte, otra la plena presencia de la soberanía popular en el Poder Judicial a través del jurado. Así en su interpelación parlamentaria sobre el ejercicio de la gracia de indulto de la sesión de 19 de junio de 1880 en el Congreso afirmaba:

“Pero cuando desaparezca del Código la pena de muerte y en cuanto la sociedad por sí propia intervenga en la sentencia, es decir, en cuanto se establezca el jurado, no es posible sostener la necesidad de que permanezca en pie el ejercicio de la gracia de indulto; porque el jurado es la soberanía nacional en ejercicio; en relación con el orden de la justicia, y en contra del fallo de la soberanía nacional en ejercicio es imposible que haya en nadie facultades ni derechos. Con la abolición de la pena de muerte en nuestros Códigos desaparece la única pena irreparable e irreversible que aún queda en ellos; y purgados ya de esta tacha y establecido que sea el jurado, no encuentro razón alguna para abogar a favor del ejercicio de la gracia de indulto, la cual quedaría entonces reducida a un inmoral abuso para fines favorables al Gobierno”<sup>87</sup>.

La lucha revolucionaria contra el perdón construida sobre una base dogmática e irreal, la ley expresada por la boca del magistrado y la procedente del legislador democrático y sobre una base real, el constante abuso real de la prerrogativa, tuvo un primer éxito en Francia, seguido de un muy rápido fracaso, premonición de lo que ocurriría en España.

Mientras el artículo 13 del Título 2 del Código francés de 1791 suprimía el derecho de gracia: “el uso de los actos que tiene por objeto impedir o suspender el ejercicio de la justicia criminal y de las cartas de gracia, de remisión o de abolición, de perdón y de conmutación de las penas, quedan abolidos para todos los crímenes perseguidos por la vía del jurado”, menos de un decenio después y como indica Carvajal “la abolición de la gracia, que por otra parte tuvo el buen acuerdo de no comprender la amnistía, duró lo que el período

---

<sup>86</sup> Op. cit., p. 192.

<sup>87</sup> Carvajal y Hué, J. de:, op. cit., p. 144.

revolucionario y el artículo 86 del Senatus consulto de 16 Thermidor del año diez la estableció depositándola en manos del primer cónsul”<sup>88</sup>.

No parece aprender Carvajal del fracaso de la abolición de la gracia en la Revolución Francesa, proceso que, por cierto, y por las mismas justificaciones, la igualdad ante la ley, el fin de la arbitrariedad, la burla a la soberanía del jurado, se intentó en España en el periodo posterior a la Revolución de 1868.

El 18 de junio de 1870 se aprueba una ley provisional de indultos, cuya intención era reglar el indulto, hacerlo en cierta medida extraordinario y limitar su aplicación contra el parecer de los tribunales. Como tantas veces en nuestra historia esa ley de casi 150 años sigue en vigor, estando sólo derogada durante un breve periodo entre el 9 de agosto de 1873 y el 13 de enero de 1874.

Las razones de la abolición republicana parecen claras en el Proyecto que presentó el Ministro de Gracia y Justicia Pedro José Moreno Rodríguez el 21 de julio de 1873:

“El ministro que suscribe, aspirando a desenvolver por medio de leyes los principios que entraña la forma de Gobierno, solemnemente proclamada por las Cortes soberanas tiene la honra de proponer a las mismas la abolición de unas prerrogativas de origen antiguo, que como patrimonio de las Monarquías se confirió sin duda al primer magistrado de la Nación por el artículo 63 de la Constitución de 1869.

El indulto que ha venido concediéndose no siempre por razones de equidad, y en cuyo ejercicio se han sobrepuesto no pocas veces la piedad y el sentimiento de la razón, llegó después de repetidas disposiciones a regularizarse, quedando convertida la mera gracia en una dispensa de ley.

Las leyes de una Nación, o son buenas y humanitarias, en cuyo caso deben observarse religiosamente, o son rigurosas en demasía, correspondiendo entonces su reforma”<sup>89</sup>.

Tras el golpe de Pavía el indulto nominalmente suprimido salvo algunas penas de muerte remitidas al legislativo, es reclamado de nuevo para el ejecutivo. El Decreto casi inmediato, de 12 de enero de 1874 establece:

“El Gobierno de la República decreta:

Artículo 1º Se restablece en toda su fuerza y vigor la Ley de 24 de mayo de 1870 para el ejercicio de la gracia de indulto, quedando en su consecuencia derogada la de 9 de agosto de 1873.

Artículo 2º el Ministro de Gracia y Justicia reclamará con toda urgencia de la Comisión encargada del Congreso de los Diputados los expedientes sobre indultos que obran en la secretaría para tramitarlos con arreglo a las disposiciones de la ley restablecida a la cual quedan igualmente supeditadas todas las causas pendientes”.

<sup>88</sup> Carvajal y Hué, J. de: op. cit., p. 145.

<sup>89</sup> Citado por Carvajal nota a la” Interpelación sobre el ejercicio de la gracia de indulto” Sesión de 19 de junio de 1880.

La ley republicana daba razones para la abolición, manteniendo en hipotéticas penas de muerte la posibilidad de perdón. Las causas del rechazo son continuadas desde la Ilustración como hemos visto, e incluso antes, pues no son escasas las quejas a los reyes por los excesivos perdones que se concedían por razones variadas. Las causas de la recuperación del indulto no se explicitan pero parecen claramente relacionadas con el poder que otorga la prerrogativa de controlar los resultados finales de la justicia.

La argumentación teórica parece entonces más poderosa en las filas de los abolicionistas que entre quienes la reintroducen. No tenemos una respuesta concreta a los argumentos de Carvajal. Estos, junto a los ya dichos, serían los siguientes:

El primero el de Beccaria, suponiendo la clemencia una necesidad en un mundo imperfecto que corregiría una legislación perfecta: “Esta clemencia, esta virtud, que ha sido alguna vez en un soberano suplemento de todas las obligaciones del trono, debería ser excluida en una perfecta legislación, donde las penas fuesen suaves y el método de juzgar arreglado y corriente. Parecerá esta verdad dura a los que viven en el desorden del sistema criminal en que los perdones y las gracias son necesarias a proporción de lo absurdo de las leyes y de la atrocidad de las sentencias”<sup>90</sup>.

Hay en la justificación del derecho de gracia entonces una justificación accidental, pero ninguna sustantiva, pues ni la tradición, que los progresistas no respetan, ni la clemencia, ni la justicia pueden justificar la prerrogativa.

Insiste Carvajal en su interpelación:

“¿y dónde está este principio?, ¿Dónde está su base?, ¿Dónde?, ¿acaso en la tradición? No. Hemos echado por tierra tantas cosas tradicionales, tenemos ya tan poco respeto a las que pasaron, que seguramente, si se fundara el ejercicio de la gracia de indulto en la tradición, ya no existiría hoy. ¿Se encuentra acaso en un acto arbitrario de clemencia? Tampoco, porque si se rigiesen las sociedades por la clemencia, ésta sería aplicable a todos los casos y habría que abolir la justicia. ¿Se trata de fundar el ejercicio de la gracia de indulto en la inocencia del reo? Esto no es posible porque la inocencia del reo, una vez conocida, necesitaría tener en nuestras leyes garantías más serias y estables que la gracia, porque la inocencia tiene repugnancia a la gracia y derecho a la reparación, que cuando la justicia humana se ha equivocado debe declararlo aunque se humille, no cabiendo supuesto de infalibilidad ante el horror de una acusación no merecida y de una pena sufrida injustamente”<sup>91</sup>.

La reparación, por cierto, preocupaba a Carvajal que observaría la inoperancia del sistema español de revisión de sentencias y lo ejemplificaría con-

---

<sup>90</sup> Beccaria, Cesare: op. cit., p. 121.

<sup>91</sup> Carvajal y Hué, J. de: op. cit., p. 122.

cretamente en su obra, *Quodlibetos jurídicos*. Exactamente en su Quodlibeto “Rehabilitación de la inocencia” se refiere al caso de Cayetano Landrove, condenado a quince años de reclusión temporal por la Audiencia de la Coruña el 16 de octubre de 1886 por haber matado a su hermano hecho de que luego se probó que era inocente. Escandaliza a Carvajal que no pueda ser rehabilitado al no incluirse en ninguna de las causas de Revisión y por tanto parece que sólo le queda el indulto, para el que se había movilizadado la opinión pública. Pero ni el indulto ni la amnistía permiten la total rehabilitación que exige Carvajal:

“Se apela al indulto; pero este es la manifestación de una obra misericordiosa, el perdón del delito; es su confirmación, porque parte de un sentimiento de clemencia y el inocente no necesita ser indultado de una delincuencia que no existe. Se trata del restablecimiento del derecho y el derecho no queda restablecido por el indulto, porque no es la declaración de la inocencia. Cuanto más podrá tomarse como tímida o hipócrita atenuación de los efectos perniciosos que acarrea el error cometido y para restablecer el derecho precisa la declaración del error, que únicamente se obtiene por el recurso de revisión.

Aún si a casos semejantes pudiera aplicarse la amnistía que borra el delito y acaba con la pena, siempre resultaría un agravio a la dignidad humana; puesto que la amnistía es el olvido del delito y, no habiendo aquí delito, no puede haber olvido, ni generosidad, ni clemencia; sino justicia”<sup>92</sup>.

Se sigue preguntando Carvajal si no será la justicia:

“¿Es la justicia la que puede ser la base del ejercicio de la gracia de indulto? Tampoco; porque la justicia consiste en la aplicación de la pena proporcional y adecuada al delito cometido: a éste le corresponde una pena, de tal modo que el delito y la pena se equilibren, y, por consiguiente, no puede entrar a ser elemento del ejercicio de la gracia de indulto ni se puede basar su razón en el principio mismo de la justicia”.

La razón de la prerrogativa es pues sospechosa. La clemencia debería estar incorporada a las leyes y entonces al saltarse estas bajo una supuesta clemencia se están buscando intereses espurios, garantizando el abuso. El ataque de Carvajal da lugar a uno de sus párrafos más brillantes:

“Esta necesidad de indulto que hemos considerado en cierta medida con caracteres de permanencia por la imperfección de la ley es la causa que le origina racionalmente, más cuando se llega al conocimiento del hecho y se analiza, se advierte que jamás le ocasiona, sino que siempre le sirve de pretexto o disfraz. El favor es quien le motiva y la preferencia establece una irritante desigualdad. Se halla unas veces barnizado por el sentimiento, otras adulterado por la conveniencia personal, y en la mayoría de los casos el eunuco y la favorita, que antes obtenían esta gracia por el servilismo o por la complacencia según el estado de las costumbres cortesanas

---

<sup>92</sup> Carvajal y Hué. José de: “Quodlibetos jurídicos”, Primera Serie, Librería de Fernando Fé, Madrid, 1892, p. 322.

que han cambiado de forma y son idénticas en el fondo, están hoy reemplazadas por otros agentes entre cuyos móviles puede figurar la codicia, para mayor escarnio<sup>93</sup>.

Podemos ver que en Carvajal como en muchos progresistas desde la Ilustración hay una doble justificación de la desconfianza hacia el indulto.

Una procede de una posición dogmática, vinculada a la soberanía nacional, que como hemos visto se expresa en el jurado, en el legislativo, que produce una ley supuestamente ininterpretable y en el Tribunal que no puede ver la aplicación de la Justicia desviada.

Otro es de índole práctica, y yo creo que pesa con fuerza en nuestros autores, como había pesado en los ilustrados. La clemencia, virtud indudablemente digan lo que digan los estoicos, venía utilizándose para justificar la arbitrariedad del gobernante. Sabemos por supuesto que los tribunales son susceptibles de influencia por el poder y por el dinero, pero donde esto falla, siempre es posible dulcificar la pena o incluso eliminarla mediante la aplicación de la gracia de indulto. Nos encontramos entonces con la irritante impunidad.

Pero siempre conviene recordar que el indulto en el caso concreto de la pena de muerte puede ayudar a evitar la injusticia. En los *Quodlibetos jurídicos* se recogen tres cartas de Carvajal a Cánovas<sup>94</sup>, Presidente del Consejo de Ministros, sobre un caso de tres condenas de muerte por un delito no político, un asesinato para robar seis pesetas. Las cartas insisten en que se ha producido un error de derecho en el agravamiento de las penas que ha realizado el Tribunal Supremo. Muy dado en la época a agravar penas como hemos visto en el caso de la Mano Negra. Refiriéndose al indulto lo ve como una forma de enmendar un error, dado la urgencia del caso pues no lo consideraba como forma de corrección de errores judiciales en general. Como se ve intenta mantener la dudosa coherencia de su doctrina, pero recuérdese su opinión respecto a la oratoria forense que, en este caso, ejerce buscando el indulto:

“Poner en la cumbre del poder social un remedo para este daño inevitable, no es rendir parias a un sentimentalismo peligroso, sino encajar el indulto en la ciencia y en el Derecho, ápice de procedimiento permanente por su virtud, excepcional por su aplicación. En este terreno, podrá ser el indulto potestativo por la voluntad contra el Derecho, pero es necesario por el Derecho, aun contra la voluntad....

Señor Presidente; pidiendo ahora el indulto, yo no pido clemencia sino justicia<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> Carvajal y Hué, J. de: *Discursos parlamentarios*, op. cit., pp. 138-139.

<sup>94</sup> No puede olvidarse la amistad entre ambos. Así Carvajal firmaría la propuesta de Cánovas como Académico de Mérito de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

<sup>95</sup> Carvajal y Hué, J. de: *Quodlibetos jurídicos*, op. cit., pp. 82-83.





## EL DECANO CARVAJAL

De las múltiples facetas de Carvajal, probablemente la que ejerció con mayor reconocimiento fue la de abogado.

Fue un abogado tardío, incorporado al Colegio de Málaga en 1870 y al de Madrid en 1874. Todos los indicios, sin embargo prueban que su relación con la actividad jurídica y su reflexión sobre el Derecho era previa. Lo mismo que su bachiller de 1870 prueba que su cultura autodidacta era muy anterior, su licenciatura y doctorado por Salamanca ilustran una formación jurídica excepcional.

Carvajal se incorporó al Colegio de Madrid el 7 de mayo de 1874 y fue eliminado el 4 de junio de 1899.

Tanto en la actividad privada, en las numerosas sociedades con las que colaboró, como en la gestión de la Diputación de Málaga, de la subsecretaría de Gobernación, del Ministerio de Hacienda y del de Estado Carvajal demostró que sabía Derecho.

Como abogado labró su fortuna en torno al derecho civil y mercantil. Sin embargo, su prestigio estuvo ligado permanentemente a las defensas, casi desesperadas, que realizó en casos como la Mano Negra y el de Debats.

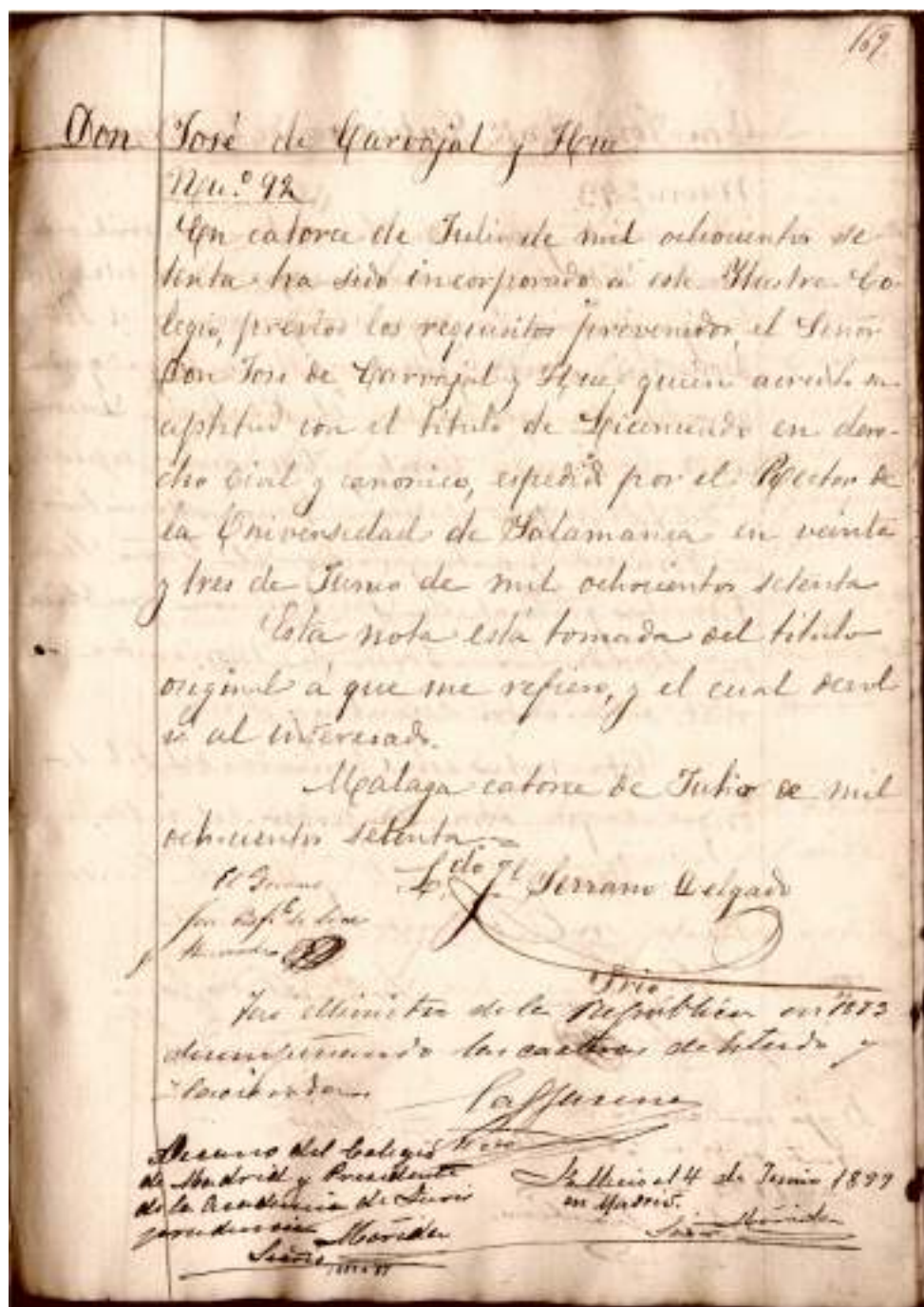
La intervención en el caso de la Mano Negra a lo largo de 1883, con sentencia de 5 de abril de 1884 le hizo célebre, pese a su fracaso en estrictos términos de defensa. Poco después accedería al decanato.

En efecto en las elecciones de 3, 4 y 5 de junio de 1884 sus compañeros eligen a Carvajal Diputado 1º del Colegio de Abogados de Madrid.

Como Diputado 4º salió elegido Vicente Núñez de Velasco. Y como Diputado 6º Francisco Martínez Fresneda.

El 25 de enero de 1885 ya aparece como Decano interino por enfermedad de Saturnino Álvarez Bugallal y en esa junta destaca de nuevo por sus dotes hacendísticas.

En las elecciones celebradas los días 7, 8 y 9 de junio de 1885 saldrá elegido Decano por 801 votos, es de destacar que su sucesor Manuel Silvela será elegido por 348 votos. Tomará posesión el 14 de junio de 1885.



Ilustre Colegio de Abogados de Málaga  
 Inscripción en el Libro de Registro

En la Junta de 24 de enero de 1886 tras la manifestación del pesar por el fallecimiento del anterior Decano, el Sr. Secretario elogió la gestión personal de Carvajal como Decano de la siguiente forma: “usó de la palabra, manifestando que iba a llenar una deficiencia en que había incurrido el Señor Decano, llevado sin duda de su excesiva modestia, y se refería a los auxilios que ofreció a todos los Señores Colegiales que los necesitaran, con motivo de la epidemia colérica, en un aviso confidencial, que circuló entre todo los individuos de la Corporación y a cuyo efecto organizó el oportuno servicio, con exquisito celo, e incansable actividad”.

Carvajal a lo largo de su vida, en su extensa obra tendrá ocasión de tratar cuestiones jurídicas fundamentales, especialmente ligadas a la función de abogado y a sus obligaciones. No reiteramos las que hemos citado en relación con sus juicios de defensa de anarquistas, pero en otras ocasiones se refiere, por ejemplo, al secreto profesional y el derecho de defensa. En el *Quodlibeto* “De la investigación de los delitos”, al hilo de la investigación del crimen de la calle Ferrocarril afirma: “Si el secreto profesional no estuviese escrito en el corazón de todos los que ejercemos el ministerio de la defensa, perdería nuestra profesión su mejor adorno”<sup>96</sup> y añade refiriéndose a los fiscales substitutes “Pues si en los substitutes tiene primacía el abogado sobre el fiscal, se deduce que el secreto de la profesión sale por cima del deber de la denuncia”<sup>97</sup>.

En el texto cuyo facsímil reproducimos se encuentra el recurso de Carvajal solicitando para los acusados una defensa individualizada. El recurso de Súplica que fue admitido incluye por supuesto un conjunto de razonamientos sobre el derecho de defensa.

Había decidido la Sala atribuir la defensa por grupos no aceptando la opción individualizada de Carvajal. Este recurre en virtud del sagrado derecho de defensa individual.

Así dice en el recurso:

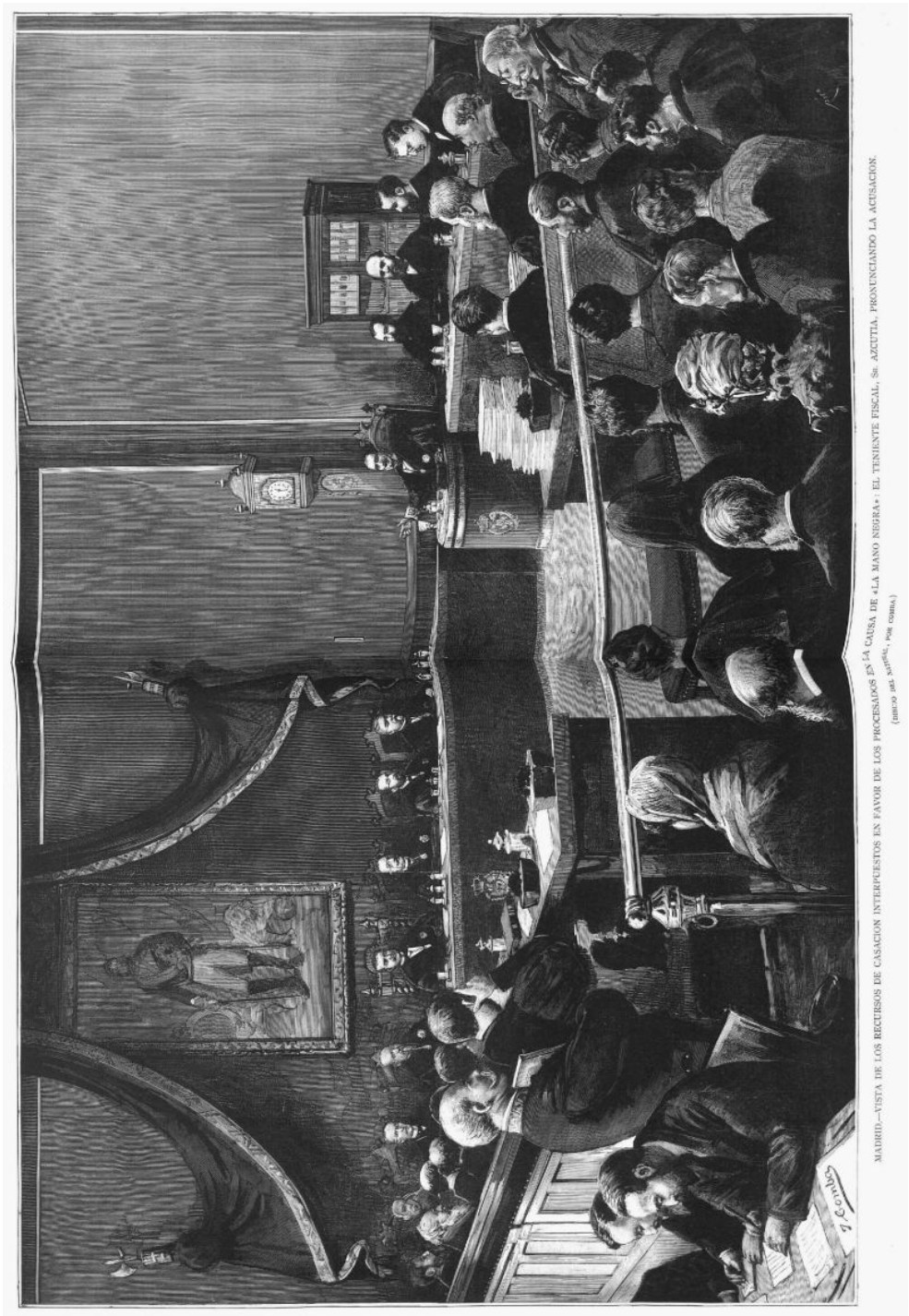
“Por complejo que sea un hecho criminal, el delito es personalísimo, y todas las consecuencias y derivaciones llevan ese propio sello; que así como ningún hombre comete delitos por actos ajenos, así tampoco es juzgado y penado por extrañas responsabilidades. Este carácter individual permanece integro por todas las actuaciones judiciales relativas al delincuente, y por ende la naturaleza manda que la defensa sea individual, a no ser cuando el reo espontáneamente combina este derecho con el de otros, o le abandona, en cuyo caso la sociedad suple la deficiencia.

Con este principio se enlaza el de que el reo tiene libertad para usar de todos los medios posibles para probar su inculpabilidad.

---

<sup>96</sup> Carvajal y Hué, J. de: *Quodlibetos jurídicos*, op. cit., p. 30.

<sup>97</sup> Op. cit., p. 131.





Enfrente de estas manifestaciones del derecho individual, sustancial, primario, universalmente reconocido, no puede prevalecer disposición alguna que le obligue a confundir su defensa con otra, o que le coarte las facultades más o menos eficaces, más o menos imaginarias, de demostrar su inocencia.

*Nemo condemnatus nisi auditus vel advocatus*<sup>98</sup>

Respecto al caso que se ve ante el Supremo, Carvajal vuelve a argumentar contra esta “comodidad” de atribuir la defensa por grupos, precisamente por las especialidades de los recursos por infracción de ley o quebrantamiento de forma:

“La defensa del recurso por infracción de ley o por quebrantamiento de forma, es todavía más personal que la defensa del delito en el juicio; no embargante que concibo caso en los cuales quepa ser conjunta, por voluntad de los procesados o del Tribunal, cuando aquéllos no han usado de su derecho... la acumulación ha de obedecer al principio antes enunciado de que la defensa sea común, pero hay que tener en cuenta cómo se han destacado de la sentencia las unidades de la culpabilidad, para no confundirlas y bajarlas”<sup>99</sup>.

Como resultado de este recurso el Supremo acepta el razonamiento por auto de 4 de agosto:

“Considerando: que en el ejercicio del derecho de defensa debe aceptarse el criterio más amplio y compatible con la libertad y extensión de la misma, siempre que a ello no se oponga prescripción terminante de la ley, lo cual no sucede en el presente caso; ...se tiene por hecha la designación de defensores en la forma que determina el escrito del Dr Carvajal, de 22 de julio”<sup>100</sup>.

A consecuencia de esto Carvajal procedería a defender a Juan Ruiz, Cayetano de la Cruz y José León Ortega.

La Sentencia mantendría las condenas a muerte de la Audiencia y elevaría el total a quince entre ellos Juan Ruiz y Cayetano de la Cruz. El Consejo de Ministros indultaría las condenas a muerte a siete, entre ellos al defendido por Carvajal, Cayetano de la Cruz. José León Ortega participe directo en los hechos no sería ejecutado al haberse vuelto loco. Se le aplicó así el artículo 101 del Código de 1870 que en este punto rezaba:

**Artículo 101.** *Cuando el delincuente cayere en locura ó en imbecilidad después de pronunciada la sentencia firme, se suspenderá la ejecución tan solo en cuanto a la pena personal, observándose en sus casos respectivos lo establecido en los párrafos segundo y tercero, número 1, del artículo 8º.*

---

<sup>98</sup> Op. cit., p. 166.

<sup>99</sup> Op. cit., p. 173.

<sup>100</sup> Op. cit., p. 179.

El maestro “no titulado” Juan Ruiz fue finalmente ejecutado el 14 de junio de 1884 tal como disponían los artículos 102, 103 y 104 del Código de 1870:

**Artículo 102.** *La pena de muerte se ejecutará en garrote sobre tablado.*

*La ejecución se verificará á las veinticuatro horas de notificada la sentencia, de día, con publicidad, y en el lugar destinado generalmente al efecto, ó en el que el Tribunal determine, cuando haya causas especiales para ello.*

*Esta pena no se ejecutará en días de fiestas religiosas ó nacionales.*

**Artículo 103.** *Hasta que haya en las cárceles un lugar, el destinado para la ejecución pública de la pena de muerte, el sentenciado á ella, que vestirá ropa negra, será conducido al patíbulo en el carruaje destinado al efecto, ó donde no lo hubiere, en carro.*

**Artículo 104.** *El cadáver del ejecutado quedará expuesto en el patíbulo hasta la hora de ántes de oscurecer, en la que será sepultado, entregándolo á sus parientes ó amigos para este objeto, si lo solicitaren. El entierro no podrá hacerse con pompa.*

El durísimo fallo del Supremo decía lo siguiente:

“Fallamos que debemos condenar a los mencionados procesados Juan Ruiz y Ruiz, Roque Vázquez García, Cayetano de la Cruz Expósito, Agustín Martínez Saenz, Antonio Valero Hermoso, Gonzalo Benítez Álvarez y Rafael Jiménez Becerra a la pena de muerte en garrote, que ha de ejecutarse en la ciudad de Jerez en el sitio destinado al efecto y en la forma que determina el Código en los artículos correspondientes, con la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua, si fueren indultados y no se remitiera esta pena expresamente en el indulto, y a la indemnización por iguales partes, con los demás reos condenados a muerte en la sentencia recurrida, de la cantidad señalada en dicho fallo a favor de los padres del interfecto, y al pago de su respectiva parte de las costas de la causa; dejando subsistente la expresada sentencia de la Audiencia de Jerez en todo lo demás que no se oponga a esta resolución, en la cual no ha sido casada y anulada por la de casación que ha dictado esta Sala en la presente fecha.

Así por esta nuestra sentencia irrevocablemente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Emilio Bravo/ Luciano Boada/ Mateo de Alcocer/ José García Herráiz/ José de Aldecoa/ Bernardo María Hervás/ Ángel Gallifa - Madrid 5 de abril de mil ochocientos ochenta y cuatro.”

Si la defensa del caso de la Mano Negra pudo suponer el impulso definitivo de Carvajal para aparecer como un abogado destacado primero y luego como representante de sus compañeros, hasta el punto de pasar a ser Diputado 1º, Decano en funciones y Decano del ICAM, el caso Debats parece que tuvo mayor impacto desde el punto de vista teórico hasta convertirse en una referencia de oratoria forense.

En efecto, si Carvajal publicó a su costa el caso de la Mano Negra en los *Quodlibetos Jurídicos*, sus amigos le publicaron el libro *Los anarquistas en Madrid. Informe Oral en las sesiones del Jurado de 30 de Diciembre de 1883 y 2 de Enero de 1894 por el Doctor don José de Carvajal y Hue en Defensa de Juan María Debats*.

Pero el texto sería reproducido varias veces como hemos dicho, muestra de su importancia. Así en *La Colección de trabajos Forenses y Noticias Biográficas de los abogados de España publicados por la Revista de los Tribunales*. Madrid Centro Editorial de Góngora 1903.

El libro recoge en 550 páginas Consultas, Escritos e Informes Orales. En estos últimos hay informes de Asuntos civiles, criminales, contenciosos y jurisdicción del Senado. Los informes criminales los encabeza Carvajal.

En la obra se recogen trabajos de lo más excelente de la abogacía, por citar, algunos: Manuel Alonso Martínez, Florencio Álvarez Ossorio, Eduardo Dato, Luis Díaz Cobeña, Raimundo Fernández Villaverde, Antonio Maura, Eugenio Montero Ríos, Francisco Pi y Margall, Joaquín Ruiz Jiménez, Felipe Sánchez Román, Nicolás Salmerón o Francisco Silvela.

También se reproduce como ejemplo notable en el libro *Oratoria Forense* de Arturo Majada, Bosch, 1951, editado en la tercera edición como “Técnica de informe ante los tribunales de Arturo Majada”, Barcelona Bosch, 1982.

Aquí junto al texto se recogen diversas figuras oratorias de Carvajal.

Así al referirse al uso de símiles teatrales:

“¿No es extraña esta certidumbre conjunta con la circunstancia de que no se la persiguiera, cuando dos meses antes había sido denunciada su existencia? ¿Y no tiene esta conjunción mucho parecido con el artificio de los malos dramaturgos que son silbados, porque el espectador advierte que una sencilla y natural explicación en el primer acto hubiera evitado todos los enredos ficticios y violentos de la trama y todos los horrores del desenlace?”<sup>101</sup>.

Igualmente se menciona su habilidad con las figuras de impugnación:

“Cuyo informe es un modelo de acusaciones forenses por lo sobrio, por lo severo, hasta por lo sentido; pero que carece de relación con sus conclusiones, mientras que por dentro chocan unas partes con otras y se deshacen al golpe”<sup>102</sup>.

También se le pone como ejemplo por su habilidad para rectificar o clarificar algún término que podría, en este caso haber molestado al Ministerio Fiscal, aunque claro puede pensarse que lo deja dicho:

“Ni la afirmación principal ni la afirmación accidental son ciertas: son una verdadera arbitrariedad. No se lastime el dignísimo representante del Ministerio Público, ni acuda, como semeja su ademán, al amparo de la Presidencia. He empleado esta

---

<sup>101</sup> Majada, Arturo, *Técnica de informe ante los tribunales*, 3ª ed., Bosch: Barcelona, 1982, p. 208.

<sup>102</sup> Op. cit., p. 208.

palabra con su sentido propio y natural, en el arbitrio y o albedrío, en el que lo voluntario, no lo caprichoso, en el de lo libre, no lo despótico y opresor”<sup>103</sup>.

Más adelante el mismo Majada cita el exordio que hemos reproducido en parte con el que inicia la defensa de Debats donde se le califica de “pobre extranjero condenado por la opinión a ciegas y perturbada, que no atiende en estos momentos sino al prestigio tenebroso de su nombre”<sup>104</sup>.

Se da así mismo algún ejemplo de alegoría p. 265:

“No puedo pasar como oro de ley esta pudicia, porque todo hay que mirarlo y no es lícito en la justicia humana asquearse y bajar los ojos. Cuando los baja no ve, y por haberlos bajado, no ha visto el digno representante de la acción social, el delito tal como es. Yo no siento esas náuseas, y si las sintiera, me aguantaría; porque mi deber es entrar hasta el fango, y si quiero reservar mi toga, con levantarla, evitaré sus salpicaduras”<sup>105</sup>.

Más que una mera figura retórica prueba una forma de entender la abogacía que le llevó con sentido de la justicia a defender algunos de los casos más controvertidos.

Utiliza también en su favor Carvajal en el caso Debats la confesión de su defendido de que es anarquista, claramente para poner en contraposición como vimos el anarquismo utópico bueno y el terrorista de “la propaganda por el acto”:

“Y si tuviera las citas fiscales por motivo y por objeto la demostración de que es anarquista, yo diría que esta demostración es ociosa, porque en el interrogatorio, al principio del juicio, la nota saliente ha sido la integridad de ánimo, sin impurezas de vacilación, con que ha afirmado las ideas a que rinde vasallaje su inteligencia. Soy anarquista, ha dicho en voz alta; cuando sin duda alguna habría peligro al declararlo, si vosotros al juzgar, no fuerais a desprenderos de las preocupaciones sociales y no estuvierais penetrados de que vuestra misión en estos momentos exige una gran serenidad de juicio”<sup>106</sup>.

Obsérvese en este caso como alecciona al jurado sobre lo que en justicia se espera de ellos.

En el área penal junto a estos *juicios pro bono*, Carvajal llevaría los procesos Nebot o del Duque de Sevilla.

En otras áreas, las preferentes y de las que en buena parte viviría a partir de 1874 realizó arbitrajes civiles como la liquidación de la Sociedad Guilhou,

<sup>103</sup> Op. cit., p. 225.

<sup>104</sup> Op. cit., p. 237.

<sup>105</sup> Op. cit., p. 265.

<sup>106</sup> Op. cit., p. 314.



donde mostró sus conocimientos de Derecho internacional privado y de Derecho Mercantil, y lo que probablemente le produjo más beneficio los litigios civiles y contenciosos entre la Sociedad del puerto de Pasajes y la Diputación provincial de Guipúzcoa<sup>107</sup>.

En el Congreso defendería en su momento una posición favorable a los intereses andorranos en un asunto de tasas que les enfrentaba al Obispo de la Seo de Urgell. Esto explica la presencia de una calle dedicada a él en el Principado<sup>108</sup>.

Como hemos visto en 1886, durante su fructífero interregno parlamentario, fue elegido Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, lo que compagino con la presidencia del Congreso jurídico Español.

Un reconocimiento muy completo de Carvajal lo tenemos en el discurso de don Guillermo Benito Rolland con motivo de apadrinar en la investidura del título de Académico de Mérito al Excmo. Sr. D. José de Carvajal y Hué en la sesión pública de 28 de abril de 1890 (Editado por la tipografía de Manuel G. Hernández en Madrid, en 1890). Para este cargo había sido elegido el 15 de diciembre de 1886 pero tuvo que posponer la toma de posesión debido al fallecimiento de su madre.

Carvajal sería así elegido con el número cuatro como uno de los Académicos de Mérito de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Estos según la Constitución de la Real Academia de 19 de junio de 1882 y en el Reglamento de 27 de abril de 1883 como “los académicos que resalten por sus servicios extraordinarios a la Academia”. La figura del Académico de mérito existió desde 1837 hasta 1932. En estos 95 años sólo se eligieron 55, entre ellos y como destaca Serrano Carvajal: Antonio Cánovas del Castillo, Francisco Romero Robledo, Manuel y Francisco Silvela, Segismundo Moret, José Canalejas, Antonio Maura, Eduardo Dato, Eugenio Montero Ríos, Raimundo Fernández Villaverde, Manuel Alonso Martínez, Pedro Gómez de la Serna, Vicente de Piniés, Manuel Cortina y Manuel Seijas<sup>109</sup>.

En la propuesta para ser académico de mérito fue incluido junto a Romero Robledo y Alonso Martínez. A los tres en el escrito de presentación de 13 de diciembre de 1886 se les atribuía haber devuelto el prestigio a la Academia. Este prestigio se unía a la celebración del Primer Congreso Jurídico Español.

Así:

---

<sup>107</sup> Serrano Carvajal, José, “José de Carvajal: Académico, Político y Literato”. *Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*. Num 30, Madrid, 2000, p. 432.

<sup>108</sup> Carvajal y Hué, José de: *Discursos parlamentarios. Legislatura de 1894 a 1895*. Tomo VII. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fé, 1896, pp. 473-527.

<sup>109</sup> Serrano Carvajal, José: op. cit., pp. 424-425.

“Los académicos que suscriben someten a la aprobación de la Junta General la proposición siguiente:

El éxito indiscutible alcanzado por el Congreso Jurídico Español, constituye un timbre glorioso para la historia brillantísima de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

El resultado del Congreso, ha correspondido como todo el mundo reconoce a las esperanzas de los más optimistas. La gratitud de la Academia debe ser eterna, y debe ser igual para todos aquellos que contribuyeron con su inteligencia, con su actividad y con su celo a esa obra patriótica, digna de un pueblo culto y próspero. Hay, sin embargo, en este largo proceso tres nombres que merecen especialísima consideración y gratitud excepcional.

Los Sres. Romero Robledo, Carvajal y Alonso Martínez se han hecho acreedores a esta distinción: el primero iniciando el renacimiento de la Academia, el segundo realizando el proyecto del congreso jurídico, y el último protegiendo desde las esferas del Gobierno estos pensamientos importantísimos.

Los que suscriben deseando rendir un tributo de admiración y respeto a estos tres académicos ilustres, proponen a la Junta General se sirva otorgarles académicos de mérito.”

Carvajal falleció en Madrid el día 4 de junio de 1899, tras una larga carrera política y jurídica. En la Real Academia de Jurisprudencia y legislación su secretario Félix de Llanos y Torriglia en la Sesión inaugural del curso 1899-900, celebrada el 20 de enero de 1900 le dedica unas sentidas palabras. En ellas se destaca la contradicción que se observaba entre su pasado revolucionario y su presente republicano conservador, entre su adscripción masónica y su ahora público catolicismo. Pero quizás estas observaciones proceden de la admiración conservadora hacia un hombre que de haber subsistido la República de Castelar hubiera tenido una más alta función política:

“La vez primera que yo pisé estos umbrales os presidía D José de Carvajal y celebrabais un ensayo de juicio oral y público en lo criminal, preliminar de la instauración de ese procedimiento en el sistema español de enjuiciar. La deuda de gratitud que con Carvajal contrajisteis entonces, y más aún la que reconocisteis en su favor por la peritísima organización y dirección del Primer Congreso Jurídico Español, la pagasteis confiriéndole el título de Académico de Mérito que ostentaba siempre como uno de los más preciados entre muchos de que podía ufanarse. Artista de la palabra, pensador profundo, erudito sin afectación, probo y cortés, el Sr Carvajal no tenía un enemigo.

Entre nosotros fue, más que un Presidente, un compañero propicio siempre a poner su saber y su valimiento al servicio del cargo que desempeñaba.

Republicano, no tuvo reparo en afrontar las críticas de sus correligionarios presidiendo esta Academia honrada con el dictado de Real, y reanudando la antigua práctica de celebrar con funciones religiosas la fiesta de la Purísima. Verdad es que Carvajal era un creyente; verdad acaso que, allá en el fondo de su alma, Carvajal era un adorador de prestigios históricos, de las instituciones conservadoras, de cuando fuera orden, armonía, belleza fastuosas. El nos habló aquí, elocuentísimamente, de

la influencia del azar en la vida. ¿Sabe Dios si el azar le hizo a él liberal y Ministro de la República?"<sup>110</sup>.

Quizá convenga no exagerar el entusiasmo de Félix de Llanos hacia el conservadurismo de Carvajal. Ciertamente converso, mantuvo una constante admiración por las bases teóricas de su formación y especialmente por Rousseau. En los libros que recomienda a su hijo en la *Introducción a los discursos parlamentarios* combina los referentes del pensamiento cristiano con el clasicismo de Horacio y la obra de Rousseau.

Se puede decir que en esas recomendaciones de la última década de su vida predomina una posición católica, ciertamente todo lo *sui generis* que se quiera.

En sus palabras:

"Si me dieran a escoger obras de experiencia para fortalecer el ánimo y trazar voluntariamente un rumbo, iría a buscar el agua en cuatro manantiales diversos: a las *Confesiones* del Obispo cristiano, a las del filósofo ginebrino, a la *Imitación de Cristo* del asceta y a las *Sátiras* y *Epístolas* del incomparable Horacio"<sup>111</sup>.

Esta experiencia tomada de los libros clásicos, debe sin embargo adaptarse a las nuevas circunstancias de la época, resurgiendo en este punto el progresismo de Carvajal, véase el párrafo dedicado a su hijo:

"De cuantos libros nos ha legado la literatura clásica, es el de Horacio aquel que más experiencia contiene; pero sus lecciones no son aplicables estrictamente sino al ser condicional en que se hallaba la sociedad donde vivió nuestro poeta favorito, tan conocedor de los hombres y de las pasiones; y otro tanto sucede con el Kempis, en cuya severidad está el consuelo y encierra soberana advertencia sobre la pequeñez y miseria de las cosas humanas; por manera que al trasladarlos no vale la copia sino corregida"<sup>112</sup>.

Aparte de estas referencias y de forma más pública Carvajal apela a su común catolicismo en una carta a Cánovas del Castillo con ocasión de pedir el indulto de unos delincuentes comunes condenados a la pena de muerte por la Audiencia de Granada y el Tribunal Supremo:

"Sr Presidente:

Fuera lícito comparar lo religioso con lo mundano y yo diría que, si los católicos tenemos por obra del tanto mérito sacar un ánima del cautiverio temporal que llama-

---

<sup>110</sup> "Discurso leído por el Secretario General don Félix de Llanos y Torriglia en la Sexión inaugural del curso de 1899-1900, celebrada el 20 de enero de 1900, Tipografía de los hrdos de M. G. Hernández, Madrid, 1900, pp 69-75.

<sup>111</sup> Carvajal y Hué, José de: *Discursos parlamentarios*. Tomo I Introducción, op. cit., p. XXXIII.

<sup>112</sup> Op. cit., p. XXXIV.

mos purgatorio, aquella que sin duda va usted a hacer de quitar tres reos del patíbulo, me resulta todavía mayor en el orden de la Naturaleza y de la vida; porque al fin y al cabo, del purgatorio se sale por la misericordia divina; pero, la pena de muerte es irremediable como el infierno, donde ya no cabe esperanza de salvación”<sup>113</sup>.

Por otra parte su actividad defensora de acusados anarquistas a los que se solicita la pena de muerte ejemplifica una actitud claramente anti conservadora.

Precisamente era su patriotismo el que le llevaba a oponerse a los Borbones, respecto a su ideal de vida es cierto que en el soneto que dedicó a su hijo José de Carvajal y Viana Cárdenas no parece expresar el ideal revolucionario. Reproducimos el poema de su texto manuscrito<sup>114</sup>.

### Como quiero morir.

Quiero morir tranquila mi conciencia  
de no haber hecho daño voluntario,  
con lágrimas bañando el relicario  
del alma, en el altar de mi creencia.  
Labro en sufrir y amar mística esencia  
que redime la culpa en el calvario;  
yo pequé, más sufrí viento contrario  
y amé a Dios, a mi patria y a la ciencia.  
Quiero morir en brazos de mi hijo,  
y hallar mi sepultura en el sendero  
de la fé y el honor con rumbo fijo.  
Quiero morir cristiano y caballero;  
quiero morir besando un crucifijo,  
¡y sé que no es morir esto que quiero!

<sup>113</sup> Carvajal y Hué, José: *Quodlibetos jurídicos*, op. cit., pp. 94-95.

<sup>114</sup> Conservado en el archivo de Francisco Oyonarte Molina, a quien agradecemos el permiso para la reproducción.

## Como quiero morir—

Quiero morir tranquila mi conciencia  
de no haber hecho daño voluntario,  
con lágrimas bañando el relicario  
del alma, en el altar de mi esencia.

Labro en sufrir y amar mística esencia  
que redime la culpa en el calvario;  
yo pequé, más sufrí viento contrario  
y amé á Dios, á mi patria y á la vida.

Quiero morir en brazos de mi hijo,  
y hallar mi sepultura en el sendero  
de la fe y el honor con rumbo fijo.

Quiero morir cristiano y caballero;  
quiero morir besando un crucifijo,  
¡y sé que no es morir esto que quiero!

J. de Carvajal

Al morir fue trasladado en ferrocarril a Málaga donde se enterraría en el Panteón del cementerio de San Miguel que había adquirido a través de su yerno el quince de noviembre de 1889. Sin cruz en el exterior, el panteón incluiría luego una Santa Ana dentro, lo que puede ilustrar el momento tardío de su paso al catolicismo.

Su entierro fue un acontecimiento multitudinario en Málaga, donde, a pesar de ciertas desavenencias políticas, mantenía todo su prestigio de tribuno republicano. Así lo describe el diario *La Unión Mercantil* de 7 de junio de 1899:

“Rompían la marcha cinco batidores de la Guardia Civil de a caballo.

Después iban veinte niños del asilo de los Salesianos: ocho secularizados, y el cadáver conducido por amigos y entusiastas del gran republicano.

El coche fúnebre, modesto por la expresa voluntad del finado, iba cuajado de coronas de gran valor.

Seguían a este, cinco carruajes descubiertos con las demás coronas dedicadas al señor Carvajal, guardia municipal diurna y nocturna, y el cortejo compuesto de las Corporaciones oficiales, los republicanos, personal del ferrocarril, particulares, presidencia del duelo y más de cien carruajes.

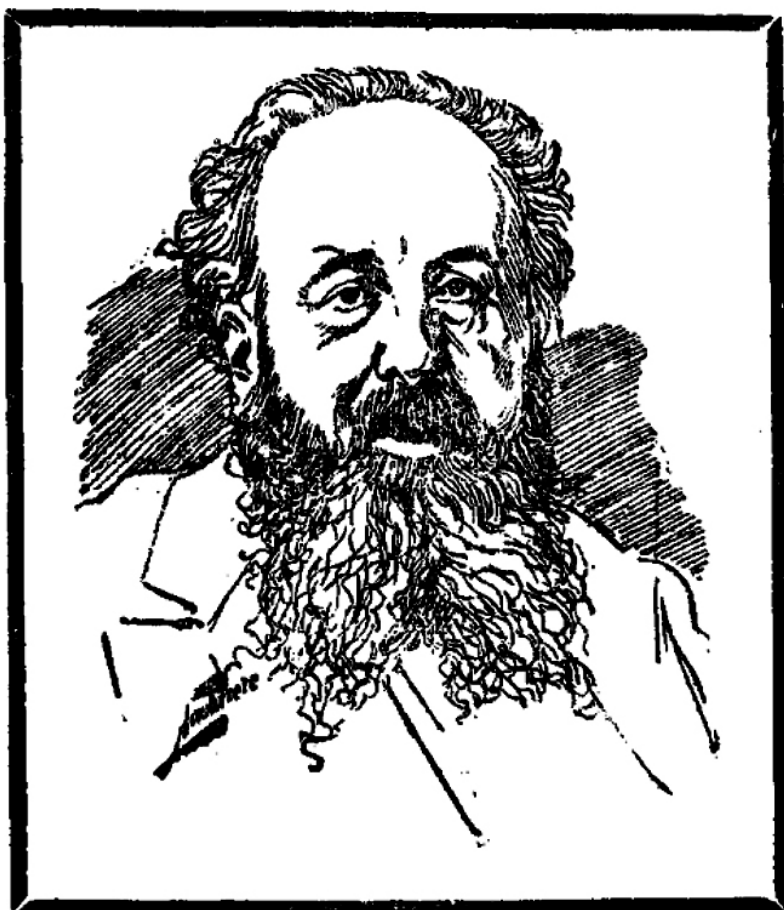
Una multitud inmensa presenció el desfile de la fúnebre comitiva; todas las tiendas de la calle Larios y Granada estaban cerradas en señal de duelo.

Los Círculos y Cafés habían cerrado también sus ventanas”<sup>115</sup>.

---

<sup>115</sup> Citado por la completa biografía de Mateo Avilés, Elías, “José de Carvajal y Hué. 1835-1899. *VVAA Malagueños en la Historia*, Málaga Benedito editor, 2006, pp. 164-171.

# CARVAJAL



Retrato de Carvajal y Hué, publicado en el obituario aparecido en  
*La correspondencia española*, 5 de junio de 1899



**ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID**

**SECRETARIA**

N.º cronológico 6190 N.º 30 de 1874

**EXPEDIENTE PERSONAL DEL COLEGIADO**

Don *José Carvajal y Hué*

**EXTRACTO**

Incorporación en 7 de Mayo de 1874  
Inscripción al folio 965º del libro 10 de incorporaciones.  
Aprobada en Junta de Gobierno de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Eliminado en 4 Junio de 1899 por fallecimiento

Expediente de colegiación de Carvajal y Hué. Portadilla  
AHICAM 1.1 Exp. 6190



Presupuesto del Estado de Chile para el año 1874. Recd.  
N.º 1.º de 4 de Mayo de 1874.

El Doctor D. José Carrizosa y Añón, natural de Villavieja, de la provincia de Madrid, en virtud de su nombramiento en este Ministerio de Fomento al efecto de expedir el título de Abogado expedido por el Consejo de la Real Audiencia de Santiago de la Comunidad de Chile, en virtud de la Real Cédula de 18 de Mayo de 1874, fecha tercera de mayo de dicho año.

L. Noltinghoff  
por el

Examinada la solicitud del título de Abogado en la forma ordinaria y por el Consejo general de la Junta de Gobierno en 6 de Mayo de 1874.

L. Noltinghoff  
por el

Despacho en 8 del mismo mes y año conforme.

L. Noltinghoff  
por el

Y compareció en este Ministerio el Doctor D. José Carrizosa y Añón, quien se presentó en el Ministerio a Vicario de la partida de abogada, correspondiente precisamente al pago de la multa establecida por Real Cédula de 14 de Diciembre de 1867, debiendo en el momento de su comparecencia y declaración el título de Abogado haberse verificado y cancelado en la Junta de Gobierno en su primer pago.

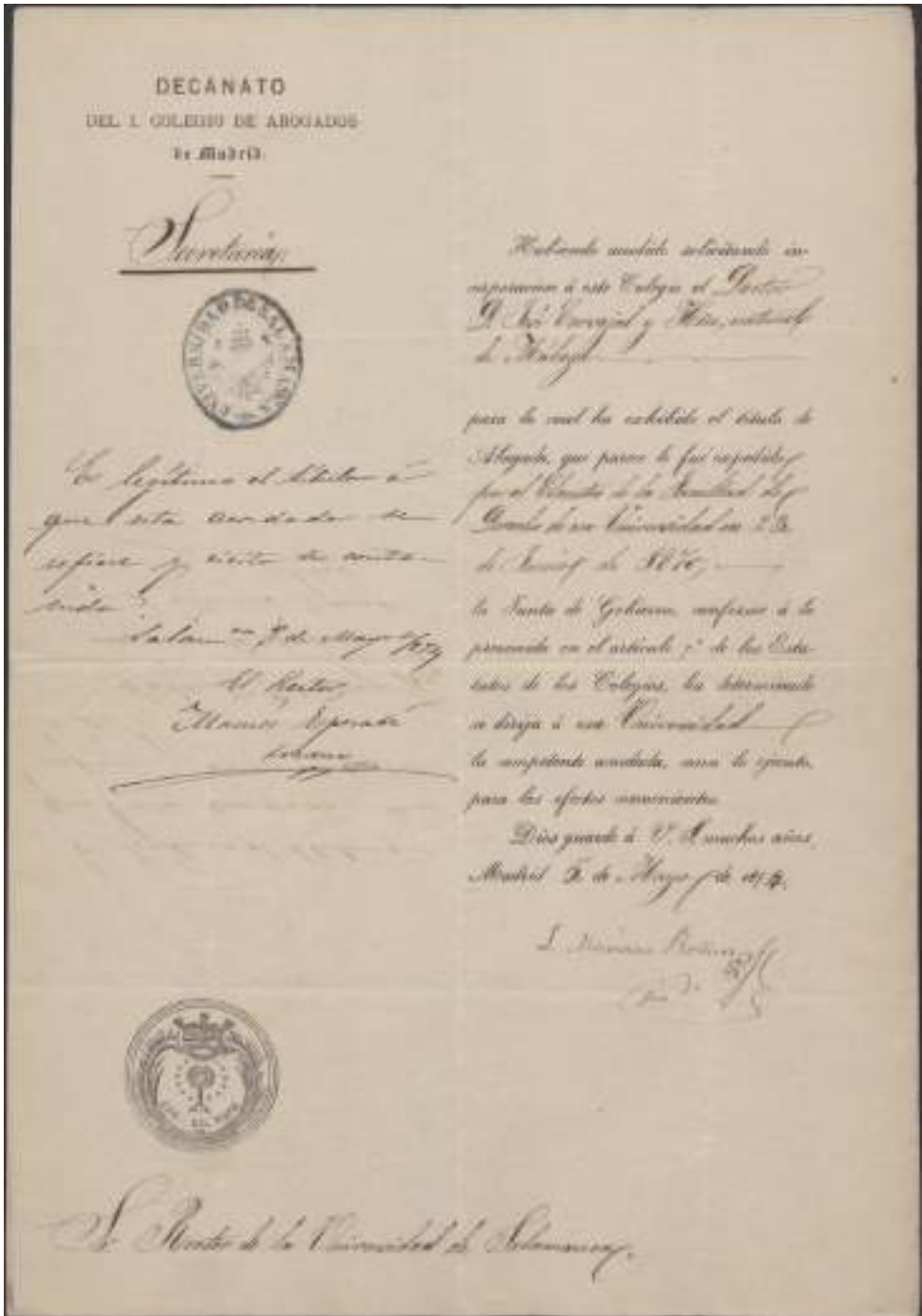
L. Noltinghoff  
por el

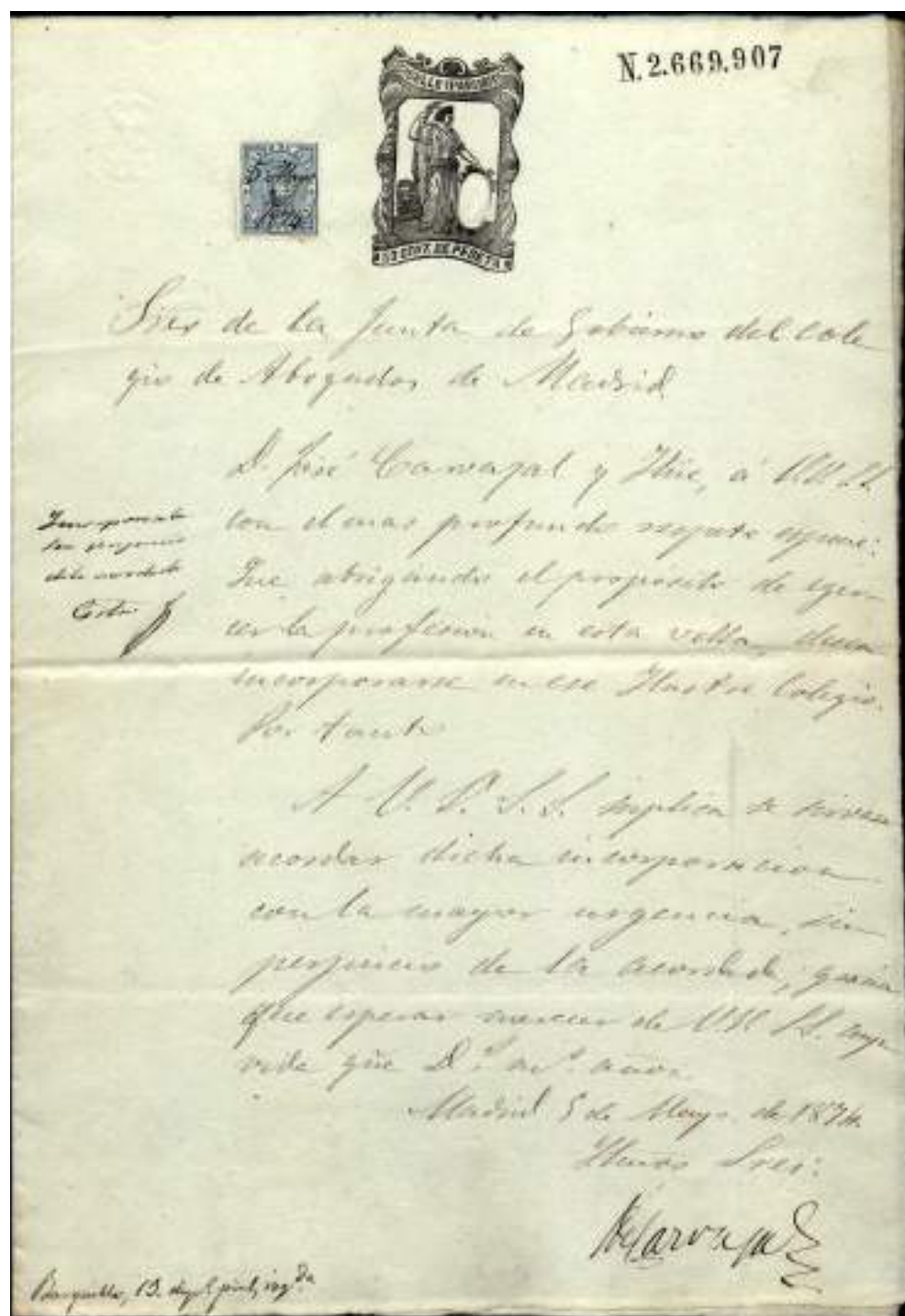
Quedó el título de Abogado.

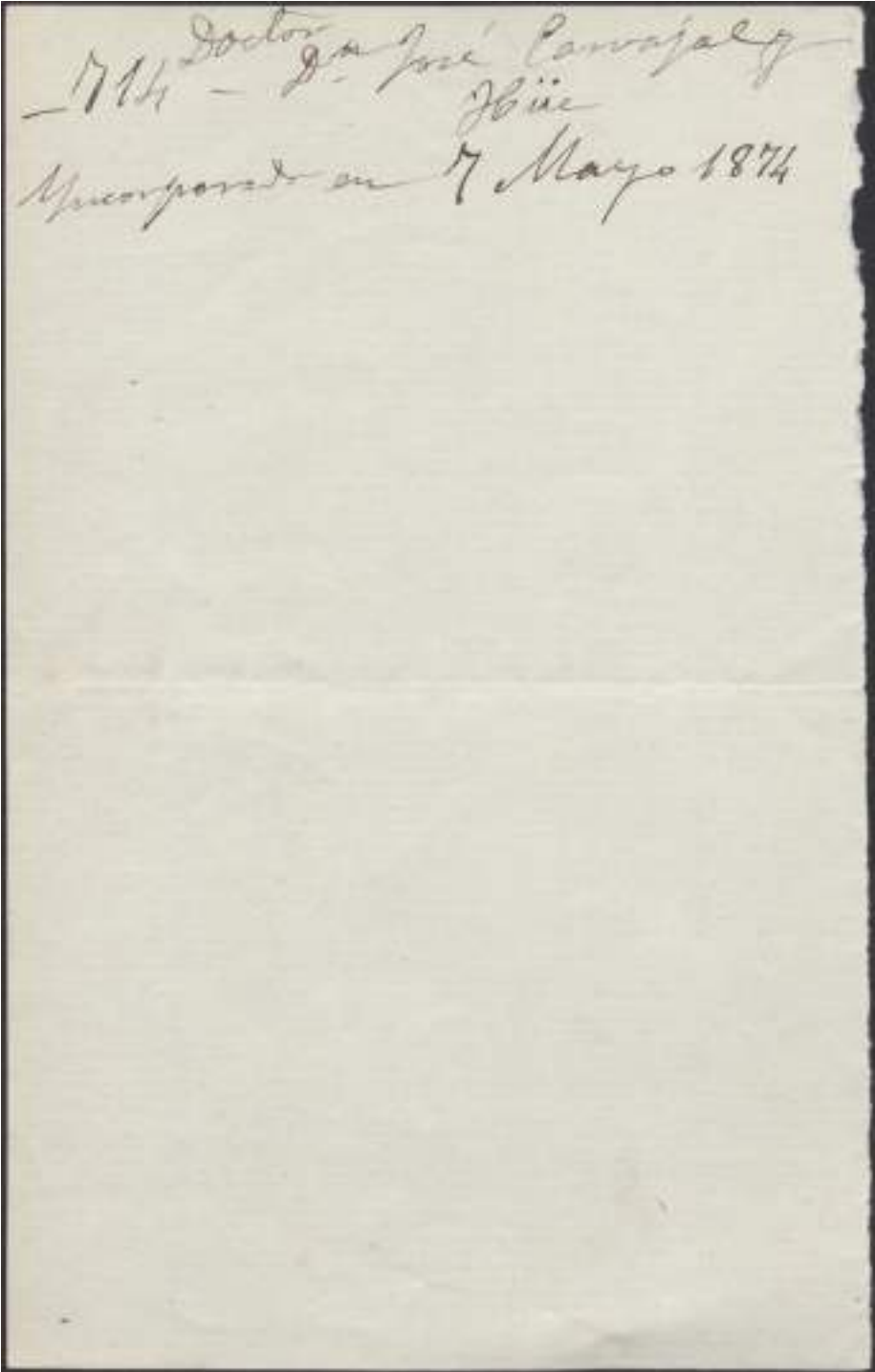
L. Noltinghoff  
por el

Hecho a petición del Sr. D. José Carrizosa y Añón, en 11 de Mayo de 1874.

Ente a da



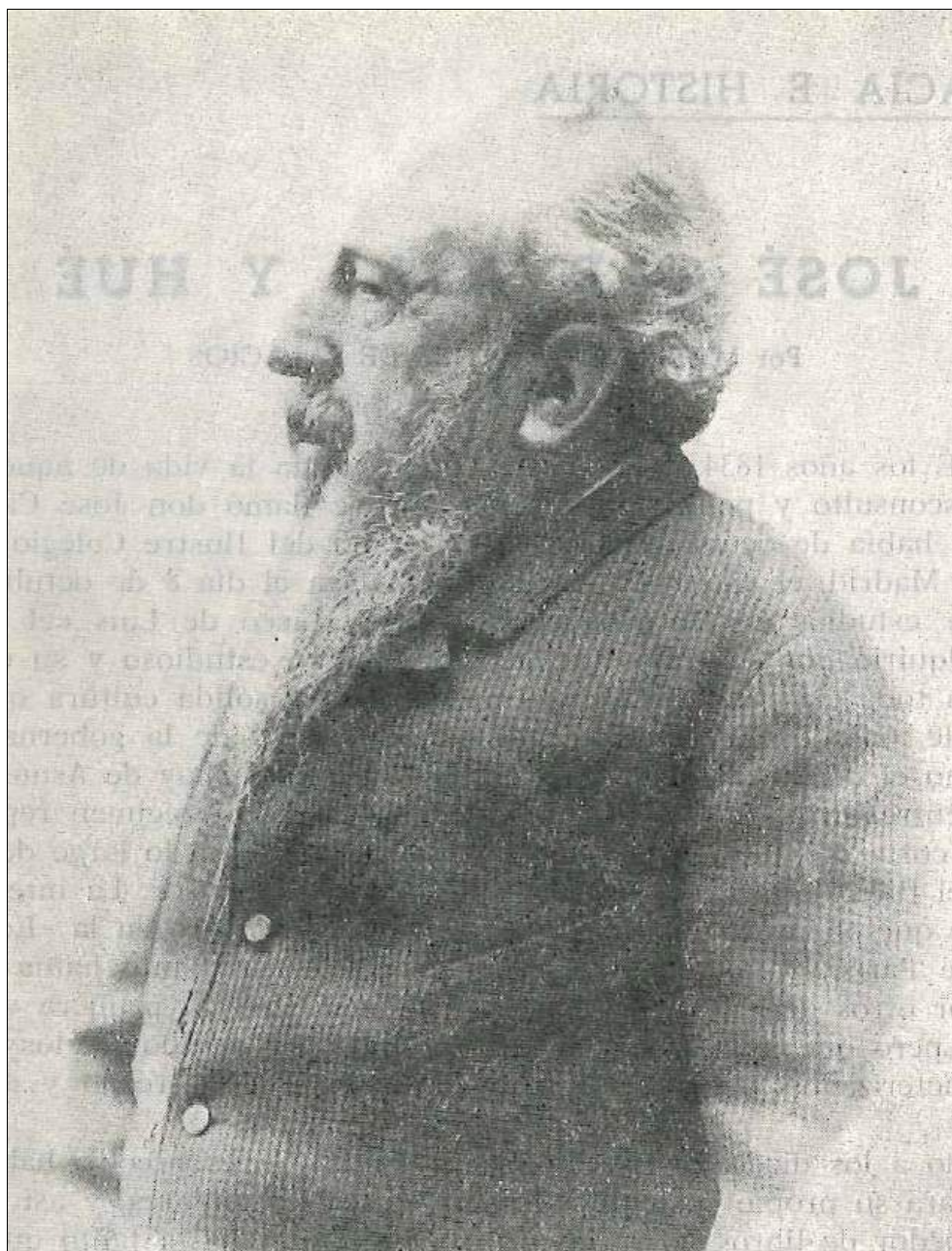




Hoja de servicios. AHICAM 1.1 Exp. 6190

[illegible]





Fotografía de José de Carvajal y Hué. Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nº 3. 1972

**LA MANO NEGRA**





# I

## ANTECEDENTES

Por los años de 1881 y 1882, todavía estaba en su auge la Asociación internacional de trabajadores que, con motivo, traía alarmados en Europa la propiedad y el capital. Después de esa fecha, han sobrevenido sucesos y modificaciones en la organización de los partidos socialistas, que han torcido hacia distinto lado los temores, trasladándose á otras organizaciones la acción de los elementos que procuran por medio de un arreglo social, ya sea provocado por la ley, ya por la fuerza, la satisfacción de sus necesidades.

La Asociación internacional de trabajadores, apoyada por un periódico que se llamaba *La Revista Social*, había invadido todas las regiones productoras de España y señaladamente la Andalucía, cuyos jornaleros del campo venían muy dados desde antiguo á pertenecer á asociaciones de esta índole, principalmente si tenían el carácter sombrío y misterioso de una sociedad secreta. Yo he conocido varias y recuerdo aún aquella que más caracteres tenía de local que de universal, provocó los tristes sucesos de Loja,

— 152 —

y á la cual pertenecían todos, absolutamente todos los que vivían de la labor, que se llamaban *los apunados*. Y era de ver aun antes de la revolución fracasada de 1854, cómo en los tajos de cava ó en las reuniones íntimas de la cocina, alrededor de la amplia chimenea, se hablaba de las fincas que habían de ser arrebatadas á los propietarios y repartidas entre la menuda gente campesina. Esto mismo sucedía en aquellos años á que me he referido, y seguramente que Carlos Marx y sus secuaces, aunque no tuviesen semejante delirio en sus programas, le fomentaban para acrecer el número de sus adeptos. La Asociación había tomado mucho desarrollo lo mismo en los montes de Málaga, que en los cortijos de Córdoba y en los viñedos de Jerez; pero señaladamente en esta última región.

Al lado de la enseñanza maligna y de las ideas generales propagadas por *La Revista Social* y por la multitud de predicadores ambulantes que iban de finca en finca, solevantando los ánimos con la perspectiva de la riqueza improvisada, se crearon para dar más pábulo á la imaginativa del vulgo y hacerle más visible y cercano su interés, asociaciones secretas, que se enlazaban ó vivían aisladas, según las conveniencias ó el influjo del individuo que en ellas dominaba. Estas sociedades secretas á las veces se constituían con reglamentos terroríficos donde se imponían penas severas á quien revelase los secretos ó dejara de cumplir con los fines de la comunidad; vana palabrería casi siempre, que en general sirvió sólo para atar á los espíritus pobres y apocados ó para que relampagueasen las luminarias siniestras de

— 153 —

la maravillosidad en entendimientos oscuros é intermedios entre el instinto y la razón. Mas no dejó de singularizarse algún caso en que estos preceptos se aplicaran, las más de las veces para favorecer un interés personal.

La voz pública llamó *La Mano Negra* á esta dirección y sentido especial y aun á la corporación ó las varias corporaciones que con ellos tomaron cuerpo; no obstante que de las investigaciones que por razón de las circunstancias hube de hacer entonces, no he deducido que autoricen este terrible título, la aprobación, consentimiento ó nombre convenido por los afiliados. No faltó necio desembarazado de seria ocupación que, por burla sosa y sin gracia, señalara con la mano llena de pez, los puertas de algunos vecinos, y á mi entender el miedo popular aplicó ya el nombre de *Mano Negra* á todos los actos y á todas las afiliaciones que constituían á la sazón, como han constituido siempre y como constantemente constituirán, la llamada reivindicación de los derechos sociales.

En la causa llamada de *La Mano Negra*, que es objeto de estos apuntes, se unió un reglamento manuscrito toscamente, sin que aun leyéndole con el mayor cuidado, pueda darse carácter fidedigno y veraz á su contenido, ni á ciencia cierta, se conozca el conducto por donde llegó á insertarse.

Los recientes acontecimientos de Jerez y el asalto que en este mes de enero de 1892 han dado los anarquistas á aquella riquísima ciudad, me han parecido propios para recordar con interés público, aquel famoso proceso de *La Mano Negra* en que hube de



— 154 —

intervenir como defensor de la mayor parte de los reos.

Éra Coronel de la Guardia civil en el distrito de Jerez el Sr. D. Joaquín Oliver y Pidal, que tan famoso se hizo luego en Madrid por los sucesos estudiantiles del día de Santa Isabel. Por noticias confidenciales que recibió de sus subordinados, averiguó, que en el sitio á campo abierto, denominado *El Algarrobillo*, distrito rural del Valle y término de la ciudad de Jerez, había sido enterrado un hombre llamado Bartolomé Gago Campos, conocido por el apodo del Blanco de Benaocaz. Estas diligencias pasaron al Juzgado instructor y fueron procesados José León y Ortega, Salvador Moreno Piñero, Gregorio Sánchez Novoa, Antonio Valero Hermoso, Juan Ruiz y Ruiz, Manuel Gago de los Santos, Cristóbal Fernández Torrejón, Gonzalo Benítez Alvarez, Rafael Jiménez Becerra, Bartolomé Gago de los Santos, Cayetano Expósito conocido por Cayetano de la Cruz, Agustín Martínez Sáez, Juan Cabezas Franco, Francisco Corbacho Lagos, Pedro Corbacho Lagos, Roque Vázquez García y José Fernández Barrios, que al explicar la causa determinante del delito, revelaron la existencia de una Asociación que se proponía el mutuo auxilio de los trabajadores, en que los socios se conocían por números y existía un centro denominado Comisión Organizadora, con facultad para dictar decretos de muerte contra los afiliados; decretos que, llevando el sello de la Asociación y la firma del Presidente, debían ser ejecutados por los socios, quedando en el misterio el origen y fundamento de ese poder absoluto que poseía la Comisión Organizadora.

— 155 —

Bartolomé Gago Campos era también uno de los apuntados en dicha asociación, cuyo domicilio central estaba en la Villa del Alcornocalejo, siendo su Presidente Francisco Corbacho Lagos, su Vicepresidente Pedro Corbacho Lagos, su Secretario Juan Ruiz y Ruiz maestro de escuela sin título y varios vocales, entre ellos Roque Vázquez García.

El Bartolomé Gago Campos, había sido durante algún tiempo trabajador al servicio de los Corbacho y éstos parece que le adeudaban cierta cantidad que se había hecho constar en un documento.

Ya, antes del 4 de diciembre de 1882, Pedro Corbacho Lagos, que había convocado á una reunión en el rancho de Barea, donde vivía Bartolomé Gago de los Santos, á éste y los demás procesados, Manuel Gago de los Santos, Cristóbal Fernández Torrejón, José León Ortega, Gonzalo Benítez Alvarez, Gregorio Sánchez Novoa, Rafael Jiménez Becerra, Salvador Moreno Piñero, Antonio Valero Hermoso, Agustín Martínez Sáez y Cayetano de la Cruz, propuso que se diese muerte al Blanco de Benaocaz, por la conducta que había observado y atropellos que había cometido con algunas mujeres del Alcornocalejo, y entre ellas una sobrina suya; cuya proposición fué rechazada por todos los demás concurrentes.

En los mismos días y sin que pueda precisarse la fecha, aunque sea racional suponer que fué después de la reunión anterior é inmediata al 4 de diciembre, volvieron á reunirse en la choza de Juan Ruiz, situada en el Alcornocalejo, el mismo Ruiz, Francisco Corbacho Lagos, Pedro Corbacho Lagos y Roque Váz-

— 156 —

quez García, y después de discutir la conducta y vicios del asociado Bartolomé Gago Campos, que á juicio de aquéllos perjudicaban á la Asociación, acordaron su muerte y extendieron una orden, que en concepto de Secretario, escribió Ruiz y Ruiz y firmaron los hermanos Corbacho como Jefes, disponiendo que se comunicara para su ejecución á los asociados del Valle, con encargo de que dieran la muerte los más jóvenes, sin dilación y en un sitio oportuno, porque Gago Campos debía ausentarse al otro día, recomendando que después de muerto se le recogiera un documento que debía llevar consigo.

Esta relación de hechos pone de resalte los tres móviles que presidieron á la comisión del delito, alguno de los cuales pudo ser el motivo y los otros el pretexto; primero la obligación impuesta por el reglamento de la Sociedad, mediante la suposición de que se encuentra mucho rastro en los autos, consistente en que el Blanco de Benaocaz, algo largo de lengua, había revelado los famosos secretos de la comunidad, y merecía, por consiguiente, según su ley, la pena de muerte; segundo, un falso sentimiento de moralidad, no considerando que podía pertenecer á aquella un mozo dado á holgar con mujeres, que había sido una vez sorprendido ya debajo de la cama de su querida por la familia de ésta; tercero, la codicia de que desapareciese el recibo dado por los Corbacho á Gago Campos en comprobación de su débito. Si fuera lícito investigar entre estas causas la que efectivamente dió origen á la muerte del Blanco de Benaocaz, nos fijaríamos en la tercera. Corbacho, para realizar su designio, quiso primero en la reunión del rancho de



— 157 —

Barea sorprender á los asociados, invocando las deshonestidades del desgraciado Gago; no lo logró y apeló entonces al terrible lazo que á todos los obligaba y ataba. Fuera ó nó esta junta el mismo día 4 de diciembre, ó fuera la víspera, la orden la llevó Roque Vázquez García y la entregó en el molino de la Parrilla á Bartolomé Gago de los Santos, primo de la víctima, cuando éste se encontraba también en el molino; y entonces el Gago de los Santos, dispuso que su hermano Manuel se le llevase y le convidara y entretuviera en la taberna de Francisco García Gutiérrez; convocó luego á Gonzalo Benítez Alvarez, Rafael Jiménez Becerra, Salvador Moreno Piñero, Antonio Valero Hermoso, Agustín Martínez Sáez, Juan Cabezas Franco, Cayetano Cruz y Gregorio Sánchez Novoa, quien leyó la orden, aceptando su ejecución todos los concurrentes; y quedándose Bartolomé Gago Campos en la Parrilla, donde ejercía el oficio de maestro de molino.

Cristóbal Fernández Torrejón se fué á la taberna de García Gutiérrez, donde se hallaban bebiendo y departiendo con aparente y leal amistad Manuel Gago de los Santos y Bartolomé Gago Campos, y salieron juntos con dirección al arroyo de la Plantera. Los demás que habían concurrido á la reunión del molino de la Parrilla, fueron antes á apostarse en una hondonada de dicho arroyo, que no es de tránsito frecuente y ordinario, y dista 500 metros del rancho más cercano. En el camino se separó de ellos Juan Cabezas Franco, pretextando que iba á ver á su novia; mas se agregó otro asociado, de nombre José León Ortega, que se encontraron en el camino y á quien dieron

— 158 —

cuenta de la orden y su misión de cumplirla; también se reforzó el grupo con José Fernández Barrios, á quien toparon casualmente y á quien obligaron con amenaza de muerte á concurrir al acto de la ejecución. Hizose noche. Debían ser, según las instrucciones recibidas, personas encargadas para el material cumplimiento de la orden, los dos más jóvenes, ó sea, Gonzalo Benítez Alvarez y Rafael Jiménez Becerra; mas en el momento de aproximarse Bartolomé Gago Campos con su primo Manuel y Cristóbal Fernández Torrejón, el Gonzalo Benítez Alvarez dió la voz de alto, y á la vez Manuel Gago y Fernández Torrejón se separaron un poco de Bartolomé Gago Campos y dispararon contra éste por detrás y á cortísima distancia sus escopetas, causándole dos lesiones mortales, de que cayó al suelo, exclamando: «¡Primo mío, ampárame!» Entonces Gregorio Sánchez Novoa y José León Ortega se arrojaron sobre el moribundo; el primero le tapó la boca y el segundo le hizo en el cuello una herida de poca gravedad. Muerto Bartolomé, su primo hermano Manuel Gago, en cumplimiento también de la orden recibida del Alcornocalejo, le registró y le sacó el documento que comprobaba la deuda de los Corbacho, que luego de haber regresado en el molino, entregó á su hermano Bartolomé, quien le rompió, al mismo tiempo que quemó la orden de muerte. Finalmente, José Fernández Barrios, Agustín Martínez Sáez y Cayetano de la Cruz, cavaron una fosa á distancia de 1.000 metros, y todos los circunstantes ayudaron á la conducción del cadáver y le sepultaron, cubriéndole cuidadosamente de tierra.



El Ministerio público, en el acto del juicio oral, pidió la imposición de la pena de muerte para los dieciséis reos del delito y la absolución de José Fernández Barrios, en quien estimó la circunstancia eximente de haber obrado por miedo insuperable de un mal mayor. La Sala de la Audiencia de Jerez, ante la cual se vió este ruidoso proceso, en juicio oral y público, absolvió también á Juan Cabezas Franco, porque el pretexto á que apeló de ir á ver á la novia, era una forma de desestimiento propio y voluntario; condenó á Pedro Corbacho Lagos, Francisco Corbacho Lagos, Bartolomé Gago de los Santos, Manuel Gago de los Santos, Cristóbal Fernández Torrejón, José León Ortega y Gregorio Sánchez Novoa, en concepto de autores, á la pena de muerte; y á Juan Ruiz y Ruiz Roque Vázquez García, Antonio Valero Hermoso, Salvador Moreno Piñero, Gonzalo Benítez Alvarez, Rafael Jiménez Becerra, Agustín Martínez Sáez y Cayetano de la Cruz, en concepto de cómplices, á sufrir cada uno la pena de diecisiete años y cuatro meses de cadena temporal, con las accesorias de interdicción civil, durante la condena, é inhabilitación absoluta perpetua.

Admitidos de derecho los recursos de casación de los siete condenados á muerte, insistió el Ministerio público en que también se aplicare la misma pena á los otros ocho, con exclusión de Juan Cabezas á quien, con evidente y alocada exageración, había acusado del delito de asesinato en el juicio oral, solicitando también garrote. De estos quince reos, los dos primeros, ó sea los hermanos Corbacho, confiaron su defensa á mi ilustrado y querido amigo D. Eleuterio

— 160 —

Maisonnavé, y doce me confirieron la pesada y dolorosa honra de recurrir en su nombre ante la Sala segunda del Tribunal Supremo, autorizándome para delegar en otros compañeros aquellas defensas que yo no considerase compatibles con las que eligiese para mí. De este mandato, al que no asistió Roque Vázquez García, quien tuvo por letrado defensor al licenciado D. Francisco Belda, di cuenta á la Sala segunda del Tribunal Supremo, designando por defensores: de Bartolomé Gago de los Santos, al Excmo. señor D. Manuel Pedregal; de Cristóbal Fernández Torrejón, al Excmo. Sr. D. Alberto Aguilera y Velasco; de Manuel Gago de los Santos, al Sr. D. José Sidro y Surga; de Gregorio Sánchez Novoa, al Sr. D. Francisco de Henestrosa; de Antonio Valero Hermoso, al Sr. D. Ricardo Díaz Merry; de Salvador Moreno Piñero, al Sr. D. Frutos Martínez Lumbreras; de Gonzalo Benítez Alvarez, al Sr. D. Ignacio Hidalgo Saavedra; de Rafael Jiménez Becerra, al Sr. D. Llambarito Martínez Asenjo y de Agustín Martínez Sáez, al Sr. D. Tomás Ariño. La Sala tuvo á bien denegar por auto de 23 de julio de 1883 esta solicitud y designación, fundándose en el temor de que se dilatara la solución de los recursos; con cuyo motivo le dirigí uno de súplica que se verá en el núm. II; á que recajó el auto de 4 de agosto, también inserto en dicho número, accediendo en un todo á mi pretensión y consagrando el principio de que en el ejercicio del derecho de defensa debe aceptarse el criterio más amplio y compatible con la libertad.

Llegó, por fin, el día de la vista, uno de los más solemnes que se recuerdan en los anales del foro es-

— 161 —

pañol, por la enormidad del delito, por el número de los delincuentes, por la gravedad de la pena y por las proporciones que había tomado la petición fiscal. Llevó la palabra en nombre del Ministerio público, casi improvisamente, el teniente fiscal Sr. D. Manuel Azcutia, porque habiéndose reservado esta causa por su importancia el señor Fiscal propietario, y habiendo cesado en sus funciones, no había tenido tiempo su sucesor de estudiar toda su complejidad. En el número III, verán mis lectores el informe oral que pronuncié, impugnando las conclusiones fiscales y defendiendo los recursos interpuestos en nombre de José León y Ortega, de Juan Ruiz y Ruiz y de Cayetano de la Cruz, que publico, porque representando cada uno de ellos un aspecto de la delincuencia, ha de dar cabal idea del hecho y del derecho en conjunto.

La Sala segunda del Tribunal Supremo desestimó los recursos de derecho de los siete reos condenados á muerte por la Audiencia de Jerez y estimando los dos primeros motivos alegados por el Ministerio público, casó el fallo del Tribunal sentenciador y en su segunda sentencia condenó también á la pena de muerte á Juan Ruiz y Ruiz, Roque Vázquez García, Antonio Valero Hermoso, Salvador Moreno Piñero, Gonzalo Benítez Alvarez, Rafael Jiménez Becerra, Agustín Martínez Sáez y Cayetano de la Cruz.

Por manera que en la terrible igualdad de la muerte se nivelaron hechos distintos, de gradación diversa. Pedro Corbacho y Francisco Corbacho, por haber dado la orden de muerte; Juan Ruiz y Ruiz, por haberla refrendado como secretario de la sociedad se-



creta; Roque Vázquez García, por haberla llevado al molino de la Parrilla; Bartolomé Gago de los Santos, por haberla recibido y convocado los miembros de la asociación, que se conformó con ejecutarla; Manuel Gago de los Santos y Cristóbal Fernández Torrejón, por haber disparado alevosamente los tiros que causaron las heridas mortales de necesidad; José León Ortega, por haber causado en el cuello una herida menos grave al Blanco de Benaocaz; Gregorio Sánchez Novoa, por haber tapado la boca del moribundo, para que no se oyesen sus gritos; todos los demás por haber presenciado el hecho, y Agustín Martínez Sáez y Cayetano de la Cruz, por haber cavado la fosa donde fué enterrado el cadáver.

Así se realizó la justicia humana y así contestó á aquella pregunta que la dirigió: ¡Señor, quince por uno! ¡Es posible que la muerte de un hombre clame por la de quince, y que la justicia de la tierra no se cumpla ó no se sacie, sino pesando quince veces la sangre derramada, en los platillos de su simbólica é inmortal balanza?

Hubieron de concurrir á los campos de Jerez para ejecutar la terrible sentencia, casi todos los verdugos de España. No han pasado más de diez años, y sin embargo, han sido tales los progresos realizados en materia penal, aunque sigamos teniendo el mismo Código, que fuera imposible la reproducción de este sangriento drama. Indudablemente, influye con frecuencia en la severidad de los Tribunales, la preocupación en que suele vivir la sociedad por temores que tienen cierta relación con el delito. Si en el año 82 no hubiese estado Andalucía y España entera bajo la pre-

— 163 —

sión de los terrores que infundía la Asociación internacional, acrecentados por las aspiraciones del reparto de los bienes, ni la Audiencia de Jerez hubiera pronunciado aquel fallo, ni la Sala segunda del Supremo, con verdadero encarnizamiento hubiese doblado sus efectos y pronunciado quince sentencias de muerte en un solo acto.

## II

RECURSO DE SÚPLICA, INTERPUESTO POR EL DOCTOR D. JOSÉ DE CARVAJAL, ANTE LA SALA DE VACACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO.

El Doctor D. José de Carvajal y Hue, Abogado de este Ilustre Colegio, ante la Sala de vacaciones del Tribunal Supremo, en la forma más procedente de derecho, parezco y digo:

Que los reos Bartolomé y Manuel Gago de los Santos, Juan Ruiz y Ruiz, Cristóbal Fernández Torrejón, José León y Ortega, Gregorio Sánchez Novoa, Antonio Valero Hermoso, Salvador Moreno Piñero, Gonzalo Benítez Alvarez, Rafael Jiménez Becerra, Agustín Martínez Sáez y Cayetano Expósito, conocido por Cayetano de la Cruz, habiendo interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia de lo criminal de Jerez, pronunciada el día 15 de junio último, por muerte violenta dada á Bartolomé Gago Campos, (a) el *Blanco de Benaocaz*, me nombraron su Abogado defensor, con la facultad de designar

— 164 —

otros Letrados que concurrieran á la defensa en la representación de todos ó parte de los procesados, por grupos ó separadamente, según el criterio que yo había de formar en vista de los datos del proceso y de la sentencia; cuya facultad venia redactada en términos absolutos y sin limitación, para que la restringiera ó la ampliase, conforme considerara conveniente á los derechos y á los intereses de mis nuevos y desventurados clientes.

Acepté la defensa por deber profesional, y me reservé usar del mandato en el acto de la notificación, según consta de las diligencias de autos, habiendo posteriormente manifestado á la Sala, por escrito de 22 del actual, que conservaba en persona la defensa de José León Ortega, Juan Ruiz y Ruiz y Cayetano de la Cruz, y confiaba las de los demás sentenciados á distinguidísimos compañeros, que habían tenido la abnegación de aceptarlás, por lo mismo que el caso era grave, y hacían el sacrificio de su descanso en la estación rigurosa de las vacaciones.

Esta designación no es arbitraria, y obedece á un sistema de defensa, de cuya relativa bondad soy responsable ante mi conciencia; como tampoco era caprichosa la atribución que los reos me otorgaron para aumentar el número de los defensores respectivos hasta la representación individual que las leyes autorizan, supuesto que, aun excluyendo los sentimientos de humanidad, siempre compatibles con la justicia y dignos del mayor respeto, cuando se trata de un proceso donde se han pronunciado siete sentencias de muerte, y se pide por el Ministerio público la misma pena para otros ocho individuos; aun excluyéndolos,



— 165 —

repito, ordenaba la previsión dejar abierto el camino para que no se perjudicasen unas á otras las respectivas defensas por la acumulación improcedente, superior á las fuerzas de un solo hombre, y siendo distintas las condiciones de delincuencia de esta multitud de reos, en una causa tan complicada como famosa, distintas las penas y distintas las circunstancias, no se agravase la situación con la incompatibilidad que las defensas tuviesen entre sí.

Proveyendo á mi escrito, la Sala se ha dignado resolver en el día 23, que, habiendo sido defendidos los procesados por grupos ante la Audiencia de lo criminal de Jerez, haga yo la designación de defensores en la misma forma, y por tanto, que nombre al Abogado que ha de defender á José León Ortega, Salvador Moreno Piñero, Gregorio Sánchez Novoa y Antonio Valero Hermoso; otro para Juan Ruiz y Ruiz, Manuel Gago de los Santos, Cristóbal Fernández Torrejón, Gonzalo Benítez Alvarez y Rafael Jiménez Becerra, y otro para Bartolomé Gago de los Santos, Cayetano Expósito ó de la Cruz y Agustín Martínez Sáez; cuya resolución, que se me ha notificado en el mismo día, promueve el presente recurso de súplica.

Confío plenamente que las razones en las cuales voy á fundarle, convencerán á la Sala de la justicia de mi petición; porque ellas tienen su raíz en la naturaleza íntima del derecho, cuya esencia se percibe pura en la atmósfera donde tiene ese Tribunal su altísima esfera de acción, como guardador, no solamente de los preceptos de nuestra legislación civil, sino de los eternos é inmutables principios en que se cimentan.

— 166 —

Voy á decirlo de una vez, tal como lo siento y lo pienso, aunque parezcan osadías de la convicción los respetos de la verdad: el auto suplicado cuyo texto viene ya inserto en este escrito, disminuye los derechos de la defensa.

Por complejo que sea un hecho criminal, el delito es personalísimo, y todas sus consecuencias y derivaciones llevan este propio sello; que así como ningún hombre comete delitos por actos ajenos, así tampoco es juzgado y penado por extrañas responsabilidades. Ese carácter individual permanece íntegro en todas las actuaciones judiciales relativas al delincuente, y por ende la naturaleza manda que la defensa sea individual, á no ser cuando el reo espontáneamente combina este derecho con el de otros, ó le abandona, en cuyo caso la sociedad suple la deficiencia.

Con este principio se enlaza el de que el reo tiene libertad de usar de todos los medios posibles para probar su inculpabilidad.

Enfrente de estas manifestaciones del derecho individual, sustancial, primario, universalmente reconocido, no puede prevalecer disposición alguna que le obligue á confundir su defensa con otra, ó que le coarte las facultades más ó menos eficaces, más ó menos imaginarias, de demostrar su inocencia.

*Nemo condemnatus nisi auditus vel advocatus.*

En esta hermosa máxima del derecho romano se cifra y compendia todo el de defensa estimado y declarado desde la antigüedad más remota, antes y con preferencia por el sentimiento instintivo que por la misma noción clara y perfecta de la justicia.

Según la interesante narración de Plutarco, habien-



— 167 —

do acusado Aristides á un conciudadano suyo, el Tribunal, conmovido por la oración del Justo, se apres-  
taba á fallar, sin escuchar la defensa. *Nò sin oirle!* ex-  
clamó el gran Ateniense, alzándose en el santuario  
de las leyes, como representante del derecho natural,  
enfrente de la arbitrariedad humana. El príncipe de  
los oradores forenses se inspira en esta doctrina, al  
pronunciar sus más brillantes párrafos contra el pre-  
tor Verres, famoso por sus conclusiones; y si durante  
el eclipse de la legislación y de la jurisprudencia ro-  
manas, al amparo del tumulto y de la confusión de  
los tiempos medievos, casi hasta nuestros días, ha po-  
dido ser el derecho y la libertad de la defensa objeto  
de contradicción en las controversias y de imperti-  
nentes y abusivas limitaciones en las leyes, después  
de Filangieri, de Beccaria, de Dupin, de su consagra-  
ción definitiva en la ciencia y de su afirmación en el  
espíritu y en la letra de los Códigos, ningún otro de-  
recho, ninguna otra libertad, resplandecen con mayor  
pureza ni se acatan con más profundo convencimien-  
to y más general conformidad.

¿Para qué, ante la Sala, donde figuran eminentes  
jurisconsultos del foro patrio, habría yo de hacer en  
apoyo de mi tesis, fácil y abundante rebusco en la  
Setena partida, en las Leyes Recopiladas, en nues-  
tros modernos Códigos de Enjuiciamiento, en las  
mismas sabias sentencias del Tribunal Supremo? ¿Pa-  
ra qué habría yo de recordar la elocuencia con que  
la mantuvieron gloriosamente los llorados talentos que  
han ilustrado los anales de la ciencia jurídica nacional?

Tal hiciera, si dudara; pero no teniendo un punto  
de vacilación en la creencia del respeto con que la

— 168 —

Sala mira el derecho de defensa, alegar en esta materia sería ofender mi propia causa y ofender á la Sala, con las figuras de la duda. Todos estamos unánimes en que, según dice gallardamente uno de los primeros escritores jurídicos contemporáneos, «es verdad que á las veces la defensa sirve para que los reos esquiven la acción criminal y *se dilaten los procesos*; pero entre los mayores males de la administración de justicia, ninguno puede equipararse á la muerte de un inocente. Valiera más absolver mil culpables, y si la defensa ha salvado algunos de éstos, también ha impedido que sucumban muchos de aquéllos.»

Esta cita es tanto más oportuna cuanto que, si hubiésemos de atenernos á lo que de público se dice y aun aseguran los órganos de la opinión—por lo regular bien informados,—la determinación de la Sala se origina en el temor de que *se dilate la solución de los recursos*, y en este período se emplee más tiempo del que ha durado la substanciación del proceso en el juicio oral y público.

Trátase de este ó de otros motivos de determinación menos flacos, ello es lo cierto que han tenido por un momento apariencias de fuerza tales, que al pronunciar la Sala el auto bajo su influjo, han obscurecido á su vista la minoración que resultaba en el derecho y la libertad de la defensa, que es lo que me propongo demostrar; porque si pruebo que la defensa está disminuída, coartada y debilitada, siendo superior y primaria por su esencia y naturaleza, tengo por seguro que la Sala desatenderá cualesquiera otras razones circunstanciales y secundarias y accederá á mi rendida súplica.

— 169 —

Los recurrentes habían nombrado ya sus defensores, en uso de atribuciones libérrimas nunca desmentidas ó limitadas por la razón, por la ley ó por la práctica. La Sala, al desestimar estas designaciones, al ordenarles que formen tres grupos precisos, al resolver quiénes han de constituir los grupos, y al notificarles en mi representación que para cada uno de éstos, nombren los que le compongan un solo Letrado defensor, impone su voluntad sobre la defensa á la voluntad de los defendidos, que es sagrada é inviolable, y aquella libertad de que antes hablaba, queda menoscabada en su misma fuente original, que es el derecho del acusado á elegir su consejo y su voz ante los Tribunales juzgadores, formando entonces defensor y defendido una sola personalidad, creada en virtud del mutuo lazo de la elección libre y de la libre aceptación.

Esta unión necesaria se rompe en cuanto el reo no tiene el defensor que quiere; además, no excusaré repetirlo, que conviene: el derecho de defensa es individual, y aquel procedimiento le haría colectivo, contra el propósito de los interesados; porque tiene multiplicadas líneas de contacto, y desde ciertos puntos de vista que no hago más que apuntar, se confunde con la imposición de defensor al acusado; por manera que viola, — perdóneseme la expresión, — el derecho de la individualidad y la libertad en el hecho.

Discurriendo sobre este punto, dice el ilustre Dupin: «Hay un derecho que no se puede negar á un procesado, y es de fijo el de escoger libremente el hombre á quien ha de confiar el secreto de sus pen-



— 179 —

samientos, de sus errores, de sus debilidades, de toda su existencia.»

Teniendo el Tribunal, como tiene, lo digo sin artificio, grabados estos principios en su noble conciencia, y estando constituido por elevadísima misión en su celador y guardián, advertirá que su auto con ellos no se compadece; porque renunciar de mal grado al defensor elegido, ponerse de acuerdo con otros delinquentes para nombrar uno que por necesidad ha de ser distinto, confundir su propia vindicación con la ajena, eso es no tener defensa: aquella defensa total, voluntaria, segura, individual, que á nada se subordina, que á su albedrío se desarrolla, que en la naturaleza se funda, y que deben mirar con religioso acatamiento las leyes y los hombres.

Nadie puede ser juzgado sin ser defendido; y por este precepto daba Abogado el Pretor, según reza el Digesto, á quien no le tenía: *si non habebunt advocatum, ego dabo*; y análogo mandato hace al Juez la ley de Partida; y ahora, pasando por alto tiempos y citas, tenemos la ley adjetiva de lo criminal que dispone el nombramiento de Abogados de oficio, *en el caso de que los reos no los hubiesen nombrado*, después de la notificación del auto de procesamiento. Esto significa que la acción social, figurada debidamente en los Tribunales, suplía la falta de la acción individual representada en el reo, y le ampara, aun contra el error de su entendimiento que no ha movido su voluntad, ó contra su apatía, su soledad ó su impotencia; cuya protección, no sólo revela el valimiento de este principio de defensa, concebido así, íntegro é independiente de su personificación en el individuo, sino acu-

— 171 —

de, fuera de esto, al interés social de descubrir la culpabilidad ó la inocencia, á cuyos dos resultados, importantes por igual para la sociedad, coadyuva, según antigua doctrina, también por igual el consejo, la voz y la intervención del reo en el debate jurídico. Entonces se comprende que, á la inversa de Inglaterra, donde es práctica que aquel tenga dos consejeros, sin duda por el predominio que allí ejerce lo individual sobre lo social, cuando los procesados son varios y no han elegido sus respectivos defensores, los Tribunales obedezcan á la tendencia de su misión hacia lo colectivo, como de la sociedad procedente, y sobreponiéndose lo social á lo individual en aquella conjunción de hecho mixta de lo uno y de lo otro, encomienden la defensa total á un Abogado ó la dividan en grupos con el mismo objeto.

Aun así, esta determinación tiene que moverse por alguna causa y obedecer á racionales motivos. Será justa cuando no perjudique á la defensa individual, y puedan, por consiguiente, y aun deban atenderse, circunstancias secundarias de brevedad y de general conveniencia. Será injusta, y no me parece ocioso advertir que estoy hablando en hipótesis y en principio, cuando por cualquier arte ó manera, tengan ó nó su relativa importancia los móviles de la resolución, dañe ésta á la libertad de defensa de alguno de los asociados en aquella comunidad de derecho. Por eso la regla que ha de servir para acoger ó para rechazar el procedimiento de acumulación, es que la defensa sea ó nó común, es decir, que el delito sea uno, y que todos los acusados lo estén por la comisión del mismo, en idénticas condiciones de delincuencia, según

— 172 —

los datos que arroja el período de instrucción. Esto lo digo con relación al proceso mismo; porque respecto del recurso, la situación se define en otros términos y se plantea en otro terreno, como adelante se hará memoria.

La instrucción suministra una idea imperfecta del delito y de la delincuencia; de donde se deduce que también es manca é insegura la base de la acumulación de la defensa, como que aparece formada por cálculo y tanteo, según los elementos rudimentarios del proceso; pero al cabo con ella se entra en la prueba, en el juicio y en el debate, y se llega hasta la sentencia.

Precisamente entonces todo cambia; se purga el hecho de la vanidad de las apariencias, el conocimiento del delito se perfecciona, la delincuencia se revela y califica, la pena se pronuncia, y toda esta novedad se complica con las circunstancias atenuantes ó agravantes que concurren en la participación de cada reo.

De la instrucción nace el proceso; de la sentencia nace el recurso.

Aquel, ya lo hemos visto, es elemental, vago é imperfecto, y la acumulación de la defensa ha adolecido de las mismas faltas naturales; este es claro, definido y concreto; su objeto lo es también, su camino y procedimiento breves, sencillos y taxativos. ¿Sería lógico, ni prudente, ni justo, acumular en este período las defensas por las mismas analogías que sirvieron para el proceso, y las cuales, bien ó mal concebidas en aquella ocasión, útiles ó perjudiciales en la práctica, han dejado ya de existir, reemplazándolas otras ó surgiendo en el fondo común de la unidad



— 173 —

del delito cada una de las delincuencias respectivas con sus separados caracteres, con sus tristes pero distintos colores, con su propia individualidad?

La defensa del recurso por infracción de ley ó por quebrantamiento de forma, es todavía más personal que la defensa del delito en el juicio; no embargante que concibo casos en los cuales quepa ser conjunta, por voluntad de los procesados ó del Tribunal, cuando aquéllos no han usado de su derecho. Discurriendo en este último extremo, la acumulación ha de obedecer al principio antes enunciado de que la defensa sea común; pero hay que tener en cuenta cómo se han destacado de la sentencia las unidades de la culpabilidad, para no confundirlas y barajarlas, sino distinguirlas y apartarlas y clasificarlas según los datos que el fallo aporta al recurso, es á saber: los hechos probados, cuando todos no comprenden á todos, las diferentes calificaciones, las circunstancias agravantes ó atenuantes de cada reo y sus penas respectivas.

Examinaré á la luz de estos principios los grupos mandados formar por el auto de 23 del presente mes, y procuraré hacerlo con la parsimonia conveniente para no prejuzgar la defensa.

En el primer grupo figuran revueltos José León Ortega, que no asistió á la lectura de la orden de muerte, que topó por casualidad á los conjurados procedentes del molino, que se fué con ellos, que causó á Bartolomé Gago Campos la herida menos grave en el cuello, después de haber recibido aquel infeliz los dos tiros mortales de necesidad, y que está sentenciado á muerte como autor; Salvador Moreno Piñero y Antonio Valero Hermoso, figuras decorativas de este lógu-

— 174 —

bre drama, que nada dicen y que nada hacen, que son considerados como cómplices y condenados á cadena temporal; finalmente, Gregorio Sánchez Novoa, el lector de la orden de los Corbacho, llamado previamente á la Parrilla para este objeto, que también es calificado como autor, y penado de muerte por haber tapado la boca y nariz del interfecto.

Comprende el segundo grupo á Juan Ruiz y Ruiz, secretario de la «Comisión organizadora» del Alcornocalejo, cuyo delito consiste en haber asistido al tenebroso y arbitrario Tribunal, y quizás escrito de su puño el criminal mandato, teniéndosele por cómplice y castigándosele con diez y siete años de cadena temporal; á Manuel Gago de los Santos y á Cristóbal Fernández Torrejón, autores de las dos heridas mortales de necesidad, que no habían asistido á la conspiración del molino, que componían el grupo procedente de la taberna con Gago Campos, y que han sido sentenciados á la pena de muerte; á Gonzalo Benítez Álvarez, quien fué uno de los designados para la ejecución y dió la voz de alto, al encontrarse las dos partidas en el Arroyo de la Plantera; y por último á Rafael Jiménez Becerra, á quien también por razón de su juventud, tocó ser el segundo nombrado para quitar la vida á Gago Campos; ninguno de los cuales cumplió con esta misión cruenta, y ambos han sido penados con cadena temporal.

El tercer grupo lo forman Bartolomé Gago de los Santos, intermediario entre la bárbara sentencia del Alcornocalejo y su extraño y misterioso cumplimiento, que no ejecutó ni presencié el crimen, sino que le dispuso, condenado á la última pena con la cir-



— 175 —

cuntancia especial de reincidente; Cayetano de la Cruz y Agustín Martínez Sáez, meros cómplices, cuya acción se redujo á cavar la fosa donde se dió sepultura á la víctima.

Sería impertinente después de este relato, fiel extracto del fallo pronunciado por la Audiencia de lo criminal de Jerez, insistir en la imposibilidad racional de que pueda cumplirse el auto suplicado y hacerse la defensa por grupos. Quiénes son autores, quiénes son cómplices, quiénes no son tal vez ni lo uno ni lo otro, según los hechos probados; para aquéllos la mayor de las penas, para éstos la cadena temporal; circunstancias atenuantes distintas que á todos no se extienden ni benefician; circunstancias agravantes de alevosía, premeditación, despoblado y comisión del delito en cuadrilla, que á todos se aplican, algunas de las cuales no existen y las demás á pocos comprenden; y sobre esto, que hace de cada reo una entidad aparte, se cierne lo desconocido, en la forma del recurso interpuesto á su vez por el Ministerio público, cuyos fundamentos ignora la defensa y tiene el deber de prepararse para combatirle, aplicando las reglas de la previsión en cuanto puede alcanzar esta preciosa facultad humana.

No creo que la Sala insista y el auto prevalezca; ni debo ni puedo creerlo; esto no sería una defensa, sino una semblanza de tal.

Para finalizar mi razonamiento, y para que la Sala recobre en esta ocasión su fe, sólo amortiguada por accidente, en la integridad del derecho de defensa, ruégola considere que se trata de cinco sentencias de pena capital; que sin indiscreción puede afirmarse ya

— 176 —

que para los otros siete reos restantes y para otro más la pide también el Ministerio público; que en diferente recurso sobre el mismo delito hay dos condenados á muerte; en horrenda suma, que se va á debatir la vida de quince hombres y la fabricación de quince patibulos; algo parecido á aquellos castigos colectivos del Dios del Viejo Testamento, que nos confunden y nos aturden, entre el horror y el respeto. Pero el Tribunal eterno gozaba y goza, para acallar las inquietudes de la duda ó las blasfemias de la incredulidad, del concepto de la justicia absoluta; mientras que los tribunales de la tierra, por altos que estén, humanos son, y nunca podrían imitar aquellos tremendos ejemplos, sin rodear sus fallos de todas las solemnidades que los autorizan á los ojos de la sociedad.

En esta segunda parte del presente escrito, relativa á la acumulación, he venido discuriendo en la hipótesis de que la Sala se encontrara, según los preceptos de la ley de Enjuiciamiento aplicables á los reos que no designan Abogados, con facultad para intervenir en la organización de la defensa; pero tal no es el caso presente, y habiendo llegado el momento de resumir, considero demostrado que faltan en el auto de 23 de este mes los dos requisitos esenciales para que, reemplazando ó supliendo la acción social á la individual, que es la primaria, pudiera prosperar en justicia la limitación de los defensores y la formación y composición de los grupos.

Primero. Porque en uso de un derecho indiscutible, los reos han elegido sus respectivos Abogados.

— 177 —

Segundo. Porque la defensa no es ni puede ser común.

Aquel auto lesiona, por consiguiente, el derecho de defensa y coarta y debilita su libre ejercicio. Centinelas de esta preciosa prerrogativa somos los Abogados, puesto que nosotros la ejercemos en nombre de aquellos que la poseen, culpables ó inocentes. Nuestro deber es conservarla íntegra, tal como se nos ha transmitido, y ampliarla, si posible fuera, según el movimiento y compás del progreso social y jurídico; en cumplimiento de cuya estrecha religión presento este recurso de súplica, justificado en la forma por los artículos 211, 236 y 238 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Estas citas legales me llevan de la mano y naturalmente á ocuparme en una cuestión secundaria, que se refiere á la admisión del recurso de súplica, el cual no se da, según la ley civil, contra las providencias de mera tramitación que dicte el Tribunal Supremo (art. 401 combinado con el 405 de la ley de Enjuiciamiento civil), porque contra ellas no se otorga otro recurso que el de responsabilidad; y aunque no se expresa la misma doctrina con igual claridad en la de Enjuiciamiento criminal, el texto de los artículos 236 y 238 indica que este recurso no puede interponerse sino contra los autos.

No sé cómo se habrá clasificado la referida disposición de la Sala, si de auto ó de providencia; pero como quiera que se haya apellidado, es un auto por su naturaleza y por su forma; que los nombres trocados no cambian la esencia de las cosas.

Según el art. 668 de la ley orgánica del Poder ju-



— 178 —

dicial, son providencias las resoluciones de mera tramitación, y es evidente que este no es el carácter del acuerdo de la Sala, porque resuelve un punto incidental, una verdadera cuestión y provee á una petición de defensa formulada en mi escrito de 22 del corriente. Así es, que la Sala no ha podido menos de fundar su decisión, y lo ha hecho, considerando que los grupos debían disponerse en la misma forma y con la misma constitución que tuvieron al iniciarse el proceso después del período de instrucción. Auto es, por consiguiente, y según los artículos citados, procede el presente recurso.

Por virtud de las razones expuestas:

A la Sala suplico se sirva suplir y enmendar su auto del día 23, en los términos manifestados por mi escrito anterior; por ser de justicia que pido en Madrid, á 28 de julio de 1883.

Otrosí, digo: que firmo el actual escrito con el mismo carácter con que dirigí mi precedente del 22 á la Sala, y con que ésta ordenó que se me notificara su auto, es decir, como mandatario de los procesados para la designación de los defensores. Esto no obstante, habiendo llegado á saber que la Sala ha nombrado Procurador de los reos á D. Simón Garrido de Sahagún, dicho señor, en esta representación, autoriza conmigo el recurso de súplica y este otrosí, que tiene por objeto manifestar además á la Sala la dificultad racional y legal que existe para que un solo Procurador alegue en nombre de doce reos, cuyas defensas pueden ser incompatibles.

Por lo tanto:

A la Sala suplico que, habiendo por hecha aquella

— 179 —

manifestación, con copia simple del presente escrito, se sirva nombrar un procurador que asista en cada una de las defensas propuestas; por ser de justicia etcétera. Madrid fecha ut antea. *Dr. F. de Carvajal.*  
—*Simón Garrido.*

### AUTO

*Sala de vacaciones.—Secretaría.*—En vista del recurso de súplica interpuesto por el Dr. Carvajal contra el proveído de la Sala de 23 de julio último, relativo á la designación de defensores para los procesados recurrentes en la causa por asesinato á Bartolomé Gago Campos, y lo manifestado por el señor Fiscal, la Sala ha dictado en el día de hoy el

*Auto siguiente.*—Resultando: que notificado al Doctor Carvajal la providencia de 23 de julio último, presentó contra la misma, dentro de término, recurso de súplica, acompañando la copia que la ley previene, la cual fué entregada al señor Fiscal.

Resultando: que este Ministerio en su dictamen de 2 del corriente, manifiesta que la Sala puede acceder á la súplica interpuesta;

Considerando: que en el ejercicio del derecho de defensa debe aceptarse el criterio más amplio y compatible con la libertad y extensión de la misma, siempre que á ello no se oponga prescripción terminante de la ley, lo cual no sucede en el presente caso;

De conformidad con lo informado por el señor Fiscal, se suple y enmienda la providencia suplicada de 23 de julio último; se tiene por hecha la designación de defensores en la forma que determina el escrito del Dr. Carvajal, de 22 de julio, obrante al fólío 180;

— 180 —

y entendiéndose nombrado el Procurador Garrido para la representación de Juan Ruiz y Ruiz, José León y Ortega y Cayetano de la Cruz, cuya defensa se reserva el Dr. Carvajal, pásese el rollo al Colegio de Procuradores, para nombramiento de los que se hallen en turno para la representación de Gregorio Sánchez Novoa, Manuel Gago de los Santos, Cristóbal Fernández Torrejón, Salvador Moreno Piñero, Agustín Martínez Sáez, Antonio Valero Hermoso, Gonzalo Benítez Álvarez, Rafael Jiménez Becerra y Bartolomé Gago de los Santos, nombrándose un Procurador para cada uno; y en cuanto á Roque Vázquez García, que no viene incluido entre los que firman el escrito del folio 159, pero que también ha preparado recurso, nómbrasele por los respectivos Decanos, el Abogado que le ha de defender y el Procurador que le ha de representar, y verificados los nombramientos, dese cuenta.

Madrid 4 de agosto de 1883. — *Licenciado José María Pantoja.*

### III

INFORME DEL LETRADO, DOCTOR D. JOSÉ DE CARVAJAL,  
DEFENSOR DE JUAN RUIZ, CAYETANO DE LA CRUZ Y  
JOSÉ LEÓN Y ORTEGA.

En nombre de Juan Ruiz y Ruiz y de Cayetano de la Cruz, contra el recurso interpuesto por el Ministerio público; en nombre de los mismos, sosteniendo el que he presentado ante este Tribunal, y en nom-

— 181 —

bre de José León y Ortega, para apoyar el que está admitido de derecho.

Ha cumplido ya el Ministerio público con su solemne, pero triste deber; ahora toca á la defensa cumplir con el suyo, no menos soberano, pero más grato; porque no solamente acude á pedir ante la Sala un beneficio para sus representados, sino que también reclama, con el vigor y con el convencimiento que arraiga la posesión del derecho, una satisfacción para la ley.

Severo, quizá implacable, ha estado el Ministerio público. Siete hombres han sido en esta causa condenados á muerte; á ocho más avanza con sanguinaria codicia esa acusación, que yo pedía ardientemente á la Sala hace una semana que atajase en la puerta de este majestuoso Pretorio, no admitiendo que se hablase de más muertes, en voz de los augustos fueros de la justicia. Entonces, volviéndome hacia el Tribunal, por un movimiento espontáneo de mi alma, declaré: ¡Señor, quince por uno! ¿Es posible que la muerte de un hombre clame por la de quince, y que la justicia de la tierra no se cumpla ó no se sacie, sino pesando quince veces la sangre derramada, en los platillos de su inmortal y simbólica balanza?

Nó; eso no puede ser. Cuando el Fiscal hablaba, con mucha elocuencia, con mucho ardimiento, con mucha fe, sin la menor duda, circulaba por todos los ámbitos de este lugar y movía todas las voluntades, desde las que aquí son soberanas en sus fallos á las que son respetables por sus esperanzas, desde esas sillas venerables á las postreras filas del público que se apiña por presenciar nuestro debate jurídico, un



— 182 —

estremecimiento singular, horror y temor á un tiempo, sacudida de la naturaleza que se revelaba por los privilegios de la vida, clamor de la humanidad, invisible, pero cierto, el cual hubiese llegado ¡qué digo! llegó á los pies de este Tribunal, no en forma sensible, sino por la comunidad misteriosa de las conciencias, en aquel sublime y universal sentimiento. ¡Ah! Existe un derecho que no está escrito, pero igualmente sagrado que el de la ley, y á ese derecho correspondió aquel estremecimiento de terror por la horrenda acusación, de temor, por lo mismo que se presentaba tan gallarda, engreída y segura del éxito; pero este Tribunal no olvidará que la extrema justicia, la justicia estricta, es desde hace muchos siglos, la extrema, la estricta injusticia.

Y esto no lo digo yo; se había ya dicho en tiempo del más grande de los oradores forenses y era como proverbio por todas partes conocido y proclamado con la categoría de verdad.

Así lo dice Cicerón en el libro I *De Officiis*. *Exsistunt etiam saepe injuriae calumnia quadam et nimis callida, sed malitiosa juris interpretatione; ex quo illud, summum jus, summa injuria, factum est jam tritum sermone proverbium.*

Y esto era hace veinte siglos, antes de que en las fuentes puras y clarísimas del cristianismo se hubiesen templado los rigores del derecho antiguo, cuando en el mundo principiaba á notarse el movimiento precursor de la civilización nueva que influía en la justicia, como en las demás ideas é instituciones que se relacionan con el orden social.

Por eso digo que no puede ser. En un momento



— 183 —

de exaltación el Ministerio público invocará el derecho estricto; pero ningún Tribunal le aplicará, porque es una estricta injusticia, no solamente según los filósofos, sino según los jurisconsultos, y yo citaría en estos momentos multitud de sentencias de la jurisprudencia antigua y la moderna, si no sospechase con razón, incurrir en nota de enfadoso, ó pretendiese hacer gala de erudición en materia tan conocida.

Dirigiéndose el gran maestro de la elocuencia forense á un Tribunal por lo seguro menos culto, menos humanitario, menos justo, en una palabra, que el Tribunal ante quien alegó, y encarándose con el Pretor de Sicilia, exclamaba, previniendo por medio de artístico exordio el ánimo de los Jueces, los cuales pudieran recelar que su acusación fuese rigurosa y extrema:

*«Non agam summo jure tecum: non dicam id quod debeam forsitan obtinere.»* ¡Qué noble y hasta caballeroso ejemplo de lo que debe ser una acusación firme, pero moderada, enérgica sin violencia, fundada en la ley expresa y circunscrita por la ley natural! Yo no usaré contigo del derecho estricto; yo no diré siquiera aquello que quizás debería obtener. El señor Fiscal ha dado muestras brillantes de singular elocuencia; pero no ha imitado á Cicerón, aseguando sus impetus, y conciliando con los deberes de la humanidad aquellos que su cargo le impone. Por haberse dejado correr á los mayores extremos del rigor y haberse ayudado de la imaginación, puedo yo ahora devolverle las palabras del Abogado romano, y reconvénirle:

*Tu agis summo jure nobiscum; tu dicis omnia quae credis obtinenda.*

— 184 —

Si; el Fiscal dice no solamente lo que puede obtener en estricto derecho, sino todo aquello que cree, por arranque de fantasía, que pudiera obtener, mas por fortuna en el caso presente, señor, no hay que salirse para desvirtuar la impugnación del Ministerio público, de los términos estrictos del derecho, y yo he de probar que en este juicio, dentro de sus reducidos límites, tal como ha llegado al conocimiento del Tribunal Supremo, no puede prevalecer, no debe prevalecer, está fuera de derecho el recurso intentado por el Ministerio público.

Con motivo pedía éste la benevolencia de la Sala; y yo arguyo que sería para sus doctrinas; no la necesitaba para la belleza de su oración y para las formas literarias con que la ha engalanado, bastándole en este punto el desapasionado fallo del buen gusto; luego, al reclamar benevolencia, pedía aquello que la Sala no podía concederle: que ni un sentimiento tan tierno y desinteresado corresponde á una acusación tan áspera y desapiadada, ni enfrente del reo se concibe que haya blanduras de corazón para quien afea su delito con desmesura.

En algo tenía razón el Sr. Fiscal, pero se quedaba corto; no es su tarea superior á sus fuerzas, como la mía lo es seguramente, no; es superior á todas las fuerzas humanas; porque consiste en obscurecer el derecho eterno á los ojos del Tribunal y en dar los resplandores de la luz y en poner los caracteres de la vida en formas fantásticas, de idealidad sombría, que figuran el derecho y no le son.

Este Tribunal es el centinela de la verdad jurídica y no se dejará sorprender, dejando transpasar el sagra-

— 185 —

do muro, novedades, invenciones, teorías, procedimientos que el cielo disculpa, pero que no se avienen con la ciencia y que á la conciencia universal repugnan.

Estas ideas me han puesto señor, casi directamente en comunicación con las que han de servirme para impugnar el recurso del Ministerio público, en cuya coyuntura se me acuerda la necesidad de poner orden en todas ellas, por lo cual dividiré mi informe en cinco partes; la primera, será aquella en que defienda de la nueva acusación fiscal á Juan Ruiz y Ruiz; en la segunda, haré lo propio respecto de Cayetano de la Cruz; en la tercera y cuarta sustentaré respectivamente los recursos que he interpuesto á nombre de ambos contra la severidad de la sentencia pronunciada en 18 de junio del año pasado, por la Audiencia de lo criminal de Jerez, y reservaré para la última el que está admitido de derecho, á favor de José León y Ortega, condenado á la pena de muerte.

Tengo el firme propósito de no dejarme arrastrar por ninguna exageración; no callaré, ni siquiera amonorearé la delincuencia de mis defendidos; no visitaré las pasiones en los escondidos senos del corazón, ni me remontaré con vuelo fatigoso á las regiones de la imaginativa; y con el objeto de no errar, por no entenderlo bien, es mi intención no apartarme del sano sentido y doctrina del Tribunal Supremo: que es dar por probados de toda evidencia los hechos que el inferior declara como tales.

Aun así, vacilaría no poco, si en mí propio confiara; pero venturosamente, somos muchos, aunque ninguno sobra. Ha dicho el Sr. Fiscal, con salvedades



— 186 —

que, si valieran, destruirían su advertencia, que supliríamos la falta de derecho con la fuerza del número. Será ingeniosa, pero no es verdadera la frase; porque hay mucha materia legal, y ésta se halla diseminada y repartida en distintas delincuencias individuales, conexas con el delito, que han exigido defensas individuales; de donde en este momento recojo consuelo para mi espíritu y refrigerio para mi tarea. Son tantas, tan importantes y tan graves las cuestiones legales suscitadas por esta causa y en este período, como que, modestia aparte, considero que esta faena exigiría otro entendimiento más perspicaz y otra palabra más elocuente que la mía. A bien que, después de hablar yo, han de hablar mis compañeros, y aun dos de ellos han informado ya con soberano lucimiento, pero quedando íntegra de nuestra cuenta la cuestión general, en razón de que por la naturaleza de sus informes circunscritos á recursos admitidos de derecho, no se oponían al del Sr. Fiscal. En los que vengan detrás de mí, fio la más pesada carga, que será tratar de lo que yo no trate, ó por falta de alcances ó de fuerzas, y pueda sin embargo aprovechar á todos; porque lo menos que yo deje en realidad, será lo más en relación conmigo; y lo más que yo dejara, sería lo menos en relación con ellos. Así, todos apiñados en lo común, aunque separados en lo particular y privativo, llevaremos al ánimo del Tribunal el convencimiento que sospecho, con alegría, va teniendo ya á la hora presente, aun antes de escuchar los respectivos alegatos, por la misma debilidad que habrá advertido en la argumentación del Sr. Fiscal, cuyo advertimiento ratificará luego la flojedad del reparo que oponga á nues-

— 187 —

tras razones, de que el recurso del Ministerio público no puede prosperar.

Habíame maravillado el dictamen escrito que consta en esos voluminosos autos, por la falta completa de doctrina legal, por lo temeroso de las ideas, por los arrebatos del estilo y por la indignación del lenguaje: pero á riesgo de parecer severo á mi vez, como primer deber es respetar los fueros de la verdad, he de decir que en el informe oral, el dignísimo funcionario público con quien discuto, se ha excedido á sí mismo, y con sus nuevos ardores, aquellos aparecen como pálidos ó apagados.

En los primeros días del año último, el crimen de la Parrilla, más que por lo significativo en sí, por la relación que se estableció entre él y el estado social de Andalucía, y fuerza es decirlo, por la naturaleza misma de las medidas que se adoptaron, provocó en toda aquella hermosa comarca cierto estado de alarma, que rápidamente se propagó á España entera; pero hoy, cuando ya se ha proporcionado espacio para la reflexión, cuando se han pesado y medido todas las consecuencias, cuando á esa excitación febril ha sucedido la calma, cuando se ha visto que si, aparte de otras asociaciones públicamente consentidas, existe la agrupación misteriosa que con tan vivos y negros colores ha descrito el Sr. Fiscal, sus efectos terroíficos y sus planes de venganza se han detenido ante el homicidio de uno de sus socios y no han transcendido á esa burguesía con tanto estrépito y escándalo maldecida y condenada, ¿no es maravilla que el Ministerio público resucite todos los terrores desvanecidos, califique aquel crimen de lo más espantoso, ho-

— 188 —

rroroso é inaudito, y vuelva á hablar de una sociedad con Tribunales que usan el hierro, el fuego y el veneno, y obligan á los hijos á violentar las leyes más sagradas de la naturaleza y á matar á sus propios padres? ¿No tiene un aspecto en verdad muy apartado de este género trágico, y propenso á dominarse por otro más ameno de la literatura, el echar de menos para describir esta situación, la culta pluma de Victoriano Sardou, autor de finisimas comedias, junto á la brocha de Bouchardy, el dramaturgo de los crímenes espantables y de las pasiones repugnantes?

Si desnudamos de todo este aparato la acusación fiscal, no queda nada sino la negación que oponemos de que hayan venido á comprometerse por el crimen de la Parrilla los grandes intereses sociales, ni que se halle Andalucía en ese estado de perturbación que semeja como los horrores del caos, entregada á una guerra sin tregua, apocados los propietarios, rebeldes los campesinos, quemadas las mieses, arrancadas las viñas, abandonados los cortijos, vencido el invencible derecho de propiedad, desquiciadas en fin, las bases de la organización sobre que han de descansar eternamente las sociedades humanas.

En los transportes de esta visión, no ha parado mientes el Ministerio público en los dos hechos importantes sobre que ha de girar toda la defensa de los procesados, á saber: que no es uno solo el delito cometido por todos, sino que son tres; y que dentro de ellos, cada uno de los reos se destaca con caracteres especiales de delincuencia, por cuya razón les ha otorgado la Sala esta defensa parcial.

El Ministerio publico no ha seguido un camino tan



— 189 —

juiciosa y sabiamente trazado, y ha vuelto á crear una colectividad monstruosa, desatendiendo que, aunque uno pudiera conceptuarse el hecho delincuente, los quince procesados no podían hallarse en idéntica categoría de criminalidad, por lo mismo de que eran quince, y que esa nivelación, fácil, pero soñada, resultaba contraria con las leyes de la naturaleza.

El crimen es odioso, pero tiene sus fueros; que la sociedad para eso le da la defensa al mismo tiempo que conserva el derecho de acusación, debiendo ambas mantenerse dentro de una esfera moral, de que no es lícito salirse con el color de la irresponsabilidad que unos y otros tenemos ante la responsabilidad suprema de los Tribunales.

Cuando se considera, como fielmente observaba mi ilustrado compañero el Sr. Hidalgo Saavedra, en la vista de admisión, que el juicio oral y público ha venido á ensayarse con el crimen que nos ocupa, poniéndose la menor suma de experiencia junto á la mayor dificultad, se explican la premeditación inexcusable y los lamentosos vacíos de la instrucción relativa á este proceso. A la hora de hoy, después de larga jornada, estamos circundados de misteriosas sombras. Un hombre muerto yace en la hondonada de un torrente seco. ¿Cuál ha sido el móvil del crimen? El extravío del sentido moral, dícese á veces; porque las costumbres pervertidas del Blanco de Benaoaz, parecieron dignas de castigo á sus fanáticos cofrades. Una ciega obediencia á los jefes de la tenebrosa Asociación, porque habían principiado á desconfiar de él, atendidos su proceder y su conducta, ha dicho el Ministerio público, entre otras hipótesis.

— 190 —

La codicia de los Corbacho, que trataban de borrar con la muerte de su acreedor la firma del recibo en que constaba su débito, responden algunos y la sentencia lo indica. ¿A qué Asociación pertenecían los procesados? No se ha logrado averiguar, dice también ella misma. ¿Era tal vez reliquia funesta de la extinguida Internacional, ó era un grupo de la federación nacional de trabajadores, ó la inicua *Justicia popular* ó otra colectividad que la fantasía del vulgo ha denominado *La Mano Negra*? Nadie lo sabe. ¿De dónde se deriva y cómo se justifica el poder absoluto de los jefes sobre los subalternos y la obediencia incondicional de éstos?

Para contestar estas preguntas, se necesitaría investigar por qué la proposición del crimen fué unánimemente rechazada en el rancho de Barea y nadie se opuso á ella en el molino de la Parrilla. ¿Mediaron relaciones entre los asistentes de esta reunión y los que al mismo tiempo bebían amistosamente en la taberna de García? La sentencia lo calla; luego no las había; pero entonces y de todas maneras, ¿cómo puede explicarse la ineficacia de cuanto estaba previsto y ordenado, la inducción de los que iban á matar y la comisión del crimen por los que no se habían concertado? ¿Misterios por todas partes, en los cuales no se ha fijado un punto la representación de la sociedad, que reside en el señor Fiscal! ¿Misterios en medio de los cuales se han pronunciado á ciegas siete sentencias de muerte! ¿Misterios que no se aclaran, para pedir ocho ajusticiados más! ¿Misterios entre cuyas sombras se buscan la acusación y la defensa para luchar, y en cuyo oscuro seno va á decidirse la suerte y la vida de

— 191 —

los reos en este último y definitivo trámite del juicio!

Nada de esto ha llamado la atención del Ministerio público; pero en cambio, y siguiendo sin freno su imaginación por los horizontes ilimitados de la inventiva, ha descrito á los cuatro recurrentes de la choza de Juan Ruiz, de donde dicen que partió la orden de muerte, como cuatro criminales en alto grado de relajación moral, cuatro bandidos, cuatro facinerosos, cuatro miserables en iguales condiciones de perversidad y de fiera, siendo en todos idénticos los instintos y las inclinaciones, y los hábitos y los planes. (Tales son sus palabras, que tengo aquí escritas). Y se ha remontado todavía más; ha encontrado no sé qué filiación subterránea en el fondo de la sociedad española, entre el crimen de la Parrilla, el de Trebujena, el del Salar y los de las lejanas comarcas catalanas, que ha traído á cuento, y si la palabra no me pareciese dura, fuera de oportunidad.

¿Presume acaso el Ministerio público que España entera se halla entregada á la labor maligna de una crisis, la cual exija imperiosos remedios por los cuales clama, mediante su voz? Porque los crímenes aislados no se asocian recta y lícitamente con otros parecidos, para menor cosa que para pedir un remedio supremo y heroico, siendo lo sensato, lo natural y hasta lo humano, si se trata de aplicar las leyes que respectivamente se refieren á ellos, mirarlos aisladamente, estudiarlos y huir de analogías que no pueden establecerse sino con pretensiones más altas y extrañas á los Tribunales de justicia; que la toga de los Magistrados no ha de confundirse con la de los legisladores, y el clamor del Fiscal no puede encontrar eco en este re-



— 192 —

cinto, cuando por esas esferas discurre, y en tales términos habla; aquí las leyes se observan respetuosamente; en otra parte, se discuten y se dictan.

A los Tribunales corresponde el conocimiento del delito y la aplicación de la ley penal en un estado de absorción serena, sin tener la mira puesta en circunstancias que son propias de los políticos y de los legisladores, y sin modificar su imparcial criterio por ninguna consideración ajena del hecho aislado que se somete á su fallo.

¡Ah! lo que ha hecho el Ministerio público en esta tarde está vedado, señor; y si no lo está ante la libertad de que legítimamente disfruta en este sitio, lo está indudablemente ante la razón y ante la conciencia. Por extravío, por alucinamiento, no de fijo por mala voluntad, ha creado sus analogías, y, aspirando al pincel de nuestros más laureados artistas, fieles intérpretes de la naturaleza y de la verdad, ha pintado de memoria un cuadro del estado moral de mis clientes, al revés de la semejanza.

Pues qué, decir que son hombres avezados al crimen, que del crimen viven y del crimen dimanan todas sus ideas y en el crimen se engendran todos sus sentimientos, ¿cómo ha de compadecerse con la declaración explícita que tiene la sentencia, de que ninguno de ellos ha sido antes procesado, á excepción de uno solo que lo fué por leve delito, de todo punto extraño á éste de que ahora se le acusa? Eso lo sabe el Ministerio público, ¿no ha de saberlo? Y si lo sabe, ¿cómo asegura con tanto aplomo que todos ellos son criminales endurecidos y empedernidos? A esto le conduce quizás irresistiblemente la preocupación que

— 193 —

late en todo su informe y que nosotros venimos á desvanecer.

Lo ha dicho y lo hemos oído con espanto: «Yo voy á tratar esta cuestión por medio de una gran síntesis, yo no quiero entrar en los detalles de tan sangriento y pavoroso drama.» El señor Fiscal está equivocado, y siendo individuales y personales los delitos, es inconcebible la aplicación á su examen y conocimiento del método sintético. «Yo no descendo á detalles», añade. Pues hace su señoría mal, contesto: porque para eso está su señoría sentado en el sitial del acusador, para entrar en el prolijo, minucioso y detenido examen de todos los pormenores que forman, según dice, el conjunto de ese cuadro tan lúgubre y tan sombrío que del fondo del proceso se destaca; el hecho podrá percibirle en su unidad, pero el delito no podrá discernirle sino por el conocimiento íntimo, y la pena no podrá solicitarla, sino en razón de la variedad de la delincuencia. Por consiguiente, para tratar de esta materia personal de criminalidad, no es posible fiarse de la total impresión de una síntesis, aun cuando consiguiera formarla el ingenio, contra lo que fundamentalmente sostengo; porque podría faltar y engañar; sino de la observación atenta del individuo, de su estado moral, de sus móviles y de sus actos; por cuyo análisis, si nos guiamos, no podemos errar, pues el que habla en él es el conocimiento.

Yo no he de levantarme á esa síntesis, más ostentosa que real, ni á esa altura en que el Ministerio público quiere á su albedrío colocar la discusión; yo no me he de ayudar sino de este método experimental y analítico, y luego de conocer el hecho individual y sus

— 194 —

relaciones con los hechos ajenos, me remontaré de la experiencia á la ciencia del derecho y al precepto legal, para juzgar aquélla á la luz de éstos.

¡Llamar desdeñosamente detalles los únicos elementos de los cuales puede deducirse la acusación ó la defensa, y en que ha de tener su base el fallo del Tribunal! ¡Detalles, esos mundos morales interiores, recatados, universales é infinitos, en los cuales nace, crece, se desarrolla, llega á su terrible finalidad la malicia humana y se reproduce por fuera en el horror del crimen!

A esos abismos hemos de bajar, y no hemos de subir á esa concreción angusta de partículas, en las cuales se confunden y no se advierten precisamente los actos con los que ha de formularse el juicio, que no está en la sublimidad de lo ideal, sino en la variedad inmensa de lo microscópico.

Si no hubiera estado bajo el dominio maligno y bajo la avasalladora victoria de la síntesis, el Ministerio público habría fijado su atención en los términos de la sentencia, que son los elementos de este debate; y entonces habría reparado, como hace breves momentos decía en su elocuente informe mi querido amigo el Sr. Maisonnave, que no está suficientemente meditada; habría advertido que hay tres delitos distintos, aunque dirigidos contra una misma persona: la tentativa de homicidio concertada en el molino de la Parrilla, la muerte dada por Manuel Gago de los Santos y Cristóbal Fernández Torrejón, y las lesiones leves causadas por la torpe intención de José León Ortega; habría visto situaciones distintas, matices diversos de la malignidad y de la delincuencia;



— 195 —

pero para todo esto le servía de estorbo la contemplación abstracta de esa síntesis suprema que ya desmenuzarán mis colegas á quienes toca tratar de la impugnación de este recurso, en cuanto se refiere á cada uno de los reos que defienden; porque á mí no me corresponde esta tarea sino en nombre de Juan Ruiz y Ruiz y de Cayetano de la Cruz; sólo que, habiendo sido el primero en hablar contra el Ministerio público, la suerte adversa me ha conferido el honor de discurrir sobre las ideas fundamentales y el conjunto de su informe.

Este crimen podrá ser un asesinato, un homicidio, podrán nuestros patrocinados ser ó no delincuentes, podrán tener una mayor ó menor participación en él; pero es lo cierto, que cuando ellos han cometido, ó han coadyuvado, ó han encubierto el delito que se consumó en el arroyo de la Plantera, ninguna relación tenían los hechos malignos y reprobables que ejecutaban, con otros á que se ha referido el Ministerio fiscal. Además, es punto de partida común á la acusación y á la defensa que, aunque el delito sea colectivo, la delincuencia es siempre personal: y por último, declaramos como un principio de jurisprudencia, que en este sitio, menos que en ningún otro, puede ponerse en tela de juicio que los hechos probados sirven de marco al recurso, así como las infracciones de ley son su esencia y su substancia. Deber es, por lo tanto, así de los defensores como del Fiscal, atenerse estrictamente á los hechos probados, y dentro de este cuadro, demostrar cuales son las infracciones de ley.

Dice el Ministerio público que Juan Ruiz y Ruiz

— 196 —

cometió los mismos actos que se atribuyen en la sentencia á Pedro y Francisco Corbacho y á Roque Vázquez García; que entre la criminalidad de los unos y de los otros no hay distinción ni diferencia alguna. Llega más lejos, en los arrestos de la indignación, que, como es ciega, fácilmente se precipita; olvida la abstinencia de la figura, precepto de la severidad en las oraciones fiscales, y se da á recorrer el globo terráqueo para buscar por países remotos en el espacio ó por pueblos casi olvidados en el tiempo, símiles y comparaciones con esta criminalidad que sublima fuera de lo real; como si la infracción de las leyes morales no fuera ya harto repugnante en sí y precisara, para llamar sobre los culpables la vindicta social, recargarla con las creaciones y los juegos de la retórica.

*«No hubiera hecho más tampoco, exclama, una tribu de salvajes, una horda de astecas, beduinos ó canibales.»* Penetra en las islas lejanas de la Polinesia ó en el centro de las regiones ecuatoriales, y en la perversión moral de los antropófagos y en sus festines de carne humana, encuentra menos criminalidad que en Juan Ruiz y Ruiz, en Pedro y Francisco Corbacho y en Roque Vázquez García. Luégo, sube al África Septentrional, á las comarcas inhospitalarias y desiertas del Sahara, y en los beduinos, nómades y vagabundos, que por lo visto para este funcionario, no tienen freno de Dios ni de ley, ve seres más inofensivos que Juan Ruiz y Ruiz, Pedro y Francisco Corbacho y Roque Vázquez García. Pero, señor, ¿de cuándo acá los beduinos se *ponen en acccho de una presa humana, para arrojarse sobre ella y saciarse en su sangre y devorarla?* Ni el tiempo ni la historia ponen

— 197 —

valla á los ímpetus del Sr. Fiscal. Hasta los civilizados y religiosos aztecas que dominó el genio aventurero de Cortés, son á sus ojos el punto culminante de comparación de la delincuencia. Si resucitaran, ¡cómo habrían de maravillarse de verse figurados en *hordas* y confundidos con caníbales y beduinos, para servir sus hábitos de símil al asesinato del Blanco de Benaocaz! ¡Caso más singular! La aprehensión errada de las cosas tira á sí con vehemencia un entendimiento habitualmente tan claro, y le seduce en términos de poner su fe, su certidumbre y su palabra á las órdenes de meras apariencias!

¿Qué es lo que ha hecho Juan Ruiz y Ruiz? Vamos á verlo.

— Señor: no ha hecho sino aquello que respecto de sus actos declara probado la sentencia. Es esta la base de nuestra discusión; no cabe otra. Pues bien, la sentencia dice que Juan Ruiz y Ruiz no ha hecho nada. Parece paradójico, y no faltará quien á primera vista diga que este es un floreo de ingenio (y advierto que jamás uso yo del ingenio contra los dictados de mi conciencia); pero repetidamente la verdad se pone fuera de la común opinión y sentir de los hombres, y pocas cosas he visto tan contrarias á la verdad, como la atmósfera que se ha formado alrededor de Juan Ruiz; por ventura y para restablecer los hechos adulterados ó falseados, están los autos, y sobre todo ahí está la sentencia en que debiera haberse basado el Ministerio fiscal para su acusación, en que han de basarse las defensas, y en que yo abrigo la seguridad absoluta de que se basará el fallo del Tribunal Supremo.



— 198 —

Dos resultandos mencionan en la sentencia á Juan Ruiz y Ruiz: el sexto y el décimo. Respectivo al sexto, no he de hacer otra cosa que leerle: «Resultando de los mismos datos y de los demás que obran en el proceso, que la comisión organizadora de la Sociedad aludida reside en el Alcornocalejo, y la componen Francisco Corbacho Lagos, como Presidente; Pedro Corbacho Lagos, como Vicepresidente; Juan Ruiz y Ruiz, como Secretario, y Roque Vázquez García y algunos otros como Vocales, que deliberaban; hechos que también se declaran probados.»

Tenemos, pues, como un hecho fundamental y probado que Juan Ruiz y Ruiz era individuo de la comisión organizadora del Alcornocalejo, en la que ejercía las funciones de Secretario. De dicha junta formaban parte otros muchos. ¿Estuvieron éstos ó no estuvieron en la reunión del Alcornocalejo? ¿Votaron ó no votaron? ¿Se constituyó aquella junta simplemente con el Presidente, Vicepresidente, el Secretario y un Vocal, ó debieron sus deliberaciones, para haber tenido aquella fuerza que la dieron los congregados en el molino de la Parrilla, haber sido sustentadas y reforzadas por los demás individuos desconocidos ó anónimos que, según la sentencia, componían la junta? En esto no se ha ocupado la Audiencia, y veo que tampoco se ha dignado ocuparse el Ministerio fiscal en su acusación.

El hecho de ser Secretario de la Junta ó comisión organizadora de la Sociedad no influye de ninguna manera en el delito cometido el día 4 de diciembre de 1882; luego toda la criminalidad de Juan Ruiz y Ruiz, la hemos de encontrar en el resultando décimo,

— 199 —

porque como no hay más que dos resultandos que mencionen actos de Juan Ruiz y Ruiz, y en el primero no se ve criminalidad alguna, es evidente que, si existe ésta, debe estar en el segundo.

Resultando décimo: «Que en los mismos días, y sin que se pueda precisar la fecha (error gravísimo; la fecha está perfectamente probada, y fué el mismo 4 de diciembre. Según el resultando oncenno, en dicho día se remitió la orden al molino de la Parrilla; allí estaba Bartolomé Gago Campos, al tenor del resultando duodécimo; de este resultando décimo que vamos á analizar, se deduce que la víctima debía ausentarse al día siguiente del acuerdo, por lo que se recomendaba la ejecución inmediata; luego es evidente que la reunión se efectuó el 4 de diciembre. Así está la sentencia: con tanta precipitación en los detalles, como falta de observación en los hechos y de ajuste entre sí). «En los mismos días, y sin que se pueda precisar la fecha, se reunieron en la choza de Juan Ruiz y Ruiz, sita en el Alcornocalejo, distrito rural del Valle, el mismo Ruiz y Ruiz y los procesados Francisco Corbacho Lagos, Pedro Corbacho Lagos y Roque Vázquez García, y después de discutir la conducta y vicios del asociado Bartolomé Gago Campos que, á juicio de aquéllos, perjudicaban á la Asociación, acordaron su muerte y la extensión de una orden que, en concepto de Secretario, escribió Ruiz y Ruiz y firmaron los hermanos Corbacho, como jefes, disponiendo que se comunicara para su ejecución á los asociados del Valle, con encargo de que se ejecutase por los más jóvenes é inmediatamente, en el sitio más oportuno, á causa de que Gago Campos

— 100 —

debía ausentarse al día siguiente, y recomendando que después de muerto se le ocupara un documento que llevaba consigo; *hecho que asimismo se declara probado.*<sup>2</sup>

Basta, señor, con la lectura de este resultando, para afirmar que en él se encuentran comprendidos muchos hechos.

Llámase hecho una realidad perceptible por los sentidos ó cognoscible por la razón, y la cual puede mirarse bajo cualquiera de estos tres aspectos ó bajo todos ellos: causa, procedimiento y resultado. Pero por rara casualidad, la naturaleza, la sociedad ó el hombre, producen un hecho simple, que es aquel donde una es la causa, uno el procedimiento y uno el resultado, siendo complexos la mayoría de los hechos, por la variedad y multiplicidad de estos tres aspectos, de los agentes que en ellos obran y de los accidentes que los rodean.

Sea cualquiera su categoría, todas las infracciones de la ley son hechos que tienen los mismos tres modos de ver, cuyo análisis es indispensable para juzgar de la delincuencia; y en la misma proporción ó quizás más corta todavía, porque la razón y el método influyen en ellos menos que los arrebatos de las pasiones, los delitos son en su mayoría hechos complexos. La sociedad y los Tribunales los advierten y perciben por sus manifestaciones externas, y principalmente por su resultado, donde la realidad se revela, tomando aquí el carácter y el nombre de hecho; pero esta primera impresión es la de los sentidos, que sólo vagamente y por primitivo impulso, se corre hacia los conceptos morales de la infracción y de la corrección.



— 201 —

Un hombre ha sido muerto en el arroyo de la Plantera; la conciencia universal declara una violación del derecho y la justicia humana toma sobre sí la reparación; pero las investigaciones á que se consagra y que declara, pueden dar, conforme con la unidad de este resultado, la revelación de hechos distintos entre sí, que relacionados con agentes también distintos, producen la existencia de delitos distintos á su vez, con causas y con procedimientos que también difieren, y que no solamente es lícito, sino obligatorio, mirar en sí, aunque con aquellos enlaces que otros accidentes pongan de resalte.

Esto en cuanto al delito estudiado como hecho y al delincuente calificado como actor; pero tan pronto como aquellas diversas infracciones de ley se han aislado, lo necesario es analizarlas, y este análisis hecho bajo los tres aspectos de la causa, del procedimiento y del resultado, aporta, como caudal para formar la certidumbre de los Tribunales, hechos conexos, pero perceptibles en su unidad subalterna; cuyo conjunto constituye la certidumbre, no de la existencia del delito, que es preliminar, sino de la delincuencia, que es el objeto de las actuaciones judiciales.

Como el juez pronuncia un juicio, y juicio es una operación intelectual que consiste en la comparación de los hechos y en la relación de las ideas, conoce los hechos uno por uno, los enlaza por categorías que se refieren principalmente, y según su arte, al tiempo, al espacio ó á la persona, cuyas categorías aísla y separa por medio de resultandos antes de declarar el derecho penal en la sentencia, donde se expresa la certidumbre que esos conjuntos ó categorías de actos

— 202 —

han creado y la aplicación de los preceptos legales. Si el delito es simple, los resultandos lo son de ordinario; pero si es complejo, los resultandos comprenden una variedad de hechos agrupados por analogía, y referidos á cualquiera de los sistemas de conexión que acabo de apuntar.

Todos estos hechos, que tienen una vida individual y substancial propias y que resultan de las actuaciones, producen ó no producen en el Juez, por méritos de su probanza, incertidumbre ó certidumbre, y solamente aquellos que se declaran probados son los que forman tal estado de la conciencia y del intelecto; de donde viene este principio jurídico, que la sentencia se funda en los hechos probados, porque sobre la incertidumbre no puede pronunciarse fallo condenatorio. En su consecuencia, el art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal declara que ha sido infringida una ley en la sentencia definitiva, para el efecto de que pueda interponerse recurso de casación, cuando los hechos que en la sentencia se declaran probados, sean calificados y penados como delitos ó faltas, no siéndolo, ó cuando constituyendo delito ó falta no se califiquen ó penen como tales, ó cuando se cometa error de derecho en su calificación; porque la única, la exclusiva base del fallo, ha de ser la declaración de los hechos probados, no considerándose ni debiendo tenerse por tales, aquellos sobre los que no recae esta manifestación categórica.

Pues bien; el resultando décimo que he leído es un conjunto de hechos enlazados por el concepto de espacio, ó sea en relación con el lugar donde resulta que se efectuó la reunión, y la misma lectura pone de

— 203 —

manifiesto que estos hechos forman una serie que se puede enumerar de la siguiente manera: Primero, que no se sabe la fecha de aquella junta; segundo, que los cuatro individuos indicados, se congregaron en la choza de Juan Ruiz y Ruiz; tercero, que se discutió la conducta y se deliberó sobre los vicios del asociado Bartolomé Gago Campos, sirviendo de base á este debate el desprestigio que sus actos echaban sobre la Asociación; cuarto, que se acordó dar muerte al acusado; quinto, que se convino la forma de cumplir este acuerdo, ó sea la orden que se comunicaría á los asociados del Valle para su ejecución; sexto, la extensión material de la orden que como Secretario escribiera Juan Ruiz y Ruiz; séptimo, la firma de la orden por los hermanos Corbacho, cuyo hecho era el que debía darla fuerza y validez; octavo, el contenido de la orden, la cual comprende tres circunstancias ó hechos subsidiarios. Primer hecho subsidiario, quiénes han de ser los ejecutores, dónde se ha de verificar la ejecución y en qué tiempo; segundo, razón de esta última parte del acuerdo; tercero, ocupación del documento que llevaba consigo Gago Campos.

Vea, pues, el Tribunal, el número de hechos aislados, individuales, perceptibles y cognoscibles en sí y por mí, que se encuentran dentro del resultando decimo; y éste dice al final: «cuyo hecho se declara probado». Si hay aquí diez hechos distintos, perceptibles, cognoscibles en sí y por mí, como antes decía, y así, de esta forma (forma especial cuando se compara con las de los otros resultandos en los cuales se declaran probados todos los hechos) aquí se dice que no hay más que uno probado, ¿cuál es éste? ¿Es el primero



— 204 —

el segundo, el tercero, el cuarto, ó es el último, como dice el común sentido y enseña la gramática?

Evidentemente que es el último y tenemos, pues, que del resultando décimo no se desprende sino *un hecho probado*, un hecho que traiga consigo certidumbre, y es que en la orden se disponía que al Bartolomé Gago Campos se le extrajese del bolsillo la carta ó papel que en concepto del Ministerio fiscal, valía como título justificativo de una deuda. Pero se me podrá replicar que el hecho que refiero es subsidiario y comprensivo de un hecho total principal, que es el octavo, el cual expresa todo el contenido de la orden, y ¿qué me importa concederlo? Bueno; admito que es un hecho conjunto, al cual se aplica la calificación de probado, la designación de los ejecutores del delito en los más jóvenes que se congregasen en el molino de la Parri-lla, la urgencia de consumarle y la ocupación del re-cibo; pero nada de esto presupone más que la exis-tencia de la orden y por ningún estilo la probanza de los demás hechos anteriores, conexos con el delito, absolutos en sí y que por no declararse probados, son inciertos, y no pueden servir de elemento para el jui-cio ó de base para la sentencia. No está probado que la reunión se verificase en la choza de Juan Ruiz; no está probado que éste asistiese; ni que él escribiera el mandato. No está probado, porque no lo dice el resul-tando décimo, y basta; que ya no es ocasión de verlo en los autos y, si se pudiera admitir la revisión de la prueba, yo tengo la certeza de que sin salir de ellos mismos, ó trayendo nuevos elementos de certidum-bre, destruiría con esa claridad, esa luz y ese esplendor del sol meridiano á que con hiperbólico lenguaje

— 205 —

pide ayuda el señor Fiscal para deslumbrarnos, y que no advirtamos la desnudez de la acusación, todo asomo ó indicio de que Juan Ruiz y Ruiz hubiese tomado parte criminal en esos actos. En el resultando décimo no hay nada de donde pueda inferirse la delincuencia de mi cliente, con cuya afirmación termino por ahora, respecto de los hechos probados que habré de tratar con mayor extensión al hablar del quebrantamiento de la forma, en el recurso admitido de derecho en favor de José León Ortega, haciendo ahora pausa en el límite de la oportunidad sobre esta cuestión, á la cual la Sala concederá sin duda, excepcional importancia, desatendiendo la insubstancialidad con que algunos pudieran denominarla pequeña. ¡Ah! ¿No es nada que deliberadamente un Tribunal, juzgando unas veces hechos probados en su conjunto y llamándolos tales, los califique de probanza en plural, y en otras ocasiones, en la misma sentencia, solamente use del número singular?

El Ministerio público es harto ilustrado y práctico para replicar que no es nada esto que engendra en mí y en todos los espíritus rectos la obscuridad absoluta de la falta de certidumbre, y que si no la engendrara, haría que los fantasmas de la duda invadieran el cerebro y llegasen hasta la conciencia; pero sobre estas incertidumbres y estas dudas, hay una cosa que es imposible, de todo punto imposible, y es que los Tribunales de un país civilizado puedan añadir una s á una palabra para dictar una sentencia de muerte. Esto lo repugnan de consuno el sentimiento y la justicia, y ya es sobrado lamentable hasta poner espanto en el espíritu, la consideración de que la vida de un



— 206 —

hombre está pendiente de un trazo ortográfico, para arriesgarse á ponerle de propósito, donde si estuviere, la humanidad imploraría por suprimirle.

Pero el señor Fiscal, sin duda, le ha visto en los trances de una nueva y singular alucinación; que no viéndole, no concibo cómo ha podido decir ahora y ha escrito antes, que todo, absolutamente todo está probado. ¡Cómo ha leído esta sentencia el Ministerio público, y cómo la ha analizado! Mas me olvidaba que el espíritu de análisis no reina en las regiones por donde discurre apacible y concienzudamente el Ministerio público, que reemplaza este único método para la apreciación de los delitos y la aplicación de las penas, por un nuevo procedimiento que consiste en no mirar del hecho sino el resultado, desentenderse de las causas, de las distinciones respectivas de la malignidad y de los agentes, y agruparlos todos y confundirlos todos en una síntesis, por donde se ve compelido á decir en su recurso escrito, como ha dicho hoy en su informe oral, que Juan Ruiz y Ruiz acordó la muerte de Bartolomé Gago Campos, afirmación valerosa y resuelta, que ha reforzado todavía más, añadiendo: por consiguiente, ordenó el asesinato.

La fórmula del resultando décimo sería entonces la siguiente: «Reunidos en la choza de Juan Ruiz y Ruiz, sita en el Alcornocalejo, distrito rural del Valle, el mismo Ruiz, y los procesados Francisco Corbacho Lagos y Roque Vázquez García, después de discutir la conducta y vicios del asociado Bartolomé Gago Campos, que á juicio de aquéllos perjudicaba á la Asociación, acordaron por unanimidad su muerte, hechos que se declaran probados.»

Tal dice el Ministerio público; pero tal no dice la sentencia, y yo no puedo conformar con su dictamen, como espero que no conformará tampoco la Sala.

Sí, acordaron su muerte, dice el Ministerio fiscal. Yo sostengo que esto no lo da como un hecho probado la sentencia de 18 de junio de 1883. Pero como estoy resuelto á no dejar resquicio alguno en la acusación que no escudriñe, para que no se abrigue el menor recelo respecto á la lealtad y buena fe de la defensa, quiero admitir esta hipótesis para complacerme en combatirla y desvanecerla, y si alguna duda quedase en el Tribunal, hacer que la duda se disipe; que hasta contra esa hipótesis tiene la defensa de mis patrocinados argumentos de derecho.

Las infracciones legales que cita el Ministerio público, no existen. Es la primera el caso segundo del artículo 13, es decir, aquel precepto de nuestro Código penal que llama autores de un delito «á los que fuerzan ó inducen directamente á otros á ejecutarlo».

Dice el Ministerio fiscal (y si no lo dice, porque en realidad no lo ha dicho, cuando invoca el caso segundo del art. 13, es porque cree que en él se halla comprendido Juan Ruiz y Ruiz) dice el Ministerio fiscal, repito, que éste ha forzado ó ha inducido á los que ejecutaron el crimen del arroyo de la Plantera, á cometerle. ¿Es por inducción? De la inducción ha hecho una subdivisión muy científica el ilustre defensor de los Corbacho, señor Maisonnave; pero inducir, en general, es dominar el entendimiento ajeno con el entendimiento propio, y poner en ejercicio esas misteriosas influencias que residen en la superioridad de la razón, ó en la superioridad del carácter; es una

— 208 —

persuasión imperante que influye fatalmente en el objeto, y que procede de una supremacía conocida ó invisible del sujeto. Para que exista, pues, inducción en este sentido, que no se habla en el meramente lógico y dialéctico, sino en el vulgar; para que exista inducción en este sentido, es preciso que haya una comunicación necesaria entre el sujeto inductor y el objeto inducido.

¿Dónde se ha cometido el delito que se persigue? Sea en el molino de la Parrilla ó sea en el arroyo de la Plantera, es decir, haya tomado su punto de arranque la comisión del delito en el acuerdo del molino de la Parrilla ó exista toda su malignidad, como yo presumo y sostengo, aunque no tengo que hacerlo en este recurso, en el arroyo de la Plantera, ello es lo cierto que entre Juan Ruiz y Ruiz y los congregados en el molino de la Parrilla, entre Juan Ruiz y Ruiz y los que cometieron el crimen del arroyo de la Plantera, no ha habido comunicación de ninguna clase ni escrita ni hablada; porque esta comunicación exige el conocimiento por el inducido, de la presencia, de la existencia del sujeto inductor, y la orden que, según se dice, llevó Roque Vázquez García, de la choza del Alcornocalejo al molino de la Parrilla, no contenía signo alguno exterior que manifestase que era el deseo, la voluntad, el consejo de Juan Ruiz y Ruiz, que se cometiera ese delito.

Decía la orden, según resulta de la sentencia, que se diera muerte á Bartolomé Gago Campos. Decía otra cosa, en verdad; pero ¿para qué hemos de recordarlo en este momento? Admito siempre dentro de la hipótesis, que se mandase la muerte de Bartolomé



— 269 —

Gago Campos; que esto lo firmasen los hermanos Corbacho; que llevara el sello de la Asociación, y que con tales condiciones la orden fuese obedecida. ¿Cómo Juan Ruiz y Ruiz ha podido influir en el ánimo de Bartolomé Gago de los Santos para que congregara á los asociados, ni en el de éstos para que ayudaran á aquel lúgubre designio, ni en Cristóbal Fernández Torrejón para cometer el delito en el arroyo de la Plantera? Donde no hay comunicación intelectual, donde no hay siquiera comunicación real y conocida, ¿cómo es posible que haya inducción?

No habiendo, pues, inducción, no está infringido el caso segundo del art. 13; y tiene razón la sentencia, cuando dice en uno de sus más luminosos, quizás en uno de sus escasos luminosos considerandos, en el quinto: «es verosímil que la orden se hubiera dictado sin la intervención de Ruiz y Ruiz», porque la inducción se ha de conocer por algún signo y aquí no hay signo alguno por el cual ni Bartolomé Gago de los Santos, ni Cristóbal Fernández Torrejón, ni Manuel Gago de los Santos hayan podido conocer la presencia siquiera de la voluntad de Ruiz en la orden de muerte.

Sentado que no existe inducción, y como del caso de violencia no hay que hablar, y como á aquella se ha atendido el Ministerio público, es indudable que se ha presentado como infracción un caso en que precisamente no la ha habido.

Peró dirá el señor Fiscal: es que yo no acepto el principio sostenido por la defensa de Juan Ruiz y Ruiz de que no hay más que un hecho probado: yo entiendo que está probado que Juan Ruiz y Ruiz acor-

— 210 —

dó la muerte de Bartolomé Gago Campos, porque se usa de esta frase en el resultando décimo después de enumerar las personas que concurrieron á la choza del Alcornocalejo.

De esto voy á hacer punto aparte, porque lo merece ciertamente, así como de una confusión que respecto de la misma orden y de su coordinación ha cometido en su escrito y repetido hoy en su informe oral el Ministerio público.

Antes, sin embargo, he de sacar partido de la única demostración que, respecto de la calificación de autores con que agrava la culpa de los reos considerados como cómplices en la sentencia, nos ofrece el representante de la ley, tomándola por tan sencilla, tan fácil y tan clara, *hæc sunt verba tua*, que la imagina sobrada para acompañarlos hasta el patíbulo. Esa demostración de que no hubo cómplices, porque todos pusieron en el delito mano, intención y voluntad, contrayendo todos responsabilidad idéntica y hallándose en igual caso, se reduce á dos preguntas que he apuntado, y de cuya exacta redacción respondo, tanto por la merecida atención que pongo en cuanto sale de los labios de este digno jurisconsulto, como por la confianza que me proporciona cierta rapidez en la escritura de los apuntes tomados del informe de S. S. La forma interrogatoria no da á las ideas aquella condicionalidad positiva que pide una demostración; pero valga, si se quiere, en la ocasión de ahora, y examinemos esas dos famosas y decisivas preguntas:

«¿Entiende la Sala que hubo más dosis de criminalidad en el acto de llevarse Manuel Gago de los



— 211 —

Santos á su desgraciado primo al ventorrillo de García Gutiérrez para allí entretenerle, que en los que su hermano Bartolomé llevó á cabo, y aun los demás asociados, emboscándose en la hondonada del arroyo, con el preconcebido intento de acometer, de herir y de matar?»

La Sala diría que nó, si la Sala no supiera que la participación de Manuel Gago de los Santos no se concretó á llevarse á su primo á la taberna; pero la Sala sabe que desgraciadamente Manuel fué uno de los dos que dispararon contra el Blanco de Benaocaz, tiros que le ocasionaron heridas mortales de necesidad. Por lo tanto, si la pregunta se formulara leal y concienzudamente, según el resultado de hechos de la sentencia, la Sala contestaría contra la respuesta que espera en vano el Ministerio público, que, cualquiera que sea la calificación que merezca Manuel Gago de los Santos, y que, en mi concepto, y sin prejuzgar su especial defensa, no entiendo que en ninguna manera conduzca á sentencia de muerte, la criminalidad de sus asociados es menor de la suya.

Obsérvese, además, como á pesar de todas las preocupaciones, ábrese paso por entre sus sombras la luz de la verdad, y como al acto de los conjurados de la Parrilla, pone por extrema finalidad el Ministerio público, el intento de cometer el homicidio, distinguiendo entre la tentativa por unos y la consumación del delito por otros.

La segunda pregunta está igualmente mal formulada, por error de hecho.

«¿Entiende la Sala que había más dosis de criminalidad en Gonzalo Benítez Alvarez y en Rafael Ji-

— 212 —

ménez Becerra, al preparar sus armas para matar, que en los que realmente mataron, ó en los que después se arrojaron sobre la víctima, ó en los que la arrastraron hasta la tumba que para enterrarla habían abierto?»

La Sala á una voz contestará que nó, respecto de los matadores, y con esto no habrá conseguido reforzar su tesis el señor Fiscal, sino que, por el contrario, la habrá enflaquecido; y, como respecto de los demás, también conoce los hechos, le dirá que los reos á que se refiere no arrastraron al Blanco de Benaocaz, sino que ayudaron á la conducción de su cadáver, según el resultando vigésimosegundo, no habiendo más ni menos entre ellos, y siendo enteramente inútil para la demostración que apetece, la interrogación que formula.

El objeto de ambas preguntas resulta ineficaz, no conduciendo á probar que aquéllos que, como Juan Ruiz y Ruiz y mi otro defendido Cayetano de la Cruz, vienen calificados de cómplices, han tenido en el delito la participación de autores; verdad es que del primero hace el señor Fiscal capítulo aparte, y prefiere compararle con los Corbacho y Roque Vázquez García; pero á la brevedad que yo quisiera conciliar en este informe con los deberes de la defensa y la exposición del derecho de mis desventurados clientes, convenía tratar esta materia al mismo tiempo, evitando en lo posible repeticiones más ó de mis compañeros.

De la comisión organizadora del Alcornocalejo, en que hace figurar á Juan Ruiz, dice que «todos contribuyeron de una manera rigurosamente igual á ese forzamiento, á esa inducción directa que dió por re-

— 215 —

sultado el crimen;» y encuentra falta de lógica en la sentencia que no aplica á todos la misma pena; pero ¿es verdad que estuviera Juan Ruiz con Pedro Corbacho en el rancho de Barea para proponer la muerte del Blanco de Benaocaz? Nó; precisamente lo niega el resultando noveno, que no le pone en la lista de los concurrentes; luego no se halla en el caso de Pedro Corbacho.

Dentro de la hipótesis en que venimos discuriendo, para acercarnos todo lo posible en el debate, y que por ser tal hipótesis, no puede perjudicar á ninguno de los demás reos; es á saber, suponiendo probados todos los hechos que se enumeran en el resultando décimo, tenemos á Juan Ruiz presente en la junta que la comisión organizadora en pleno, ó los cuatro individuos nominalmente expresos en el mismo, celebraron en el Alcornocalejo. ¿Qué opinó Juan Ruiz y Ruiz? El resultando dice lacónicamente que acordaron la muerte, y el Fiscal, añade, *auctoritate propria*, que fué por unanimidad, de donde se deriva, en su concepto, la identidad del delito; pero esto, lo vuelvo á decir con pena, está vedado ante la razón y la conciencia:

«Cuando los miembros de un Tribunal toman un acuerdo por unanimidad y por unanimidad hacen que se cumpla, no puede aceptarse la idea de que unos sean menos responsables que otros.»

Afortunadamente no es cierto, porque la sentencia no afirma en ninguna parte que el acuerdo se tomase por unanimidad, y lo que no está en la sentencia, no es lícito en el recurso; pero de este error de apreciación y aun de lectura del Fiscal, y de sus de-



— 214 —

ducciones de derecho, recojo yo á mi vez esta consecuencia: cuando los acuerdos no se toman por unanimidad, son distintas las responsabilidades.

Los acuerdos de las corporaciones ó de las Asambleas, ó de las juntas de cualquier naturaleza, se pueden tomar por unanimidad ó por mayoría, y en uno y otro caso resulta acuerdo con fuerza ejecutoria, sobre todo y señaladamente, en esas asociaciones misteriosas á que se viene aludiendo. Hay aquí, por tanto, dos suposiciones igualmente racionales que conducen al mismo efecto: á la validez del acuerdo, que es el dato fijo de la hipótesis principal. O todos estuvieron conformes ó hubo una minoría que disintió. Sobre esto nada se ha probado, y el resultando décimo se limita á decir que acordaron, conforme en uno y otro supuesto se dice siempre de las decisiones de cualquier cuerpo colectivo. Yo no puedo sostener que hubiese una minoría y que en ésta figurase Juan Ruiz; pero tampoco tiene datos el Ministerio público para afirmar la unanimidad, y que mi defendido fuese de los que votaron la muerte de Bartolomé Gago Campos; nos encontramos el uno y el otro enfrente de dos suposiciones igualmente admisibles y conciliables con los hechos de autos; que tanta indefinición y vaguedad reinan de su parte como de la mía.

Para apoyar las conclusiones del Ministerio público era preciso haber demostrado la unanimidad. No la demuestra la sentencia, porque ciertamente ella demuestra muy pocas cosas, pero á la sombra de esta duda no se puede afirmar que Juan Ruiz y Ruiz fuera de los que dieron su opinión y su voto favorable á la muerte de Bartolomé Gago Campos.

— 215 —

Luego dice el Ministerio público que mi defendido redactó la orden. No es cierto: Juan Ruiz y Ruiz escribió la orden, lo cual es muy diferente. Leo en el resultado décimo, en esa parte que no está probada, que Juan Ruiz y Ruiz escribió la orden, pero no, como afirma el Ministerio público, que la redactó. El acto de redactar es distinto del de escribir, porque exige el conocimiento previo del período que se va á trasladar al papel, con la inventiva ó al menos la transmisión de la idea, su fecundación en la inteligencia, y por último, la concepción de la forma en que ha de expresarse; es una operación intelectual de orden muy superior á la que se verifica en la inteligencia de un escribiente, cuando percibe por las impresiones del sonido, no tanto las ideas, como las palabras que ha de poner en signos; así es que cuando dice el Ministerio público que Juan Ruiz y Ruiz redactó la orden, agrava más la situación de éste que la sentencia, mencionando el hecho de escribir; porque redactar, sobre todo cuando se hace en las reuniones de una sociedad inculta de hombres que no están habituados á la formación de las oraciones y de los períodos gramaticales, es un acto parcial, que presume de mayor participación dentro del hecho general cuya investigación se practica y cuyo castigo se busca, siendo así que la simple escritura de lo que se dicta á una persona, exige un mínimo esfuerzo intelectual.

Vea, pues, el Ministerio fiscal cómo todo lo exagera, y todo lo trastorna, y todo lo equivoca, por medio de afirmaciones gratuitas que sólo subsisten en los Tribunales de justicia hasta que llega el momento en que la parte contraria puede levantarse y destruir lo



— 216 —

que por benévolo eufemismo se gallardea con el dictado de argumentación.

Asegura el Ministerio público que era indispensable una orden de la comisión organizadora para que se cumpliera el propósito de Pedro Corbacho y que esa orden no se hubiera podido dictar sin la concurrencia de Juan Ruiz y Ruiz, citando por antecedente el hecho de que los procesados rechazaron las sugerencias de Pedro Corbacho en el rancho de Barea.

Ciertamente que es racional la observación en su primera parte, aunque parezca esto conceder poco á quien merece otra clase de concesiones y calificativos mucho más lisonjeros; pero en este punto es racional la interpretación del Ministerio público. En la impresionabilidad propia de los países meridionales, labran con atractivo lo misterioso y lo oculto, por lo mismo que disfrutan sus habitantes de un sol tan claro, de una naturaleza tan bella y de unos horizontes de tan puros y delineados contornos; en esa región de Andalucía fascina, por la novedad misma y por la contradicción, lo que aparece velado y recóndito; la orden, el consejo ó proposición que, según los hechos probados, dió Pedro Corbacho en el rancho de Barea, era demasiado rudo, presentaba con harta desnudez el crimen para que no advirtiesen su malignidad y sus peligros los asociados del Valle, y todos á una le rechazaron; pero cuando vino más tarde envuelta en el encierro del secreto, con las formas de la cautela y de la reserva, esa proposición llevaba mucho adelantado para prosperar, y, según parece, prosperó; es lo cierto que bastaba que trajera el sello de la Asociación en forma perceptible á los ojos de todos los

— 217 —

congregados, más fácil de ser conocido y declarado auténtico á primera vista que la diferencia de las líneas que el pulso da á la letra de los hombres, para que este sello fuera el motivo del crimen.

Yo no sé si firmaron la orden los Corbacho ó nó; dicese que la firmaron; pero si ninguno de los congregados en la Parrilla era capaz de asegurar la autenticidad de esas firmas, y todos ellos conocían, ó por sus recibos de cuota, ó por sus citaciones, el sello de la Asociación, su hechura y el color de su tinta, ese sello fué el que sancionó y dió autoridad al funesto escrito de muerte.

No va por tan buen camino el señor Fiscal cuando afirma que sin la cooperación de Juan Ruiz y Ruiz no se habría dado la orden, para ponerle en el caso tercero del art. 13, que considera autores á los que cooperan á la ejecución de un delito por un acto sin el cual no se hubiese efectuado.

«Si el secretario Juan Ruiz no hubiera extendido la orden, es seguro, es evidente que el crimen no se habría consumado.» Esto literalmente acaba de decir la acusación.

Yo vengo suponiendo que está probado lo que no lo está; es decir, que Juan Ruiz escribió esa improbable orden que nadie ha visto, aparte de los reos, que ha desaparecido inmediatamente, y de la cual no puede quedar sino la idea confusa de su contenido ó de sus formas externas más salientes y visibles; por cuya razón la Audiencia de Jerez no ha declarado su certidumbre de que fuese trazada de letra de Juan Ruiz. Pero si como éste la escribió, cualquiera otro la hubiese escrito, ó por otro procedimiento se hubiera trans-

— 218 —

mitido, es evidente, conforme dice la sentencia, que con la firma de los Corbacho y el sello habría sido obedecida.

Así lo dicta la sana razón, la buena intención y la interpretación favorable que en materias de criminalidad informa los casos dudosos.

No pudo influir el ánimo de los que acordaron la ejecución de la orden, el que ésta fuese ó no escrita por Juan Ruiz y Ruiz; porque no lo sabían. ¡Pobres labriegos, sumidos en la más crasa ignorancia, que, siendo puros é inocentes toda la vida, en ellos pudo la superstición ó el miedo ó el fanatismo lo bastante para que perdieran la honradez de sus costumbres, y en un momento de ofuscación y de desvario, asociaran sus nombres á tan horrendo crimen!

Pero en ese crimen hay que distinguir: porque así como es un proverbio jurídico, *distingue tempora et concordabis jura*, así debe serlo también en el orden del derecho penal, *distingue facta et discernes delicta*.

¿Y por qué el señor Fiscal no distingue los hechos? Lo asegura la sentencia: bastaba con la firma de los Corbacho y el sello, para que la orden se ejecutara. ¿Y qué dice el Ministerio público respecto de Juan Ruiz y Ruiz? Que era preciso que Juan Ruiz y Ruiz escribiera la orden, porque si no la hubiera escrito, el crimen no se habría cometido. ¡Ah! esto ya no es tan racional; y añade: «porque de tal manera se solemnizó la emisión de este funesto documento, y de tal modo tenía todas las solemnidades necesarias para que dentro de los criminales propósitos de la asociación fuese obedecido.» Nó; esto no quiere decir nada, ó vale por la afirmación de que la orden se ajustó, en



— 219 —

las deliberaciones que la precedieron, en sus formas y en sus condiciones, á conocidos preceptos reglamentarios. ¿Puede decir el Ministerio público que la reunión del Alcornocalejo se verificó dentro de la legalidad vigente en esta ilegalidad; es decir, con arreglo á lo que respecto de juntas y reuniones estuviese preceptuado y establecido en los reglamentos de esa desconocida asociación? Nó; ¿puede decir que las órdenes habían de tener necesariamente la firma de los Corbacho y el sello de la junta organizadora? Nó; ¿puede decir siquiera que había de estar escrita por mano del secretario? Nó; no puede decir nada respecto de este segundo, tercer ó cuarto delito, que se envuelve en los pliegos del voluminoso proceso que tenemos delante,

Ejercía el cargo *interesantísimo* de secretario Juan Ruiz y Ruiz, ¿por esto era más culpable? ¿Refrendó él la orden de los Corbacho? ¿La certificó? ¿La legalizó, digámoslo así? ¿Cumplió con alguno de los oficios que suelen tener los secretarios en aquellas corporaciones? Nó; luego la orden no llevaba el carácter, ni las condiciones, ni las formalidades que la hubiera añadido la firma de Juan Ruiz. No fué, pues, en este caso el secretario, porque ni certificó ni legalizó el mandato del criminal propósito. ¿A qué, pues, recordar hechos que puedan echar más culpa sobre la frente de mi defendido? ¿A qué, pues, recuerda, sino para eso, el Ministerio público que aquél ejercía las funciones de secretario?

Para hacer punto en la atribución de que el Ruiz fuese autor del delito, por comprenderle el caso tercero del art. 13, necesito todavía examinar, y lo haré

— 220 —

en breves términos, la suposición de su asistencia á la junta de la comisión organizadora.

Su participación en la criminalidad habría dependido de su voto, en cuya materia he discurrido ya lo suficiente; pero, componiéndose dicha comisión, según el resultando sexto, no sólo de los hermanos Corbacho, de Juan Ruiz y de Roque Vázquez García, sino de algunos otros que como vocales deliberaban, es evidente, en primer lugar, que se halla falto de pruebas el proceso respecto de la reunión que celebró en el Alcornocalejo aquella ilegal junta directiva, porque no se sabe quiénes concurrieron á ella, así como no se sabe en qué forma y con qué trámites se dictó la orden; cuestión del mayor interés, y tal vez decisiva respecto del conocimiento de los orígenes de este delito, que ha sido objeto del recurso por quebrantamiento de forma presentado por el Sr. Maisonnave en favor de los Corbacho.

La acción de la justicia se ha limitado á los individuos que aparecían con signos y manifestaciones externas, y con mayor ó menor razón y motivo en esta primera fase de la comisión del delito, á los Corbacho porque firmaran, á Juan Ruiz porque escribiera y á Roque Vázquez García porque llevara el documento al molino de la Parrilla; pero si la malignidad está en la concurrencia y en el acuerdo, yo afirmo que ambos han debido depurarse y analizarse, dirigiendo principalmente la investigación al conocimiento de las personas que asistieron. La concurrencia sin el consentimiento no significa nada; es cierto, y con eso basta para mi defensa; pero el hecho mismo de la concurrencia se halla obscurecido por tamaña falta de



— 221 —

averiguación, que revela de nuevo cómo esta causa se ha instruido, y cómo ha llegado al juicio oral y público, sin la necesaria madurez y preparación.

Para concluir la impugnación del recurso fiscal en cuanto es respectivo á Juan Ruiz y Ruiz, me falta estudiar la circunstancia agravante que considera debe imputársele, porque así como no distingue de hechos, no distingue claramente de derecho el Ministerio público, y habiéndose cometido el delito de noche, atribuye á Juan Ruiz y Ruiz la circunstancia agravante de la nocturnidad, que considera extensiva á todos los que resultan complicados.

Trataré adelante esta circunstancia de agravación en su general concepto, concretándome ahora á probar que la nocturnidad no puede influir en la delincuencia de Juan Ruiz. Yo he podido conceder para aproximarme á la tesis del Sr. Fiscal y facilitar el orden de la concertación, que el reo ejecutara actos que no están probados; porque esta concesión, siendo contraria de la verdad, no era contraria de lo posible; pero no es mi voluntad tan dúctil, ni mi sumisión tan ciega, ni mi afán de discutir tan desmesurado, que no ponga en lo imposible la frontera de mis concesiones. Escribiérala ó no Juan Ruiz, la orden de muerte de Bartolomé Gago Campos contenía la prevención de que se escogiera el momento más oportuno. Pero esto no es disponer que el delito se cometiera de noche, ni añadir una circunstancia más á las otras circunstancias criminales del hecho.

La reunión del Alcornocalejo se celebró de día *con la luz, con la claridad y con el resplandor del sol meridiano*, conforme dice conceptuosamente el Sr. Fis-

— 222 —

cal; en ella se acordó el crimen, á ella asistió Juan Ruiz, tomó parte en el acuerdo, le escribió; todo lo que pueda ser figurable, aunque no sea real, todo lo que por un momento convenga ó no importe admitir para simplificar y no entorpecer el punto discutible: todo lo que quiera el Sr. Fiscal; pero de nocturnidad nada se dijo, nada se ordenó, nada se previó. El crimen se cometió de noche, cierto; pero, ¿cuya es la culpa, cuya es la previsión maligna, cuya, en fin, la responsabilidad? Si yo pudiera entablar un recurso contra el Ministerio público, le pondría por infringido el párrafo segundo del art. 80 del Código penal; porque ha olvidado su texto y porque para forjar esa síntesis total, tenebrosa y abusiva, ha necesitado desatender que todos los que participan más ó menos de un delito ó con un delito se hallan más ó menos relacionados, tienen cada uno una parte indistinta de los demás, pero otra parte distinta, que es la que caracteriza y personifica su malignidad especial y privativa; la cual se revela ante la vista del pensamiento con tanta claridad y con líneas tan recortadas y marcadas, como cualquiera personalidad puede revelarse ante la visión de los ojos. A cada delincuente, cada delito; á cada delito, cada pena; y cada uno de estos delitos, sacados de la órbita donde se encuentran para combinarlos con otros delitos accesorios que también se perciben aparte, no siendo más que delincuencias personales, individuales, en el orden de la criminalidad, las circunstancias agravantes distintas del delito principal, se advierte, se gradúa y se pena.)

Pues si en la nocturnidad no intervino de ninguna manera Juan Ruiz y Ruiz; pues si fué de día cuando

— 223 —

coadyuvara á la muerte de Bartolomé Gago Campos; si no mandó que la muerte se hiciera de noche, resulta que esa circunstancia independiente, extraña á él, de haberse verificado este delito de noche, no puede serle imputada. Señor, no insisto sobre este punto: me parece tan claro, tan evidente, tan dentro de los preceptos escritos del Código penal, que lo consideraría abusivo de la benevolencia que me dispensa la Sala.

Resumiendo, señor, contra el recurso interpuesto por el Ministerio público en cuanto concierne á Juan Ruiz y Ruiz, juzgo cumplidamente demostrado que no es autor del delito de asesinato en la persona del Blanco de Benaocaz, porque sus actos no se hallan comprendidos en los casos primero y tercero del art. 13 del Código penal; y que por el consiguiente, bajo este aspecto no procede la casación de la sentencia pronunciada el 18 de junio anterior por la Audiencia de lo criminal de Jerez.

En el orden de este informe, que tal vez salga excesivamente extenso, con grave temor de mi ánimo, aunque de otra parte confío que la Sala me otorgará su condescendencia, porque ni he de traspasar los límites que los preceptos de la ley de Enjuiciamiento me imponen, ni he de abusar de su precioso tiempo sino el espacio á que me obliguen las cuestiones de hecho y de derecho suscitadas por el Ministerio público, paso á impugnar el recurso que ha interpuesto contra Cayetano de la Cruz.

Cuando he escuchado al Ministerio público incluir á éste en el número de los autores del asesinato del Blanco de Benaocaz, he sentido una especie de atur-



— 224 —

dimiento, como si de repente viera trastornadas las inmutables leyes de la física, que por serlo en la misma manera las del orden moral, no se puede presentar sin asombro que quien por ellas vela y es su personero, en virtud de oficio y mandato social, de pronto las conculque, valiendo tanto para este fin la exageración como el abandono. Cayetano de la Cruz es enteramente ajeno al concepto de autor que le atribuye el Ministerio público.

Los hechos probados, que han de servir de base á la impugnación del recurso de éste, son los siguientes: en la reunión habida en el rancho de Barea, donde Pedro Corbacho propuso esta especie de juicio de muerte del Blanco de Benaocaz, mi defendido Cayetano de la Cruz se negó como todos á verificar el delito. Vino la orden de la comisión al molino de la Parrilla, congregó Bartolomé Gago de los Santos á todos los asociados del Valle, los cuales allá llegaron á las siete de la noche; les leyó la orden, y ninguno se opuso á la ejecución de la sentencia. Tal es la participación que ha tenido mi defendido Cayetano de la Cruz, según los resultandos oncenos y décimo tercero.

Y en seguida el décimocuarto: «que se marcharon todos juntos menos Bartolomé Gago de los Santos y Juan Cabezas Franco, para el arroyo de la Plantera». Allí se encontraron los dos grupos: el que venía de la taberna de García Gutiérrez y el que venía del molino de la Parrilla. ¿Qué hizo Cayetano de la Cruz? Nada, absolutamente nada para la delincuencia. Murió Bartolomé Gago Campos por efecto de dos tiros que le dirigieron Cristóbal Fernández Torrejón y su primo

— 225 —

Manuel; y Cayetano de la Cruz marchó á un kilómetro de distancia á cavar la fosa donde fué enterrado el cadáver, según el resultando vigésimosegundo.

Resumen de todos estos actos relacionados con la delincuencia: que Cayetano de la Cruz, primero rechazó el crimen; que luego se opuso, que, por último, presencié el delito. ¡Por estos tres hechos, asegura el señor Fiscal, que Cayetano de la Cruz es autor del asesinato! Mucho tendria que decir sobre esto, si no me impusiera tanto respeto el Tribunal y el Ministerio público; pero aquellos son los tres hechos. ¿Hay más? No necesito esperar la aprobación del silencio, porque no los hay, y ahí están los resultandos de la sentencia que lo testifican.

El Fiscal no se ha ocupado en el examen de esos hechos; no se ha dignado siquiera mencionar en su informe de hoy el nombre de Cayetano de la Cruz; allá va este desgraciado en el montón de la síntesis, desconocidos sus actos y hasta desconocida su existencia, por quien, con igualdad rigurosa, ha llevado por un rasero toda la delincuencia del crimen, y ha pedido como fácil y niveladora solución la sentencia de muerte para todo el mundo: ¡arbitrio prudente, término medio proporcionado, ajuste y concordancia que presupone la existencia de un máximo de penalidad, superior por tanto á la pena de garrote vill! ¡Todo ello, porque el fiel almotacén de la criminalidad, mirando á los platillos ideales de la balanza de la justicia, se figura que no están al nivel, y que el peso del crimen cometido es mucho mayor todavía que el peso de las ocho sentencias de muerte impuestas por la Audiencia de Jerez! Pues vamos



— 226 —

á completar el peso, y echemos un hombre más.

Esta petición contiene la afirmación de que Cayetano de la Cruz es autor del asesinato; puesto que el señor Fiscal, en su reciente discurso, no se ha tomado el trabajo de determinar los motivos de su opinión, he de buscarlos en el dictamen escrito, donde dice efectivamente (párrafo 6.<sup>o</sup>) que «en la reunión del molino de la Parrilla á que asistieron Benítez, Jiménez, Moreno, Valero, Martínez, Cabezas y Cruz, todos ellos con Bartolomé Gago de los Santos, discutieron, trataron y convinieron la muerte de Gago Campos».

No es cierto; ese párrafo contiene dos afirmaciones gratuitas é insostenibles. Primera, la discusión de la pena. El resultando décimotercero no dice que se discutiera nada, sino únicamente que se leyó la orden; segunda, el convenio unánime de dar la muerte, y acerca de esto sólo dice el mismo resultando que nadie se opuso á la ejecución del delito; hecho que se declara probado.

¿Es lo mismo no oponerse á un hecho que convenir por unanimidad en su ejecución? ¿Son estos simples matices y locuciones, ó son en realidad hondas diferencias del pensamiento? ¿Es tanto convenir como tolerar, siendo para lo primero indispensable el consentimiento expreso y bastando el mutismo para lo segundo? El que acepta, hace suya y da realidad en su pensamiento y en su voluntad, á la idea y á la proposición que se le ofrece con ese objeto; pero el que no acepta, sino que simplemente no se opone, se coloca en un estado intelectual pasivo, y en un estado pasivo de conciencia.

— 227 —

¡Cómo, cómo es posible pedir la pena de muerte sobre bases tan falsas, sobre hechos tan erróneos!

Nó, no hay aquí aceptación unánime, ni siquiera aceptación; no hay ese trabajo del pensamiento que precede á la voluntad, y es afirmación interna, ni ese movimiento de la voluntad que se manifiesta por la palabra y por el acto. ¿Y por qué, por qué anticipa el Ministerio público juicios respecto del delito que se convino y se acordó, según él, en el molino de la Parrilla, y por qué dice en párrafos sucesivos que se resolvió asesinar á Gago Campos? ¿Puede olvidar el Ministerio público el distinto significado que en el lenguaje jurídico tienen la palabra asesinato y la palabra homicidio? Si algo se acordó, fué matar, y matar lo mismo comprende el homicidio que el asesinato.

Las dos afirmaciones contenidas en la conclusión sexta del dictamen fiscal escrito, son erróneas, porque desvirtúan y tergiversan los resultandos de la sentencia, y carecen de verdad; de modo que, habiendo de atenernos á la sentencia misma, en ella encontraremos por qué hechos que se refieren á Cayetano de la Cruz, al mismo tiempo que á otros reos, ha sido condenado y ahora se interpone el recurso, es á saber: porque se opuso primero, porque no se opuso después, porque acompañó á los otros al arroyo de la Plantera donde el hecho se cometió, y porque no le ha estimado autor la sentencia de 18 de junio de 1883, entiende el Ministerio público que se halla infringido el núm. 1.º del art. 13 del Código penal.

Dice éste que se considerarán autores «los que tomen parte directa en la ejecución del hecho»; y el Ministerio público deduce que Cayetano de la Cruz

ha tomado parte directa en la ejecución del hecho, porque no se opuso á que se ejecutara, y porque le presenci6.

Se equivoca el Ministerio público. ¿Qué es participación directa en la ejecución de un hecho? La participación directa, yo lo declaro por la sinceridad de la doctrina, no está solamente en intervenir en el acto material, está también en el de auxiliarle por otros medios materiales y aun morales, también lo concedo, sin los cuales el delito no se hubiera efectuado. Por manera que el respeto de la doctrina y el noble amor que tengo á mi profesión y á la ciencia á que me dedico, me obligan á no negar lo que favorecería mi defensa, si de estos livianos ardides necesitara, ó sea, que participación directa en un delito es, no solamente el hecho material concurrente del delito mismo, sino que es también el auxilio moral ó material, *ops et consilium*, de que hablaba el antiguo Derecho romano, por virtud del cual se facilitan medios de cometer un crimen, que no se consumaría si no se proporcionasen.

Me parece que no puedo plantear la cuestión que voy á debatir en este momento, en terreno más llano y accesible, á mi contrario, casi podría añadir, más desfavorable á los intereses de mi defendido.

Por ejemplo, es participación directa en la ejecución de un crimen, como mencionaba, estudiando una sentencia de este Supremo Tribunal, mi digno compañero el Sr. Henestrosa, el hecho de sujetar á un hombre para que otro cometa con facilidad un delito; lo es el distraerle la atención en los momentos en que es víctima de una asechanza; lo es el proporcionar las



— 229 —

armas necesarias para que ese crimen se cometa, á sabiendas de que se va á cometer; lo es la existencia y la congruencia de actos como he dicho antes, sin los cuales el crimen no hubiera podido realizarse, tal como él resulta del conjunto de los hechos. Pero la falta de oposición al proyecto que tuvieron los congregados en el molino de la Parrilla, esa falta de oposición, ¿es una participación directa en el delito? ¿Lo es? (*Signos afirmativos del señor Fiscal*).

¡Ah! no se puede decir; ¡cómo se ha de decir! Contra ello se rebelaría la razón, el sentido común, la ley misma, ó sin estos testimonios de mayor excepción, se rebelaría un hecho que consta en estos autos y que demuestra que el acto de no oponerse á la ejecución del crimen de la Parrilla no era un delito ni sombra de delito.

Allí asistió Juan Cabezas Franco: él se encuentra comprendido dentro de la nomenclatura general de aquellos que no se opusieron á la ejecución de la muerte; al salir de la casa para dirigirse al arroyo de la Plantera, Juan Cabezas Franco, de una imaginación más fértil que sus desgraciados compañeros, ó menos temeroso del funesto y espantable poder de la asociación á que pertenecía, Juan Cabezas Franco volvió la espalda y se retiró cantando una copla andaluza, y contestando á los que le llamaron: «No vuelvo, no vuelvo, porque me voy á ver á mi novia.»

Juan Cabezas Franco, si bien concurrió al molino de la Parrilla, no se opuso á la ejecución, y aun, conforme de su actitud dice especialmente el resultando décimoquinto, aceptó la idea de ejecutar la orden; pero no es reo y no es justiciable, porque no intervi-

— 230 —

no en el crimen, según textualmente reza el considerando noveno, aceptado por el Ministerio público, quien no ha pedido nada respecto de él, ni ha interpuesto recurso; luego este primer paso, que produce en el Fiscal la presunción de que Cayetano de la Cruz es autor por participación directa en la muerte de Bartolomé Gago Campos, no constituye delito ni calificación de encubridor, cómplice ó autor, y lógicamente se deriva que si Cayetano de la Cruz no hubiera hecho otra cosa más de lo que hizo entonces, es decir, no oponerse á la comisión del delito, que fué poco más ó menos la culpabilidad de Bartolomé Gago de los Santos, dicho sea de paso, y constituye sin embargo, la inculpabilidad de Juan Cabezas Franco, no se vería hoy ante los Tribunales de justicia, y no hubiera llegado á sus oídos esa amenaza de muerte que pronuncia el Ministerio público. ¿En cuáles otros actos estriba la delincuencia de Cayetano de la Cruz, que le convierte de inocente y absuelto, en autor del asesinato y reo de muerte? Vamos á investigarlo ahora.

Cayetano de la Cruz se fué con los demás al arroyo de la Plantera; por lo tanto el Ministerio público funda exclusivamente su calificación de autor del delito de asesinato de Bartolomé Gago Campos, en haberle presenciado, sin haber tomado parte material en su perpetración; pero al llegar á este punto, me encuentro con otra resolución análoga á la de Juan Cabezas Franco, y es que también presenció el asesinato José Fernández Barrios y ha sido absuelto; porque presenciar pasivamente el asesinato de Bartolomé Gago Campos, no es delito, como no lo es el acto



— 231 —

pasivo de la voluntad de no oponerse á él en el caso de Juan Cabezas Franco; y tenemos, en suma, que habiendo hecho Cayetano de la Cruz lo mismo que hizo Juan Cabezas Franco en el molino y Fernández Barrios en el arroyo de la Plantera, estos dos son inocentes, y Cayetano de la Cruz resulta partícipe directo y autor del asesinato y merece la pena de muerte. ¡Qué confusión y qué contradicción, señor! A mí me asustan. Verdad es que como si estuviera dentro del pensamiento del señor Fiscal, advierto que hace esta diferencia entre Cayetano de la Cruz y Fernández Barrios; que el primero concurrió voluntariamente, y que el segundo lo hizo por miedo insuperable, que le exime de culpabilidad.

Cierto es que la sentencia, contradiciendo la noción del despoblado, dice que en el corto trecho que media desde el molino de la Parrilla al arroyo de la Plantera, y después de haber encontrado en el camino á José León Ortega, el grupo que venía de aquella finca también topó á José Fernández Barrios y le obligó á seguir adelante con él, amenazándole de muerte; pero cierto es también que nada prueba en la sentencia que Cayetano de la Cruz fuese de su libre albedrío, y si en las observaciones hechas de viva voz por el Fiscal fuésemos á buscar datos para esclarecer esta materia, resolveríamos que «una sociedad ilícita y clandestina, con un tribunal secreto y misterioso cuyos medios de acción para ejecutar sus bárbaros é iníquos proyectos eran el hierro, el fuego y el veneno, de tal modo que ni el padre podía excusarse de clavar el puñal en el corazón de su propio hijo, ni el hijo podía excusarse de manchar sus manos en la

— 232 —

sangre de su propio padre,» era una amenaza constante de muerte sobre aquellos de sus afiliados que eludiesen sus mandatos; hasta tal punto, que el Ministerio público, después de describir con vivos colores el hecho del asesinato, dice que los concurrentes se retiraron «á poco de haber cumplido la orden de aquel bárbaro tribunal que acaso al día siguiente mandaría hacer lo propio con cualquiera de ellos.»

Yo no voy á discutir ahora si Cayetano de la Cruz se encontró bajo la presión de ese miedo insuperable; pero tampoco me puedo conformar con el parecer de que asistió por libre albedrío, sino por necesidad que se le impuso, ó en virtud de obediencia ó de propia conservación; y no hay tanta distancia entre las causas eximentes que se presentan favorables á Fernández Barrios y el estado de ánimo que lógica y racionalmente, sin contradicción de los hechos probados de la sentencia, debe suponerse en Cayetano de la Cruz. Mi argumento no es de una identidad absoluta, pero sí de cercana aproximación, y debe rigurosamente admitirse para los efectos de la defensa, porque no voy á deducir de él la absolución de Cayetano de la Cruz, que recayó en un caso sobre Juan Cabezas Franco, y en otro caso sobre José Fernández Barrios.

Dos actos inofensivos por sí y en relación con las personas que los ejecutan son también inofensivos, cuando se realizan por un sujeto, siempre que se refieran á un mismo hecho complejo y en la mayor parte de las ocasiones en que se relacionan con dos hechos distintos. Es cosa rara, rarísima, que me ha hecho pensar mucho antes de venir aquí á hacer tan

— 233 —

segura afirmación, el que dos actos inofensivos é inocentes, verificados por dos distintas personas puedan llegar á crear delincuencia combinados en una sola, y esto no sucede sino cuando esos actos que no tienen maldad en sí ni la engendran en su aislamiento, se combinan maliciosa y precisamente para dirigirse hacia un hecho ó realidad que no existiera ni pudiera existir cuando ellos individualmente la tomaron, lo cual excluye la posibilidad de que esa malicia nazca en la misma conjunción, si antes eran ya inofensivos respecto de un hecho conocido.

El acto de Juan Cabezas Franco es inofensivo y lo es también el de Fernández Barrios, refiriéndose ambos á un mismo hecho, á la muerte del Blanco de Benaocaz; porque de lo contrario no hubieran sido absueltos, ó siéndolo, contra ellos hubiera interpuesto recurso el Ministerio público; luego, según la tesis que acabo de sostener, y que no será seguramente contradicha, su conjunción en una misma persona, en la de Cayetano de la Cruz, trae la certidumbre de su inculpabilidad.

Así lo dicta la razón, el sentido común, la conciencia universal á que apelo; y sin embargo, el Ministerio público dice á Cayetano de la Cruz: «tú hiciste lo que Juan Cabezas Franco, pero en Juan Cabezas Franco no hay delito y en tí sí; tú hiciste lo que Fernández Barrios; pero en Fernández Barrios no hay delito y en tí sí, á pesar de que estos dos actos se relacionan con un tercer término idéntico al mismo que en tí; y por el mero enlace de la conjunción, resulta que tú has tomado nada menos que participación directa en un delito de asesinato, y eres reo de muerte.»



— 234 —

¡Ah! Se necesita algo más que fabricar síntesis, para no tropezar en los principios del derecho y no caer en los precipicios de lo arbitrario.

He dicho que no pretendía extremar la fuerza de este argumento para deducir la absoluta inocencia de Cayetano de la Cruz, y pedir su absolucón; le he planteado con el objeto de contradecir el recurso; y reconozco lealmente que, estando fundada la exención de responsabilidad de José Fernández Barrios en el caso décimo del art. 8.º del Código penal, no resulta igualmente probado de la sentencia que Cayetano de la Cruz obrase impulsado por miedo insuperable de un mal igual ó mayor; pero es indudable que esta circunstancia eximente proviene de un estado del ánimo, y sería absurdo é inhumano asegurar que la diferencia en aquellos momentos del estado de ánimo entre Fernández Barrios y Cayetano de la Cruz, es equivalente é idéntica á la que existe entre la absolucón y la aplicación de la última pena.

Además, en la hipótesis de que Cayetano de la Cruz acompañara voluntariamente á sus co-asociados al arroyo de la Plantera, esto fué para presenciar un delito que no se verificó, el cual era la muerte que habían de dar Rafael Jiménez Becerra y Gonzalo Benítez Alvarez, y no se puede combinar aquella actitud y manera de ser de su voluntad, con otro delito que no estaba previsto, y el cual presencié, no por efecto de su albedrío, sino de la casualidad, cual fué el asesinato cometido por Manuel Gago de los Santos y Cristóbal Fernández Torrejón.

Después de haber recorrido todo este largo trecho del recurso fiscal, puedo ya con plenitud de concien-

## — 235 —

cia asegurar que no está infringido el caso primero del art. 13 del Código penal; pero no se satisface con esta supuesta infracción el Ministerio público, sino que pretende reforzarla, aunque sea desconociendo ó desatendiendo declaraciones solemnes que constituyen parte de la jurisprudencia criminal, anunciando de viva voz que también ha sido infringida la doctrina sentada por el tribunal Supremo, y por ésta su Sala, en la sentencia de 1.º de octubre de 1872, como antes por escrito asegurara respecto de la nocturnidad, que lo habían sido otras varias.

No hay tal. El primer considerando de aquel fallo, de los cuales ha leído solamente tres en el presente acto, es la copia del art. 13 del Código penal, que habla de los autores, y la del art. 15 que se refiere á la complicidad; luego en este punto, la sentencia ni añade ni quita nada al derecho, ni le explica ni le desarrolla, sino que completamente reproduce los preceptos legales. El segundo considerando marca los hechos que son objeto del recurso y la participación directa del reo, que fué comprometiéndose á consumarle materialmente en compañía y de concierto con otros, recibiendo precio por este hecho criminal, armándose con una escopeta corta, y agachándose junto á un árbol para esperar á la víctima; de modo que él se encargó de la muerte, que se asoció con otros, que cobró dineros en pago de derramar sangre: y este es el caso que el Ministerio fiscal encuentra idéntico al de Cayetano de la Cruz!

Yo ando verdaderamente de asombro en asombro; mucho más al leer el tercer considerando de la sentencia, el cual desarrolla la verdadera doctrina, di-



— 236 —

ciendo que todos estos actos no son morales, sino materiales de ejecución del crimen y directos para llevarle á cabo; sin que pueda desvirtuar esta apreciación el que el reo no disparase la escopeta, cuando ya no era necesario después de haber tirado su coautor, causando la muerte.

¿Qué voluntad había en Cayetano de la Cruz de ejecutar en persona el asesinato? ¿Con qué arma se previno para ir al sitio del crimen? ¿Qué precio recibió por su ejecución? ¿Qué sanguinario contrato pactó para consumarle materialmente? ¿Qué acto para perpetrarle con alevosía? ¿Qué identidad ni siquiera semejanza hay entre lo uno y lo otro, para citar la sentencia de 1.<sup>o</sup> de octubre de 1872 á propósito de la participación de mi defendido en el delito del arroyo de la Plantera, y para atribuir la misma responsabilidad directa á Cayetano de la Cruz, de aquella que tuvo el reo Albalate en los actos que narra y pena la sentencia?

Ni la omisión de oponerse en la junta del molino á la ejecución de la orden, ni la acción de presenciar la comisión del delito, son con certeza actos materiales como los del Albalate; sino que se comprenden en la competencia de los actos morales, en los cuales la culpabilidad es más penosa de discernir; pero la inculpabilidad se manifiesta de plano con relación á un delito conocido, cuando ellos son tan ineficaces é inofensivos como los de Cayetano de la Cruz, para consumir la perpetración del hecho material indispensable en la ejecución de esta clase de delitos.

La segunda sentencia que en sus conclusiones considera infringida el Ministerio fiscal es la de 22 de

— 237 —

abril de 1878. Trátase aquí de Jaime Mir que, reunido con otros y llevando armas como ellos, con el objeto de matar, facilitó la ejecución del delito, impidiendo que llegaran en ocasión de oportunidad para evitarle, los agentes de la Autoridad. ¿Fué Cayetano de la Cruz designado para matar? ¿Fué con este intento al sitio de la ocurrencia? ¿Tomó de cualquiera otra manera participación directa en el delito, como la tomó Jaime Mir en el caso de que hablo, porque alejó deliberadamente los auxilios necesarios para estorbar que se perpetrase? Cayetano de la Cruz, ¿qué hizo? Nada, absolutamente nada; menos todavía de lo que puede suponerse que hiciera Juan Ruiz y Ruiz, porque al cabo sobre los hechos de éste no ha sobrevenido una resolución, y sobre los actos de Cayetano de la Cruz ha recaído una absolución en las personas de Juan Cabezas Franco y Fernández Barrios.

Como sigo paso á paso la oración del Sr. Fiscal, es claro que, aunque traigo, por respetos al asunto y á la Sala, muy maduras y asentadas mis ideas, improviso respecto de su expresión, y no he podido contestar con el tiempo y la reflexión necesarios para ser breve. Con esta protesta, que casi tiene color de remordimiento, voy á ocuparme en la circunstancia agravante de nocturnidad á que alude el Ministerio público, figurando infringido por falta de aplicación el caso décimoquinto del art. 10 del Código penal, y que por efecto de la síntesis, se extiende á Cayetano de la Cruz como á todos los reos.

El Sr. Fiscal tiene sobrado conocimiento del derecho y bastante alteza de miras para desconocer que esta circunstancia agravante no depende del fenóme-

— 238 —

no físico que diariamente nos ofrece la naturaleza, al extinguir en Occidente el lumínar del día y alzarse por Oriente y dominar nuestro hemisferio la tenebrosa oscuridad.

La nocturnidad es, según recordaba, y por eso he de insistir poco en este punto de vista, el Sr. Henestrosa, una circunstancia agravante, una entidad moral maligna que se agrega á la entidad superior del delito, por la circunstancia de escogerse á propósito, de caso pensado, las horas de la noche para cometer un crimen, y no porque la malignidad que reside en el resultado del delito, acrezca ó no, según las horas en que se consuma, sino porque el hecho de escoger la soledad, el silencio y las probabilidades de asegurar el éxito que trae consigo la lobreguez de la noche, es un acto reflexivo, una operación del entendimiento que agrega nueva malicia á la delincuencia principal, con el fin de facilitar su eficacia, allanando de embrazos su ejecución y resguardando su impunidad.

Recordando y combinando la reforma que del caso décimoquinto del art. 10 practicó el decreto de 1.º de enero de 1871, con varias sentencias pronunciadas por el Tribunal Supremo, paréceme que esta circunstancia agravante quedó redactada en los siguientes términos: «ejecutar el delito de noche ó en despoblado y en cuadrilla;» pero no importa, aun sosteniendo que esta es la verdadera y genuina redacción, que se dé valor y eficacia á la que tienen algunas ediciones: «ejecutar el delito de noche ó en despoblado, ó en despoblado y cuadrilla;» porque de una y de otra suerte, son ciertas y están fundadas las observaciones que voy á presentar á la Sala, como única doctrina



— 239 —

admisible, y las cuales parten de la afirmación que probaré de que, sean dos ó tres los casos del apartado décimoquinto del art. 10, él no contiene sino una circunstancia agravante: y hay una consideración que ratifica mi tesis: que á reglón seguido, después de narrar los caracteres de la circunstancia agravante, dice el mismo apartado:

«Esta circunstancia la tomarán en consideración los Tribunales, según la naturaleza y accidentes del delito.» Luego aquí no hay más que una circunstancia agravante.

Voy á explicarme, porque esto que digo es, no sólo racional, sino ajustado estrechamente á todo el sentido del Código y teoría penal, en cuanto á las circunstancias agravantes; y bueno es sujetar esa sonrisa que señorea, según advierto, los labios del digno representante del Ministerio público. No se puede sostener que haya dos ó tres circunstancias agravantes en el caso 15 del art. 10; que una circunstancia agravante sea el ejecutar el delito de noche, y otra el ejecutarlo en despoblado y otra en despoblado y cuadrilla.

No son estas dos ni tres circunstancias agravantes, sino dos ó tres maneras de ser de una misma, como que son dos ó tres maneras de ser distintas: tan distintas, que el acto de cometer un delito de noche, se refiere al orden del tiempo; y el de cometerle en despoblado al orden del espacio y el de cometerle en cuadrilla al orden de la personalidad. Pero, ¿deduce de aquí el Ministerio público que son dos ó tres circunstancias agravantes? No puede, no podrá deducirlo: son, lo repito, dos ó tres maneras de ser de una circunstancia agravante, la cual consiste en una concreción

— 240 —

general y superior... (*Dirigiéndose al Sr. Fiscal*; y no valen negativas, valen razones), que consiste,—decía,—en uno como verdadero y común extracto que aparece en la identidad de la substancia y de la esencia de todos los modos de ser ó casos de esa circunstancia agravante, ya en el orden del espacio, ya en el del tiempo y ya en el de la personalidad; significa una suprema categoría de seguro, facilidad ó resguardo del delito.

Y este no es el único caso que se observa en la nomenclatura de las circunstancias agravantes que contiene el art. 10. ¿No conoce el Ministerio público el caso octavo, que considera circunstancia agravante el «emplear astucia, fraude ó disfraz» usando en la misma formación gramatical para separar estas diferentes manifestaciones de otro substancial maligno que se llama engaño, de la misma conjunción disyuntiva ó? El engaño aquí no es más que una circunstancia agravante, que puede manifestarse de una de estas tres maneras de engañar, ó por dos de ellas, ó por todas; y así como el engaño para cometer un delito es un acto de perfidia que constituye la categoría suprema de la malignidad en la gradación de este delito accesorio, cualquiera que sea el modo como se manifieste, así en el caso décimoquinto, en que me ocupo, el resguardo ó seguro es la categoría superior de la malignidad, porque es la estudiada garantía con que se perpetra el delito, mediante la concurrencia de determinados elementos preparados de antemano. ¿Caben juntos la astucia, el fraude y el disfraz? Sí; estas tres maneras de engañar pueden reunirse y combinarse en la comisión de un delito. ¿Y son tres circuns-



— 241 —

tancias agravantes? Nó, no hay más que una. A nadie, á nadie le ocurriría dividir el caso octavo del art. 10 en tres circunstancias agravantes, para recargar tres veces la calificación de la delincuencia y la aplicación de la pena; sería siempre una sola circunstancia agravante.

Aun cuando con astucia llevara el asesino á su víctima á determinado lugar; aun cuando para ello la halagara y sedujera, cometiendo un fraude, aun cuando para matar, sin temor de ser reconocido, remedara el gesto, ocultara su rostro y trocara sus ropas habituales por otra clase de vestimenta, éstas serían tres maneras de ser que se juntarían en la enormidad y plenitud de una sola circunstancia agravante, pero no serían tres distintas que se sumaran, nó; y así lo dicen, aunque parezca que invoco con exceso estos testimonios, la sanidad del criterio, la razón y la ley. Otro tanto ocurre con la circunstancia 15; si la Audiencia de Jerez ha calificado ya el delito con esa circunstancia agravante, estimando la existencia de una de sus maneras de ser; si ha apreciado ya el «despojado y en cuadrilla...» (*Dirigiéndose al señor Fiscal: Insisto en que no valen negativas; yo las observo físicamente desde aquí, pero en mi entendimiento no las veo sino como delirios y fantasías.*) No puede ser—decía—que si la Audiencia de Jerez ha aplicado ya la circunstancia agravante del caso 15, por el despojado y cuadrilla, se aplique otra vez, formando dos en vez de una, por la nocturnidad; el pedirlo, es contra derecho.

Estimulado por tan tenaces y repetidas negativas, voy á exponer en breves conceptos la doctrina que

me autoriza á afinar en estas observaciones. Las circunstancias agravantes manifiestan una perversidad de la intención, aparte de la que genéricamente tiene el delito conocido y que es su agregado y sobrepuesto. Ellas por sí y en soledad, pueden ser ó no ser delitos, porque unas se salen á lo exterior, y otras, según su naturaleza, se encierran en la conciencia; pero aquéllas y éstas se desnudan de la distinción, cuando se unen al delito conocido, que es lo esencial de la delincuencia y de la penalidad, las cuales acrecen, y esta accesión de concepto en la culpa y de castigo en la pena, representa la perversidad de la circunstancia, con absoluta abstracción de que ella, juzgada sola, contuviese hecho ó produjese delito. Esa perversidad, cuándo se revela por la tenacidad del propósito contra las leyes racionales, y se llama premeditación; cuándo por las prevenciones del engaño, como en el ejemplo precedente; cuándo por las arterias del seguro, como en el caso que discutimos, y así sucesivamente, según el cuadro completo de malignidades especiales que trae el art. 10 del Código penal. La ciencia, fundada en el conocimiento del corazón humano, ha hecho estas divisiones, en las cuales no hay más ni menos, sino que todas ellas tienen el mismo grado de culpa y de penalidad, no porque prácticamente le tengan, ni siquiera en la ideal proporción de su intensidad, sino porque es imposible afinar la noción de esta última en la innumerable legión de los casos. Esta distinción de malignidades ha consentido todavía más al legislador: su acumulación para agravar relativamente la culpa y la pena; pero cuando se trata de una de ellas exclusivamente, ya no le corresponde

— 243 —

ni admite escala de gradación para la responsabilidad moral y la sanción material, ni por razón de intensidad, ni por razón de manifestación; porque la primera es inestimable, y la segunda es contraria al principio de que no son los actos que constituyen la circunstancia agravante los que se penan, sino la perversidad en ellos contenida. El legislador ha podido prever y aun clasificar los actos por los cuales esa circunstancia se revela; mas la acumulación de estos actos no indica mayor suma de perversidades, y por consiguiente, no conduce á mayor suma de culpa ó de pena, sino que la perversidad es siempre una y como tal se califica y se castiga.

Por otra parte, la nocturnidad se aprecia cuando se busca de propósito, porque la malignidad de esta circunstancia agravante no está en el hecho físico de que sea de noche, está en la intención de haber escogido ésta con el objeto de perpetrar el crimen, y así lo dicen las sentencias de 14 de marzo de 1872, 24 de enero de 1873, 18 de enero, 6 de febrero, 26 del mismo y 14 de julio de 1877. «Cuando se elige maliciosamente la noche para perpetrar el delito con mayores esperanzas de impunidad—añade la sentencia de 17 de octubre de 1872—y cuando los hechos demuestran que el acusado se aprovechó de ella para ejecutar el delito;» de modo que hay que buscar la noche como ocasión de tiempo pensado, para cometer el crimen. ¿Asegura el Ministerio público que la noche fué elegida de caso pensado?

Indudablemente lo cree, porque de otra manera no presentaría como agravación de la culpabilidad y de la pena esta circunstancia. Pues no es cierto. Consta,



— 244 —

que después de media tarde llegó la orden de muerte al molino de la Parrilla; consta que entonces, Bartolomé Gago de los Santos alejó á su hermano con su primo; consta que después mandó congregar á los asociados; consta que éstos se reunieron y quizás deliberaron sobre la inmoralidad y vicios de Gago Campos; consta que salieron los allí reunidos, y anduvieron el espacio que media hasta el arroyo de la Plantera; y todo esto consta que sucedió después de mediado el día, hasta la noche, desde el tiempo que nuestros trabajadores de campo andaluces, según expresión usual de la tierra, llaman *mediado el día*, y que comprende las horas de una á dos, después de haber comido, hasta el tiempo en que se ha puesto el sol y se retiran á descansar.

Fueran las dos ó fuera la una la hora á que llegó la orden al molino de la Parrilla, ello es lo cierto que allí estaba Bartolomé Gago Campos; que fué preciso apartarle para que no se enterara del contenido de la orden, y que luego que se ausentó, hubo de convocarse á los que habían de asistir á la reunión, y no se encontraban á mano y en la misma finca, sino que habitaban en sus diversos ranchos y caseríos, ocupados en su labor y con sus aperos, ó en su guardería, porque eran pastores, gañanes ó guardas de campo.

Del conjunto de todos estos hechos que expresa la sentencia, los cuales no son simultáneos, sino sucesivos, se deduce, tanto matemática como lógicamente, por aquello de que establecen la generación precursora del crimen, que éste no pudo cometerse el 4 de diciembre, de día, sino precisamente de noche, cuya

— 245 —

imposibilidad material excluye toda suposición de que la hora fuese escogida adrede y con intención deliberada y maliciosa. Si hay algo de extraordinario en el examen de estos hechos con relación al tiempo, es que cupieran todos en tan poco espacio, y la natural consecuencia es suponer que fué ya muy entrada la noche cuando se verificó en la hondonada del arroyo de la Plantera el siniestro encuentro de los dos grupos y sobrevino la muerte violenta de Bartolomé Gago Campos; lo cual se halla suficientemente aclarado en los autos, donde consta que fué á las siete de la noche, es decir, hora y media después de haberse cerrado el día en el mes de diciembre, cuando se reunieron los conjurados del molino; y aunque acerca de este punto no hace declaración expresa la sentencia entre sus resultandos, el valor de esta certidumbre se halla consignado en el considerando décimosexto, que limita á la noche del 4 de diciembre de 1882, el período de tiempo de que podían disponer los delincuentes para la ejecución del crimen, añadiendo que *no puede sostenerse con fundamento que aquella fuese buscada de propósito.*

La Audiencia de Jerez en esta materia ha procedido con aplicación de las reglas más severas de la observación, ajustándolas á los hechos.

Con el triste postulado del crimen, la ejecución es lógica y necesaria en la noche que divide el 4 del 5 de diciembre; no pudo ser por la tarde, porque ella se invirtió en los fúnebres preliminares que van narrados; y cuando la orden de los Corbacho fué conocida por los que estaban llamados á cumplirla, ya había anochecido; no podía dejarse para el día siguiente.



— 246 —

te, porque, según el resultando décimo, Gago Campos tenía que ausentarse en esa fecha; por consiguiente, aquella noche fatal era condición obligada de la comisión del delito en el orden del tiempo. Donde el imperio de las circunstancias se manifiesta y dicta sus mandatos, no cabe elección, y por consiguiente, la noche no fué buscada ni elegida, y según la doctrina que vengo exponiendo, no existe la circunstancia agravante de nocturnidad.

A este propósito me importa recordar la sentencia de 9 de mayo de 1877, que viene como de molde al caso en que discurro; porque dice en su último considerando: «La noche no fué elegida, sino que era inherente al delito, por disponer su marcha el interfecto; de consiguiente, al apreciarla, se infringe el artículo 10 en su circunstancia quince».

Precisamente el hecho es igual: Bartolomé Gago Campos disponía su marcha como en el caso á que se refiere la sentencia de 9 de mayo de 1877, y por razón idéntica á la que el considerando expresa; la circunstancia de la nocturnidad es inherente al delito, y no puede ser agravante.

Mi doctrina es á todas luces la única buena y verdadera, y yo abrigaría el temor de perjudicar su efecto en el ánimo de la Sala, para que rechace la del señor Fiscal, trayendo al debate nuevos puntos de vista y argumentos respectivos, si no creyere absoluta la fuerza de convencimiento que su exposición contiene. Vulgarmente se dice que después de probada cumplidamente una afirmación, la enflaquece y desmejora otra suposición admitida para apurar el debate; pero yo tengo demasiada confianza en mi derecho y en la

— 247 —

rectitud y firmeza de opiniones de la Sala, para acalorar esta opinión y arredrarme con su temor.

Protestando, pues, de la solidez de mis convicciones y de mi adhesión á la certidumbre de los hechos presentados y de la doctrina desarrollada, voy á terminar este punto con la cita del considerando cuarto de la sentencia de 5 de abril de 1879: «Si los hechos acreditan que se cometió el delito de noche, pero no que ésta fuese buscada de intento para cometerle, en la duda de si dicha circunstancia fué ó no accidental, no debe aceptarse para agravar la responsabilidad del procesado; y por lo tanto, al apreciar esta circunstancia la Sala sentenciadora, incurre en el error de derecho quinto del art. 798.»

Todo lo más que yo puedo conceder al Ministerio público, es que abrigue dudas acerca de la nocturnidad como circunstancia agravante, ó lo que es lo mismo, acerca de si fué buscada de intento, y para eso es fuerza que me domine y ajuste por las necesidades de la concertación, casi con un imposible real y con un imposible legal, que no puede contemplarse sino en las figuras del entendimiento. Pues en caso de duda, lo ha dicho el Tribunal Supremo; en caso de duda, estimar esta circunstancia agravante es también infringir los preceptos legales.

*El Sr. Presidente.*—Si el señor Letrado quiere descansar, la presidencia le concederá gustosa el tiempo que desee.

*El Sr. Carvajal.*—Señor Presidente, me falta aún mucho que decir, y no podría terminar antes de dos horas.

*El Sr. Presidente.*—La Sala que escucha con suma

— 248 —

complacencia al Sr. Letrado, no puede dejar en suspenso su informe para el lunes, por lo cual debe concluir en el día de hoy, pero puede hablar el señor Letrado todo cuanto quiera.

*El Sr. Carvajal.*—Son tan flacas las fuerzas físicas de la naturaleza humana que me va ganando el cansancio, cuando renueva el pensamiento sus bríos y se siente la voluntad con mayores energías. Llevo ya muchas horas de hablar; pero las indicaciones del señor Presidente me estimulan más y más me obligan, y sigo adelante.

Queda impugnado el recurso del Fiscal en cuanto á Juan Ruiz y Ruiz y Cayetano de la Cruz, y ahora, voy, señor, á sostener los tres recursos que me corresponden, referentes al mismo Juan Ruiz y Ruiz, á Cayetano de la Cruz y á José León Ortega.

Como el que se entra por lo más cerrado de un monte y después de fatigosa marcha llega á terreno más llano y campo más abierto, y principia á espaciarse con el término cercano de la jornada y á ensanchar el oprimido pecho, así yo me siento ahora moralmente aliviado; porque se acabó ya el caminar por la espesura del informe fiscal y el apartar sus argumentos, más espinosos y punzantes que las ramas bravías que, para abrirse paso, troncha el caminante presuroso.

Lo digo sin mortificación de vanidad personal: llevo tres horas de estar bajo el influjo y casi bajo el dominio del Ministerio público, por la misma intensidad del esfuerzo que he hecho para encontrar en su informe materia legal, único medio de que hubiera señoreado mis convicciones y que hubiera tomado pose-



sión de mi alma; pero en cambio, me he hallado como perseguido y obseso de espíritus malignos que me repetían con complacencia las palabras del Sr. Fiscal, y glosaban con inhumana ironía las últimas frases de su informe, donde se condensa toda su substancia: «¡Enviad, enviad á Ceuta y á Santoña á los procesados de Jerez de la Frontera, y en esas plazas renacerá y se reproducirá la fatal semilla que es necesario extirpar á todo trance!»

¡A todo trance, nó! Basta de deprecaciones bíblicas de exterminio, que hielan de espanto! La ley, la ley es el amparo de la inocencia, la salvaguardia de la sociedad y hasta la garantía de los criminales. Dentro de la ley, venga el castigo; fuera de la ley, el castigo es también un delito; que no se han instituido los Tribunales para invocar ante ellos el principio de *Salus populi suprema lex esto*.

Ahora, libre de obsesión, voy á discutir con más desembarazo, la sentencia de 18 de junio de 1883, y á entablar con el apoyo de la ley mis recursos de casación.

La sentencia, considerando que «ante la razón y el buen sentido, la orden dada después de la Junta del Alcornocalejo implica participación en el delito por inducción directa, pero que no es lógico confundir á Juan Ruiz y Ruiz con los Corbacho en un mismo grado de participación, porque no tenía el interés personal de éstos, y que la orden se habría ejecutado sin su intervención,» califica de cómplice á Ruiz con la circunstancia agravante de premeditación, de despojado y en cuadrilla, y le condena á diecisiete años y cuatro meses de cadena temporal.

— 250 —

Esta sentencia, señor, es susceptible de casación, autorizando el recurso los artículos 848 y 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal; el primero en su caso primero, por tratarse de un fallo definitivo, y el segundo en los casos tercero, cuarto y quinto, fundándole en las infracciones de derecho que expondré adelante.

Sería repetición inútil y enfadosa que yo volviera á decir cuáles son los hechos probados de la sentencia, en lo que concierne á Juan Ruiz y Ruiz; los conoce la Sala por el examen que he hecho, impugnando el recurso del Ministerio público; ellos están circunscriptos al resultando sexto y conforme con lo que me propuse poner de bulto y de realce, de ellos no resulta probanza de criminalidad alguna contra Juan Ruiz y Ruiz. Aquí no hay delincuencia, porque del único hecho probado, ó sea que Juan Ruiz y Ruiz pertenecía como Secretario á la comisión organizadora del Alcornocalejo, según dicho resultando sexto, no se puede rigurosamente deducir que tuviera participación de ninguna clase en el homicidio ó asesinato del Blanco de Benaocaz. Se halla consiguientemente infringido el art. 15 del Código penal que trata de la complicidad, por aplicación indebida, y el artículo 1.º del mismo, porque en los actos ejecutados por Juan Ruiz y Ruiz no hay ni omisión ni comisión de acto castigado por la ley.

La infracción del art. 15 consiste en suponer cómplice á Juan Ruiz y Ruiz, el cual no ha cooperado á la ejecución del hecho con actos anteriores ó simultáneos, como que no ha cooperado con acto alguno.

Yo, si estuviera probada la circunstancia de haber



— 251 —

escrito Juan Ruiz la orden que los Corbacho pasaron al molino de la Parrilla, más aún, si con un criterio y un conocimiento superior al del Letrado, en cuyas manos se ha puesto el reo y en quien ha tenido confianza, la Sala considerara probado que Juan Ruiz y Ruiz había escrito la orden de muerte, yo desde luego diría que era cómplice; porque no vengo aquí á sorprender ni con la argucia ni con el sentimentalismo, á la Sala, sino que, abrigando certidumbre completa del derecho que alego, el respeto de ese derecho con suave imperio me obliga á su exposición, y, con ser grande el que debo al Ministerio público y á la Sala, todavía me parece superior el que exige la ley. No obstante, siendo á mis ojos la Sala una personalidad de tanta suposición y juicio, no excuso considerar el caso de que en su concepto estuviese probado que Juan Ruiz y Ruiz escribiera la orden de dar muerte al Blanco de Benaocaz; donde, planteada la cuestión así, vamos á ver qué delito es éste.

Si examinados bien y detenidamente el hecho de delincuencia y los grados sucesivos de su génesis, crecimiento y finalidad, que se hallan por grandes rasgos ó divisiones comprendidos dentro de aquella serie en que antes hablábamos, de causa, procedimiento y resultado, veremos cómo en las transiciones de aquellos entre sí llegan á desvanecerse y á confundirse sus términos y separaciones, en forma que incapacita para discernir dónde concluye lo uno y dónde principia lo otro; pero estudiando la causa, nos mantendremos dentro de los límites de lo seguro, mientras en ella comprendamos desde la impresión primera que reci-

— 252 —

be el sujeto actor á la manifestación interna de su voluntad, y hasta la deliberada determinación de ésta en orden á conseguir el fin de la delincuencia; que se llama intención, por rápida y momentánea que sea la sucesión de estos movimientos del alma. Este estado intencional de la delincuencia no constituye delito, mas es su postulado necesario; así es que la violación del derecho sin intención conocida ó presupuesta por el orden social, no apareja minoración del estado moral del sujeto, y no constituye infracción punible; de la misma manera que por inofensiva, la mera intención que no ha pasado al procedimiento ni ha transcendido al resultado, en el hecho mismo de no tener manifestación externa, se sale fuera de la órbita de la justicia humana.

El cuadro de las circunstancias eximentes del Código penal, es la consagración de la realidad filosófica en la realidad jurídica, acerca de aquella irresponsabilidad personal que corresponde á la noxa sufrida en el derecho, sin designio ó propósito malicioso de causarla; pero ocurre á las veces, que la intención se dirige hacia un hecho de delincuencia y resulta otro, y si éste es de menor malignidad y daño, no se estima la malicia de la intención interna, porque es inestimable, y el delito se juzga por su resultado. Pongo, por ejemplo, aunque sea gravísima, la presunción de que se dirige hacia el homicidio todo aquel que, ayudado de arma ofensiva, la emplea contra su semejante; si causa en éste lesión leve, menos grave ó grave, no por esto se le califica de homicida, sino que esta violación del derecho puede llegar á ser materia de una simple falta y merecer la pena de arresto. Por el

— 253 —

contrario, cuando la intención de causar un mal menor se halla de manifiesto, siendo siempre el resultado la base del juicio que forma la sociedad por medio de sus Tribunales, y no entendiendo por ello que el delito ha de ser calificado por la malicia contenida en aquella deliberación de la voluntad, sino por el daño mismo ó violación externa del derecho, entra la intención como una circunstancia atenuante, ó se impone al delincuente, en su caso, la pena máxima correspondiente al delito intencional, sirviendo por el contrario, en la misma probanza de su intención, la pena del delito ejecutado, cuando es menor del de ésta, para castigo del culpable (art. 65 del Código). Precisa, por lo tanto, que el delito sea en el resultado aquello mismo que fué en la intención, para que se le gradúe y pene por esta concordancia de su malignidad potencial y de su malignidad real, lo cual es más llano de conocer, residiendo ambas en el mismo sujeto, que cuando uno es el que delibera y otro el que ejecuta, extendiéndose esta facilidad á los casos en que la intención difiere del resultado.

Hemos supuesto la probanza declarada de que Juan Ruiz y Ruiz escribió la orden de muerte y que en este concepto fué cómplice. Ha resultado, según la Audiencia de Jerez, un asesinato; si lo hubiera ejecutado el mismo Juan Ruiz y Ruiz, sería, según estos principios y las reglas de nuestro Código penal, autor de asesinato; y no habiendo sido su intención cometer este crimen sino el de homicidio, tendría, cuando menos, como autor la circunstancia atenuante de no haber querido ocasionar un mal tan grave como el que produjo, modificación racional y justa que nues-



— 254 —

tra ley criminal admite, en analogía con el principio de que el resultado prevalece sobre la intención, el cual se consagra en los ejemplos que antes he puesto y que demuestran, cómo siendo aquella siempre ó casi siempre una, la casualidad disminuye la delincuencia desde las más severas penas hasta las más insignificantes.

Yo, por la pureza de la teoría y por arraigadas convicciones, sostendría decididamente en este caso que Ruiz y Ruiz era solo cómplice de un homicidio, porque sería preciso, señor, estar ciego para no ver que el conjunto de los hechos de esta causa, debe dividirse y subdividirse en categorías conexas con diferentes delitos, y que si en el molino de la Parrilla se recibió la orden de matar á Gago Campos, y ésta la escribió de su puño Juan Ruiz y Ruiz, á pesar de que no me cabe en la cabeza, según la redacción del resultando décimo, que éste sea un hecho probado, el delito que la orden provocó y que se resolvió en aquel sitio, no fué el que se consumó en el arroyo de la Plantera. La orden decía que la ejecutaran los más jóvenes; para esto fueron designados Benítez y Jiménez Becerra; no llegó el momento de que cumpliesen el mandato; otros sin causa ó motivo explicado en los autos se anticiparon, y donde debía existir un homicidio, la fatalidad trajo un asesinato.

Si Juan Ruiz y Ruiz es cómplice, ¿de cuál de estos dos delitos distintos lo es? Indudablemente de una tentativa de homicidio ó de un homicidio frustrado, no de un asesinato que se realizó sin su intervención. Resultó un asesinato; pues fué sin su voluntad y sin su intención; así es que existen motivos poderosos

para suponerle sencillamente cómplice de una tentativa de homicidio; cuando más de un homicidio frustrado, *del estun sup valquero del es arguero se fono*

Podría suceder que la Sala subordinara, no ya solamente la intención al resultado, sino todos los actos independientes y anteriores, al de disparar sus escopetas Manuel Gago Santos y Cristóbal Fernández Torrejón contra el Blanco de Benaocaz.

Muy dura se me hace esta suposición, sabiendo por experiencia la perspicacia de la Sala y la profundidad con que trata y distingue las materias del derecho penal; pero esto significaría que Juan Ruiz y Ruiz es cómplice en el asesinato de Bartolomé Gago Campos.

Al llegar á este punto, salta todavía más á la vista la necesidad de aplicar la circunstancia tercera del art. 9.º, ó sea la de no haber tenido el delincuente intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo; porque, si habiéndose él propuesto ejecutar un acto de homicidio, le hubiera personalmente ejecutado, produciendo un asesinato, dicha circunstancia atenuante le beneficiaría; ¿con cuánto más motivo no ha de venir en su amparo, cuando por no haber tomado participación directa en el hecho ni hallarse dentro de ninguna de las condiciones del artículo 13 del Código penal, no es autor, y todo lo más podrá considerársele como cómplice, no habiéndose propuesto en esta categoría de la delincuencia cooperar á la ejecución de un asesinato, sino de un homicidio, no habiendo sido los actos que él ha ejecutado simultáneos con el asesinato, sino anteriores, y habiéndose consumado después de ellos el crimen sin nueva intervención de su parte?



— 256 —

Yo reclamo para mi defendido Juan Ruiz y Ruiz, en el caso de que se le considere cómplice por el simple hecho de haber escrito la orden de muerte, la aplicación de esta circunstancia atenuante, que es suya, que le corresponde, que no se le puede arrebatar ni desconocer siquiera por esa afición de síntesis, extrañas por todo extremo á un debate jurídico, en el cual es preciso no pesar en conjunto las culpas todas, sino separadamente la de cada uno de los individuos que á la delincuencia han conadyuvado; y en ninguna parte de la sentencia se dice que los individuos de la comisión organizadora que se congregaron en el Alcornocalejo, ordenaran la muerte de otra manera que en su sentido genérico y con su significación simple, la de homicidio.

Esta misma observación me guía al examen de las circunstancias agravantes que se imponen por mayor carga á mi defendido en la sentencia contra la cual recorro y cuya casación solicito.

Aun considerado en su aspecto menos complejo, se dibujan y perfeccionan en cualquier delito los caracteres y manifestaciones de los tres términos de aquella serie en que he discurrido con frecuencia: la causa, el procedimiento y el resultado, los cuales son elementos constitutivos y comunes, idénticos é inseparables de cada una de aquellas malignas entidades, por cuyas distinciones se clasifican sus especies y sus familias y se agrupan sus individualidades. Así es que todos los delitos de asesinato tienen un fondo común, la misma causa, el mismo procedimiento y el mismo resultado, por lo cual, la integridad del asesinato se destaca de cualquier otra violación del derecho contra

— 257 —

el hombre físicamente considerado, y dentro de esa integridad se diferencia á su vez cada una delincuencia, por la variedad de los accesorios que dan personalidad más ó menos saliente, más ó menos criminal, de toda suerte más ó menos varia, á la individualidad de los delitos.

Los hechos constitutivos del de asesinato son: como causa, la intención de dar la muerte; como procedimiento, la alevosía, el precio ó promesa remuneratoria, la inundación, el incendio, el veneno, la premeditación conocida, el ensañamiento, aumentando deliberada é inhumanamente el dolor del ofendido, bastando uno de estos actos para constituir el procedimiento de asesinato; como resultado, en fin, la muerte de la persona contra quien se dirijan estos medios de destrucción.

En concordancia con lo que antes he dicho, alrededor de este delito, como de otro cualquiera, igualmente considerado en su esencial constitución, se colocan las circunstancias características de la individualidad, que por eso se llaman *circunstancias, circunstancias*, unas contrarias de todo punto al delito, porque excluyen la malicia de la intención, y son las eximentes; otras simplemente contradictorias del conjunto ó contrarias de una de las múltiples fases de la delincuencia, que son las atenuantes; las últimas coadyuvantes y poseídas por sí propias de malignidad, que son aquellas que agravan la culpabilidad y la pena.

El delito, uno en su general concepto, acrece ó mengua, según estas circunstancias, también por sí perceptibles en el entendimiento y conocidas por su realidad; pero como el delito, á su vez es individual

— 258 —

respecto del actor, cada una de dichas circunstancias corresponde ó no corresponde á su delincuencia, la modifica ó no la modifica, aplicándose al estado de la voluntad y á los actos personales ejecutados por cada uno de los que toman parte en una contravención del derecho; de manera que en lo complejo queda el delito colectivo, común é indistinto, donde hay autores, cómplices ó encubridores; y las circunstancias agravantes y atenuantes aumentan ó rebajan la delincuencia de estos diferentes actores, según en la intención, en el procedimiento ó en el resultado, ellas se revelan en su personal daño ó beneficio, siempre de acuerdo con la ley natural y la escrita, de donde se realiza la justicia.

La sentencia dice en su considerando duodécimo que todos los reos han incurrido en las circunstancias agravantes de premeditación, y yo pregunto: ¿Cuándo ha premeditado Juan Ruiz y Ruiz ni siquiera el homicidio del Blanco de Benaocaz? No se discutió esta cuestión en el Alcornocalejo, sino la moralidad de la víctima. En cuanto á la orden de muerte, contra Juan Ruiz y Ruiz no resulta que antes conociera de este propósito, porque no asistió á la reunión precedente del rancho de Barea, donde por vez primera se indicó este criminal pensamiento, y la sentencia no ofrece en ninguno de sus resultandos indicio siquiera leve, de que hubiera pasado antes por su imaginación.

Porque ¿qué es premeditación? No es, ni muy lejos de eso, la rápida operación intelectual que precede y dirige los movimientos volitivos, y es ya una realidad en el pensamiento, antes de que la actividad se ponga en juego para hacerla, y quizá inmediatamente,



— 259 —

realidad en el espacio; que eso ni siquiera es la meditación, la cual se califica por la aplicación intensiva, reflexiva y fría del pensamiento en la consideración de un objeto ó designio, y que cuando se refiere á actos, puede ser previa ó posterior, y extensiva á inúmeros puntos de vista y estados de conciencia. Nó; la premeditación no es ese instantáneo sacudimiento cerebral, cuyas consecuencias nos suelen llamar también instantáneamente del mundo interior y recatado de las concepciones intelectuales, al mundo de las realidades vivientes y externas. La premeditación es la consideración atenta y cuidadosa que se hace después de la concepción intelectual, á menudo en armonía con la voluntad incipiente ó sus primitivas indicaciones, y no raras veces aun después que aquélla se ha revelado con imperio y plenitud ante la conciencia personal, de un objeto ó cosa ó plan ó proyecto de acción, digamos de un golpe lo que á nuestro intento se acomoda, sobre cuya conveniencia se pide á la reflexión su maduro consejo en unos casos, y en otros la garantía y manera de ser del procedimiento.

Esta es la premeditación de que habla la ley penal, una, como su nombre dice, meditación anterior reflexiva, duradera, del designio criminal; exenta además de pasión y de ofuscamiento; porque su malignidad propia consiste en que precisamente la razón ha de tener tiempo y libertad para no confundir las especies y llamar al conocimiento del error y al espanto ó vergüenza del delito proyectado; de donde proviene que la maldad es mayor, cuando con esas condiciones, la tenacidad persiste y el criminal se mantiene recio.

— 260 —

Luego, cuando trate del recurso de José León y Ortega, si la hora lo consiente y vuestra condescendencia no me falta, fundaré mi opinión en la doctrina del Tribunal Supremo; bastándome ahora con decir que, según éste y el texto del Código (caso séptimo del art. 10), la premeditación ha de ser conocida, y para que lo sea la de Juan Ruiz y Ruiz, es preciso que conste en hechos consignados por la sentencia; la cual no contiene ninguno de que resulte la existencia de la premeditación, y cuando de estos actos nada se dice, es claro que la Audiencia no ha podido apreciar una circunstancia que ha de ser conocida para ser estimada; no existe, pues, legalmente la premeditación, y por aplicación indebida se ha infringido el caso séptimo del art. 10.

En cuanto al despoblado y cuadrilla, ¿qué he de decir, sin aplicar la doctrina que vengo apoyando en materia de circunstancias agravantes? No sabía Juan Ruiz y Ruiz, dentro de la hipótesis en que hablo, que se iba á verificar el delito en despoblado y en cuadrilla; no coadyuvó á que se verificara en esos términos; luego no es reo de esta circunstancia agravante; consecuencia ineludible, porque parte de un principio consignado en todos los Códigos del mundo, que donde no hay conocimiento no hay malicia, y donde no hay malicia, no cabe responsabilidad; principio que en esta materia ha engendrado el sabio precepto del art. 80 del Código penal vigente, con el cual se ajusta mi informe:

«Las circunstancias agravantes ó atenuantes que consistieren en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido ó en



— 261 —

otra causa personal, servirán para agravar ó atenuar la responsabilidad sólo de aquellos autores, cómplices ó encubridores en quienes concurrieren.

»Las que consistieren en la ejecución material del hecho ó en los medios empleados para realizarlo, servirán para agravar ó atenuar la responsabilidad únicamente de los que tuvieron conocimiento de ellas en el momento de la acción ó cooperación para el delito.»

Cuando Juan Ruiz y Ruiz cometió este delito hipotético, fué en el Alcornocalejo, asistiendo á la junta de la comisión organizadora, y escribiendo la orden. Este es el momento de su cooperación, según el artículo 80, y para que la circunstancia de despoblado y en cuadrilla agrave su responsabilidad, fuera preciso que entonces tuviera conocimiento de que así se iba á cometer el delito. No le tenía ni le podía tener, porque las cosas en tiempo futuro, no se conocen sino por la previsión, que es facultad de tanto lustre, aunque ya de menos solidez, como que es un antejuicio que no apareja certidumbre. Pero al cabo, al cabo, Juan Ruiz y Ruiz podía prever el hecho de la muerte, en razón de la eficacia que tuviera el mandato de la comisión organizadora; consecuentemente, lo que no estaba en la orden no cabía en su previsión, porque no existía igual motivo para influirla, y como de cuanto se sabe sobre el texto de la orden no hay posibilidad de deducir que se insinuase siquiera entre los medios de ejecutar el crimen que fuese en despoblado y cuadrilla, es indudable que no se puede aplicar esta circunstancia á Juan Ruiz y Ruiz, sin violar el sentido preceptivo del artículo 80.

— 262 —

Señor, resumiendo respecto de este reo: él debe ser absuelto, según mi petición, ó considerarle cómplice sin ninguna circunstancia agravante y con la atenuante del caso tercero del art. 9.º, por no haber tenido la intención de causar un mal tan grande como el que su cooperación produjo.

Las infracciones de ley cometidas en la sentencia se reducen á las siguientes:

Primera.—Art. 15 del Código penal referente á la complicidad, por aplicación indebida.

Segunda.—Art. 1.º del mismo.

Tercera.—Caso 15 del art. 10.

Cuarta.—Caso 3.º del art. 9.º, por falta de aplicación.

O absuelto ó penado, según estas condiciones de cómplice, sin circunstancias agravantes y con una atenuante.

El recurso que he interpuesto en nombre de Cayetano de la Cruz contra la sentencia de la Audiencia de Jerez pronunciada el 18 de junio de 1883, se halla autorizado por el art. 848 de la ley de Enjuiciamiento criminal, en razón de tratarse de una sentencia definitiva, y por los casos 3.º, 4.º y 5.º del art. 849.

Partiendo como siempre de los hechos probados, no he de enumerarlos, que ya lo hice detenidamente al combatir el recurso del Ministerio público, limitándome á volver á consignar mis conclusiones, que son las siguientes, en las cuales se resume toda la intervención de Cayetano de la Cruz en la muerte del Blanco de Benaocaz: rechazó el delito en el rancho de Barea, no se opuso luego en el molino de la Parri-lla, y, por último, le presenció. Estos actos constituyen, según la sentencia, su complicidad, con la circuns-

— 263 —

tancia agravante de premeditación, de despoblado y en cuadrilla, aplicándole, por último, la pena de diez y siete años y cuatro meses de cadena temporal; en lo cual se infringe el art. 15 del Código, porque aquellos actos, si bien anteriores los unos y simultáneo el último, no cooperan á la comisión del delito, y el primero le contradice resueltamente.

La extensión que di á aquella parte de mi informe, donde he pretendido y creo haber logrado llevar al ánimo de la Sala el convencimiento de que Cayetano de la Cruz no es autor del crimen, me excusa ahora de una larga disertación, porque la mayoría de las observaciones que hice desde este punto de vista, son también capaces de producir la misma convicción relativamente á la complicidad. Cayetano de la Cruz hizo lo que Juan Cabezas Franco en el molino de la Parrilla, y lo que Fernández Barrios en el arroyo de la Plantera.

Ciertamente estuvo delante en la muerte que dieron Manuel Gago Campos y Cristóbal Fernández Torrejón, pero no cooperó á ella de ninguna manera, ni por la intención, que no está de manifiesto, ni por el procedimiento, en el cual no tomó otra participación que la de cavar la fosa y enterrar el cadáver. Oyó, vió é hizo. Oyó en el molino de la Parrilla la orden de muerte; no tuvo el valor y la energía de reprobársela altamente y con riesgo de su persona; pero oír no es delito, porque precisamente se trata de un sentido que no se halla bajo la dependencia, como otros, del dominio y de la voluntad del sujeto. Pueden cerrarse los ojos para no ver un espectáculo que escandaliza ó aterra; pero no es potestativo y voluntario dejar de



— 264 —

oir, según distinción que no es de mi propia cosecha, sino que con referencia á la responsabilidad de los actos, han hecho desde los jurisconsultos romanos hasta los contemporáneos, y que, huyendo siempre de la erudición, no fortifico con numerosos ejemplos y sentencias.

Tampoco es un delito oír y no protestar, como lo confirma la absolución de Juan Cabezas Franco; porque en el caso de Cayetano de la Cruz, enfrente de la orden de la muerte, en medio de una junta clandestina y criminosa, donde es posible y hasta probable que todos y cada uno repugnarán el crimen que se les notificaba, pero que nadie, por recelo mutuo, se atreviera á alzar la voz, produciéndose la unanimidad del silencio por la unanimidad del temor, se necesitaba ciertamente alcanzar á las esferas de la abnegación y del heroísmo, para que el instinto de la conservación propia no atajase los impulsos de la conciencia y no les cerrase las puertas de la expresión. Si moralmente todos los hombres están designados por su superior naturaleza á tocar en este alto punto de la personalidad humana, nadie lo está obligado, sino en proporción de sus facultades y de sus sentimientos; por lo que se ve, cuán de razón es que estas omisiones que empañan y desprestigian la dignidad personal, no constituyan delincuencia ni sean penadas como delitos, siendo el heroísmo un ideal que no se cumple sino por simple privilegio.

Y del acto de presenciar el delito, nada tengo que añadir á lo que antes dije, y ahora, por virtud de las precedentes observaciones, es de la misma manera aplicable.

— 265 —

Respecto de la sepultura, que es en el círculo de los procedimientos, lo único que ha hecho Cayetano de la Cruz, tampoco quiero incurrir en la nota de sentimental, mirándolo desde un punto de vista piadoso, porque digo sinceramente que así no lo creo, y que ésta fué una colaboración verdadera con el objeto de encubrir el crimen que acababa de cometerse.

A Cayetano de la Cruz no puede extenderse tampoco la premeditación, porque nada consideró reflexivamente, ni siquiera resolvió ó pensó en forma cuando menos externa y apreciable, y aunque algo pensara y resolviera dentro de sí, no cabe calificarlo de premeditación, siendo verdadera, como no es posible dudarlo, la doctrina sentada ya sobre la materia.

En cuanto al despoblado y cuadrilla, este es un punto accesorio del delito y de la sentencia que todavía no he tratado con la necesaria amplitud; pero haciéndoseme demasiado tarde, ruego á cualquiera de mis compañeros, y principalmente á aquellos que defienden reos que se encuentran en análogas circunstancias de las de Cayetano de la Cruz, que le desarrollen con aplicación al caso general. Yo ahora he de limitarme á decir que el despoblado como la nocturnidad, para constituir circunstancia agravante, necesita no ser por ella inherente á la comisión del delito, ó lo que vale lo mismo, ha de escogerse previamente por quien delinque.

Esta noción de un terreno despoblado es sumamente relativa, y depende tanto de las condiciones locales, como que, por ejemplo, lo que es despoblado en Galicia, donde la propiedad está tan repartida y los caseríos tan próximos, pudiera ser poblado en



— 266 —

Andalucía, región de grandes y extensas cortijadas. Yo bien sé que esto queda confiado al criterio del Tribunal sentenciador, pero ha de ser siempre dentro de las leyes de la crítica racional, y no ha de depender exclusivamente su juicio de la simple distancia ó de una soledad comparada. Cuando el despoblado se elige, entiéndese naturalmente que es porque lo apartado de las habitaciones arguye la probabilidad de que no haya tránsito habitual de gente en el sitio donde se comete el delito; y con esta base digo, que tratándose de Andalucía, siendo cierto que la hondonada del arroyo de la Plantera está situada en las cercanías de caseríos poblados, supuesto que á 500 metros de distancia y en el silencio de la noche se oyen las voces de los altercados, por consiguiente, con más claridad los gritos de un agredido, y estando averiguado que en el tránsito desde el molino de la Parrilla á aquel lugar, encontraron los asociados varias personas, ni se puede decir que fué elegida la circunstancia del despoblado, ni siquiera que éste existiese, y por consiguiente, tampoco estimarse la circunstancia agravante que presupone la soledad del sitio, por cuyo medio se facilita la impunidad del delito y se constituye la agravación de la responsabilidad. Así se resuelve en la sentencia de 7 de junio de 1873.

Según la redacción y la interpretación que siempre se ha dado á esta circunstancia agravante, el hecho de constituir cuadrilla los reos, no tiene influencia en el aumento de delito; porque el valor de la conjunción copulativa y, indica sobrado la necesaria combinación de los dos hechos, para formar y declarar la agravación.

— 167 —

Aplicando únicamente al caso de Cayetano de la Cruz estas ideas, no veo por ninguna parte ni la complicidad, ni las circunstancias agravantes, sino que me ratifico en el convencimiento de que esta causa se ha visto influida por una prevención contraria á los reos, se ha forjado con la inexperiencia propia de un procedimiento nuevo, y se ha sentenciado bajo la presión del terror social apartado de la imparcialidad jurídica. Nos encontramos dentro del caso tercero, art. 849, porque constituyendo delito los hechos que se declaran probados en la sentencia, se ha cometido error de derecho en su calificación, considerando cómplice en vez de encubridor, á Cayetano de la Cruz, del párrafo cuarto porque también se ha cometido error de derecho, al determinar la participación de este reo en los hechos que se declaran probados según la sentencia; y del caso quinto porque la misma comisión de error existe en la calificación de los hechos que se declaran probados en concepto de circunstancias agravantes.

Si después de ésto, pudiera yo penetrar ahora en las páginas de ese voluminoso proceso, demostraría que Cayetano de la Cruz no se opuso en el molino de la Parrilla por miedo insuperable; que hizo todo lo que en aquellos momentos le ocurrió para no seguir al grupo que se dirigía al arroyo de la Plantera, y mientras que Juan Cabezas Franco inventaba la necesidad de ir á ver á su novia ó se dejaba llevar por los sentimientos de su corazón para acudir como de costumbre al lado de la mujer amada, Cayetano de la Cruz se hizo el entretenido, entró en el molino, comenzó á arreglar su cama para acostarse, hasta que

— 268 —

conociendo su ausencia entró uno de sus compañeros y le arrancó de aquel último asilo de su repugnancia, llevándole al sitio del crimen; y luego de consumado éste, la historia de Cayetano de la Cruz hasta el día de hoy, no es otra cosa que la imagen del hombre perseguido por el remordimiento.

Si el drama pudiera levantarse á la sublimidad sombría de la tragedia, yo compararía á Cayetano de la Cruz con el hombre antiguo sometido á las leyes de la fatalidad y acosado por las Furias, que no eran sino las figuras ideales de esas voces interiores de la conciencia, que castigan al actor de una infracción moral ó legal por la desmejora voluntaria de la personalidad humana. El se salió inmediatamente de aquellos lugares donde por todas partes le acompañaba la sombra del Blanco de Benaocaz, ó mejor dicho, la sombra del crimen cometido, proyectada sobre su conciencia; recorrió España de un lado á otro, vino á Madrid, pudo encontrar trabajo, pero no encontró descanso, y volvió á su pueblo natal, y se entregó á las autoridades para que se le aplicara el castigo que su culpa mereciera, nó la culpa ajena, y luego que se encontró en la obscuridad y en el silencio de su calabozo, dos veces se abrazó á la realidad de la muerte, y dos veces clavó en sus carnes el arma suicida; que el aguijón perpetuo del remordimiento suele llegar á más que morir.

No se me puede contestar que esta es la manifestación clara de su delito, porque yo no le niego; pero ese estado delicado y susceptible de su conciencia, no le puede servir de mayor acusación contra los hechos probados. Lo racional es deducir que este hom-



— 269 —

bre se encontraba antes del crimen, apocado, como hoy está arrepentido, y que quien hasta tales extremos llega por nobleza de sentimientos, no ha calculado fríamente un crimen en los arcanos interiores de la premeditación, ni ha elegido el sitio y la hora para cometerle á mansalva, ni ha coadyuvado á su ejecución por actos anteriores y simultáneos; en una palabra, que no es cómplice.

Es encubridor, porque ocultó el cuerpo del muerto, caso segundo del art. 16 del Código penal, que ha sido consiguientemente infringido por falta de aplicación, de la misma manera que el caso primero del artículo 9.º, por no haberse tomado como atenuante á favor del reo la circunstancia eximente décima del art. 8.º, aplicada con esta latitud á José Fernández Barrios.

También han sido infringidos por error de aplicación el art. 15, porque cómplices del asesinato de Bartolomé Gago Campos, no pueden ser sino los que hayan cooperado á la acción de Cristóbal Fernández y Manuel Gago, manifestando su cooperación con actos anteriores ó simultáneos; y no está siquiera probado ni aun indicado que Cayetano de la Cruz supiese que aquellos individuos iban á cometer el asesinato; la circunstancia séptima del art. 10 sobre premeditación conocida, y la décimaquinta del mismo por despoblado y en cuadrilla.

Piso en este momento los últimos peldaños de la empinada y penosa escalera, en cuyos descansos he marcado la verdadera culpa de Juan Ruiz y de Cayetano de la Cruz; y siento ahora los temerosos escalofríos que por repugnancia de la naturaleza, engendra



— 270 —

la visión del patíbulo; porque mi tercer defendido José León y Ortega ha sido condenado á muerte y su recurso está admitido de derecho.

En los términos de la sentencia de 18 de junio de 1883, él es autor del delito de asesinato, con las mencionadas circunstancias agravantes de premeditación, despoblado y en cuadrilla.

Cuando discuto una sentencia de muerte, se agolpan á mi espíritu y á un mismo tiempo lidian por señorearse y trabar embargo en mi palabra, los respetos de la ley escrita y de la cosa juzgada, la aversión instintiva que esa pena me inspira y la resolución con que mis convicciones la rechazan, sin los distinguos que ha inventado el Ministerio público, tan decidido en la conciencia, como medroso y vacilante en la determinación; pero hoy no tengo que temer esa batalla y competencia, porque el examen minucioso del proceso ha dado la prioridad y hasta la exclusiva al único punto de vista que siempre me hubiera voluntariamente sometido, por regla de obediencia. Yo voy á probar que según los hechos y según el Código, José León y Ortega no es autor del delito de asesinato, y que por consiguiente, no es reo de muerte; y abrigo la respetuosa y halagüeña esperanza de que esta Sala se conformará con mi parecer, mejor que con el de la sentencia pronunciada en Jerez, cuya esperanza se auna con la justificación del Tribunal.

En primer término, usando de los derechos que á los defensores de los reos de muerte nos conceden el caso segundo del art. 949 y el art. 951, respecto á la casación por quebrantamiento de forma, voy á utilizarlos.

— 274 —

Planteado se halla un extremo importantísimo por la ilustrada defensa de los hermanos Corbacho, y respecto de este punto, poco ó nada tengo que añadir, porque es voluntaria la sumisión de mi albedrío á los conceptos y observaciones legales presentadas por mi digno compañero Sr. Maisonnave.

En efecto; hay aquí un vacío grande, que no se puede llenar, y es bastante motivo para justificar la casación en la forma, el cual es la falta de averiguación de lo más fundamental de este procedimiento: la existencia de la Asociación de que se viene hablando, y á la que unos dan el nombre pavoroso de *Mano Negra* y otros la llaman con el nombre más suave, pero no sé si igualmente peligroso, de *La Justicia popular*. Sea de ello lo que quiera, es lo cierto que este punto no se ha dilucidado, y que, sin embargo, sobre él giró la sentencia de 18 de junio de 1883, y él ha inspirado las vehemencias del Ministerio público, dando á un mínimo y hasta un supuesto de probanza, un máximo de indignación y de rigor. Yo no habría de mejorar nada lo dicho con tanta discreción y oportunidad por mi antiguo y querido compañero, y dejando por eso esta parte del recurso de quebrantamiento de forma en el estado en que le ha puesto el Sr. Maisonnave, alego, señor, el caso primero del art. 912 de la ley de Enjuiciamiento criminal, que es «cuando en la sentencia no se expresa clara y terminantemente, cuáles son los hechos que se consideran probados, ó resulta manifiesta contradicción entre ellos.» Hay dos casos comprendidos en uno solo, y por tanto debemos estudiarlos separadamente. Primero. «Cuando en la sentencia no se expresa clara y

— 272 —

terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados,» y en esto voy á ocuparme desde luego.

Los hechos están en los Resultandos, los Resultandos están en la sentencia; en esta sentencia contra la cual recurro, hay treinta y un Resultandos, de los cuales, veinticuatro se refieren al delito, y los otros siete son aquellos preliminares usuales y necesarios en la redacción de semejantes documentos. De los veinticuatro Resultandos que se refieren al delito, cuatro no contienen hechos que se llamen probados, quedando veinte Resultandos, los cuales se subdividen en la siguiente forma: cuatro de ellos, ó sean los Resultandos tercero, noveno, décimonono y vigésimo, contienen varios hechos, que todos se declaran probados; cinco que son los Resultandos primero, sexto, séptimo, décimosexto y vigésimocuarto, contienen solamente un hecho probado, y once comprenden varios hechos, de los cuales sólo uno se declara probado, el cuarto, el décimo, el décimoquinto, el décimoséptimo, el décimooctavo, el vigésimoprimer y el vigésimosegundo.

Apartaré del examen de la clasificación todo aquello que ya con otro motivo aunque indirectamente, he manifestado á la Sala; pero convenía hacer la división para que se entendiera que en la arquitectura, digámoslo así, de la parte preliminar de la sentencia, hay un sistema que consiste en declarar un hecho probado por algunos Resultandos: varios hechos probados por otros, y un solo hecho probado entre varios contenidos en diferentes Resultandos.

Hago caso omiso del segundo grupo, ó sea de aquel



— 273 —

que contiene solamente resultandos comprensivos de un hecho probado, porque no he de utilizarlos en mi defensa; y me encuentro con dos grupos, que son: uno continente de varios hechos que todos se declaran probados, y otro también de varios hechos, de los cuales uno se declara probado.

Todos estos grupos comprenden diferentes hechos individuales, aislados, perceptibles, distintos en su personalidad, pero claro es que siempre conexos con el hecho principal de la delincuencia. ¿Por qué en unos resultandos son varios hechos *los que se declaran todos probados*, usando de esta forma en plural, y por qué en otros como sucede en el caso que expuse del resultando décimo, se declara probado en singular solamente el último hecho? Indudablemente porque en la voluntad del Tribunal estuvo declarar *probados* todos aquellos que se encuentran comprendidos en el resultando a cuyo final se pone esta fórmula, y considerar solamente probado el último hecho en aquellos resultandos donde se pone en singular.

Mi tesis, pues, la que he sostenido en mi escrito y ahora sostengo en lo general del informe, es la misma que me ha servido de base para impugnar el luminoso dictamen del Ministerio público, respecto del caso de Juan Ruiz y Ruiz. Clara y terminantemente se expresa así: donde todos los hechos se declaran probados, todos los hechos lo están; donde no se declara probado más que uno, éste es el último de los que se encuentran comprendidos en el resultando. Y con esta tesis que respeta la repetida expresión de doctrina del Tribunal Supremo, con esta tesis en la



— 274 —

mano, he demostrado que no hay en ninguno de mis defendidos la delincuencia que se le atribuye.

¡Cómo, si examinamos esos once resultandos, que tienen un hecho probado entre varios que no lo están, resulta la probanza reducida á los siguientes términos!

Por el cuarto, que la Asociación sigue envuelta en el misterio; por el décimo, que la orden contenía la recomendación de recoger el papel que llevaba en el bolsillo Bartolomé Gago Campos; por el undécimo, que aquella orden fué entregada después de mediado el día 4 de diciembre; por el duodécimo, que el Bartolomé, con su primo Manuel, estuvieron á beber en la taberna de García Gutiérrez, ausente á la sazón en Jerez; por el décimotercero, que ninguno de los concurrentes al molino de la Parrilla se opuso á la ejecución de la orden; por el décimocuarto, que José León y Ortega fué con los demás al punto designado, llevando escopeta; por el décimoquinto, que Juan Cabezas Franco se separó de sus compañeros, pretextando que iba á ver á la novia; por el décimoséptimo, que en la taberna de García Gutiérrez bebían y departían en aparente y leal amistad, Manuel Gago y su desventurado primo; por el décimooctavo, que el grupo procedente de la Parrilla estaba apostado en el arroyo de la Plantera; por el vigésimoprimer, que Bartolomé Gago de los Santos rompió el papel hallado en el bolsillo de la víctima; finalmente, por el vigésimosegundo, que el cadáver fué cubierto cuidadosamente de tierra.

No puede sostenerse la contraria, ó sea que lo mismo da decir *hecho probado* que *hechos probados*, por-

— 275 —

que el número singular no es idéntico del plural, y la sabiduría de los Tribunales no puede estar reñida con las reglas más elementales de la gramática y de la sintaxis; nada hay indiferente ó arbitrario en sus sentencias; y por lo tanto, no puede sostenerse que sea indiferente usar al propio tiempo en una misma á las veces el número singular y otras el plural.

Esta sí que es una proposición insostenible; pero enfrente de la mía que se ajusta á las reglas sintáxicas y gramaticales, puede suscitarse alguna duda que yo no abrigo, pero que considero lícito abrigar, y en este supuesto resulta, señor, que nos encontramos dentro del caso primero del art. 912, ó sea cuando procede la casación por quebrantamiento de forma, si en la sentencia no se expresa clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados.

Así, pues, mi dilema es el siguiente: O se admite mi doctrina, que es la racional, la lógica, la gramatical, ó no se puede admitir más que la duda, originada por la falta de claridad; y si se admite la duda, el caso de casación por quebrantamiento de forma es evidente. Caso primero del art. 912: «Cuando en la sentencia no se expresa clara y terminantemente cuáles son los hechos que resultan probados.»

Por manera, que una de dos: ó mis defendidos son inocentes de la delincuencia que se les atribuye, ó la sentencia tiene que casarse por quebrantamiento de forma.

Aquí no caben subterfugios; afirmar que el plural y el singular valen lo mismo sería un absurdo; suponer que los usa indistintamente, y siempre con signi-

— 276 —

ficación plural la Audiencia de Jerez, sería una invención maligna y un agravio innmercedo; declarar la duda, podría pasar, pero entonces la casación es inevitable.

Y renunciando á desenvolver más esta materia, porque con lo que he dicho me parece bastante para expresar al Tribunal mi pensamiento, prosigo á la otra parte de mi tema sobre quebrantamiento de forma, caso segundo del apartado primero del art. 912, ó sea contradicción en los hechos; aunque me apresuro sinceramente á decir, que para sostener esto, necesito un punto de vista más ámplio, mientras que para lo primero basta con mantenerse en la aplicación estricta de la letra de la ley; no obstante, ese espíritu de amplitud tiene que estar contenido en la novedad del procedimiento de una sola instancia en juicio oral y público y en los propósitos que, respecto de esta novedad, abriga y aplica con mesura el Tribunal Supremo.

Es cierto, es lógico, es humano. El nuevo procedimiento criminal es un ensayo de parte de un sistema que clama por completarse, sobre todo en el reconocimiento y declaración de los hechos; mientras tanto, la supresión de una instancia demanda que no haya tanto rigor ni se contraiga á tan reducida esfera, el criterio con que respecto de los hechos, se venía entendiendo y aplicando, según las reglas del procedimiento anterior, el recurso por quebrantamiento de forma. Después de algunos meses de experiencia, todos á una voz proclaman esta necesidad, originada en la falta de absoluto acomodo, concierto y relación entre el proceso único y el recurso ideado y aplicado



— 277 —

á un juicio que antes se depuraba en dos instancias.

No me cabe duda de que el Tribunal Supremo fomenta esta misma convicción; pero mientras llega la hora de que el ensayo se complete y perfeccione y los legisladores se ocupen en el remedio de este mal pasajero, en manos de la Sala está el dárselo; sin contradecir en lo insignificante el texto de la ley, mas ensanchando el criterio de una interpretación literal y aplicando el espíritu del párrafo 1.º del art. 912.

Este proceso no puede legítimamente llamarse una causa; porque *la causa* la constituyen las actuaciones judiciales que investigan, que llegan al conocimiento de *la causa* del delito y de su causante, donde la palabra pasó por usual traslación, desde el objeto de las actuaciones á la denominación de las actuaciones mismas. En esta *causa* lo que principalmente no se conoce es la *causa* del delito, conforme viene ya harto demostrado, y conforme volverá á ponerse de resalte en las consideraciones que á seguida voy á exponer. Si la sentencia de 18 de junio hubiese sido pronunciada por un Juzgado de primera instancia, según la legislación derogada, tengo por cierto, y lo afirmo sin género alguno de vacilación, la Sala de lo criminal de la Audiencia respectiva la habría devuelto al inferior, para que, reponiéndola al estado de sumario, completase sus pruebas y desaparecieran sus contradicciones.

Perceptible sin dificultad está lo deficiente de la ley en esta materia. Como la atribución más alta del Tribunal Supremo es la de suplir tales deficiencias é imperfecciones, no es de extrañar que yo, que ratiocino en la esfera honrosa y severa del deber, aunque esti-



— 278 —

me que estando en el espíritu, no está quizá en la letra estricta del caso segundo del art. 912, prevista la contradicción de los hechos que voy á mencionar, ayudado de aquel nuevo concepto de la misión que tiene el Tribunal donde alego, considere pertinente mi excepción, aun callando sobre todo lo que en mi concepto ha debido probarse para la investigación de la causa. Pero como consecuencia de las manifestaciones precedentes, no puedo menos de llamar la atención de la Sala sobre la contradicción que existe entre el acuerdo de la Parrilla, según el resultando décimotercero, y el hecho probado del resultando décimonono; por el cual se sabe que la muerte la dieron otros que no estaban confabulados para aquel criminal propósito.

Si se hubiera advertido la coexistencia de dos delitos en este punto concreto de la muerte de Bartolomé Gago Campos, con independencia del otro tercer delito á que ya he aludido, y en que más tarde me ocuparé, hubiera desaparecido la obscuridad y no existiría la contradicción; pero no hay concordancia posible entre estos dos hechos que se dibujan y se perfeccionan aisladamente, de que vayan á matar á Gago Campos, Gonzalo Benítez Alvarez y Rafael Jiménez Becerra, acompañados de otros, y venga por la parte opuesta la víctima con dos hombres que no traen el encargo, ni siquiera la intención conocida de matarle, y éstos precisamente sean los que maten. Como los dos hechos distintos no se han depurado y no se han buscado ó no se han encontrado los medios de combinarlos, resultan frente á frente el uno del otro, con su malignidad peculiar y su oposición respectiva:

— 379 —

el acuerdo del molino de la Parrilla, y el asesinato ú homicidio cometido en el arroyo de la Plantera.

La Sala habrá notado la sobriedad con que he procurado tratar estas cuestiones del quebrantamiento de la forma, acerca de las cuales pongo aquí punto final, proponiéndome seguir el mismo proceder en cuanto á las infracciones de ley, para lo cual he de concretar antes los hechos probados respecto de José León y Ortega, y examinarlos.

Él asistió á la reunión del rancho de Barea, según el resultando noveno, con la voluntad expresa allí de no cometer el delito; él no concurrió al molino de la Parrilla; y, hallándose sentado por los alrededores del sitio donde se consumó el crimen, en la puerta de su choza y al lado de su mujer, según dice el resultando décimocuarto, viendo pasar aquel grupo de amigos y compañeros, les preguntó á donde iban; ellos le dieron cuenta de la orden que llevaban y su misión de ejecutarla, y él, conociéndola, se les reunió, llevando su escopeta, y cuando hubo caído en tierra el desventurado Bartolomé Gago Campos, entonces le infirió con la navaja, según el vigésimo, una herida menos grave en el cuello, la cual se halla descrita en las diligencias de autopsia, donde se dice que «Bartolomé Gago Campos tenía en la parte izquierda del cuello una herida transversal de pulgada y media de extensión, de carácter menos grave y causada con instrumento cortante.»

Tales son, señor, los hechos probados de la sentencia, y aun no probado alguno, que constituyen la participación de José León y Ortega en este delito.

En primer lugar, se ha infringido el art. 418 del

— 280 —

Código penal por aplicación indebida, supuesto que se ha calificado á José León Ortega de reo de asesinato, el cual consiste en matar á una persona con las circunstancias especiales que son constitutivas de este delito, y que expresa el mismo artículo; pero lo fundamental, lo esencial, lo común del homicidio, del asesinato, del parricidio, del infanticidio, de todos los delitos de esta especie, es que haya muerte de sujeto racional; luego, cuando se afirma que José León y Ortega es reo de asesinato, se afirma concretamente que ha matado á Bartolomé Gago Campos, porque aquí no hay otra muerte que la de éste; y, sin embargo, no ha hecho nada más que lo que acaba de oírse (y si no fuera porque ya me he desviado, con sentimiento de una parte, con satisfacción de otra, del dictamen Fiscal, discutiría ahora aquella descripción que con tan negros colores y frases horripilantes hizo el Ministerio público de la lesión inferida en el cuello á Bartolomé Gago Campos), y mi defendido es reo del asesinato, según la sentencia.

Hay aquí indebida aplicación del art. 418, aparte del error de no haberse discernido suficientemente los hechos, porque si se hubiesen discernido, hubieran resultado divididos los delitos. ¿Cometió José León Ortega un delito en la persona de Bartolomé Gago Campos? Sí. ¿Fué este delito el de asesinato? Nó. Su delito consistió en inferirle una herida menos grave en el cuello, después de haber recibido las dos mortales de necesidad, producidas por los disparos de Manuel Gago de los Santos y Cristóbal Fernández Torrejón.

Fué, pues, otro delito independiente, posterior al



— 281 —

de asesinato, como si le hubiera robado, ó como si en su persona hubiese cometido alguna otra violación del derecho. ¿Pues qué, si León Ortega, después de haber caído Bartolomé Gago Campos moribundo, á causa de las dos heridas mortales de necesidad, le hubiera robado, no habría cometido un delito? Evidentemente sí; pero ¿hubiera sido éste el de asesinato? Nó, porque el delito se conoce por sus caracteres; se distingue por su definición; se señala por su clasificación; se pena por su distinción, y el delito que cometió José León Ortega es enteramente distinto del de asesinato. Ha habido, pues, aquí aplicación indebida del art. 418, conjuntamente con la infracción de no haber aplicado el art. 433 del Código penal, que habla de las lesiones; pues, según la doctrina que viene dominando en estos recursos, desde el día mismo en que se plantearon, y aun desde aquel en que redacté el escrito de súplica que con tan benévolas frases y una conmemoración que ciertamente no merece, ha citado hoy aquí el Ministerio público; desde entonces, todos nosotros nos oponemos á su recurso y sostenemos los nuestros, partiendo del principio de que los delitos son individuales é individualmente se penan, mientras que la sentencia adolece del defecto esencial de no ver en el hecho de la Plantera, sino un delito simple en vez de complejo y lleno de accidentes, así en lo relativo á la delincuencia, como en lo relativo á la personalidad.

¿Qué hizo Ortega? Tuvo un impulso, ¡no me atrevo á condecorar el hecho con el nombre de idea! que avergüenza hasta provocar las bascas de la repugnancia moral. ¡Ah! este hombre que no había tenido



— 282 —

conocimiento del crimen proyectado; que se hallaba descansando apaciblemente en la puerta de su hogar al lado de su compañera, disfrutando de esas primeras horas de la noche, que aun en los rigores del invierno asemejan las de deleitable primavera en el clima de Andalucía; este hombre vió pasar como fantasmas y negras figuras, entre las sombras extendidas por los campos, á aquellos camaradas de trabajo que con él no habían contado para la funesta compañía del crimen, y con ellos se fué, sin prudencia, sin premeditación, abandonando lo que hay de más querido y puro sobre la tierra, la familia, para acudir á aquello que hay de más horrible é impuro, el delito; y este hombre, cuando entre las ansias y la agonía de la muerte, un desgraciado gemía y demandaba auxilio, se cegó ó por el terror repentino del escándalo que traería el descubrimiento de su imprudente cooperación, ó quién sabe por cuál otro motivo determinante de la voluntad, y cometió, más que un delito, un sacrilegio y una profanación: ¡herir á un muerto! abrirle en el cuello una incisión inútil, porque el homicidio estaba perpetrado y la nueva herida no podía causarle. ¿No es verdad que este es un cuadro terrible?

Pues aquí no hay más que un delito repugnante á la humanidad y á la moralidad, por el estado mismo del paciente, y porque no era de provecho para cosa alguna; que escandaliza á la opinión pública, pero que está definido y penado en el Código, y se llama de lesiones.

Por contraste que muchas veces ha llamado la atención del filósofo, del legislador y del jurisconsulto, la conciencia universal rechaza con mayor energía

— 283 —

actos que la ley pena con menos severidad de otros, hacia los cuales aquélla siente relativa indulgencia; cuya discrepancia y falta de proporción entre lo moral y lo legal, depende de que en aquello domina el concepto de la dignidad humana, y en esto el de la justicia; de donde resulta que más se abominan, aunque menos se penen, los actos indignos de los actos criminales, y que hasta en los últimos, aversión más desazonada produzcan con frecuencia los que menos daño ocasionan. El derecho mira más hacia el resultado, con gran sentido práctico, y la moral más hacia la malicia, tomando mejor en cuenta las pasiones imperativas é impulsivas de un acto humano y conformándose con un ideal.

Así, el agravio que se infiera á un anciano dándole con los dedos en la pálida y enflaquecida mejilla, nos sublevaría más universalmente que el desafío de dos mozos fuertes y robustos, que se embisten y se despedazan hasta que uno cae vencido, quizá por la calculada maña ó la traidora alevosía. Y sin embargo, aquello es una falta; esto es un delito; aquello se purga con leve pena; esto puede arrastrar al agresor hasta el cadalso.

Cuando se maneja la ley y ha de resolverse en justicia, precisa curar mucho de no dejarse invadir por estas impresiones morales, y ponerse en guardia contra su actividad, que seductoramente transmina el derecho, con cuyo advertimiento de pura razón, no quiero decir que ampare, ni por un solo instante, el escozor de que la Sala pueda hallarse en esta perplejidad de pareceres entre el sentimiento universal y la ley.

Por estar plenamente convencido de lo contrario,

— 284 —

no he excusado hacerme ha poco tiempo el intérprete de la impresión moral que produce una mala acción, cuando exacerba é irrita la conciencia de las gentes, más que un delito, donde se viola el derecho con malignidad refinada ó pasiones brutales ó consecuencias terribles, habiendo sido principalmente mi propósito, al ponerme en la atmósfera de esa impresión, impedir que se mantenga ó se renueve en perjuicio de la ley y de su rigurosa aplicación á mi defendido, para el cual no pido disculpa, sino justicia, según la ley, con su medida y con su peso, en la proporción del delito, que no niego, y por la imposición de la pena que le corresponda.

Dice el art. 433, que la herida menos grave ó sea la lesión que inutiliza al paciente para el trabajo más de ocho días y menos de treinta, se pena con el arresto mayor ó el destierro y multa de 125 á 1.250 pesetas, según el prudente arbitrio de los tribunales.

Pues bien, mi defendido sólo hizo esto ¿Cuándo? ¿Antes ó después de haberse cometido el asesinato? Lo hizo después, y conviene decir á este propósito que la doctrina sustentada por mí concuerda con la del Tribunal Supremo.

Tengo aquí apuntado un hecho ocurrido en el pueblo de Cascajares, correspondiente á la Audiencia de Burgos. En dicho pueblo, un mozo llamado Bustos, derribó al suelo de un palo á otro joven apellidado Ruiz, y por consecuencia del golpe le infirió una lesión. Al ver en tierra á Ruiz se abalanzaron sobre él otros mozos y le mataron. Bustos fué condenado por homicidio, y esta misma Sala, en sentencia de 9 de abril de 1878, consideró que había que distinguir en-



— 285 —

tre las lesiones menos graves producidas por Bustos, y que nunca hubieran causado sino el pequeño daño de que habla el art. 433, y aquellas heridas que ocasionaron la muerte. ¿Es el caso idéntico? Nó; hay una diferencia, y es favorable al acusado de hoy, á José León Ortega; porque Bustos causó las lesiones antes de que se cometiera el delito, y por lo tanto, las que él produjo sirvieron para que éste se consumara, mientras que aquí, aunque resulte más repugnante á los sentimientos en que antes discurría, lo que hizo José León Ortega, del hecho en que Bustos tomó parte, legalmente hablando, menos criminalidad hubo, en razón de que tuvo consecuencias fatales la lesión producida por Bustos, habiendo José León Ortega inferido la herida en el cuello del desgraciado Bartolomé Gago Campos, cuando ya éste había recibido las dos heridas mortales de necesidad, que constituyen el asesinato ó el homicidio, según resulta de la calificación médica que sirve de base á la sentencia en la parte referente á la consumación del delito, y que aporta con fuerza deductiva el convencimiento de que virtualmente aquél estaba ya muerto, y por esto se dice en el resultando vigésimo: que cuando el *moribundo* cayó en el suelo, José León Ortega le causó con una navaja la herida *menos grave* reseñada en la autopsia.

De modo que él no contribuyó á la muerte, y no fué por lo tanto, su autor bajo ninguno de los tres conceptos del art. 13 del Código. ¿Es cómplice? Esto es lo que vamos á ver.

La infracción del art. 13 es evidente; pero además el delito se cometió sin su intervención, sin su asentimiento; porque note la Sala que José León Ortega



— 286 —

estaba sentado en la puerta de su casa é ignoraba lo que se había resuelto en el molino de la Parrilla: pasaron los congregados y le dijeron lo que ocurría, sin que la sentencia añadida que se conformase con esta proposición: dice puramente que, *conociendo* la orden y la misión que tenían los conjurados de ejecutarla, *se reunió con ellos*. *Conocía* donde y para lo que iban, pero no *asintió* al propósito que tuvieran de consumir el crimen.

Por manera, que el único acto de José León Ortega en la ejecución del delito fué acompañar á los que iban á cometerle; lo cual no constituye la cooperación que revela la complicidad de que trata el art. 15.

¿Cómo ha de ser cómplice? Los cómplices son los que cooperan por actos anteriores ó simultáneos á los delitos, según el referido artículo. ¿Qué actos anteriores ha cometido José León Ortega? Ninguno; porque de la absoluta carencia de esos actos hemos deducido la imposibilidad de que pueda considerársele como autor. ¿Qué actos simultáneos ha verificado? Ninguno; porque los actos simultáneos son aquellos que concurren á la vez de otros y con una especie de paralelismo en el orden del tiempo donde se realizan, y el delito había ya recorrido toda su órbita desde el momento en que se concibió en el Alcornocalejo, hasta el momento en que se consumó en el arroyo de la Plantera; se había ideado y perfeccionado antes de que mi defendido cometiese el de lesiones.

Yace allí moribundo, ó cadáver, el Blanco de Benaocaz con los dos tiros mortales; á su alrededor están los homicidas, autores ó cómplices ó encubrido-

— 287 —

res; pero ya el delito había cerrado su funesto ciclo, y entonces es cuando José León y Ortega comete uno nuevo y distinto, que por no ser anterior, ni tampoco simultáneo, sino posterior, no es conexo con el que se viene persiguiendo. Tenemos, pues, que José León y Ortega es autor de un delito suyo, que á él sólo alcanza, que dentro de sí pensó, que realizó por sí, y ese delito es el de lesiones menos graves.

Y además de este delito especial, único de que es autor José León Ortega, tiene otro conexo con el principal, que es el de haberle encubierto, de haber callado, de haber ocultado el cuerpo de la víctima, delito á su vez tan claro, que si yo, siendo defensor, pudiera en este momento convertirme en Fiscal, en vez de acusar á Ortega de autor de homicidio ó de asesinato, lo cual es incompatible é inconciliable con los hechos probados de la sentencia, le acusaría con conciencia tranquila, alta voz y frente serena, al mismo tiempo que del delito de lesiones menos graves, de este otro de encubridor en el crimen principal.

Infringidos el art. 15 por aplicación indebida, y los artículos 16 y 433 del Código penal por falta de aplicación, debería quizás para cumplir propósitos hechos en el curso de este largo informe, hablar de las circunstancias agravantes que también se imputan á José León Ortega como á sus co-reos; pero el fundamento de mi recurso las excluye, con tanta evidencia, que la Sala habrá indudablemente de estimarlo como yo, sin necesidad de mayor demostración, y pudiera, de insistir la defensa, justificarse el enfado.

No puedo, sin embargo, callar sobre la premeditación. El considerando duodécimo dice que las medi-

— 288 —

das adoptadas en el molino de la Parrilla para la ejecución y todas las demás prevenciones consiguientes, producen la deducción lógica de que en el hecho procesal concurrió la circunstancia genérica de premeditación conocida, la cual es imputable á los autores y cómplices de los considerandos que preceden; pero la Audiencia de Jerez olvidó que en esos considerandos anteriores está comprendido José León y Ortega, y que este desgraciado no estuvo en el molino de la Parrilla, ni supo ni pudo saber nada de aquellas prevenciones ni siquiera de la combinación, como que se le encontraron casualmente sus asociados en el arroyo de la Plantera, momentos antes de realizarse el siniestro propósito.

La premeditación no puede ser presunta, sino que ha de ser conocida, así lo quiere el legislador; pero ni en uno ni en otro caso, alcanza aquí á León y Ortega; porque hay contradicción racional y material entre sus actos y los hechos generales de donde la deriva la sentencia. Premeditación es la meditación reflexiva de que habla la del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1872; la ejecución de un delito como procedente de un designio preconcebido de llevarle á efecto, pero claramente manifiesto y sin género de duda racional (sentencia de 27 de marzo de 1878), y la constituye una resolución persistente, detenida y reflexiva. (Sentencias de 24 de marzo de 1876, 9 de mayo de 1877 y 27 de diciembre de 1878.)

Señor, yo ya he concluído. Gracias, antes de poner término definitivo á esta defensa, al Tribunal que con benevolencia tan honrosa para mí, ha tenido á bien escucharme; y una súplica sincera al Ministerio públi-



— 289 —

co; es siempre fácil, en las rápidas improvisaciones, desligar en parte la palabra de la idea, en aquel punto á lo menos donde sólo por la meditación previa y con la eficacia del análisis detenido, pueden y deben compenetrarse dentro de la expresión humana, todos los aspectos, relaciones, accidentes y matices del raciocinio, con las determinaciones, enlaces, variantes y modos de la frase. Y esa facilidad sube de punto, cuando entre el pensamiento y la palabra se cruzan, á manera de calido vapor y de celajes arrebolados, el entusiasmo de la justicia y la santa pasión de una defensa convencida y firme. Nada tan propicio al arretrato del acento y á la energía de la expresión oratoria, como las generosas vehemencias de la fe. Si por entre ellas pudo al acaso rebelarse mi palabra contra mis intenciones, respondiendo con indocilidad penosa ó con flexibilidad excesiva, á lo correcto del propósito, y surgiendo de este desacuerdo á que vengo refiriéndome, el más leve motivo de desagrado para la representación del Ministerio público, acháquese á torpezas y yerros del entendimiento lo que ni por asomos pudiera haber sido en mí, ó celada malicia, ó designio punzante.

Yo espero que al cruzar aquella puerta (*indicando la de salida*), con estos doctos, ilustradísimos compañeros, he de llevarme una seguridad consoladora, premio siempre superior á los esfuerzos más grandes y á los mayores ahínco del entendimiento y de la voluntad del Abogado, en lo que ese resultado tiene de esencialmente humano, de altamente social, de jurídicamente progresivo. Creo que hemos arrancado al verdugo sus víctimas. Tristes ecos vibran aún en este



— 290 —

sitio, donde han resonado palabras noblemente sentidas, sí, pero que yo considero con igual nobleza grandemente implacables, más inspiradas por el aliento de una severidad que osaría llamar tendenciosa, que por el espíritu de un rigor tranquilo y desapasionado. Mucha fué la elocuencia en acusar, no menor que la dureza, conciliándose por el talento las seducciones nacidas de la emoción pública con los movimientos derivados del horror colectivo.

La calma se abrirá paso, no obstante, despojando los hechos del atavío con que haya podido dramatizarlos la musa de las indignaciones fiscales ó la poeta de las cóleras acusadoras. Y ya serenado el ambiente, todas las cosas percibidas en su lugar propio, delineados con exactitud los contornos y apreciadas justamente las circunstancias de esta realidad criminal, nó, no es de esperar uno de esos fenómenos de sugestión extraña que nos llevan de buena fe á tomar por algo objetivo, tangible, patente, de gran bulto y resalte poderoso, lo que sólo realza el sujeto en sus aprehensiones é idealidades abstractas, y que tan fácilmente proyecta al exterior con viveza, interceptándose él mismo con estas fantasías engañosas el único camino de estimar positivamente la verdadera existencia de los hechos y de sus complicadas relaciones.

¡Cómo no esperar que la Sala, en su proverbial justificación, acierte con sumo tino á huir ese peligro! ¡Cómo no esperar del fallo de este Tribunal, el consuelo aparejado por la justicia misma, á que me he referido hace un instante!

Consuelo y fortificación del ánimo para todos, pero muy especialmente para las ricas y hermosas comar-

— 291 —

cas de Andalucía. Allí se teme mucho más, infinitamente más en estos instantes la sentencia de muerte de mis clientes, que ese cuadro aterrador coloreado con los más sombríos tonos por la fantasía del Ministerio público. Véanse allí las cosas de cerca, palpablemente, libres de toda exornación trágica que suele á veces prestar á los actos de delincuencia la fecunda inventiva humana, aguijada por el afán de lo extraordinario y de lo novelesco. Y por las leyes de la óptica moral, aquello vemos siempre más claro, que mejor se encuentra dentro del ángulo de nuestra visión intelectual. La tendencia natural del espíritu á las generalizaciones instantáneas, acarrea graves daños, cuando no va regida la inducción por las leyes mismas de este procedimiento fecundo, leyes resumidas en la observación repetidísima, y en el análisis exacto de las concordancias y diferencias de los fenómenos entre sí.

Un estado social de dolencia aguda, verdadera crisis patológica engendrada por grandes desequilibrios y trastornos históricos, políticos y morales, puede en ocasiones ser tan superficialmente apreciada que el entendimiento relacione desde luego con semejante perturbación actos criminales independientes de ella en su origen, naturaleza y desarrollo. Y esto, cuando la certidumbre de aquel estado morboso se impone al reconocimiento universal con evidencia incontestable. Si una situación de tal género no se halla socialmente definida, y sólo por semejanzas ficticias se infiere á tuerto y caprichosamente en el seno de una alarma momentánea, ¡oh Dios, y á qué tristes consecuencias puede entonces este error conducirnos!

— 292 —

Yo las entreveía, cuando el Ministerio público, cruzando en alas de su imaginación espacios imaginarios, dábase á pintar el estado social de Andalucía con lujo de colores siniestros, presentándonos una sociedad proletaria sin freno, las pasiones todas desatadas, el comunismo bárbaro en acción, la guerra á la propiedad como norma de los apetitos obreros, el acecho del asesino acurrucado en las sombras, lo mismo para dar el salto del tigre sobre el propietario honrado, que sobre el asociado secreto, timorato ó disidente; nada seguro en aquella fermentación de instintos destructores, concupiscencias salvajes y devastadoras mañas: todo en cambio abatido por el espanto y allanado por esta resurrección de edades de piedra, en que los hombres se arrojan sobre los hombres, como alimañas contra alimañas en el desierto; y en el centro de este cuadro, salpicado de horrores y rezumado de sangre, las fatídicas figuras de estos desgraciados criminales de la Parrilla, como encarnación lúgubre y repugnante de la disolución social con honores de apocalipsis.

¡Ah, nó, señor, nó! Por fortuna, tales creaciones, verdaderos *agri somnia*, descansan tan sólo en la calentura de la imaginación que las traza con sobresalto instintivo y las contempla con horror soñado.

Cargue cada criminal con sus culpas, cada desgraciado con sus remordimientos...; mas no queramos modelar las penas humanas sobre el cúmulo de nuestras aprehensiones ó por los contornos de esas creaciones siniestramente poéticas, en que suele servir de material la imagen pálida del miedo y que suelen tener por forma el metro nervioso de la ira.—HE DICHO.



# QUODLIBETOS JURÍDICOS

## INDICE

	Páginas.
<i>De la investigación de los delitos.</i> . . . . .	7
<i>Conflictos.</i> . . . . .	27
<i>Sobre el derecho de asilo y la extradición.</i> . . . . .	33
<i>De la nulidad con relación á las sentencias fuera de término.</i> . . . . .	43
<i>Las contradicciones del Código.</i> . . . . .	53
Capítulo primero. . . . .	55
Capítulo segundo. . . . .	62
Capítulo tercero. . . . .	71
<i>Un caso de insulto necesario (tres cartas al Excmo. señor D. Antonio Cánovas del Castillo, Presidente del Consejo de ministros).</i> . . . . .	79
<i>Del arte de preguntar al Jurado.</i> . . . . .	119
<i>La mano negra.</i> . . . . .	149
I.—Antecedentes. . . . .	151
II.—Recurso de súplica. . . . .	163
III.—Informe. . . . .	180
<i>La duquesa de Castro-Enríquez.</i> . . . . .	293
I.—La duquesa y la niña.—Carta á D. Miguel Moya. . . . .	295
II.—Hasta hoy. . . . .	299
<i>Rehabilitación de la inocencia.</i> . . . . .	316
<i>Menudencias que no lo son.</i> . . . . .	323
<i>Responsabilidad de las Compañías de ferrocarriles.</i> . . . . .	331
<i>La neta y los Juicios convenidos.</i> . . . . .	339
<i>Las Horas y la Ley.</i> . . . . .	359
En el Parnaso. . . . .	361
El recuento de las Horas. . . . .	371
<i>Menudencias judiciales.</i> . . . . .	379
<i>De la ratificación de los testigos en derecho canónico.</i> . . . . .	389
El caso. . . . .	391
Observaciones fundadas en el derecho civil. . . . .	392
Observaciones fundadas en el derecho canónico. . . . .	398
<i>De las Sociedades universales de bienes y de ganancias, según el Código civil.</i> . . . . .	433





Este libro se imprimió en Valencia a 15 de noviembre de 2017,  
siendo Diputado Bibliotecario del Ilustre Colegio de Abogados  
de Madrid, D. José Manuel Pradas Poveda







